



UNIVERSIDAD DE CHILE  
Facultad de Ciencias Sociales  
Departamento de Sociología

---

**NEOLIBERALISMO E INTELECTUALIDAD EN AMÉRICA LATINA**  
**(1980-2003)**  
Argentina y Chile

Memoria para optar al título profesional de Sociólogo

Autor: Sebastián Caviedes Hamuy

Profesor Guía: Carlos Ruiz Encina

Santiago, 2018

*Alguien ha escrito que el intelectual es un hombre que dice 'no'. Esta afirmación, harto fácil, ha cobrado el efímero relumbre de todo lugar común -de lo que Flaubert llamaba 'la idea recibida'. Porque el 'no' sistemático, por manía de resistencia, por el prurito orgulloso de 'no dejarse arrastrar', se vuelve tan absurdo, en ciertos casos, como el 'sí' erigido en sistema (...). El 'Sí' y el 'No' dependen de Principios. Lo importante está en no equivocarse en materia de Principios. Del mantenimiento de esos Principios, dependen nuestros años futuros -los de quienes nos acompañan en nuestras tareas en los Reinos de este Mundo.*

Alejo Carpentier

*Los intelectuales que tienen problemas de paternalismo con la clase obrera y que se preocupan por sus acentos demasiado finos son generalmente de clase media; los obreros, por su parte, están normalmente bien dispuestos a aceptarlos si tienen algo útil que ofrecer. Se cuenta que un intelectual oxoniense, invitado a dar una charla en el Ruskin College, el colegio universitario para trabajadores de Oxford, se arrancó con la típica cantinela académica de falsa modestia, diciendo que sabía muy poquito sobre el tema a tratar. Del fondo de la sala tronó una voz con marcado acento de Lancashire: 'Le pagan para saber'. Sería un tanto extraño que alguien aceptara un trabajo en la bocamina para a continuación decir alegremente que no tenía mucha idea de picar carbón.*

Terry Eagleton

*Si hoy nos parece superado, ése es el precio que pagan por su fecundidad, tarde o temprano, todos los movimientos intelectuales.*

Marc Bloch

## ÍNDICE

RESUMEN .....	6
PRESENTACIÓN Y AGRADECIMIENTOS .....	7
LA INTELLECTUALIDAD LATINOAMERICANA Y EL GIRO NEOLIBERAL .....	9
1.1.    La triple mudanza reciente: socioeconómica, política e intelectual .....	11
1.1.1.    El giro neoconservador y la contrarrevolución monetarista: la ideología neoliberal	13
1.1.2.    La larga agonía desarrollista y el vínculo entre democracia y neoliberalismo en América Latina.....	20
1.1.3.    El segundo aire neoliberal latinoamericano: las reformas de “segunda generación”	28
1.2.    El giro intelectual latinoamericano. Desarticulación social y naturalización del orden ...	32
1.2.1.    La derrota del desarrollismo y el tránsito intelectual hacia las “nuevas democracias”	33
1.2.2.    La pérdida de las referencias sociales y la visión de mundo tecnocrática .....	42
1.3.    El problema: la intelectualidad como actor del neoliberalismo latinoamericano .....	47
INTELLECTUALIDAD, POLÍTICA Y PODER: DISCUSIONES Y APROXIMACIONES SOCIOLOGÍCAS .....	51
2.1    Las falsas antinomias sobre los intelectuales .....	53
2.1.1.    La eticidad de los intelectuales: responsabilidad, compromiso y antiintelectualismo ....	54
2.1.2.    La especificidad sociológica: política o ciencia en la sociedad de masas .....	60
2.2.    Intelectualidad, política y poder: una revisión conceptual desde la sociología .....	64
2.2.1.    Profesionalización de las tareas intelectuales y requerimientos funcionales de la cultura: la tradición funcionalista.....	65
2.2.2.    ¿Estrato social reclutable o producto histórico de las clases?: la tradición marxista	73
2.2.3.    De regreso a la autonomía de lo cultural: la episteme, los campos y el “intérprete”	78
2.3.    El pensador, el ideólogo y el tecnócrata de las políticas de ajuste: la especificidad latinoamericana .....	83
2.3.1.    Intelectualidad y construcción de la nación. ¿Hombres de acción o de ideas?.....	85
2.3.2.    Intelectualidad y modernización social: el ideólogo del desarrollo económico .....	87
2.3.3.    Intelectualidad y lo nacional-popular: populismo, socialismo y democracia .....	89
2.3.4.    Intelectualidad y tecnocracia: los tecnócratas de las políticas de ajuste.....	93
2.3.5.    Mediatización, masificación y redes transnacionales: ¿una intelectualidad “postmoderna” desde América Latina? .....	96

2.4.	Fuerzas político-intelectuales y conflicto social. La mirada propia .....	99
2.4.1.	Intelectualidad organizada y poder en América Latina: producción cultural y reproducción social en sociedades dependientes .....	99
2.4.2.	La ideología y su naturaleza como producción cultural.....	104
2.4.3.	Fuerzas político-intelectuales y controversias ideológicas en conflicto: una síntesis conceptual.....	108
2.5.	Marco metodológico.....	111
2.5.1.	Caracterización de la investigación.....	111
2.5.2.	Técnicas e instrumentos de producción de información .....	113
2.5.3.	Estrategias de análisis .....	114
2.5.4.	Muestra y unidad de análisis .....	116
2.5.5.	VARIABLES DE ANÁLISIS.....	117
2.6.	Hipotesis de trabajo .....	118
ARGENTINA.....		120
3.1.	Un viejo problema argentino: la política sin los intelectuales.....	120
3.2.	El disímil reacomodo de la intelectualidad argentina en la “década perdida” .....	123
3.2.1.	La crisis desarrollista y el asalto de la intelectualidad empresarial.....	126
3.2.2.	La fragmentación peronista y su intelectualidad “renovadora” .....	131
3.2.3.	¿Consejeros del Príncipe? La intelectualidad socialista y la democracia imaginada	136
3.3.	El poder de la ideología en el desembarco neoliberal argentino .....	141
3.3.1.	La Convertibilidad como ideologismo y los economistas alcanzan el poder .....	145
3.3.2.	Pobreza y corrupción: el desvarío de la intelectualidad progresista .....	157
3.3.3.	Inercias de fin de siglo y reconstrucción del campo intelectual argentino .....	166
3.4.	Pragmatismo, descomposición social y ensimismamiento intelectual.....	172
CHILE.....		177
4.1.	La tradición intelectual chilena: dependencia estatal y eficacia política .....	177
4.2.	El maridaje de los adversarios en el neoliberalismo autoritario .....	181
4.2.1.	La <i>reproducción ampliada</i> de la intelectualidad neoliberal en dictadura.....	185
4.2.2.	La renovación del carácter social de la política: la crisis intelectual socialista .....	201
4.2.3.	Una élite político-intelectual transversal para la transición chilena.....	215
4.3.	De la legitimación del poder existente a la producción del “neoliberalismo avanzado”	220

4.3.1.	Un nuevo anclaje tecnocrático-empresarial en democracia o la consolidación del giro neoliberal chileno .....	225
4.3.2.	La modernización inconsistente o el ideologismo cardinal de la transición.....	237
4.3.3.	El curso forzado de las tareas intelectuales de la política.....	250
4.4.	Política sin sociedad y renuncia a la imaginación política.....	254
INTELECTUALIDAD Y REFUNDACIÓN NEOLIBERAL. ELEMENTOS DE INTERPRETACIÓN PARA AMÉRICA LATINA .....		258
BIBLIOGRAFÍA .....		260
6.1.	Fuentes primarias.....	260
6.1.1.	Argentina.....	260
6.1.2.	Chile.....	261
6.2.	Fuentes secundarias .....	263

## RESUMEN

---

Con cursos de profundización disímiles, los países de América Latina experimentan importantes transformaciones en su modelo de desarrollo en las últimas décadas. Este “giro neoliberal”, que altera su fisionomía de clases y grupos sociales, provoca la desaparición o reconversión de los actores tradicionales de la etapa nacional-popular, al reconfigurarse las formas de la conflictividad social y política y del poder, así como las propias relaciones sociales. Tal reestructuración afecta, además, el carácter y los modos de acción de los grupos político-intelectuales de la región, quienes experimentan, a su vez, un “giro intelectual” desde los años ochenta. Uno que se manifiesta en una producción intelectual que, afectada por la desvinculación entre proceso social y proceso político aparejada a este cambio, encuentra su mundo de referencia prácticamente sólo en el poder existente.

Con todo, tales grupos mencionados no experimentan pasivamente esta transformación. Por el contrario, intervienen activamente en tal proceso de cambios a través de su producción ideológica y comportamiento político. Por ello, en el presente trabajo se indaga en cómo la intelectualidad organizada interviene en la instalación y consolidación del giro neoliberal en América Latina, distinguiendo diferentes cursos de formación, reproducción y acción de las huestes intelectuales y de los grupos en que la intelectualidad se organiza. En particular, mediante la comparación de dos casos nacionales, Argentina y Chile, cuyos modos históricos de relación entre la intelectualidad y el poder político son paradigmáticos, se traza el mapa de las fuerzas político-intelectuales que intervienen en este proceso en el período 1980-2003, a partir del análisis de las controversias ideológicas que las enfrentan.

En vista de la escasez de estudios que refieren a la intelectualidad como actor colectivo - más allá de figuras notables- y determinante en los intentos refundacionales del pasado reciente, se concluye entregando elementos de interpretación para futuras investigaciones en la región.

**Palabras clave:** Neoliberalismo, intelectualidad, poder político, ideología, América Latina.

## PRESENTACIÓN Y AGRADECIMIENTOS

---

Con este texto se cierran poco más de tres años de investigación, en los que he intentado sacar provecho para enriquecerlo de diferentes instancias en las que he podido participar. En particular, partes de esta Memoria fueron antes presentadas en las XIV Jornadas de Estudiantes de Postgrado organizadas por el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y en el IX Congreso Chileno de Sociología organizado por la Universidad Católica del Maule, ambos en 2016. De modo que agradezco los comentarios y observaciones surgidos en tales actividades, pues contribuyeron a la mejora de lo aquí presentado. Por lo demás, este trabajo se vale de materiales diversos, recogidos en mi paso tanto por la carrera de Sociología -como estudiante y ayudante- como por el (aún no finalizado) Magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile.

Con todo, lo más importante es la deuda que este texto, mi etapa formativa y, en general, mi paso por la universidad, les deben a algunas personas sin las cuales no habrían sido posibles.

En primer lugar, debo agradecer al profesor Carlos Ruiz Encina, profesor guía, por la generosidad mostrada en estos años. En especial, por compartir conmigo su aprecio por América Latina, no sólo en mi paso como ayudante en sus cursos sobre la región, sino en cada conversación informal que hemos tenido sobre el tema, pese a lo escaso del tiempo. Pero, además, porque yo, como otros, hemos podido, además de a su inestimable obra propia, acercarnos a otros gigantes, sus maestros, que, de no ser por esfuerzos como el suyo, hoy quedarían olvidados en un país que se niega a mirar más allá de la cordillera.

En segundo lugar, quiero agradecer enormemente al profesor Giorgio Boccardo, por los años de formación, la confianza y las oportunidades. Por invitarme, al iniciar su etapa como docente, a ayudarlo en sus cursos de Sociología y de Historia Social de Chile. Pero, por sobre todo, por el compañerismo y la amistad, valores extraños hoy en día.

En tercer lugar, agradecer a Hugo y Luisa, mis padres, por cada duro día de trabajo con que contribuyeron no sólo a que diera este paso por la universidad tan deseado por ellos, sino a formarme en tantas otras facetas de la vida. Por el amor, inevitablemente recíproco, del que siempre he estado orgulloso.

Finalmente, agradecer a Eva, compañera de aventuras, de aquí y de allá, por siempre estar y por tanto más.

Maipú, Santiago, enero de 2018.



## I

### LA INTELLECTUALIDAD LATINOAMERICANA Y EL GIRO NEOLIBERAL

---

A esta altura no es novedoso decir que América Latina ha experimentado profundas mutaciones en su patrón de acumulación capitalista y su fisonomía social. Tampoco lo es que tales cambios han tenido efectos directos en su cultura, y en las modalidades de producción y los contenidos de su pensamiento social y político. Y es que, pasadas varias décadas desde sus primeras señales, la “crisis” de las ciencias sociales sigue siendo motivo de análisis. Habiendo mediado en este proceso una serie de cambios económicos, sociales y culturales a nivel mundial, aquilatados de diverso modo en las distintas sociedades nacionales latinoamericanas, la desorientación de los estudiosos de las ciencias humanas persiste, no tanto en relación con lo que se perdió en la mudanza, sino sobre todo respecto a lo que aún hoy lucha por estabilizarse. Por así decirlo, el sacudón que remeció las bases sobre las cuales se entendió y operó la sociedad moderna hasta entrado el siglo XX, alcanza hoy a ser apropiado en sentido *negativo*, esto es, aceptando el fin de una época y de sus propios modelos, pero sin que exista claridad respecto al modo de encarar el futuro.

Es que la posibilidad misma de perfilarse hacia un futuro a través del conocimiento ha sido cuestionada. Porque lo que se ha puesto en duda ha sido el proyecto moderno y, con ello, la pretensión de alcanzar una sociedad racional, verdadera y libre, en el sentido ilustrado de los términos. Si la secularización es el proceso por el cual la modernidad transfiere la soberanía de sus vidas a los hombres, desahuciando el orden recibido de la trascendencia religiosa e impulsando, por el contrario, el orden producido por la voluntad humana (Lechner, 1990), hoy esa capacidad está puesta en duda: entre la intelectualidad, pero también a nivel del sentido común, se extiende una actitud que desestima los proyectos de futuro, los de la política, oscureciéndose las responsabilidades humanas en la conformación de un orden social que se hereda, pero del que aún es poco lo que se sabe a ciencia cierta.

En las últimas décadas, la característica imbricación que permeó a las ciencias sociales latinoamericanas, llevándolas a vincular proceso social y proceso político, se desvirtúa. Como un síntoma de las transformaciones económicas globales y del agotamiento de los

proyectos políticos del siglo XX, el signo de esta crisis intelectual es volverlas incapaces de cuestionar los fundamentos de un orden social neoliberal que irrumpe como promovido desde afuera, a punta de globalización y dinámicas de crecimiento ligadas a una economía mundial cada vez más integrada, extendiéndose la crisis del plano intelectual incluso hasta la forma de hacer política: se le niega su entendimiento como proceso de incorporación de grupos y clases sociales, que, relacionando conflictivamente sus intereses, se hacen parte o empujan proyectos de futuro (Faletto, 2002).

Pese a ello, lo interesante de hablar de una “crisis” es que ella no implica una ruptura definitiva. Por el contrario, la misma puede entenderse como un momento dentro de una conflictividad social y política de más larga duración, no refiriendo tanto a un proceso terminal como a uno de tránsito, impreciso y desorientador para quienes se dedican a comprenderlos, en el que se torna central analizar críticamente lo viejo, que amenaza con desaparecer, para comprender lo que en potencia será lo nuevo y, de ese modo, saber desde dónde se piensa en el presente.

En esa tarea es primordial la perspectiva histórica. Reflejando el carácter ideográfico de las ciencias humanas, humildes en su entendimiento de que su progreso no proviene de leyes generales, sino de la búsqueda constante –y rezagada- de un objeto de estudio que cambia a lo largo del tiempo, su uso permite sumergirse en las complejidades contenidas en este proceso de cambio, no a través de formas universalizantes que naturalicen el presente, sino mediante el análisis de formaciones histórico-concretas como las sociedades nacionales. Bajo la premisa de que el presente no puede ser pensado con independencia del pasado, el estudio de la historia reciente, regional y nacional, no sólo acerca a aprehender los rasgos del nuevo panorama, sino que también ayuda a negar el carácter aparentemente autorreproducido del orden social imperante (Bloch, 1965). Tener como referencia de los cambios internos las transformaciones globales, suele negar la inercia que mantienen en el presente las viejas estructuras de las sociedades latinoamericanas del siglo pasado, permitiendo que se aleguen pretendidas mutaciones “rápidas” y “totales”, que, sin embargo, omiten las responsabilidades sociales y políticas que subyacen a tal proceso.

Así, además de dar cuenta de lo actual, se deben retroceder unos pasos para encarar el problema de cómo reconstituir la actitud moderna que lleva a cuestionarlo. La calidad científica de las ciencias humanas se juega allí, en tanto búsqueda de la verdad, lo que conlleva la tarea de abocarse a develar el sometimiento a “lo real”, en virtud de cuestionar el peso irremediable de supuestas realidades aplastantes (Faletto, 1996a). Un primer paso, entonces, es evitar naturalizar el presente, cambiando la descripción de “la realidad” por su problematización, de modo de transformar el estudio de lo social en una empresa razonada.

### **1.1.La triple mudanza reciente: socioeconómica, política e intelectual**

Es necesario caracterizar las dimensiones que configuran la “crisis” mencionada, considerando que la misma, si bien posee su especificidad en el concierto latinoamericano, se enmarca en un proceso mayor de alcance global. Proceso que, pese a dar lugar a un renovado orden social neoliberal, todavía sigue siendo poco claro en su constitución y posibilidades a futuro, a vista de quienes observan sus tendencias.

Esa escasa claridad suele estar ligada a la noción de “globalización”, la que, de tanto usarse y poco explicarse, se erige como sello de una etapa en que parecen querer omitirse los límites de la realidad social, para atribuirlos a una inercia ajena al quehacer humano. Desde mediados de los setenta, se produce una reconfiguración del modo en que el capitalismo reproduce su acumulación y la extiende, ligada estrechamente a la aparente inexorabilidad globalizadora, cuya forma particular puede delinearse, en lo fundamental, como la conexión no sólo de flujos de conocimiento entre lugares lejanos, sino también de personas y objetos, especialmente si éstos últimos son mercancías (Beck, 2002). Se deja atrás la producción masificada en serie, reemplazada por una desconcentración productiva y una flexibilidad laboral que, en la lógica de los flujos indiscriminados, avanza hacia la mercantilización de espacios sociales antes protegidos. Tal expansión es posible, no obstante, su complejidad, por la coordinación que permiten nuevas herramientas de comunicación e información, que prosperan explosivamente en las últimas décadas (Sassen, 2003).

Paradójicamente, esa ola desestructuradora se convierte, a su vez, en una onda homogeneizadora del panorama cultural e intelectual. La imagen del “fin de los metarrelatos” la acompaña, al justificar una supuesta nueva naturaleza del saber que, según este ideologismo, sostiene como imposible que éste encuentre su legitimidad en los proyectos históricos que marcaron el rumbo del siglo XX (Lyotard, 1987). De tal suerte, el marxismo, la socialdemocracia y el liberalismo político son cuestionados, en medio de un marco general que desdeña de los valores modernos y apunta a un cuadro de “posmodernidad”, incapaz de elaborar nuevas referencias históricas que reemplacen a esos paradigmas, y que con ello legitimen las actuales formas del pensamiento social.

La consecuencia inmediata de esto es un escenario de incertidumbre e indeterminación, que exhibiendo como rasgo distintivo un particular eclecticismo en lo que respecta a formulaciones filosóficas, sociales y culturales, habrá de reconocerse en un conjunto de desestructuradas aproximaciones a la realidad social, que siendo percibidas como “posmodernas”, tienen como único elemento en común la negación del proyecto moderno y, con ello, la desconfianza hacia las nociones clásicas de verdad, razón, identidad y objetividad, a la idea de progreso universal y de emancipación, y, en general, a todo aquello que suene a algo organizado o con límites definidos (Eagleton, 2004). La comunión de esta contribución “posmoderna” con el nuevo orden socioeconómico mundial, propicia la emergencia de un período histórico cuyo mundo de referencia lo constituyen el capitalismo postindustrial y la sociedad de consumo (Jameson, 1999), así como la reacción a los esquemas de pensamiento usados durante el siglo pasado.

En ese tránsito, por cierto, las marcas de la desestructuración capitalista y del “giro cultural” que la acompaña, se expresan en la práctica y los temas de las ciencias sociales. Se desdibujan las fronteras intelectuales de éstas, por cuanto se fragmentan sus dominios y estallan sus posibilidades disciplinares, surgiendo una variedad de subdisciplinas que, compartiendo un interés general por la vida en sociedad, experimentan un proceso de sobre-especialización que no encuentra campos de estudio precisos ni concepciones claras para abordar sus objetos investigativos (Garretón, 2014). Pero, además, estrechándose los lazos entre los diferentes campos de las ciencias sociales, paradójicamente declina el

discurso compartido que alguna vez acompañó a cada una de ellas, derivando en una permanente crisis identitaria de las disciplinas (Burke, 2007).

Si la desorientación intelectual reflejada en el quehacer de las ciencias sociales es asociable a la reconfiguración capitalista y a la emergencia de un pensamiento desestructurado y reactivo a los valores modernos, también lo es a una derrota de las alternativas políticas presentes en el imaginario político del siglo XX. Una que, experimentada por la izquierda política y habitualmente sintetizada en la idea de la caída de los “socialismos reales” del Este de Europa, dio paso a los conservadores llamados al “fin de la historia”, venidos de los centros del capitalismo mundial, que buscaron proyectar la imagen de un inexorable orden internacional, alineado a los valores occidentales y al capital financiero (Eagleton, 2004).

Ello fue posible, huelga recordar, no porque tales valores hubieran demostrado ser más válidos o perdurables en el tiempo, sino porque tamaña derrota comportó, concretamente, la constricción de la relación entre lo social y lo político, y, en ese sentido, la separación de lo político respecto a lo intelectual. Si en algo se sostiene la “amnesia posmoderna” que lleva a negar los valores socialistas y toda una larga tradición de pensamiento elaborada al calor de las luchas subalternas de los dos últimos siglos (Eagleton, 2004), es la lejanía que adoptan las ciencias sociales de los problemas que aquejan a sus históricas referencias sociales, así como de las luchas de éstas, cuestión que merma la propia capacidad de análisis sociohistórico que estos grupos llegaron a desarrollar en los marcos del modo de producción capitalista (Hobsbawm, 1983).

#### 1.1.1. El giro neoconservador y la contrarrevolución monetarista: la ideología neoliberal

La consecuencia perdurable de la triple mudanza anterior es la oportunidad política que abrió a la penetración del programa neoliberal en el mundo. El neoliberalismo, como programa político, acompaña al último giro del capitalismo global, cuya especificidad radica en el predominio del capital financiero transnacional y en el abandono, por parte del Estado, de sus funciones y propósitos “protectores” -productivos y redistributivos-, aunque sin dejar de lado el papel de agente económico que desempeñara en el siglo pasado. Ese rol

se reorienta, esta vez, hacia la privatización de las industrias y los servicios estatales, y la transferencia del excedente económico hacia quienes ostentan las mayores riquezas y no hacia los no propietarios (Anderson, 2003). Para Harvey (2005), el neoliberalismo se erige sobre un patrón de “acumulación por desposesión” compuesto por cuatro módulos operativos. Primero, la privatización y mercantilización de recursos vitales en un grado inédito en la historia mundial; segundo, la financierización de la economía mundial, que excede las fronteras nacionales y sus controles; tercero, la gestión y manipulación de las crisis, cuyo uso permite transferir activos de la periferia hacia el centro del capitalismo; y cuarto, las redistribuciones estatales, mediante las cuales los Estados operan como agentes de una de las restauraciones plutocráticas de mayor magnitud en la historia del capitalismo.

Como ideología, el neoliberalismo justifica este programa de transformación en base a un ideario radical, cuyo contenido permea, por una parte, la visión de mundo de las élites políticas e intelectuales de los países capitalistas y, por otro, deviene en un sentido común que, considerando la resistencia individual y organizada que de todos modos genera, establece una hegemonía de una magnitud territorial y política inédita. En el ámbito intelectual, esta ideología se empeña en asegurar, desde una perspectiva científicista y como dique de contención frente a visiones alternativas, que el todo del objeto de la “ciencia económica” es el todo del objeto capitalista, cuyas prioridades habría que desarrollar e inclusive innovar, pero sin pretender eliminarlo (Rojo, 2016), lo que implica, de un lado, naturalizar al capitalismo como único modo de producción posible y a la “ciencia económica” como único medio de comprensión de la sociedad. Esto, acompañado del hedonismo del consumo y el individualismo, propicia, ahora en el ámbito del sentido común, una desconfianza creciente en la política y en la acción colectiva, y, en general, la eleva como principio constituyente de todo el resto de relaciones sociales.

De ahí que no debiese considerarse al neoliberalismo como un fenómeno frágil y anacrónico, ni a su ideología como un “pensamiento débil” o una mera sabiduría convencional (Anderson, 2003). En las últimas décadas, la intelectualidad crítica ha tendido a subestimar la calidad intelectual de este ideario, calificando el discurso del *mercado total* apenas como un cuerpo de doctrina ideológico (es decir, falso) o como una convergencia de

intereses de clase, intelectualmente irrelevante (Dumenil y Levy, 2011). Pero, por su convencionalismo aparente, se olvida que la fuerza de la ideología neoliberal radica menos en su agudeza para interpretar la realidad, que en su emergencia como relato de legitimación del proceso de cambio que acompaña: la imposición de un programa que, con intensidad variada en el mundo, impulsó la deflación económica, el aumento de las tasas de ganancia capitalista, el desempleo y un aumento de la desigualdad por la vía de una menor tributación de la riqueza y un congelamiento de los salarios, resultado de la destrucción sistemática de las organizaciones sindicales, de su identidad y medios de subsistencia (Anderson, 2003). Es decir, se olvida que encubre, bajo el ropaje del discurso científico, el programa político-ideológico más agresivo que se pudo llevar adelante contra la intervención del Estado y de todas las conquistas sociales alcanzadas en el siglo XX.

Ahora bien, la ideología neoliberal no surge como una doctrina coherente y monolítica, sino que es resultado de una serie de aproximaciones sucesivas entre corrientes de pensamiento aparentemente disímiles, que resultó en una convergencia de relativamente larga duración tras el fin de la Segunda Guerra Mundial (Harvey, 2005). Su novedad histórica es partir del diagnóstico, tras este conflicto, de que ya no es posible ser liberal en un sentido clásico, pues no existe la sociedad civil libre (o burguesa) que lo ha permitido. De modo que el problema central es restaurarla, tarea en la que se empeña un selecto grupo de intelectuales y políticos, de varios lugares del norte y centro de Europa y los Estados Unidos, a quienes el filósofo austriaco Friedrich von Hayek convoca en Mont Pèlerin, Suiza, para dar origen al club del mismo nombre. Y es que, tras la guerra, entre la intelectualidad nostálgica de la sociedad liberal desaparecida, cunde la preocupación, por una parte, por el prestigio que alcanza el comunismo soviético y la URSS como potencia y, por otro, por las diversas formas híbridas de liberalismo socialdemócrata que confluyen en la, para ellos, principal y más riesgosa componenda pragmática de la posguerra: el keynesianismo (Hoevel, 2014). Por ello, cuando las bases del Estado de Bienestar en la Europa de posguerra efectivamente se constituían, eclosiona un espacio de elaboración política-intelectual que se nutre de adversarios tanto de este nuevo régimen como de enemigos del *New Deal* estadounidense, todos los cuales buscan combatir el keynesianismo y solidarismo reinantes, en vista de preparar las bases de otro tipo de capitalismo futuro.

Como señala Hoevel (2014), concurren en la emergencia del ideario neoliberal tres corrientes intelectuales representativas de los grupos incorporados al club. Primero, la denominada “escuela austriaca”, vinculada al liberalismo gradualista promovido por Hayek y el economista Ludwig von Mises, cuya crítica centrada en la planificación estatal defiende la idea de un orden social espontáneo o no constructivista. Segundo, los “economistas neoclásicos”, ligados a la escuela de economía de la Universidad de Chicago, quienes apelan a la realización de una completa reingeniería del Estado, con el fin de orientarlo hacia la desregulación del mercado usando los nuevos instrumentos econométricos y estadísticos que proporciona la “ciencia económica”. Finalmente, los “ordoliberales” alemanes, que pese a coincidir con las otras corrientes en la necesidad de refundar las libertades -especialmente la de mercado- por medio de una nueva política estatal, entienden tal intervención como algo diferente tanto de las regulaciones sobre la base de normas generales y abstractas surgidas de la evolución social (austriacos) como de un orden jurídico y regulatorio basado en la teoría neoclásica de la elección racional -cuyas leyes y regulaciones deben ser analizadas y adaptadas al punto de vista económico (neoclásicos)-, declarándose partidarios de un ‘Estado fuerte’ (“intervencionismo liberal”) en defensa de una regulación antimonopólica que favorezca la competencia.

Existiendo desavenencias, la unidad de esta alianza se fraguó en relación con cuatro principios programáticos. En primer lugar, el restablecimiento del mercado como base de la organización social, contra la intervención estatal excesiva que habría causado la decadencia de la sociedad liberal; segundo, el recurso al Estado para restablecer las reglas del juego de la sociedad liberal, puesto que el mercado, en la medida que no puede conjurar naturalmente las condiciones para su florecimiento, necesita del poder estatal para incentivarlo; tercero, el restablecimiento de la libertad como idea ética central, así como otros “valores centrales de la civilización” como la responsabilidad individual, la propiedad privada, el respeto a los contratos y la subordinación a la ley; y cuarto, el rechazo a los totalitarismos y a la separación de las libertades económicas de las políticas (Hoevel, 2014).



La larga fase de auge que experimentó el capitalismo europeo tras la Segunda Guerra Mundial y la hegemonía que ello impuso del keynesianismo dentro de la “ciencia económica”, dejó marginado a este programa, que permaneció latente sólo como teoría recluida en los campos universitarios. La crisis del modelo económico de posguerra, empero, vino a sacarlo de ese letargo. En principio, porque el principal dilema que a principios de los setenta debieron enfrentar los economistas y autoridades políticas de las potencias centrales fue el *trade off* entre inflación y desempleo. Nunca habían convivido simultáneamente una alta inflación y un estancamiento en la producción (*estanflación*). Por eso, y en vista de las escasas herramientas con que se contaba para abordar este problema, por cerca de una década la mayoría de los países de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OECD) van a tratar de aplacarlo mediante remedios keynesianos, que, sin embargo, van a fallar estruendosamente (Villarreal, 1986).

A fines de la década, y como consecuencia de este fracaso, se abre la oportunidad política para que entren en escena los neoliberales. La elección de Margaret Thatcher en Gran Bretaña en 1979 y de Ronald Reagan en los Estados Unidos en 1980, puso a la cabeza de las dos principales potencias mundiales a gobiernos empeñados en aplicar el programa neoliberal. Mientras tanto, aunque sin la misma pretensión refundacional, se producía un giro a la derecha en el norte de Europa Occidental -con excepción de Suecia y Austria-, contrastando con el ascenso de gobiernos de izquierda (eurosocialistas) en la zona sur europea, donde habían dominado los regímenes más conservadores. En Australia y Nueva Zelanda, por su parte, los gobiernos laboristas superan en su radicalidad neoliberal a los conservadores locales. Finalmente, el neoliberalismo encuentra un último empujón en la intervención de la URSS en Afganistán en 1978, que agravó el anticomunismo existente, siempre componente esencial del ideario neoliberal (Anderson, 2003).

Ahora bien, es en los años ochenta cuando se producen los primeros anclajes globales relevantes del neoliberalismo en políticas estatales (Ruiz, 2015a). Ante la evidencia de que las políticas monetarias de control de la inflación reducen irremediablemente la actividad económica, las autoridades políticas deben elegir: o se implementan políticas contra la inflación a costa del empleo o bien se activa la economía con un gasto fiscal inflacionario

(Villarreal, 1986). Dada la afinidad política de la nueva derecha -como ocurre también en América Latina- se elige el control de la inflación, apelando a poner término a la pugna distributiva que tras ella se esconde. Y, así, amparados en el halo científicista de un monetarismo friedmaniano transformado en receta, se imponen medidas que culpan al Estado por ineficiente y que impulsan la limitación de los gastos gubernamentales; que asumen que el sector privado destina sus ingresos a fines más rentables para la sociedad, por lo que limitan los impuestos; que sostienen que sólo mediante el libre mercado es posible la óptima asignación de recursos, por lo que eliminan los controles sobre precios y salarios y extienden aquello al comercio internacional; y que asumen que la libertad de mercado debe ampliarse a casi toda la vida social, tras recortar las regulaciones (Villarreal, 1986). Se consolida, por tanto, una ofensiva que, a diferencia de los años de nacimiento de la respuesta keynesiana ante la Gran Crisis (1929-30), no supone una revolución científica que reemplace al paradigma anterior, sino una contrarrevolución por la vía del retorno a la ortodoxia “neoclásica”, aunque bajo los ropajes del monetarismo (Villarreal, 1986).

Si bien es cierto que la experiencia chilena es la transformación neoliberal pionera -no sólo regional sino prácticamente universal (Harvey, 2005)- y más estable, también lo es que la ideología neoliberal alcanza su proyección global sólo tras la aplicación de su programa en las dos potencias anglosajonas. Esta aplicación, sin embargo, fue disímil, dando lugar a procesos distintivos a uno y otro lado del Atlántico. En efecto, por una parte, en Gran Bretaña Thatcher asumió que la mejor terapia contra la inflación era la recesión, por lo que estuvo dispuesta a pagar el costo político del ajuste -para lograr el beneficio de largo plazo de quebrar las bases electorales del Laborismo-, que incluyó una política monetaria favorable a los flujos financieros y a los ingresos altos, el aplastamiento de las huelgas y de organizaciones sindicales, y un tardío -pero amplio- paquete de privatizaciones (Harvey, 2005). En Estados Unidos, en cambio, casi sin existir un Estado de Bienestar del tipo europeo, la prioridad se concentró en la competencia militar contra la URSS y en quebrar su economía, lo que hizo que Reagan no respetara la disciplina presupuestaria, produciendo con ello un déficit masivo en la balanza de pagos (Anderson, 2003).

Pero lo que en esa coyuntura dio ventaja al neoliberalismo como una suerte de proyecto político superior al keynesianismo y al comunismo, fue la síntesis ideológica propiciada, en tales territorios, con el pensamiento neoconservador. Y es que, si en los comienzos de las grandes reformas se esgrimían argumentos económicos sobre la mayor eficiencia de los mercados, la fuerza del neoliberalismo y su aceptación en la sociedad inglesa y estadounidense se logra mediante una justificación ética. En el caso de los thatcheristas, vinculando las consideraciones económicas a la regeneración moral del individuo, las familias y la comunidad nacional (Giddens, 1994), haciendo que el neoliberalismo entre en Gran Bretaña bajo la máscara ética de una regeneración conservadora y no tanto de un proyecto de ingeniería social. En Estados Unidos, la idea central del neoconservadurismo radicó en el logro de un “cambio de régimen”, es decir, no sólo de las instituciones formales y estructuras de autoridad de la sociedad, sino también de las reglas no escritas por las cuales la gente se mueve, basadas en la religión, el parentesco y la experiencia histórica compartida. A ello se suma la percepción de la decadencia de Estados Unidos, se propuso una regeneración moral, no a través del mercado sino de un Estado renovado por una impronta ética fuerte (Hoevel, 2014).

En este último país se encuentran, además, los grupos de la “nueva derecha” que empujan más decididamente la transformación neoliberal en el mundo. Círculos radicales que logran edificar una hegemonía cultural de la que históricamente habían estado privados, alcanzando incluso a los sectores derechistas de países del Caribe, Centroamérica y Sudamérica (Maira, 1981). Entre ellos, además de los monetaristas de Chicago, destacan neoconservadores de la élite académica estadounidense, fundamentalistas evangélicos y círculos de pensamiento geopolítico, todos con gran capacidad de inserción en los medios de comunicación social. Particularmente los neoconservadores, articulan un entramado que incluye a los *think tanks* en los que desarrollan exhaustivas investigaciones para imponer temas en la agenda pública, importantes agrupaciones empresariales dispuestas a invertir en la generación de un pensamiento de defensa de la libre empresa y libre competencia, y grandes medios de comunicación de masas<sup>1</sup> (Maira, 1981).

---

<sup>1</sup> Entre los *think tank*, se cuentan la Hoover Institution on War, la Heritage Foundation de Washington, el Center for Strategic and International Studies de la Universidad de Georgetown y el American Enterprise

Con todo, no habrían estado completamente desarrolladas las condiciones para esta contrarrevolución neoliberal sin la conversión ideológica de la socialdemocracia y parte importante de las identidades de izquierda en Europa. Pese a los genuinos intentos de gobiernos como los de Mitterrand y Papandreu -en Francia y Grecia, respectivamente-, por llevar adelante políticas keynesianas de pleno empleo, la crisis económica y la presión de los mercados financieros internacionales los lleva a torcer su trayectoria hacia una mayor austeridad y sometimiento de las clases populares. Esto, mientras en casi toda Europa los gobiernos socialdemócratas se convierten en los más decididos impulsores de las medidas del plan neoliberal y en países como España, gobiernos socialistas como el de Felipe González, se reorientan rápidamente hacia el ideario neoliberal (Anderson, 2003).

#### 1.1.2. La larga agonía desarrollista y el vínculo entre democracia y neoliberalismo en América Latina

Las coordenadas globales mencionadas tienen su expresión en América Latina, de la mano de la larga agonía experimentada por la alianza pluriclasista que, desde los años treinta, permitió el desarrollo “hacia adentro” de los países latinoamericanos y un precario e inestable equilibrio social y político. Aun cuando en torno a esa alianza existieron procesos concretos de democratización fundamental –movilidad social y capacidad de demanda política-, los sectores medios y obreros organizados disfrutaron, en lo sustantivo, de una democracia centrada en sus aspectos socioeconómicos y no en aquellos ligados al sistema democrático formal (Ruiz, 2013).

Ello determinó, en consecuencia, que aquel pacto pluriclasista, que originó el denominado Estado de Compromiso, estuviera permanentemente afectado por los reajustes políticos de unos sectores dominantes afanados en mantener su control sobre las masas populares integradas a los beneficios económicos (Weffort, 1968). Al tornarse cada vez más difícil la

---

Institute. Entre los gremios empresariales, la Business Roundtable y el The National Association of Manufacturers. Entre los medios, destacan las presentaciones de televisión y venta masiva en video-cassette de la obra *Free to Choose* de Milton Friedman (Maira, 1981).

reproducción de estos beneficios desde fines de los cuarenta, se agudizan las contradicciones, iniciándose en la política una profundización de sus rasgos excluyentes, que se vuelve constante y cada vez más necesaria para el dominio de los sectores dominantes, aun cuando la misma radicalice la movilización popular que busca mantener su participación en la orientación del Estado (Cardoso y Faletto, 1969).

En ese deterioro paulatino de la economía y de la activación social, estalla la última oleada de golpes militares en la región, tras agudizarse la contradicción entre una demanda creciente por participación en la renta nacional de los sectores subalternos y las aspiraciones de acumulación de capital y de conservación de las rentas de los grupos dominantes. La irrupción popular choca con una articulación de intereses que se niega a entregar concesiones, al tiempo que se revela la inadecuación de las estructuras existentes para viabilizar formas de participación y de control en la política y la economía (Cardoso y Faletto, 1969). La crisis del Estado de Compromiso, así, se manifiesta antes como una crisis de dominación que como una “crisis de la democracia”, en tanto se trata de uno más de los tantos intentos por manejar la endémica crisis política del inestable orden social latinoamericano (Ruiz, 2013).

Ahora bien, el rasgo que distingue a las dictaduras militares que irrumpen es la contención de la activación social, como “regímenes antipopulares” cuyo objetivo es barrer con la dinámica de la política nacional-popular, para de ese modo acabar con la injerencia de los sectores populares en la orientación estatal (Touraine, 1989). No se trata, por tanto -salvo en Chile, donde sí parte con los militares-, del inicio de la transformación neoliberal, sino de un intento por reconfigurar el modelo de industrialización nacional, quebrantando, a través de la desocialización de la economía, la capacidad de determinación alcanzada por estos sectores a lo largo de tres décadas (Cardoso y Faletto, 1969).

En lo inmediato, esta mantención del modelo de desarrollo con renovadas credenciales de exclusión política define el origen de los cambios en el carácter social —o de clase- de la política y, en específico, del Estado. La cuestión dictatorial, en ese sentido, se instala como consecuencia necesaria del carácter concentrador y excluyente que ha tenido el desarrollo

capitalista regional, renunciando con ello a una dominación basada en formas de “pacto social” que incluyeran grados de participación popular, al no permitirse, estructuralmente, un esquema de satisfacción de demandas. Así, las dictaduras desarticulan las formas de democracia social alcanzadas, en la perspectiva de despolitizar las relaciones sociales, para eliminar toda forma de intervención estatal en la regulación de éstas últimas (Ruiz, 2013).

La intervención autoritaria, empero, no logra poner fin a las contradicciones sociales y políticas previas, sino que sólo replantea el problema de la conducción política. Bajo estas condiciones, la despolitización forzada autoritariamente deja el camino libre para que las nuevas élites en el poder fijen el objetivo de “retornar a la democracia” en una modalidad que, convenientemente, posterga las aspiraciones de democratización social que perviven. Se redefinen, de allí en más, los integrantes de la alianza en el poder, otorgando membresía, en primera instancia, al sector económico controlado por el Estado, a los grupos monopólicos locales y a las empresas multinacionales (Cardoso y Faletto, 1977). La razón: los grupos locales que forman la alianza con el capital extranjero buscan profundizar el capitalismo bajo nuevas formas dominantes, para lo cual promueven la configuración de un Estado capaz de reordenar y controlar a la sociedad, eliminando cualquier contrapeso al interés monopólico que, desde la nueva alianza, se busca imprimir a la orientación estatal.

El ámbito económico se ve directamente transformado en medio de esta reconfiguración de la alianza dominante y del carácter social del Estado, constituyendo la transformación de las economías latinoamericanas el punto de llegada de un largo proceso que va a sentenciar la suerte de la modalidad nacional-popular de desarrollo (Ruiz, 2013). Se manifiesta en la forma de una crisis estructural -económica, social y política- que extiende hasta mediados de los años ochenta el agotamiento del modelo de desarrollo “hacia adentro”, sólo para que, “crisis de la deuda” mediante, se sellen las condiciones de irrupción del giro neoliberal en la década siguiente. Ello determina que, paradójicamente, mientras la mayoría de los regímenes militares coinciden con ciclos de crecimiento económico en sus respectivos países –lo que explica la mantención de la modalidad nacional-popular de desarrollo- (O’Donnell, 1972), el tránsito a las democracias se haga en medio de crisis económicas.

Entre los factores que originan este cuadro sintomático del fin de una etapa, que es a la vez financiero (deuda externa) y estructural, se encuentran elementos internos y externos. Entre estos últimos, el aumento de la tasa internacional de interés, que proviene del déficit fiscal norteamericano; el deterioro de los términos de intercambio; las restricciones de los países centrales a la entrada de productos de la periferia; y la pérdida de poder de compra de estos países. Por su parte, internamente se desata la histórica inflación de los ochenta, vinculada al consumo excesivo de los más ricos y a la creciente intervención del Estado, a raíz de la presión de diversos grupos integrados a su orientación (Ruiz, 2013).

El fin definitivo del modelo de desarrollo nacional-popular, tal como se lo conoció en el siglo pasado, es capitalizado por las reformas de extrema apertura en las economías nacionales, que dan inicio al giro neoliberal latinoamericano. Sin embargo, su irrupción se vale de cursos de privatización previos, no atribuibles a aquél. Primero, los que involucran a las estructuras productivas, corresponden al arranque del proceso, mientras que la privatización de servicios sociales es posterior y mucho menos extendida, salvo en el caso chileno. Segundo, los grupos tecnocráticos tienen un origen anterior a este proceso, por más que durante este proceso experimenten sucesivas etapas de ascenso. Finalmente, la propia internacionalización de las economías locales tiene un origen previo que se anticipa en la pérdida del control nacional sobre la política económica (Ruiz, 2013).

Por lo anterior, cabe precisar que los ajustes llevados a cabo previamente<sup>2</sup> no pueden ser entendidos como propiamente neoliberales, aunque sí como precursores de aquello: los ochenta son años de pugnas de refundación, dada la crisis de la industrialización nacional y las presiones económicas externas, pero no de neoliberalismo (Ruiz, 2013). En realidad, el momento programático de este giro, para el conjunto de América Latina -con la excepción

---

<sup>2</sup> Estos ajustes parciales son de tres tipos: 1) ligados a la modalidad “burocrático-autoritaria” (O’Donnell, 1977), 2) a la de “desarrollo dependiente-asociado” (Cardoso y Faletto, 1977) y 3) a los cursos de renegociación de la deuda externa a los que se someten las economías locales durante los años ochenta (planes Baker y Brady), y en donde, por primera vez, los países aceptan una mano externa para reformular el sentido de sus políticas públicas, adoptando procedimientos jurídicos internacionales cuyos protagonistas fueron los organismos económicos internacionales y los gobiernos nacionales, al tiempo que cada vez menos las economías locales (Cepal, 1996).

de Chile-, se fija en el Consenso de Washington de 1989, en donde se establecen los objetivos de largo plazo con que se busca, a nivel global, abrir mayor espacio para los actores privados nacionales y extranjeros, al tiempo que forjar nuevas relaciones de los países con los mercados mundiales (Williamson, 1990). Particularmente, se buscó rehacer la práctica económica local para dar espacio a la expansión internacionalizada de los mercados que lideran algunas empresas privadas, sobrepasando los cauces nacionales que las limitaban. Ello, por cierto, sacrificó la soberanía nacional respecto a la toma de decisiones económicas y sociales, a la vez que profundizó la concentración económica y, como efecto social general, reconfiguró la división internacional del trabajo. Las economías latinoamericanas adoptan una posición geopolíticamente nueva en el mercado mundial, por la vía de ceder control sobre el crecimiento de áreas de desarrollo como la alimentaria, energética, financiera y de producción científica y tecnológica. Así, se redefine la participación de los gobiernos locales en las decisiones que articulan los mercados locales y mundial (Acevedo, 2004), afectando la nueva división social del trabajo en las condiciones de vida de sus poblaciones.

Esta transformación cambia profundamente la fisionomía social regional. El neoliberalismo irrumpe desestructurando las antiguas identidades sociales de la etapa nacional-popular – especialmente sectores medios y obreros-, y sus formas de organización y acción colectiva. Mutan con ello las condiciones de existencia de estas poblaciones, reconfigurándose el mapa de clases y grupos sociales que dieron vida a la dinámica social durante la centuria pasada (Boccardo, 2013). Políticamente, además, la debilidad de estas identidades y la orientación conservadora que le imprime la nueva alianza dominante al Estado aumenta los requerimientos de administración política, perfilando el carácter restringido de las “nuevas democracias”. Se impone, en este sentido, una elitización en la disputa política, mientras los sistemas de participación y de representación se tornan crecientemente formales y espurios: diversos grupos de presión (empresariado, eclesiásticos, medios de comunicación) monopolizan la capacidad de condicionar el desenvolvimiento económico y cultural de la sociedad, dejando en un segundo plano al sistema de partidos y al Parlamento, mientras se fortalece la figura presidencial (Ruiz, 2013).



### *Progresismo neoliberal en la experiencia regional: el giro ideológico reciente*

Si bien la crisis terminal de la modalidad de desarrollo de la etapa nacional-popular es condición de posibilidad para el giro neoliberal regional, éste no desembarca sino tras el cambio ideológico que experimentan las fuerzas progresistas que lideran los procesos de democratización locales. De ahí el vínculo latinoamericano característico -salvo en el caso chileno, donde se produce por el impulso autoritario- entre democracia y neoliberalismo, y el carácter social excluyente de la democratización social y política impulsada (Ruiz, 2013).

El neoliberalismo no se instala en América Latina con la crisis económica de los ochenta; su hegemonía, por tanto, no es atribuible a esos inestables años, por más que en este período se sucedan intentos, en su mayoría frustrados, por reformular las alianzas sociales de dominio. Las dictaduras no fueron capaces de resolver el problema de la crisis de control social y del orden político para el que habían sido convocadas originalmente (Ruiz, 2013). En los ochenta, se genera la construcción y emergencia de las capacidades hegemónicas y la consolidación de las tecnocracias neoliberales, pero los distintos grados de realización de ese poder y de condicionamiento sobre los modelos de desarrollo y de la acción estatal son visibles sólo en la década siguiente. En ese sentido, es distinto el proceso por el cual se forman las nuevas alianzas sociales dominantes de aquel propio de la realización de su dominio efectivo (Ruiz, 2015a).

El giro neoliberal, además, sin ser consecuencia mecánica de una globalización naturalizada, pues está ligado a los procesos de poder interno y sus articulaciones externas, las complejas tensiones de reorganización -frustradas o exitosas- y las distintas fisionomías a que da lugar en América Latina, se vincula al proceso “externo” de avance del neoliberalismo a nivel mundial. En Europa, pese al éxito innegable del neoliberalismo en cuanto a detener la inflación de los años setenta, recuperar las tasas de ganancia, aumentar el desempleo y el grado de desigualdad del conjunto de los países de la OCDE, no hubo ningún cambio significativo en la tasa media de crecimiento ni disminuyó el peso del Estado de Bienestar, contra todas las medidas tomadas para disminuir el gasto social. Así, al iniciarse los años noventa, la deuda pública de casi todos los países occidentales

comienza a reasumir dimensiones alarmantes, inclusive en Gran Bretaña y Estados Unidos, a causa del endeudamiento privado de las familias y las empresas. Ello no generó, sin embargo, una reacción contra el neoliberalismo, sino que fue la base de un segundo aliento de aquél, anclado en la conversión de los partidos y gobiernos que formalmente se definían como opositores a este proyecto (Anderson, 1999).

La victoria de Occidente en la Guerra Fría consolidó el triunfo del capitalismo liderado por Thatcher y Reagan en los ochenta. Pero, si con su impulso el programa neoliberal logra resonancia mundial, es recién en los noventa cuando este adquiere dimensiones globales - ideológica y políticamente hablando, en función de medidas estatales-, llegando a Rusia (y los ex países comunistas de Europa Oriental), India, China y la propia África, los cuales son incluidos en los nuevos términos de la economía mundial (Anderson, 2001). Esa expansión global, que lleva a la “izquierda democrática” a incorporar medidas neoliberales a sus programas, es liderada por los gobiernos de Bill Clinton y Tony Blair en Estados Unidos y Gran Bretaña, respectivamente. Con ello, se extienden los procesos de mercantilización sobre áreas de tradicional protección social, de la mano de programas de apoyo financiero a la demanda concretados en *vouchers*. Hay, además, un ajuste ideológico: Blair habla de “nuevo socialismo”, al referirse a la meta de conseguir “el avance social a través del logro individual” (esto es, un crecimiento económico con impulso privado). Surge, así, la “Tercera Vía”, programa ideológico para superar los programas de la vieja izquierda keynesiana y de la nueva derecha thatcheriana. Una mutación que, empeñada en remover los basamentos clásicos -particularmente del viejo carácter obrero-, termina por tornar irreconocible a la propia socialdemocracia (Ruiz, 2015a).

La operación política más importante de Clinton y Blair es despojar al neoliberalismo inicial de sus ribetes neoconservadores. La razón es viabilizar su consolidación mundial, pues si en los ochenta esa dimensión moral le había granjeado a este programa un apoyo interno necesario para su implementación, en la década siguiente ello se convierte en un lastre indefendible. Así, se busca suprimir el militarismo inicial, el poco racional apego a los “valores familiares” anticuados, el desdén por la multiculturalidad que impide forjar una hegemonía global, el desprecio por los problemas ecológicos y el patriotismo desafiante

que está en las antípodas de un discurso global capaz de proyectarse más allá del puro imperio de la fuerza (Anderson, 2001).

Lo anterior da origen a lo que Ruiz (2015a) denomina *progresismo neoliberal*, que acompaña a unos regímenes de centroizquierda que se levantan con la aspiración de evitar todo extremismo, dando cuenta del nuevo talante ideológico de la década: armonizar cuestiones que habitualmente estuvieron en las antípodas. Es así como se puede postular la interdependencia entre responsabilidad individual y comunidad, la compatibilidad entre competencia económica y cohesión social, una impensada relación entre la eficacia del mercado y la solidaridad cívica, y el supuesto vínculo entre elevados niveles de consumo y una caridad en la medida de las posibilidades (Anderson, 2001). Se trata de un marco ideológico en el que se replantea la seguridad social en torno al éxito individual, situando a este último como eje de una nueva racionalidad social dominante.

En el caso de América Latina, éste sirve como marco externo sobre el cual se acomodan la vieja izquierda latinoamericana, buena parte de los “nuevos movimientos sociales” y un variopinto enjambre de ONG’s y fuerzas de la “sociedad civil”. Y es que, a la salida de la larga noche autoritaria, se encuentra en esta alternativa de refundación capitalista el carácter posible de las “nuevas democracias” (Ruiz, 2015a). Una reorganización económica que parece frustrar el desplome del desarrollismo y el vacío que dejara el caos de la “década perdida” de los años ochenta. El nuevo sello ideológico de la impronta neoliberal permite encarar los conservadurismos provenientes de la etapa autoritaria anterior, y operar las reformas sobre los modelos de desarrollo, sin contradicción aparente con las bases democráticas formales con las que despunta esta nueva etapa en la región. Se trata de un “discurso sin enemigos” que, sin embargo, choca al poco tiempo con una especificidad latinoamericana en la que democratización social y democratización política no siempre van de la mano, entrando a menudo en contradicción (Ruiz, 2015a). Esto provoca que, al contrario de las experiencias de consolidación que adopta el curso internacional, en los noventa se imponga la inestabilidad en la región, pese a la cual se consolida el matrimonio entre neoliberalismo y democracia gracias a los ajustes iniciales de Menem, Fujimori y Cardoso, y de la mano de la experiencia chilena, nuevamente pionera (Ruiz, 2013).

El marco externo para las aventuras locales de reformulación capitalista no es, entonces, el de aquella primera dominación neoliberal, que política y culturalmente resultaba conservadora. Estampa que no era propicia para unas fuerzas que encabezan los procesos de democratización y enfrentamiento al autoritarismo conservador en América Latina. Es, más bien, en una segunda dominación neoliberal que, a fuerza de ser su impulso de consolidación, se extiende globalmente.

### 1.1.3. El segundo aire neoliberal latinoamericano: las reformas de “segunda generación”

Implementadas en la mayoría de los países latinoamericanos en los noventa, la marcha de las reformas es reevaluada al finalizar el decenio, dado el escaso crecimiento generado y el deterioro de la condición de los trabajadores. Tal revisión no implica un cuestionamiento a las reformas financieras y comerciales, sino un intento de profundización de éstas ligado al perfeccionamiento de sus aspectos institucionales. Es que, provenientes desde el Banco Mundial, las críticas no vinculaban las crisis sociales y económicas a la aplicación de las políticas de ajuste, sino a su débil ejecución (Dávalos, 2010). A raíz de las crisis financieras de 1995 y 1997, se reclama “más política” e intervención regulatoria del Estado, se promueven políticas públicas porque “el mercado es imperfecto” y se aplican programas de atención a la pobreza (Stolowicz, 2012). De tal suerte, junto al Banco Mundial, el BID, Usaid y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, plantean la focalización de inversiones en recursos humanos, el mejoramiento del entorno legal y normativo de los mercados, y una racionalización del sector público, de modo de aumentar la eficiencia fiscal y dar mayor estabilidad macroeconómica a los países en crisis (Dávalos, 2010).

Tal agenda, por cierto, ya aparece esbozada en el foro de mayor resonancia sobre la gobernabilidad en los años noventa: la VI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, realizada en Chile, en Santiago y Viña del Mar, en noviembre de 1996<sup>3</sup>. La

---

<sup>3</sup> En 1996, el BID llama a incrementar los programas sociales sin alterar las políticas económicas, creándose el Instituto de Desarrollo Social (INDES), que cumpliría un importante rol en la implementación de este tipo de proyectos en la región. Ese mismo año, se realiza un foro en Montevideo sobre el tema *Nuevos caminos de*

declaración emanada de allí reconoce los efectos políticos de la desigualdad y exclusión sociales; señala críticas a las políticas desarrolladas; replantea la relación Estado-mercado, demandando del segundo una mayor intervención correctora; y, en la misma línea del BID, la promoción de políticas sociales focalizadas (Stolowicz, 2012).

Esto cobra vigencia como política oficial desde 1997, cuando en el Banco Mundial asume Joseph Stiglitz como vicepresidente y Economista Jefe, tras dejar el cargo de Jefe de Asesores Económicos de Bill Clinton<sup>4</sup>. Su crítica, centrada en la labor del FMI, señala que la euforia por el crecimiento que hubo hasta 1993 termina en la crisis de 1995, que contenía el riesgo de salida neta de capitales desde América Latina, al no contar con las seguridades requeridas en los derechos de propiedad. Si se habían hecho reformas para atraer capitales, ahora había que hacerlas para retenerlo. Y, para ello, el Estado debía regular y supervisar para ofrecer garantías de un “sano mercado financiero”. De tal suerte, las regulaciones financieras que reclama son para fortalecer al capital financiero, planteando como alternativa la asociación público-privada en infraestructura y servicios públicos y sociales, dado que ella libera a los gobiernos de la provisión exclusiva o principal (Stolowicz, 2012).

Stiglitz, además, plantea que la globalización aún no ha concluido, poniéndose en riesgo la necesaria apertura económica por posibles reacciones de varios países ante la crisis financiera de fines de siglo. De modo que sostiene que, si el Estado minimalista de los ochenta ha ido demasiado lejos, a fines de los noventa se necesita dotar de mayor

---

*América Latina*, que organiza el gobierno de Sanguinetti y al que asisten catorce invitados de la élite política e intelectual latinoamericana y mundial, que discuten a puerta cerrada una ponencia de Alain Touraine, en que éste concluye que se necesita controlar al mercado, fortalecer el sistema político y los juegos de mediación -es decir, redimensionar la política (Stolowicz, 2012).

<sup>4</sup> Él, junto a Anthony Giddens, son los ideólogos de la Tercera Vía. Su *Informe sobre el desarrollo mundial 1997: El Estado en un mundo en transformación* (1997) es un manifiesto, más tarde profundizado por el trabajo de Shahid Javed Burki y Guillermo Perry (1998) para el Banco Mundial, en los que responsabilizan a los “gobiernos malos” por el síndrome de ilegalidad que no garantiza la propiedad (déficit legal, burocratismo e ineficacia judicial), por la falta de información (transparencia) y confiabilidad de la burocracia media y baja (corrupción), a la vez que critican la persistencia de la imposición de intereses creados (patrimonialismos particularistas), opuestos al interés general, y que los políticos no garantizan sus compromisos porque los subordinan a los vaivenes de los tiempos electorales (clientelismo).

responsabilidad al Estado para evitar tales peligros, a través de un nuevo papel regulatorio instaurado a partir de reformas de “segunda generación”; también, critica a los tecnócratas por hacer sus reformas de modo uniforme y no a la medida de cada país. En síntesis, se critica el ideologismo del “mercado perfecto” para posicionar otros referidos al cambio institucional al interior de los Estados -a través de las Estrategias Asistencias País-, como una forma de fortalecer la estrategia de privatización de su soberanía (Dávalos, 2010). Aquel nuevo consenso se oficializa, en 1998, en la Segunda Cumbre de las Américas realizada en Santiago de Chile (Guiñazú, 2000).

Las reformas de “segunda generación” intervienen sobre los marcos institucionales y sobre las sociedades tomando como base teórica, principalmente, a la economía neoinstitucional<sup>5</sup>. Ella y la reforma política del Estado convergen en varios países latinoamericanos en, por un lado, la disminución de los costos de transacción por la vía de los derechos de propiedad y, por otro, la consolidación del Estado de derecho como Estado de seguridad jurídica (Dávalos, 2010). El discurso de poder que legitima a los organismos internacionales que empujan estos cambios es la reducción de la pobreza. Esta es entendida como un fenómeno estrictamente económico, relacionado con la capacidad de consumo monetario (dólar-día). Al concebirse de tal modo, se asume que la pobreza es una dimensión más del crecimiento económico. Y como esta perspectiva señala que el crecimiento económico tiene como ejes rectores al sector privado y la lógica de los mercados autorregulados (o sea, contrarios a la planificación estatal), se concluye que la reducción de la pobreza implica aumentar el

---

<sup>5</sup> Destacando en su desarrollo el trabajo del economista e historiador estadounidense Douglass North (2006), su epistemología -en donde el paradigma del *rational choice* busca reconciliar a la “ciencia económica” con otras ciencias sociales por la vía de empatar la teoría microeconómica del consumidor con el estudio de la conducta (*behavior*)- asimila los problemas económicos a la gestión de los costos de transacción entre agentes individuales que maximizan su propio interés. El problema, entonces, es reducir los costos de transacción para que opere libremente la autorregulación del mercado. Esto lleva a que se defina como algo acotado a la acción estatal, dado que viabilizar aquello sería más eficiente y barato. North identifica que, dentro de esos costos de negociación, los más importantes son los costos de información, esto es, entender el costo total de las mercancías como la suma entre los costos de producción y los costos de negociación. Y eso se produce por asimetrías entre oferta y demanda: el supuesto es que todo vendedor oculta información clave al comprador, quien, en caso de conocerla, no compraría. Así, se producen costos de negociación por los derechos de propiedad, los asociados al cumplimiento de los acuerdos, los costos de medición y los de vigilancia.

crecimiento económico por la vía de los mercados autorregulados (Dávalos, 2010). Ahora bien, pese a que la vinculación entre crecimiento económico y pobreza, y entre esta última y austeridad fiscal son arbitrarias, terminan operando como el ideologismo detrás de las reformas de “segunda generación” de los noventa, promoviéndose una mayor disciplina y austeridad en el gasto público, privatización, desregulación estatal y seguridad jurídica, y dejando en manos de la supuesta racionalidad del mercado la lucha contra este flagelo.

El cambio que introduce el neoinstitucionalismo económico en la variante hasta allí puesta en marcha del programa neoliberal (aplicación del FMI, a través del enfoque monetario de Balanza de Pagos) es sostener que el mecanismo del mercado y la libre acción de la oferta y la demanda no sólo pueden regular la economía, sino también a las instituciones sociales. Esto supone que el programa neoliberal ya no es sólo una posibilidad teórica para la economía, sino que una opción civilizatoria justificada, además, como un proceso “natural” de cualquier sociedad en cualquier momento (Dávalos, 2010).

La reforma estructural impulsada por el Banco Mundial en América Latina tiene cinco dimensiones: 1) privatización, 2) desregulación, 3) aperturismo, 4) flexibilización y 5) descentralización. Todas ellas necesitan del Estado y del sector público -son pensadas desde “lo público”-, así como de apoyos sociales y consensos, pues son definidos desde el Derecho y las leyes. Tal legitimidad se consigue a través de conceptos como los de participación ciudadana, lucha contra la corrupción, desarrollo local territorial, Estado de Derecho y gobernabilidad. Empero, la idea que aglutina tal reconstrucción intencionada del Estado es la de “descentralización estatal”, entendida como parte de una reforma política que implica, paradójicamente, la privatización de las funciones del Estado (Dávalos, 2010). La caja de resonancia de tales discursos y prioridades estuvo dada por la red de ONG’s locales y organizaciones de cooperación internacional para el desarrollo e instituciones académicas como Flacso o semi-académicas como la Fundación Friedrich Ebert, pues ellas supeditaron sus aportes al uso de tales marcos. (Stolowicz, 2012).

En respuesta a los movimientos antiglobalización y a las crisis sociales y políticas que estallan en la América Latina de comienzos del nuevo siglo, estas reformas son

cuestionadas justamente por quienes las habían promovido. Sus ideólogos nuevamente atacan su implementación y aplicación incompleta, concentrando las culpas en los “malos” gobiernos latinoamericanos. En cambio, pasan a relevar el “malestar con la globalización” (Stiglitz, 2002) o se introducen al élan antiglobalización adjetivándola como “globalización neoliberal”, por el peso del capital financiero. Así pues, en una nueva maniobra ideológica, el neoliberalismo pasa a asociarse sólo con la especulación financiera y los “malos ejecutivos”, sin ponerse en peligro la credibilidad del capital (Stolowicz, 2012).

Esto ocurre en momentos en que fracasa el intento de los Estados Unidos por impulsar un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y una serie de Tratados de Libre Comercio (TLC) con los países de la región, a partir del endurecimiento de la postura de los países “atrasados”, que se intensifica por los cambios de gobierno en Venezuela, Brasil, Argentina y Bolivia (Gandásegui, 2005). Tal situación polariza en dos bloques regionales el subcontinente, sin que por ello fracase la estrategia estadounidense de impulsar tratados bilaterales o con grupos de países (Estay, 2005). Por su parte, desde un punto de vista ideológico, este nuevo escenario da lugar, fundamentalmente entre los países asociados al Mercosur, a una idea de “superación” del neoliberalismo que opone especulación financiera a mayor inversión productiva, emergiendo las propuestas “neodesarrollistas” que marcarán la primera década del nuevo milenio (Bresser-Pereira, 2007; Aranibar y Rodríguez, 2013).

## **1.2.El giro intelectual latinoamericano. Desarticulación social y naturalización del orden**

La resolución de la crisis que defenestra el modelo de industrialización nacional y el cambio ideológico que anima el desembarco neoliberal trae aparejada una transformación en las condiciones de producción y en los contenidos del conocimiento social y político de la región. Toca ello a la intelectualidad latinoamericana, si bien en concordancia con la crisis global que experimentan las ciencias sociales y las humanidades, en una modalidad asociada a marcos propiamente locales. Los cambios estructurales provocan un giro intelectual que, asociado a la dimensión cultural de la hegemonía neoliberal, propicia que una parte importante de quienes engrosan las filas de este sujeto, queriéndolo o no, contribuyan, en los años ochenta y noventa, a la realización de las capacidades



hegemónicas que este poder venía construyendo previamente. Y es que, en tanto entra en crisis el modo y sentido con que se produce conocimiento sobre la sociedad, la reestructuración capitalista y la derrota de la izquierda profundizan la desconexión entre lo social y lo político y, con ello, la separación entre lo político y lo intelectual (Faletto, 2003).

El divorcio entre la labor intelectual y la lucha política, consolidado en los noventa, tiene su antecedente en las tres décadas previas a propósito de dos procesos paralelos. Por una parte, en la emergencia de una tecnocracia neoliberal y el copamiento que ella hace del Estado, a propósito de la derrota del estructuralismo cepalino. Y, por otra, en el surgimiento de una élite político-intelectual que, nacida y socializada al alero de los centros académicos privados y la cooperación internacional, provee de sus principales liderazgos políticos a los procesos de transición a la democracia que se estimulan regionalmente, tras converger en una alternativa político-cultural democrática que se torna hegemónica.

#### 1.2.1. La derrota del desarrollismo y el tránsito intelectual hacia las “nuevas democracias”

En América Latina, el proceso de modernización post Segunda Guerra Mundial profesionalizó el campo de las ciencias sociales, tras recibir la región abundantes recursos humanos y materiales externos destinados al desarrollo de las disciplinas científicas y al desarrollo universitario. Esta ayuda impactó notablemente en el mejoramiento de los sistemas científicos y universitarios al subvencionarse proyectos de investigación y permitir la implementación de programas de postgrado (Beigel, 2010).

La demanda por especialización fue una tendencia global, espoleada desde la academia norteamericana y estimulada en el subcontinente por organismos internacionales como Cepal, Flacso, Ilpes o el PNUD, cuya particularidad fue reclutar a un buen número de científicos, estudiantes, técnicos y profesionales, propiciando un ventajoso intercambio intelectual, tanto a nivel intelectual como de las experiencias político-sociales. Se produjo, a causa de ello, una importante movilidad académica y profesional de especialistas de toda la región, que permitió establecer contactos y estrechar lazos académicos, a la vez que posibilitó la conformación de circuitos institucionales (Beigel, 2010). Su centro regional se

ubicó en Santiago de Chile hasta el golpe militar de 1973, entrelazándose en este espacio dos dinámicas que terminaron por diseminarse en múltiples espacios académicos y extraacadémicos: las redes intelectuales articuladas a partir de los organismos internacionales y la circulación de las ideas en el mundo periférico, así como la formulación de una perspectiva latinoamericana (Morales, 2016).

En este proceso emerge, en el ámbito de la economía, lo que se denominó la corriente “estructuralista”. Ella corresponde al pensamiento de un grupo de economistas ligados directa o indirectamente a la Cepal, quienes, sin embargo, escribieron en su mayoría por cuenta propia. El término deriva del énfasis otorgado a las peculiaridades de la transformación de las estructuras productivas locales, inclinándose a observar los asuntos económicos como derivaciones del propio funcionamiento del sistema, en el sentido de captar los obstáculos estructurales, sociales, políticos y culturales, que impiden el desarrollo (Villarreal, 1986). Tal pensamiento expresa un clima de época, en el que se buscan concepciones teóricas atinentes con la especificidad latinoamericana, toda vez que el abordaje económico tradicional, sustentado en la teoría neoclásica, no otorga claridades respecto a cuestiones acuciantes como el déficit fiscal, la inflación monetaria y el desequilibrio externo, así como tampoco sobre la dependencia externa que comienza a hacerse visible como problema (Villarreal, 1986). Siendo aún pero singular respecto del keynesianismo, surge como reacción a la estrechez analítica de la economía convencional, que además de no abordar las raíces estructurales del subdesarrollo regional, no entrega herramientas para el análisis específico de la realidad nacional al imponer un modelo universalizante, abstracto y excesivamente matematizado (Montecinos, 1997).

La influencia de la visión “estructuralista” se extendió transversalmente entre los jóvenes cuadros de las ciencias sociales profesionalizadas de comienzos de los años cincuenta, al proporcionarles una idea global de desarrollo<sup>6</sup> que servía políticamente y viabilizarse su difusión mediante programas internacionales de capacitación orientados a las necesidades de la región y diseñados para llenar el vacío entre la universidad y la realidad, debilidad central en el manejo económico regional (Montecinos, 1997).

---

<sup>6</sup> Que puede sintetizarse en la fórmula de crecimiento económico con redistribución social.

Ahora bien, apuntalada por la Cepal y tributaria de los trabajos germinales de los años veinte y treinta de recordados intelectuales como el uruguayo Raúl Prebisch (Halperin Donghi, 2008), ya a fines de los cincuenta comienza el cuestionamiento a los preceptos de la propuesta “estructuralista”, toda vez que su propuesta política, el desarrollismo, sufre las limitaciones del modelo de crecimiento e industrialización mediante sustitución de importaciones. Es que, aunque este último modelo coadyuvó a la industrialización y el crecimiento, favoreció la creación de una estructura productiva desintegrada e ineficiente que dio pocas muestras de avance tecnológico sustantivo, dejando sin resolver, además, los problemas del empleo y de la distribución del ingreso (Faletto, 1996b). Asimismo, el modelo de sustitución de importaciones conllevó una estructura proteccionista excesiva, indiscriminada y prolongada, ocasionando altos costos y precios que frenaron la exportación de manufacturas, a la vez que generaba que los bienes primarios continuaran siendo el único mecanismo de aportación de las divisas necesarias para financiar el crecimiento. Sobre la dependencia externa, la sustitución de importaciones sólo logró modificar la naturaleza de ella, vinculada ahora a los fuertes lazos entablados con la inversión extranjera y la deuda externa, en tanto las exportaciones siguieron concentradas en los productos primarios (Villarreal, 1986).

Pese a estos tempranos cuestionamientos, el ataque más fuerte y efectivo sobre la visión “estructuralista” provino, ya en los años setenta, de una nueva generación de economistas formados al alero de la posición neoclásica, pero reinterpretada desde el monetarismo estadounidense. En efecto, así como Estados Unidos gravitó en la profesionalización científica de la América Latina de posguerra promoviendo la industrialización, esta “norteamericanización” de las ciencias sociales encontró, al menos en la disciplina económica, una contracara que promovió el retorno al paradigma anterior a la Segunda Guerra Mundial<sup>7</sup>. Así, desde la década del cincuenta, se extiende una campaña contra los

---

<sup>7</sup> La “norteamericanización” de las ciencias sociales latinoamericanas y, particularmente, de la economía, se produce con el apoyo de las fundaciones Ford, Rockefeller y Fullbright, el programa de la “Alianza para el Progreso” y el incentivo de las Naciones Unidas a través de CEPAL (Morales, 2016). Si bien en primera instancia tal apoyo puede asociarse a la iniciativa hegemónica global de los Estados Unidos a la vuelta del

“malos economistas” del Sur, acusando sus errores y supuesta irresponsabilidad profesional al insistir que los problemas económicos regionales requerían de soluciones distintas a las entregadas por la ortodoxia, que a sí misma se percibía como una ciencia universal (Heredia, 2015). Con el financiamiento otorgado del gobierno estadounidense, de agencias internacionales, fundaciones extranjeras e instituciones académicas y grupos de élite locales, se propicia una reacción ortodoxa que, así como lo venía haciendo el estructuralismo nucleado en la Cepal, busca influir en la educación superior de los países latinoamericanos (Montecinos, 1997).

Ello significó no sólo buscar incluir en las escuelas de economía un currículo purgado de “desviaciones ideológicas de la economía izquierdista”, sino que, además, incluyó el ofrecimiento de programas de economía a nivel graduado y de programas de postgrado en prestigiosas instituciones neoconservadoras como la Universidad de Chicago (Montecinos, 1997). En países como Argentina o Chile, aquello fue acompañado por el establecimiento de todo un circuito especializado de difusión, que incluyó a académicos, funcionarios de agencias internacionales y de gobierno, periodistas y operadores de mercado, que fueron instruidos en los saberes que esta parte de la academia norteamericana difundió globalmente como parte de su reacción anticomunista, permeando la estrategia diplomática estadounidense (Neiburg, 2005). Ese circuito dotó a sus economistas, de tendencia “monetarista”, de un prestigio profesional y académico diferente al de sus pares formados en universidades nacionales, facilitándoles el acceso a redes internacionales que, con el tiempo, se tornaron fundamentales para influir dentro de sus propios países (Camou, 1998).

Esta reacción estuvo asociada a las estrategias desnacionalizadas con que la profesión económica comienza a legitimarse desde la segunda mitad del siglo XX (Montecinos, 1997). Ese es el sello de la nueva tecnocracia neoliberal que se forma y reproduce con el apoyo de las universidades norteamericanas, así como lo es su inclinación por resguardar

---

desastre provocado por la Segunda Guerra Mundial, tras la experiencia cubana ésta se vincula a una reacción anticomunista. En ese marco se entiende la contracara generada en el espacio de la disciplina económica, en tanto, de fuentes similares, aunque ligadas a corrientes neoconservadoras estadounidenses, se promueve una visión económica en las antípodas de aquella que promovió la industrialización y la independencia intelectual.

los principios de la teoría neoclásica, aunque fortalecidos por nuevas tecnologías y enfoques analíticos. Se les llama “monetaristas”, pues centran su análisis en los efectos del dinero sobre la economía (más que en las cantidades), siguiendo la reinterpretación de Friedman a través de su teoría general del dinero (Hachette, 2016).

El proteccionismo que, como defensa contra la crisis global de comienzos de los setenta, establecen las economías centrales, afecta a los países exportadores de productos primarios profundizando el desequilibrio externo, el estancamiento económico y la inflación. Este último fenómeno, particularmente por su agravamiento, se convierte en el indicador objetivo del comportamiento global de las economías, dentro de las consideraciones más amplias de riesgo por país a las que deben sujetarse los créditos internacionales. Así, una inflación decreciente o estable se torna no sólo deseable sino necesaria para obtener recursos externos, así como para combatir el problema del desequilibrio externo que impone un aumento de la deuda (Villarreal, 1986).

Siendo la inflación y su tratamiento monetario -a través del enfoque monetarista de balanza de pagos, que gana adeptos en esta circunstancia- un punto a favor del monetarismo, lo que fortalece mayormente su posición en el campo político e intelectual latinoamericano es el vacío teórico y político que deja la incapacidad del “estructuralismo cepalino” para proveer salidas a la crisis. Y es que los programas estructurales de ajuste, al abocarse a la resolución de un problema de mediano y largo plazo, descuidan la transición en el corto plazo, y dentro de ésta, lo que tiene que ver con la política de precios relativos y manejo de la demanda (Villarreal, 1986). Por tal motivo, aun cuando la perspectiva “estructuralista” logró descender el velo monetario de la economía, enfrentándose a los convencionalismos del liberalismo económico de comienzos del siglo pasado, extremó las conclusiones lógicas de las premisas que propuso, menospreciando la política monetaria como elemento posible de lucha contra la inflación estructural (Halperin Donghi, cit. en Villarreal, 1986). Así pues, no se consideró la posibilidad de que la política monetaria pudiera corregir distorsiones, a la vez que regular y asignar de manera selectiva la demanda agregada y, de esta manera, eliminar gradualmente las rigideces. Esto abrió paso al resurgimiento de las teorías económicas que propugnaban el desplazamiento del Estado y el retorno al libre mercado.

De algún modo, el “estructuralismo cepalino” no alcanzó a configurar una alternativa teórica, un paradigma nuevo, a la visión neoclásica, pues su principal debilidad fue no lograr integrar, en un sistema coherente, una teoría económica del manejo de los grandes agregados macroeconómicos en el corto plazo hacia objetivos deseables o prioritarios en el largo (Villarreal, 1986). Este límite intelectual, que, pese a todo, no impide hasta hoy que se sigan usando los análisis y perspectivas de esta tradición en el continente, comporta, entre las décadas del setenta y ochenta, una derrota política de los economistas “estructuralistas”, toda vez que pierden su lugar de privilegio no por el mayor grado de verdad de la propuesta monetarista, sino porque los términos de la discusión económica terminan siendo definidos por estos últimos, a propósito de la inmovilidad que acusan los primeros.

En paralelo, por cierto, se está produciendo el tránsito de la disciplina económica latinoamericana desde una profesión de Estado a una de gobierno. Así, si sus primeras décadas coinciden con disputas profesionales intensas, en las que los economistas acompañan a actores de la vida política nacional, a partir de los sesenta y setenta se genera una relativa unificación ideológica y una multiplicación de las temáticas tratadas y las actividades ejercidas por los economistas (Heredia, 2015). De algún modo, la consecuencia que se proyecta de la derrota política mencionada es llegar a unos años noventa en los que el valor de los “expertos” no reposa en la comprensión de la realidad, sino en el combate de las anomalías que impiden integrar a los países a los modos “normales” de funcionamiento de la única economía posible: la neoliberal (Heredia, 2015).

### *Cooperación internacional y redes intelectuales: la forja de una alternativa político-cultural democrática*

El estallido de la noche autoritaria en el Cono Sur tuvo consecuencias profundas en las condiciones de producción y reproducción de la intelectualidad regional. Fue transformada la universidad, su medio habitual, en la medida que se vio mermada su libertad académica y autonomía universitaria (Hinkelammert, 1990). Las dictaduras militares alteraron su vida cotidiana y seguridad material, concurriendo ello para que revalorizaran los procedimientos

democrático-formales. El impacto de este desplazamiento temático, además, los empujó a una apertura cultural hacia formas menos dogmáticas del marxismo, que retornaran a la vinculación entre socialismo y democracia (Lechner, 1990).

A causa de la persecución política y el exilio, se propicia una mayor colaboración entre intelectuales de diversos países de la región, facilitándose la renovación del pensamiento político que ahora busca autonomizarse de las organizaciones políticas tradicionales (Ruiz, 2003). Se produce, así, una profesionalización de los opositores a las dictaduras, pues mientras muchos académicos exiliados en el extranjero encuentran una nueva vida en la docencia, investigación o haciendo cursos de postgrado en sus países de residencia, varios dirigentes políticos se ven obligados a incorporarse a círculos académicos (Silva, 1991).

Los recursos estatales, tradicional fuente de subsistencia y financiamiento de la intelectualidad, se cortan de manera radical. Su segunda fuente de subsistencia, los partidos políticos -a su vez mantenidos con los recursos del Estado-, también son atacados por las fuerzas represivas. Ello lleva a los miembros de esta intelectualidad, generalmente de disciplinas académicas similares y con visiones políticas que congeniaban, a establecer institutos de investigación como una manera de subsistir (Silva, 1991). Tales institutos van a ser conocidos como centros académicos privados y van a nacer, por tanto, en un contexto de crisis institucional, social y política que afecta a las universidades y sistemas científicos de los países sometidos a dictaduras. Su fin es asegurar un nuevo marco institucional que proporcione oportunidades profesionales y un ambiente de autonomía a académicos, investigadores y políticos latinoamericanos, motivo sobre el cual se granjean su elevado prestigio (Brunner y Barrios, 1987). Son, además, el espacio a través del cual se intenta evitar el drenaje de científicos y profesores a los centros de investigación de Estados Unidos y Europa (Morales, 2016).

Ahora bien, contando con una relativa independencia académica y política y con acceso a financiamiento internacional, los miembros de tales centros imponen las preocupaciones políticas e intelectuales del período. Y es que, a partir de la colaboración académica entre

centros, se proyecta una perspectiva regional y de reflexión sobre la situación histórica de América Latina, en torno a la misma aspiración sociopolítica: la democratización política.

Tal preocupación empuja a los científicos sociales a privilegiar el ámbito político como foco de análisis, por sobre los determinismos económicos o los temas tradicionales (Zapata, 1995). Abordada la crisis de las dictaduras como una crisis de representación de intereses, incluidos los de sectores que participan de su proyecto económico, ello redundará en que el análisis sociológico de los procesos sociales y políticos en América Latina contenga una cada vez mayor preocupación por la política, en un sentido distinto del que predominó hasta antes de los golpes de Estado. En específico, el estudio de las premisas de la transición a la democracia y la descripción de los casos nacionales, se lleva toda la atención. Lo central, así, pasa a ser la cuestión de la relación cívico-militar. Dentro de ella, dos son los problemas que más preocupan: por una parte, el cómo construir un régimen democrático representativo sin capacidad para controlar políticamente a las Fuerzas Armadas (esto es, cómo hacerlo en transiciones caracterizadas por la instalación de mandatos); y, por otro, el cómo pueden coexistir regímenes democráticos en el marco de una economía globalizada, que obliga a considerar las restricciones de la inserción en el mercado internacional en la toma de decisiones políticas nacionales (Zapata, 1995).

En la convergencia de estas nuevas preocupaciones intelectuales y políticas con la nueva forma organizativa de los centros académicos privados, las posibilidades que abren la circulación intelectual y la cooperación internacional forjan, en los ochenta, un núcleo político-intelectual que influye en el poder estatal en nombre de una oposición civil a las dictaduras (Morales, 2016)<sup>8</sup>. Aún más, logra articular un proyecto compartido de sociedad para América Latina, excediendo sus campos disciplinares (Brunner y Barrios, 1987).

---

<sup>8</sup> Tres son los centros que, liderando la resistencia intelectual en los setenta y ochenta, sustentan a este núcleo: el Cebrap en Brasil, el Cedes en Argentina y el Cieplan en Chile, dirigidos por intelectuales que, con potencia variable, van a incidir en las décadas siguientes en la política de sus países: Fernando H. Cardoso, Guillermo O'Donnell y Alejandro Foxley, respectivamente (Morales, 2016).



Clave para ello no sólo son la autonomía, internacionalización y profesionalización del campo de la ciencia política (Garretón, 2014) y la reorientación politicista que aleja a la sociología de sus temas habituales (Zapata, 1995), sino también la vinculación con autores, instituciones y fundaciones extranjeras, y agentes e intermediarios que, como una especie de “diplomacia académica”, sentando las bases para la conformación de un circuito regional de centros académicos y de entrecruzamientos institucionales y personales entre los miembros de la intelectualidad, que permite tanto resistir a las dictaduras como defender el proyecto de transición democrática (Beigel, 2010).

La colaboración internacional, asimismo, permite que se conocieran en el exterior las actividades e investigaciones llevadas a cabo en los centros latinoamericanos. En los años setenta, académicos y científicos sociales locales comienzan a ocupar espacios de debate y visibilidad pública, por ejemplo, en instituciones estadounidenses. Un ejemplo de ello ocurre, desde 1977, con el Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson Center -uno de los *think tanks* más prestigiosos de los Estados Unidos-, que además de apoyar la investigación avanzada en América Latina, el Caribe y entre las Américas, ayuda a que la discusión regional sobre la transición democrática exceda los límites de la comunidad académica, involucrando a formadores de opinión y líderes en el proceso de toma de decisiones en todo el hemisferio occidental (Lowenthal, 1982, cit. en Morales, 2016).

En torno a este programa, de hecho, se lleva adelante el proyecto más destacado de la época: *‘Transitions from Authoritarian Rule to Democracy’* (1979), cuya repercusión pública simboliza la hoja de ruta que siguen varios centros académicos privados de América Latina, para que sus miembros se conviertan en los agentes políticos del discurso democrático en sus respectivos países<sup>9</sup>. Tales ideas, en el marco de la “nueva sociología”

---

<sup>9</sup> Los estudios derivados de este proyecto apelaron a la resurrección de la sociedad civil como actor clave para iniciar los procesos de transición y a la búsqueda de consensos políticos entre las fuerzas opositoras (Morales, 2016). Ya en 1978, el presidente de Clacso, Francisco Delich, convoca a un conjunto de académicos latinoamericanos y extranjeros para reflexionar sobre las posibilidades futuras de la democracia en la región. Allí, entre otros, mientras Cardoso cuestiona la posibilidad real de abrir próximamente un camino a la democracia, Hirschman y O’Donnell apuntan al posibilismo de retornar a las condiciones democráticas y al

que se impone bajo el influjo de la ciencia política, origina un proyecto ideológico que borra sistemáticamente las referencias a la desigualdad, la dependencia, la polarización o la pobreza, centrándose en la política. Es el discurso de las “nuevas democracias”, que define un sistema político en el que, más allá de las diferencias de clase, de ingreso, de color o educativas, intenta hacer parte a toda la población de una misma unidad (Zapata, 1995).

En virtud de este debate, en torno al cual se abren oportunidades para los intelectuales en la política, es que se impone paulatinamente una alternativa político-cultural democrática al autoritarismo, al tiempo que se preparan las condiciones de posibilidad -actores y contenidos específicos para cada país- para que luego, en los años noventa, se produzca el giro ideológico con que el neoliberalismo despliega su hegemonía en la región.

#### 1.2.2. La pérdida de las referencias sociales y la visión de mundo tecnocrática

Con el fin de la etapa nacional-popular, las ciencias sociales regionales transitan paulatinamente desde una cultura intelectual preocupada por los problemas latinoamericanos y sus alternativas, a un control basado en la exaltación del método por sobre la reflexión teórica y práctica (Hinkelammert, 1990). El autoritarismo y la crisis de este período, además, producen un silenciamiento de la originalidad del pensamiento social latinoamericano, al ser intervenidos los centros académicos (Faletto, 1979). Ello deriva en una disgregación de los roles y funciones que cumplieran los miembros de la intelectualidad, repercutiendo en una renovación sustantiva de sus formas de inserción profesional, las cuales se amplían desde espacios tradicionales como la academia y el Estado, a otros privados como medios de comunicación y empresas (Hopenhayn, 2001).

La reconfiguración de la fisonomía social que se produce en las sociedades latinoamericanas -incluso antes de la instalación neoliberal, a causa del deterioro social y político de los años ochenta (Ruiz, 2013)-, determina otro momento de manifestación de la separación entre lo social y lo político, y de fractura entre lo político y lo intelectual. Y es

---

hecho de que la democracia política no vendría por sí sola, sino desde una revalorización de la oposición democrática de la sociedad civil. Véase la compilación de estas ponencias en Delich (1985).

que la debilidad o franca desaparición que experimentan las antiguas identidades nacional-populares nublan el sentido práctico de la producción intelectual vinculada al conjunto del campo cultural latinoamericano. Desaparecen las referencias sociales en torno a las cuales el pensamiento local había proyectado su práctica intelectual, en tanto comprensión y formulación de soluciones a problemas experimentados por sujetos con un sustrato social, político y cultural definido (Faletto, 2002). Las dictaduras y, más tarde, el giro neoliberal, contragolpean en el punto más alto de conciencia sobre estas referencias, las cuales habían dado lugar a debates en torno a cuestiones tales como el “compromiso de los intelectuales”.

Esta regresión pone en entredicho la perspectiva de totalidad de los análisis sociales, afectando no sólo la mirada con que se observa la dinámica política (como articulación de intereses sociales y como enfrentamiento entre polaridades), sino también el espacio y el tiempo, razón por la cual, por ejemplo, se cuestiona la antes arraigada idea de América Latina y se tienen enormes problemas para hablar desde la historia nacional (Rojo, 2013). Desde la etapa autoritaria y después, las ciencias sociales y la reflexión general sobre la sociedad dejan de tener una teoría crítica de la sociedad en su conjunto que sea a la vez desciframiento de sus tendencias y proyección de la sociedad deseable. Entra en crisis, así, lo que antes se asumía como la función intelectual de éstas. La sociedad aparece fragmentada en diversas esferas, pues ya no parece haber una, un poder central, que ordene al conjunto de la sociedad o que determine a las otras esferas, con lo que cada crítica aparece como parcial, permitiendo solamente cambios graduales y mínimos. Ello lleva a que en las ciencias sociales se trueque una comprensión global de la realidad por un interés predominante en reducidas temáticas particulares (Garretón, 2014).

Tras su instalación, los grados de avance diferenciados de los neoliberalismos locales acarrear, más allá de lo plenamente intelectual, una importante consecuencia política vinculada a la escisión entre lo social y lo político: la naturalización del orden social. La alianza entre las élites políticas e intelectuales de las “nuevas democracias”, herederas de la orientación excluyente de la etapa dictatorial, y de las élites económicas, fortalecidas al alero de las presiones internacionales, instalan como principio la valoración por sí misma de las formas institucionales, relegando el proceso social a una perspectiva

profesionalizante y tecnocrática de la política, de la economía y, por cierto, del conjunto de las ciencias sociales. En ese curso, se impone el desplazamiento de las fuerzas sociales subalternas de la política, desestimándose la integración que antes predominó, en su forma mesocrática y proletaria. En su lugar, gana espacio un grupo social tecnocrático que, asumiéndose por encima de los intereses sociales, se ve a sí mismo como portador de una racionalidad eficiente y segura (Faletto, 2002).

El pragmatismo político y la eficiencia ganan espacio entre los actores y contenidos que pavimentan el camino a las “nuevas democracias”. La intelectualidad tecnocrática -que excede a los economistas neoliberales y permea a las ciencias sociales en conjunto- se hace parte de los consensos internos capaces de sustentar la hegemonía neoliberal, oscureciendo, con su auge y proyección en el Estado, el clima intelectual posterior. Dominio que, si bien se fragua en su relevancia para el manejo económico de la crisis de los años ochenta y en la valoración de su alta cualificación, saber técnico y orientación hacia lo racional (O’Donnell, 1972), sólo es posible en ausencia de las tradicionales presiones corporativas de los actores nacional-populares (Boccardo, 2014). De tal suerte, tratándose de una variante intelectual cuyo mundo de referencia es el poder ya constituido, logra imprimirle una nueva identidad cultural al orden social neoliberal, que deja al pensamiento crítico con escasas posibilidades de cuestionar la existencia de tal poder (Faletto, 2002).

Este dominio intelectual se manifiesta en diversos ámbitos. En la economía, el campo de interés se reduce a los equilibrios inflacionarios, la administración y la gestión de negocios, mientras se estrecha el espacio para el análisis de tipo histórico-estructural, tan relevante en el siglo pasado (Heredia, 2015). Los problemas del desarrollo son intercambiados por soluciones de política de corto plazo, preocupados por atraer la inversión extranjera directa y los préstamos de los organismos multilaterales. Ello deriva en que, por acción u omisión, se consienta el predominio de un irracionalismo de mercado que termina aumentando los grados de dependencia económica, al dejar todo en manos de un supuesto automatismo que, no obstante, sigue siendo controlado por los principales intereses empresariales, aun débiles frente a los vaivenes de la economía global (Faletto, 2002).

En el análisis de lo político, la discusión transicional proyecta un limitado espacio para la acción colectiva en los marcos normativo-institucionales que establece la nueva relación entre Estado, economía y sociedad que acarrea un signo de exclusión en las “nuevas democracias”. Por ello no es raro que se asuma la necesidad de “institucionalizar” el conflicto político, con el fin de mantener la gobernabilidad. Ello separa lo social y lo político, redefiniendo la política en torno a una variante que aleja a las fuerzas sociales de la arena del “conflicto de clases”, sin siquiera vincularlas a expresiones partidarias. Los movimientos sociales pasan a constituir apenas “grupos de presión”, mientras los intereses organizados y en conflicto son reducidos como “corporativismo” y el conflicto pasa a ser entendido apenas como “conflicto político”, enmarcado en una gobernabilidad cuyo propósito es una nunca reconocida dominación social, que reduce el poder al detentado por las élites (Guido y Fernández, 1989).

Al reducirse la política a métodos de construcción de consensos procedimentales, se vacía la representación político-electoral de significados sustantivos en materia de representación de intereses. La política se autonomiza de lo social y se convierte en el escenario del voluntarismo: predomina el deseo de llegar a acuerdos, sin importar la naturaleza e implicancias sociales que conllevan. Ello construye una forma de ver la política que viabiliza la buena fama que alcanza el pragmatismo. Las “nuevas democracias” se colocan en un mundo en el que el mercado se transforma en un mecanismo de autorregulación de la vida social. A partir de ello, la política ya no es acción producida, sino que se identifica con métodos de gestión, perdiendo su sentido (Faletto, 2002). La adopción de la lógica del mercado reformula los criterios con que se desarrolla la actividad política, transfiriéndose al espacio político la competitividad, la flexibilidad y productividad (Stolowicz, 2012).

### *El ideologismo Estado versus mercado*

Al explicar la gran transformación descrita, parte de su efecto hegemónico es la espuria asociación que se ha hecho entre una “desregulación sistemática” y el giro neoliberal, en el sentido de una transferencia desmesurada de funciones desde el Estado al mercado. Esto, sin embargo, es apenas un ideologismo, puesto que los cambios son impulsados por el

Estado en concomitancia con la correlación de fuerzas que internamente experimenta cada país y la situación de presión que ejercen los organismos multilaterales. Los Estados reestructuran los mercados locales para abrir paso a la valorización de capitales externos, al beneficiarlos con nuevas reglamentaciones en materia fiscal, monetaria, financiera, comercial, laboral y de gasto público, que, por lo mismo, restringen el desarrollo de los mercados internos. En ese esfuerzo, con el giro neoliberal, se releva al sector primario-exportador dentro de las economías locales, a la vez que se relativiza la importancia de la demanda interna; se permite mayor penetración de relaciones de mercado en diversos ámbitos de la economía y la sociedad en general; se enfrenta la espiral inflacionaria mediante la liberalización financiera que da centralidad al capital financiero; y se ajusta en el precio de la fuerza de trabajo el cumplimiento de tales objetivos (Ruiz, 2013).

¿De dónde proviene esta falsa antinomia que hace mella en la comprensión cabal de este fenómeno? Como señala Stolowicz (2012), desde el momento en que la crítica marxista al capitalismo y su objetivo político para superarlo acrecientan su influencia, los ideólogos de este último producen un enfrentamiento en el que se logra presentar a éste y al marxismo como extremos o factores de desestabilización, con lo cual la corrección burguesa se presenta como la “tercera posición”. De allí en adelante, en cada momento de crisis real o potencial, se cuenta con una tercera opción: la solución razonable frente a los dos extremos desestabilizadores. Esa lógica en tríada hace aparecer al tercero como un “centro progresista”, que permitiría superar el estancamiento y retomar el progreso.

La versión simplista de esta explicación en las sociedades modernas ha hecho aparecer como lo esencial de cada movimiento pendular la “desaparición” o “reaparición” del Estado como “agente económico”. Argumento que nace de la doctrina liberal que establece una distinción ontológica entre Estado y mercado, que pasa de ser una distinción metodológica a una orgánica y presentada como tal. Luego, la dicotomía entre Estado y mercado presupone su exterioridad: el Estado como “agente económico” sería un ente distinto y externo al mercado, sea en una relación de complementariedad o de contradicción. De este modo, la explicación pendular de la historia del capitalismo y sus reformas, con “menos” o “más Estado”, tienen como eje del debate doctrinario en la clase dominante la defensa o

crítica del *laissez faire*, pues el problema siempre es cómo eliminar las trabas estatales a la imposición irrestricta de los objetivos del capital (Stolowicz, 2012).

El valor actual de esta discusión viene dado por cómo los usos políticos que de ella se han hecho han propiciado que, en nombre de una supuesta crítica al neoliberalismo, se atribuya a los neoliberales algo en lo que ellos mismos no creen. Es que si para el liberalismo económico el Estado es un “agente económico” sólo en cuanto productor-proveedor directo de determinados bienes y servicios, y el rechazo que contra su acción se profesa viene dado por su disposición a transferir parte del excedente a los no propietarios, para el proyecto neoliberal la cuestión de si el Estado debe “actuar” o “interferir” es un dilema falso. Así, Hayek (1995) cuestiona la expresión *laissez faire* por ambigua, en la medida que siempre el Estado actúa y toda acción del Estado interfiere con una cosa u otra. La reestructuración neoliberal del capitalismo ha conducido a que el Estado abandone las funciones y propósitos que tuvo para los liberales clásicos y en el Estado de Bienestar, pero sin dejar de ser un “agente económico” en la medida que ha implicado la “privatización” del Estado, al convertirse el interés minoritario del capital en interés general (“público”), incluso cuando no se modifica el estatus jurídico de “propiedad estatal” de sus organismos o empresas (fusión público-privada) (Stolowicz, 2012).

En América Latina, pese a la retórica predominante de apelación al Estado ‘mínimo’, lo cierto es que únicamente ha habido un cambio en sus funciones: el Estado sigue en pie, pero no para controlar la actividad económica privada, sino para suprimir los obstáculos que puedan entrabarla (Faletto, 1989). A contrapelo del Estado de Compromiso, su versión actual no se propone -o, por su naturaleza, no puede llevar adelante- un proyecto de integración social, profundizando el carácter escindido de las sociedades latinoamericanas.

### **1.3.El problema: la intelectualidad como actor del neoliberalismo latinoamericano**

Teniendo en cuenta el papel que a las funciones intelectuales les cabe en el giro hacia el neoliberalismo en América Latina y su consolidación posterior, emergen dos posibles abordajes para este problema. El primero, relacionado con la cuestión epistemológica,

relativa a la crisis de las ciencias sociales, puede centrarse en cómo la desestructuración social y económica y la derrota política de las alternativas al neoliberalismo condicionan las orientaciones y temáticas de este grupo, enfatizando en el modo en que se produce el conocimiento social, sus contenidos y la evolución de las ideas propuestas. En el segundo, por su parte, puede indagarse en el papel que les cabe a las intelectualidades locales en el proceso de instalación y consolidación del neoliberalismo en la región, en tanto actores del proceso, primero empujando las reformas de ajuste estructural y luego reproduciendo las bases sustantivas del nuevo pensamiento dominante. Esto es, indagando en cómo se construyen las capacidades hegemónicas y cómo éstas se realizan posteriormente -con disímil éxito-, en virtud de la dinámica del conflicto social y político de cada país.

Esta segunda opción es la asumida en el presente trabajo. Así, se parte de la base de que, entendiendo que los procesos de producción intelectual no son ajenos a la hegemonía neoliberal establecida en América Latina, es la separación entre lo social y lo político el marco sobre el cual tal proceso se realiza. De tal suerte, recuperar una comprensión de la política, de la economía y del conjunto de las ciencias sociales como procesos sociales permite distinguir lo viejo de lo nuevo en la evolución reciente del campo intelectual latinoamericano, a la vez que, en tanto proceso, permite distinguir diferentes cursos de formación, constitución y de acción de las huestes intelectuales locales y de los grupos en que la intelectualidad se organiza.

Si bien esta investigación se enfoca en el accionar de la intelectualidad de las ciencias sociales (economistas, politólogos y sociólogos), tanto por los materiales disponibles como por el grado de determinación política que este tipo de intelectualidad alcanza en el derrotero neoliberal latinoamericano, no debe olvidarse que esta es sólo una parte de la intelectualidad implicada -de forma crítica o cortesana- en tal proceso, en donde también intervienen, de un modo u otro, disciplinas distintas como las humanidades o artes.

En esta investigación, entonces, se ha trazado el mapa de la intelectualidad organizada que actúa en el proceso de instalación y consolidación del giro neoliberal en el período 1980-2003 en Argentina y Chile, a partir, fundamentalmente, del análisis de las controversias



ideológicas que las enfrentan. La idea de enfrentamiento, en ese sentido, apunta al interés por advertir la falta de inevitabilidad de cada proceso político, reconociendo su carácter contingente y resultado del curso histórico regional y nacional reciente. Pero, además, al hecho de que en aquél la intelectualidad tiene una existencia necesaria para la plausibilidad de fenómenos profundos como la transformación social y política (Faletto, 1991).

El vínculo entre la transformación neoliberal latinoamericana y la intelectualidad regional sólo puede indagarse relacionando especificidades: la del giro neoliberal y la del giro intelectual en cada país. De tal suerte, cabe considerar los diversos grados de avance del neoliberalismo en los países de la región. Para ello se trabaja sobre la tipología proporcionada por Ruiz (2013), según la cual en todos los países del subcontinente es posible observar ciertos grados de avance del neoliberalismo, entendiendo a estos últimos en relación con la fisonomía que adoptan las alianzas dominantes y el conflicto desplegado entre las distintas fuerzas sociales por la orientación de la acción estatal.

Lo anterior, cabe aclarar, es una opción interpretativa entre otras, pues la discusión sobre el giro neoliberal latinoamericano y sus variantes ha sido amplia y polémica. En apretada síntesis, las interpretaciones han girado, por una parte, entre quienes sostiene que a fines de los noventa fracasa el ideario neoliberal ortodoxo, arrancando paulatinamente una etapa “posliberal” encabezada por gobiernos de centroizquierda, que reorientan el patrón de desarrollo a partir de una decidida acción del Estado (Burki y Perry, 1998). Por otra, quienes distinguen situaciones nacionales a partir de lo inalterada o no que fue la política económica neoliberal, sosteniendo que habría países que transitaron hacia variantes “neodesarrollistas” (Aranibar y Rodríguez, 2013). Finalmente, polemizando con tales enfoques “posneoliberales” y “neodesarrollistas”, una tercera interpretación ha sostenido que los ajustes posteriores al desembarco del programa neoliberal en la región sólo lo han perfeccionado y profundizado, sin hacerlo retroceder (Stolowicz, 2012).

Por lo anterior, cabe inquirir en el papel que juega la intelectualidad latinoamericana en la sociogénesis del neoliberalismo regional y en su consolidación en la historia reciente. La tensión que ha organizado este trabajo es, en tal sentido, la existente entre el neoliberalismo

como ideología y el neoliberalismo histórico o *realmente existente* en América Latina. De allí que se opte por comparar casos nacionales, particularmente las experiencias argentina y chilena, permitiendo así la consideración, por una parte, de los grados diversos de consolidación del programa neoliberal en uno y otro escenario. Y, por otra, la riqueza que provee el análisis comparativo al traer a colación el proceso social común y la especificidad histórica de la región, al tiempo que aportar unas particularidades de los campos intelectuales de cada país que permiten profundizar en el análisis concreto.

Los objetivos específicos de este trabajo han sido los siguientes:

- i. Identificar las variantes de intelectualidad organizada que intervienen en la instalación y consolidación del giro neoliberal en Argentina y Chile en el período 1980-2003, dando cuenta de su constitución, producción y reproducción social y cultural.
- ii. Indagar en el comportamiento sociopolítico de esta intelectualidad organizada en Argentina y Chile en el período 1980-2003, dando cuenta de sus formas de acción colectiva, alianzas políticas e intereses sociales.
- iii. Indagar en la especificidad del giro intelectual en Argentina y Chile, contrastando la tradición político-intelectual nacional con los contenidos y formas de la confrontación ideológica en el período 1980-2003.
- iv. Comparar ambas experiencias como casos representativos de modos específicos de relación entre intelectualidad y poder en el contexto de una hegemonía neoliberal en América Latina.

## II

### INTELECTUALIDAD, POLÍTICA Y PODER: DISCUSIONES Y APROXIMACIONES SOCIOLOGICAS

---

La función social de los intelectuales y su definición son parte de una discusión abierta. Y es que no sólo cuesta ubicar a este sujeto en el mapa social y político, sino también a nivel disciplinar. Campos diversos reclaman su estudio como algo propio. Los estudios literarios, por ejemplo, se enfocan en los contextos de producción y recepción de las ideas, mientras la historiografía, particularmente la historia de las ideas se fascina con los grandes incitadores del debate público, apuntando a los orígenes, influencias y variaciones que experimentan las ideas matrices de un período histórico determinado (Picó y Pecourt, 2008). La historia intelectual, por su parte, sin desatender el papel de los grandes intelectuales, tiende a pensarlos implicados en tramas político-culturales más vastas, ampliando el foco a figuras que desempeñan funciones intelectuales no menos significativas que las del gran productor del campo intelectual, como creadores “menores”, divulgadores, publicistas, difusores, docentes, redactores de revistas o asesores de colecciones editoriales (Tarcus, 2015).

La sociología, por fin, tiene entradas diversas, incluyendo el interés por el vínculo entre intelectuales e instituciones de la cultura, el análisis de los espacios de formación y reproducción de éstos o la construcción de tipologías que distingan tipos específicos (González, 2008). En todas ellas, la sociología se distingue por atender los procesos sociales ligados a la construcción de las ideas, y por su preocupación sobre el modo en que la intelectualidad despliega sus estrategias para influir socialmente, valorando su dimensión colectiva. Contrario al enfoque romántico de los “genios originales” y de las personalidades descollantes, el enfoque sociológico se interesa por el carácter colectivo de la escritura y de la acción de los intelectuales, en tanto grupo social (Tarcus, 2015).

Antonio Gramsci (1967) ha dicho que, en cualquier trabajo físico, aun siendo el más mecánico o el menos calificado, existe un mínimo de calidad técnica, esto es, un mínimo de actividad intelectual creadora. Según su acepción, todos los hombres son intelectuales, pero

no todos desempeñan en la sociedad la función de intelectuales. Y es que, al margen de su ocupación, todos los hombres participan de una concepción de mundo, observan una consecuente línea de conducta moral y, por consiguiente, contribuyen a mantener o modificar visiones universales y a suscitar nuevas ideas. En ese sentido, el modo de ser del intelectual “no consiste en la elocuencia como motor externo y momentáneo de afectos y pasiones, sino en enlazarse activamente en la vida práctica como constructor, organizador y persuasor constante” (Gramsci, 1967: 27). El intelectual es aquella categoría que va “de la técnica-trabajo a la ciencia técnica y a la concepción humanística-histórica sin la cual se es ‘especialista’, pero no se es ‘dirigente’” (Ibid.).

En esta última distinción radica un problema fundamental: en las sociedades modernas, como consecuencia del avance del capitalismo y de la división social del trabajo, no sólo existen intelectuales, sino también trabajadores intelectuales. Ambos, ligados a las tareas intelectuales que impone la sociedad, se diferencian en el hecho de que, mientras los trabajadores intelectuales reproducen un conocimiento técnico, político, cultural o moral, los intelectuales articulan una visión de conjunto, en cuyo afán está implicada la intención de dar una explicación general sobre la sociedad y sobre el rumbo que ella debiese seguir.

Los *intelectuales*, por lo tanto, constituyen un grupo social específico, un sustantivo que rebasa la simple actividad intelectual y la pura condición contemplativa del pensamiento, puesto que su formación, prestigio y legitimidad se ubica en su íntimo vínculo con la práctica social. La *intelectualidad*, por otro lado, refiere al conjunto de la masa crítica que asume tareas intelectuales en la sociedad, esto es, a la interrelación entre los intelectuales y los trabajadores intelectuales<sup>10</sup>. Verlo de este modo permite dar cuenta de las dinámicas del poder y cómo éstas articulan la acción colectiva de tales sujetos. Y es que el poder es una condición o capacidad, sea esta entendida subrepticamente o como objeto institucional, que se ejerce, se difunde, se mantiene y se transforma socialmente —es decir, colectivamente- y no de modo individual.

---

<sup>10</sup> Planteado así, es una redundancia hablar de una *élite intelectual*, pues ya los intelectuales constituyen, de hecho, un grupo reducido y elitario. Del mismo modo, en caso de que se busque referir la pertenencia de la intelectualidad o de los intelectuales a un subcampo específico del campo intelectual, basta con nombrarlo.

Estas aclaraciones iniciales no agotan la discusión conceptual sobre la intelectualidad y sus funciones, tal como lo refleja la bibliografía sociológica existente. Empero, en la perspectiva de ordenar este acervo y visibilizar las líneas de debate, parece pertinente proponer algunas preguntas iniciales que permitan delimitar las dimensiones de interés. Así, a la pregunta por el qué son los intelectuales, cabe agregar aquella que interroga por cómo sus luchas repercuten en la sociedad, cómo unas ideologías se instalan e imponen sobre otras y cómo los intelectuales apoyan, formulan, divulgan o rechazan diferentes productos culturales. De tal suerte, el foco se pone en las conceptualizaciones que abordan la relación entre la intelectualidad y el poder, con especial énfasis en la política. Previamente, sin embargo, cabe exponer y problematizar una serie de falsas antinomias asociadas a este sujeto, que limitan la comprensión de su relación con el poder, al dar pie a estereotipos, ontologías y normatividades a menudo alejadas de la realidad.

### **2.1 Las falsas antinomias sobre los intelectuales**

En la medida que es recurrente que quienes estudian a los intelectuales sean también parte de la intelectualidad, no es raro que en lo que se dice sobre este sujeto haya mucho de deber ser o prejuicio. Así, a menudo la diatriba y el discurso moralizante se visten de interpretación sesuda. La imagen del espejo, por tanto, es demostrativa. Pero no porque en la indagación se busque comprender la propia práctica, sino porque, tal como sucede con el cristal que invierte la imagen que refleja, los juicios sobre la intelectualidad suelen estar más cerca de aquello que gustan o detestan los investigadores. Así ocurre, por ejemplo, con la ambivalencia y tendencia a la conversión que exhiben los miembros de este gremio. Y que aun cuando pueda tratarse de un comportamiento recurrente en los seres humanos, y sobre todo en grupos humanos sometidos a un poder ajeno a ellos, no son pocas las acusaciones de traición o las apologías que nublan el problema.

Evitando generalizar, lo que interesa destacar con esta digresión es la existencia de una serie de falsas antinomias que imprimen un carácter determinista al concepto de intelectual. Dicotomías que, pudiendo parecer plausibles, formal y lógicamente, a menudo son débiles

en su vínculo con la realidad. En torno a ellas, el efecto más recurrente es la conformación de modelos preconcebidos acerca de lo que *deberían ser* los intelectuales, lo que, ciertamente, choca con la compleja cuestión de sus orientaciones políticas y morales.

La polémica desde siempre ha rondado a este sujeto. Y es que, pese a que apresuradamente se los asocie con los filósofos griegos o con los sacerdotes y escribas medievales, la noción de intelectual recién comienza a ser usada como sustantivo en el último tercio del siglo XIX, lo que lo hace un concepto y sujeto moderno. Surge en torno al *affaire* Dreyfus, aquel episodio en el que un grupo de artistas, escritores y periodistas franceses, liderados por el escritor Émile Zola, irrumpen en el espacio público para cuestionar la decisión judicial que acusa al capitán judío, Alfred Dreyfus, de traición a la patria, pese a su alegato de inocencia y a la comprobada existencia de otro culpable, protegido políticamente. El episodio, como se probaría, reflejaba el antisemitismo finisecular en Europa, exaltado por el núcleo de pensadores nacionalistas liderado por Maurice Barrès, quienes veían en el militar un peligro disolvente para la nación. Como consecuencia, el campo intelectual francés se escinde, fundiéndose los partidarios de Dreyfus en la denominación de “intelectuales”, en tanto defensores de valores humanos universales, mientras entre los antidreyfusianos convergen en la defensa del nacionalismo excluyente (Picó y Pecourt, 2008).

Ahora bien, esta polémica, más allá de su valor histórico, ilustra un hecho fundamental: desde su “nacimiento”, el intelectual, como concepto, ha estado atravesado por disputas morales y políticas. Pero, además, revela que la polémica, si dio pie a la emergencia de un nuevo personaje, sólo lo hizo en su forma y no en su contenido. En efecto, este último ha quedado a merced de las más variadas interpretaciones en lo que respecta a su función y comportamiento. Y lo habitual ha sido vincular ello a la *responsabilidad* y el *compromiso*.

#### 2.1.1. La eticidad de los intelectuales: responsabilidad, compromiso y antiintelectualismo

La destrucción ocasionada por los cuatro años que duró la Gran Guerra cambió para siempre la forma de comprender los “avances” de la humanidad, desencadenando un profundo cuestionamiento hacia el conocimiento que de ella se tenía. Como resultado, las

ciencias naturales y humanas ven deteriorados sus cimientos interpretativos ante lo que parece el fracaso de la épica del progreso, mientras nuevos fenómenos sociales, como la aparición de las masas en la vida colectiva o el cambio de actitud de los hombres vueltos de la guerra contra los valores tradicionales, sorprenden a un viejo saber decimonónico incapaz de dar respuestas y de hablar en un nuevo lenguaje (Fontana, 2001).

En el campo de la cultura, la reacción es diversa, aunque siempre flanqueada por un desencanto hacia el proceso civilizatorio, que da lugar a una abundante literatura guiada por la decepción y por referencias a la idea de decadencia y crisis. La imagen de la intelectualidad es afectada en este contexto, como parte del juicio realizado a varios de sus miembros, activos partícipes y alentadores del conflicto. Enconados en enfrentamientos políticos antes y durante la guerra, y decepcionados tras el desastre fomentado, se produce una renovación del lenguaje y de las autoimágenes que los intelectuales producen para explicar su lugar en el mundo.

La más trascendente es la que en 1927 elabora el francés Julien Benda (1951) al hablar de la “traición de los intelectuales”, acusándolos de abandonar sus fines desinteresados para enrolarse en un juego político que sólo favorece particularismos y exacerba las pasiones humanas. Estas últimas, a su juicio, y en general los intereses prácticos de la política, nublan la responsabilidad con que los “portadores de la verdad y la justicia” deben comportarse, oscureciendo sus ideales, que deben trascender lo inmediato. Benda instala, así, un tópico ineludible del siglo pasado: la “responsabilidad de los intelectuales”, como alejamiento de las pasiones políticas.

En Hispanoamérica, donde la crisis europea es recibida como un trauma ante el derrumbe de modelos culturales que venían apropiándose los sectores dominantes en ascenso (burguesía industrial y capas medias), tiene importancia la figura intelectual de José Ortega y Gasset, quien de algún modo complementa lo propuesto por Benda. Vinculado a un tono juvenilista y generacional, por él la *responsabilidad* es leída en clave de una preocupación por encontrar una nueva jefatura intelectual y moral encarnada en selectas minorías del espíritu (Terán, 2004), mismas que el escritor español opone al advenimiento de las masas,

incapaces, a su juicio, de dirigir su propia existencia (Fontana, 2001). Para él, en la medida que la utilidad es el fin del político y la verdad es el fin del intelectual, sólo cabe a este último una actitud teórica y contemplativa para alcanzar sus objetivos, puesto que el pensamiento utilitario sólo encubre y desnaturaliza lo verdadero (Terán, 2004).

Con esas coordenadas, en la América Latina de los años treinta y cuarenta habrán de seguirse tales pasos en publicaciones como la revista argentina *Sur*, en cuyas páginas connotados intelectuales locales y extranjeros intentan dar valor supremo a la cultura, por fuera del involucramiento con pasiones políticas inmediatas (Terán, 2004). Trayectoria que, en México, en las últimas décadas del siglo, continúa Octavio Paz (1990), quien retoma la *responsabilidad* para enjuiciar lo ocurrido en las décadas previas, señalando que no debiese existir compromiso entre el escritor y la dirigencia política dado que el “hombre de conciencia” no debe convertirse en “hombre de poder”, porque debe ser capaz de denunciar lo injusto a todo evento, incluso contra sus intereses.

El tópico de la *responsabilidad*, en resumen, surge bajo el diagnóstico de que las guerras totales del siglo XX desencadenan una crisis que es moral y política a la vez. Quienes lo invocan son intelectuales que les hablan a otros intelectuales, a quienes llaman a no contaminarse con tales coyunturas políticas. Esto retoma la antigua discusión del siglo XVIII sobre si el quehacer cultural tiene una especificidad que debe priorizarse, ajena a la política y al mercado, la que, si no es respetada, impide el pleno cultivo de las artes y las ciencias (Williams, 1994). Este llamado en Hispanoamérica, donde converge con el “espiritualismo liberal”, instruye como tarea una regeneración intelectual y moral de la sociedad, que debe partir desde los individuos capaces de operar en su interioridad una reforma de sí mismos (Terán, 2004). Vale decir, deviene en una afirmación de las élites intelectuales locales como portadoras de lo necesario para conducir sus sociedades.

Detrás de esta postura se esconde un antiintelectualismo de corte conservador. El antiintelectualismo es una forma de desvalorización de la vida intelectual en sociedad y de la importancia que le cabe al debate cultural para el funcionamiento de ésta. En ese sentido, una negación del valor de lo teórico en la resolución de lo práctico es una variante de



antiintelectualismo, tal como lo es negar a los realizadores de las funciones intelectuales su posibilidad de intervenir en el espacio público. Estas posturas ilustran una visión metafísica de la función intelectual, situándola más allá de lo mundano, en una maniobra que asimila al intelectual más con un sacerdote secular que con un productor de conocimiento o un polemista destacado. Lo convierte, por eso mismo, en un productor (y protector) de “verdades reveladas”, aislado del *profano* espacio de la política. Así, en términos prácticos, es una propuesta conservadora porque propugna el alejamiento del mundo por parte de los intelectuales, inhibiendo su participación en sociedad o, lo que es lo mismo, su carácter histórico como figura moderna.

Otro tópico adosado a los intelectuales en el siglo XX es el del *compromiso*. También consecuencia de los efectos devastadores de las dos guerras mundiales, la pretensión de reforma interior, moralizante en la forma de la responsabilidad, adquiere mayor profundidad y sistematicidad gracias a la “teoría del compromiso”. Ligada al existencialismo francés, sugiere que el intelectual es una existencia inexorablemente arrojada en una *situación*, en la que debe dar cuenta de lo que hace a partir de su también inexorable libertad (Terán, 2004). Así, alienta a involucrarse en una situación político-social determinada sin abandonar el campo intelectual, contradiciendo en parte el tópico de la responsabilidad, puesto que, si no se niega la autonomía del campo intelectual, se declara como falso que sea incompatible con otros como el político.

El existencialismo sartreano, de todas maneras, deriva en una nueva antinomia ficticia. Y es que, preocupado de la responsabilidad individual y condición humana, allí el compromiso se transforma en una “ética del compromiso”, que encierra la acción de la intelectualidad en la falsa oposición entre acciones “buenas” y “malas”, a la vez que prefigura el actuar de este sujeto como uno necesariamente crítico del orden vigente. Ello se explica porque, en esta filosofía, cada ser humano tiene un “compromiso existencial” con su prójimo, que orienta el logro de la libertad para todos, puesto que ello da sentido a la vida. De este modo, bajo la interpretación humanista que Sartre intenta del marxismo, y especialmente en medio de la coyuntura de las luchas de liberación nacional desatadas en el Tercer Mundo, el compromiso del intelectual pasa a ubicarse en la trayectoria de la revolución como un

objetivo vital e indeclinable, que otorga sentido al “compromiso existencial” que los seres humanos tienen con sus pares.

Tal propuesta tuvo amplia repercusión en la América Latina de los años sesenta, tras el impacto de la Revolución Cubana. Sin embargo, al absolutizarse la lucha armada rural como explicación omniabarcante de este proceso y, por ello, difundirse de un modo vulgar el modelo de lo ocurrido en Cuba, ignorándose sus basamentos políticos y culturales y su especificidad (Ruiz, 1999), se produjo una politización intelectual que negó el espacio a lo teórico en el conflicto. Reducido el momento de la política al de la revolución y el de su estrategia a la lucha armada, la propia condición intelectual fue cuestionada, tildándose de contemplativa y reformista. El modelo del “intelectual revolucionario”, por este motivo, se reelaboró, paradójicamente, en base a una desconfianza en las prácticas simbólicas, negándose cualquier forma de tal compromiso que estuviera basada en competencias profesionales específicas (Gilman, 1999). Este antiintelectualismo recrudesció con el giro burocrático que, desde mediados de los setenta, se produce en la isla, y con su adopción del “marxismo-leninismo” como ideología revolucionaria (Martínez Heredia, 1995).

En ello, mucho tuvo que ver la ambigüedad de la propia idea de *compromiso*, puesto que, interpretada en clave materialista, se la entendió como una acción corporal o antiespiritualista (Terán, 2004) que desplazó el foco desde el compromiso de la obra al compromiso del autor, juzgándose la actitud del intelectual como el parámetro bajo el cual se medía la legitimidad político-ideológica de su práctica poética (Gilman, 1999). De ese modo, la militancia política, regida por el modelo de la lucha armada, se convirtió en el único modo legítimo de aportar a la lucha política, tornándose como opuesta a ella la actividad intelectual. Los “hombres de letras” debían convertirse en “hombres de acción”, so pena de ser revelados sus “intereses burgueses” y su tendencia “reformista”. Traumático fue, en ese sentido, que dentro de la intelectualidad latinoamericana emergiera un núcleo que, al tiempo que abjuraba de las actividades profesionales que los definían como tales, adoptaban un discurso antiintelectual que sospechaba de sus colegas, a los que acusaban de estar cooptados por la política cultural estadounidense (Gilman, 1999).

Al igual que con el llamado a la responsabilidad, la “ética del compromiso”, tal como fue entendida a través del lente sartreano y de la vulgarización del proceso cubano, le imprimió a la condición de intelectual una normatividad falaz, degenerando en un modelo de “intelectual revolucionario”, paradójicamente, antiintelectual. Ese sujeto, que se supuso siempre y necesariamente crítico del orden social, agitó la maniquea separación entre palabra y acción, negando a lo intelectual su utilidad en el proceso histórico.

Ahora bien, esa normatividad falaz exigida al *individuo* intelectual también se presenta proyecta hacia el colectivo, a partir de modelos culturales que le son atribuidos en tanto sujeto social. Por una parte, aquellos cuyo único factor explicativo son las determinaciones de clase, derivando en que se expliquen los rasgos de su actividad social sólo como extensión de sus atributos de clase (Halperin Donghi, 1987). Por otra, a la inversa, similar determinismo opera al señalar que pertenece a tal o cual clase social todo intelectual que pertenezca a un campo de la cultura dotado de una estructura determinada (Bourdieu, 1992). De tal suerte, individual o socialmente, la normatividad ligada al concepto de intelectuales se origina en la confusión del ser y de lo que *debiesen ser*, y en el uso excesivo de las autoimágenes que los intelectuales han difundido durante el siglo pasado.

En general, tal asunto radica en el tipo de definiciones que se proponen, las cuales pueden ordenarse en dos sentidos. En primer lugar, las de tipo *sustancialista*, en las cuales los intelectuales son definidos considerando supuestas cualidades innatas, atributos conquistados o posesiones adquiridas (Bauman, 1997), tornando ahistórica su definición al no permitir la observación de los cambios y continuidades que experimenta su posición y acción en las sociedades. En segundo lugar, las de tipo *relacional*, que sí incluyen la historicidad, dado que no buscan sus criterios de definición en lo intrínseco de la actividad intelectual, sino en el conjunto del sistema de relaciones en que éstas vienen a encontrarse dentro del complejo de relaciones sociales más generales (Williams, 1994; Gramsci, 1999).

Con todo, las confusiones adheridas al estudio de los intelectuales se despejan cuando se vuelve al análisis concreto y exhaustivo de la realidad histórica, dejando de lado los intentos por hacer calzar la misma en rígidos marcos teóricos. El *deber ser* y las falsas

antinomias impuestas a estos sujetos desaparecen cuando se adopta una perspectiva más abierta a la compleja realidad. Actuando sobre su sociedad, habrá intelectuales que defiendan el orden o el cambio, ambos con sus respectivos matices. La negación de su labor es, por el contrario, una acción política y un ejercicio intelectual que constituye una imagen de mundo que en nada ayuda al estudio de este fenómeno.

### 2.1.2. La especificidad sociológica: política o ciencia en la sociedad de masas

Los modelos de la *responsabilidad* y de la *ética del compromiso* han construido antinomias contra la política, aun cuando la ambigüedad de ambos términos no necesariamente las oponga a la misma. Así, desde estas fórmulas, se puede ser autónomo y comprometido sin siquiera implicarse en los asuntos políticos. En particular, porque los intelectuales pueden estar interesados en cuestiones más trascendentales y menos mundanas como los grandes temas de la humanidad o del propio conocimiento, entendido en abstracto. Y allí la autonomía, la responsabilidad y el compromiso, en sentido amplio, pueden mantenerse en los marcos de *lo* político, siempre que se renuncie a *la* política.

Pues bien, esto debe incitar una aclaración: más allá de las ambigüedades, en aquellas interpretaciones conservadoras la antinomia entre autonomía y compromiso se presenta solamente cuando este último deja de ser inocuo, indefinido o presentado como ética, para transformarse en un *compromiso político*, en el sentido de una intervención en la sociedad anclada en la colaboración con organizaciones que lleven adelante proyectos o acciones concretas que apunten a alcanzar el poder. Por lo mismo, las antinomias antes descritas se presentan como tales sólo cuando, en su relación con la política, los intelectuales intentan superar el viejo dilema del paso de lo social a lo político. Dilema que, sin embargo, se pone entre paréntesis cada vez que intelectuales, artistas y escritores repiten que su mera intervención pública supone un acto político. Ello, por cierto, niega la necesidad de este crucial paso que da efectividad política a su actuar teórico y concreto.

¿Por qué ocurre eso? De nuevo, por la imagen que los intelectuales han difundido de sí mismos. El caso Dreyfus o la noción de *philosophe* como modelo a seguir, ejemplo de

responsabilidad y compromiso, constructor del pensamiento moderno y maestro de la crítica y de la libertad de pensamiento, son ejemplos de ello. Pero se trata de unas imágenes y modelos que omiten una constatación evidente al observar la historia: que los intelectuales han actuado más como funcionarios del orden que como críticos de éste. Es que, muy a menudo, su labor ha estado ligada a los requerimientos del poder, voluntaria o forzosamente, como lo muestra, por ejemplo, el rumbo adoptado por las ciencias sociales a uno y otro lado del Atlántico durante la Guerra Fría (Fontana, 2001) o la evolución cada vez menos independiente de las artes y la cultura que se observa a medida que se imponen las relaciones mercantiles y se asienta el Estado moderno (Williams, 1994).

La literatura que retoma el asunto de la *responsabilidad* de los intelectuales es un buen ejemplo de la ambigüedad de estos términos y de la pretendida autonomía y autosuficiencia política que los intelectuales construyen como imagen de sí mismos. Autosuficiencia que los atrapa en antinomias éticas que los obligan a ser críticos o cortesanos, o que les demandan usar su cosmopolitismo y la calidad de su oficio para ejercer una actividad responsable, que vaya en directa relación con no abstenerse de criticar todo lo criticable (Chomsky, 1969; Said, 2003). Advertir los gestos de la crítica o de la apología como acciones ligadas a lo político, pero no necesariamente a la política, es clave para distinguir la realidad de los intelectuales respecto de la expectativa que se pueda tener de ellos. Esto evita que se sitúe en la interioridad o en la responsabilidad individual la capacidad de incidencia en la sociedad, relevando el hecho de que la política se ancla en intereses sociales de sujetos concretos, que pueden o no reconocerse en proyectos, proclamas o incluso en las diatribas formuladas y difundidas por la intelectualidad.

Por fuera de estas formulaciones sobre el *individuo* intelectual, en las ciencias sociales existe una propuesta que, tomando en parte estas antinomias y proyectándolas a un nivel societal, influye en la interpretación que desde la sociología se les da a los intelectuales. Se trata de lo dicho por Max Weber (2015) en sus dos conferencias sobre “La ciencia como vocación” y “La política como vocación”, pronunciadas en Múnich entre 1917 y 1919, coincidiendo con la agitación que lleva a la Revolución Bávara de fines de la década. En ellas, propone que ciencia y política se mueven en mundos irreductibles el uno al otro,

motivo por el cual su ejercicio simultáneo implica un problema político y epistemológico que arraiga como límite para el ejercicio del conocimiento en la sociedad moderna. Propone la separación entre ciencia y política, puesto que los valores y compromisos que definen las tareas del científico y del político son radicalmente distintos. Mientras la ciencia es el medio principal del que se dispone para racionalizar un mundo que es despojado de sus valores objetivos, y debe abstenerse de expresar preferencias subjetivas, la política moderna opera dentro del mundo desencantado que ha creado la ciencia, pero necesariamente enfrenta a las causas subjetivas entre sí. El error central del científico, entonces, estriba en cruzar esta línea y formular juicios de valor sobre la vida pública.

Para Weber, un liberal preocupado por encontrar un camino intermedio entre el conservadurismo prusiano y el marxismo –preocupado por los movimientos revolucionarios que estallan en Alemania en 1918-, el problema, más allá de Alemania y aun Europa, para todo el mundo capitalista, es el replanteamiento de las formas de dominación burguesa en una situación de emergencia de masas y de concentración de capital, resultado de la crisis insuperable de la relación entre Estado y sociedad, tal como fuera planteada desde el liberalismo (Portantiero, 1983).

Con base en el avance inevitable de la burocratización en la sociedad, fija como responsabilidad de la política la moderación de la avasallante máquina burocrática que sólo atiende a los medios, omitiendo la racionalidad de los fines. Característico de los Estados modernos es que sus sociedades experimenten procesos de democratización, pese a que es inevitable que la acción política se concentre en la capacidad de maniobra de pequeños grupos dirigentes o élites. En ese sentido, es la eficacia del poder y no el ejercicio de la representación lo que constituye, a su modo de ver, el problema central de la política: el talento político –que Weber identifica con el Parlamento- yace en la capacidad tanto de dirigir a la burocracia como de controlar el inevitable elemento cesarista presente en unos Estados en los que las masas ya no pueden ser tratadas como objetos pasivos de administración, dado que sus actividades poseen importancia activa (Portantiero, 1983).

Pero la burocratización de la vida social no se explica solamente por la expansión de la política, sino también por el crecimiento de las exigencias administrativas vinculadas a la complejización cada vez mayor de la cultura (Weber, 2008). De tal suerte, el fin del capitalismo competitivo se manifiesta en un doble proceso contradictorio: en el quiebre de la relación entre Estado y sociedad al “politizarse” ésta última y, simultáneamente, en la autonomización de la esfera político-decisional, con lo cual a mayor socialización hay mayor burocratización (Portantiero, 1983). Su referencia a los juicios de valor, así, también es un aviso sobre la necesidad de disuadir a las masas de acciones que sobrepasen el patrón de dominio existente. Es un aviso que reclama la necesidad de una reestructuración no sólo del patrón de acumulación capitalista, sino también de la relación entre Estado y sociedad, donde las superestructuras son fundamentales para reproducir el nuevo orden posliberal.

Weber, en virtud de la burocratización y el desencanto del mundo moderno, habla de la “intelectualización de la vida moderna”, esto es, del proceso de especialización que escinde la vida en esferas de valor separadas e incompatibles entre sí y que le resta significado como un todo. Con ello, instala una curiosa idea de lo que es un intelectual, pues sugiere que el intelectualismo es justamente lo que los intelectuales son incapaces de ver. Es que, al asimilar vocación con especialización -como lo hace en sus conferencias- encuentra en la idea de intelectual o “aficionado” el antónimo de ello. Uno que, de hecho, usa para definir al gobierno de los ideólogos espartaquistas en 1919 (Anderson, 1992). De este modo, junto con deplorar la intelectualización de la vida moderna que arrasa con los valores últimos y más elevados de la vida pública, también lo hace con los intelectuales. Esto es lo que explica la salida que propone: la búsqueda de una ética de la ciencia y una de la política que enfrenten la desintegración de los valores. Para ambos casos, la combinación de una intensa vocación con una férrea disciplina es lo que propone (Anderson, 1992).

Weber, instala, entonces, la idea de intelectualización como especialización, esto es, básicamente como ejercicio de profesiones, en torno a lo que incluso puede estar implicado el cumplimiento de un “llamado” (*beruf*), que explica la pasión que moviliza a científicos y políticos (Anderson, 1992). Asimismo, introduce que tal especialización se cimienta en la separación entre ciencia y política, en tanto consecuencia inevitable de la burocratización

moderna. Lo contrario es el intelectual, el no especializado, del que deplora por mezclar juicios de valor. No hay para Weber, entonces, una intelectualidad como tal, sino una burocracia creciente, en cuyo seno la relación entre ciencia y política se reduce al hecho de que la política debe orientarse a moderar el doble privilegio que marca la capacidad de dominio de aquella: el monopolio del conocimiento técnico y el monopolio de la información (Portantiero, 1983).

Estas definiciones van a influir notablemente en las corrientes sociológicas que analizan la relación entre intelectualidad, poder y política en el siglo XX. Por una parte, considerando la tensión entre la autonomía y el control con que los productores culturales (intelectuales, artistas y científicos) operan en la sociedad; y, por otra, considerando la tensión entre élites y masas, referida a la progresiva concentración del poder político, la técnica y el conocimiento, a la vez que se extiende la socialización de la producción cultural.

Por cierto, la definición que hace Weber de tales criterios no implica que los cumpla. En verdad, él mismo es incapaz de separar ciencia y política en su propia obra, donde abundan los juicios de valor (Anderson, 1992). Y eso ocurre porque la relación entre intelectualidad y poder político sigue siendo un asunto empíricamente irresuelto. El compromiso político no tiene razón para oponerse a la autonomía intelectual como una antinomia infranqueable, dado que, si bien tal oposición puede funcionar lógicamente, la misma constituye una relación social que sigue teniendo potencialmente múltiples salidas. La politización de los intelectuales existe y es real, tanto como lo es la adscripción de éstos a valores y compromisos éticos que condicionan sus decisiones. Empero, ambas tendencias no deben fijar con antelación modelos de intelectualidad, no sólo porque aquello dificulta la investigación, sino porque tales esencialismos traen lamentables consecuencias prácticas.

## **2.2. Intelectualidad, política y poder: una revisión conceptual desde la sociología**

Es difícil evaluar la producción teórica sobre los intelectuales desde América Latina sin conocer, aunque sea parcialmente, los principales cauces teóricos presentes en la teorización sociológica europea y estadounidense. Cauce, en el sentido de temáticas u



orientaciones que, explícita o implícitamente, son atribuidas a la intelectualidad como sujeto y al comportamiento de sus miembros. Enfocada en la producción del siglo XX, la revisión expuesta a continuación considera los enfoques y tradiciones de pensamiento que siguen teniendo vigencia teórica, y que más han influenciado la visión latinoamericana sobre la intelectualidad en general y sobre los intelectuales en particular.

### 2.2.1. Profesionalización de las tareas intelectuales y requerimientos funcionales de la cultura: la tradición funcionalista

La funcionalista es una de las tradiciones de pensamiento más influyentes del siglo XX y es ineludible al revisar las conceptualizaciones sobre los intelectuales. La idea básica sobre la que se apoya es la de la “determinación social del pensamiento”, noción que, sin embargo, proviene de la Alemania de comienzos del siglo pasado, encontrando su mayor desarrollo en Karl Mannheim.

Su propuesta se enmarca en la reelaboración de la figura del intelectual que se produce tras la Gran Guerra y la crisis general que azota a Europa, y que insiste en la autonomía social y política como principio constituyente de la intelectualidad. Pero la fórmula de Mannheim (1987) no apunta a una norma social, sino a la posición estructural de los intelectuales. Para él, el pensamiento político siempre está determinado por la posición social, de modo que la síntesis total de las resoluciones políticas de una sociedad está siempre asociada a la voluntad de un grupo particular, y no corresponde “al promedio” de las diversas aspiraciones de los grupos sociales existentes.

El resultado de las síntesis válidas, fundadas en una posición política particular, se funda en el aprovechamiento de las conquistas culturales y energías sociales acumuladas de épocas previas. Es allí donde aparecen los intelectuales, a quienes describe como una “*intelligentsia* independiente”, capaz de promover un modo de entender el *aquí* espacial y el *ahora* temporal, determinando en cada caso qué ha dejado de ser necesario y qué es aún posible. Se ubican en una posición intermedia en la estructura social, conformando una capa relativamente “desclasada” y débilmente situada en el orden social (Mannheim, 1987).

Así, al no ser ni una clase ni un apéndice de ella, su base social se unifica alrededor de la educación que comparten sus miembros como herencia, y que no es otra cosa que la cultura enriquecida por generaciones. Aquella herencia los somete a las influencias contradictorias de la realidad, diferenciándolos respecto de quienes construyen su concepción de mundo sólo a partir de su participación en el proceso social de la producción, como ocurre con las clases fundamentales de la sociedad.

El origen de su carácter independiente proviene del hecho de que la actividad intelectual en la modernidad ya no constituye un privilegio de clase, lo que significa que su base social se ensancha para reclutar nuevos miembros en un área cada vez más extensa, no homogénea. Ello no implica que los intelectuales “floten” sobre los intereses sociales, sino que se impregnan de todos los existentes, lo que los “prepara” para enfrentar los problemas de su tiempo desde diversas perspectivas (Mannheim, 1987). Tampoco implica neutralidad en sus síntesis, sino la garantía estructural de que éstas provienen de la posibilidad de contar con una “conciencia dialéctica” surgida de la síntesis de perspectivas parciales (Cardús, 1993).

De modo que las afinidades de clase existen y pueden establecerse con clases que no sean las de los intelectuales. Sus vínculos con otros grupos son fruto más de una elección que de una determinación, lo que comporta su característico rasgo de inestabilidad política y sus elecciones no deterministas entre bandos políticos (Mannheim, 1987). Los intelectuales valoran su relación con la política, por lo que se afilian a clases y partidos políticos. En estos últimos, su acción transforma el conflicto de intereses en *conflicto de ideas*, sea para defender intereses particulares o para introducir exigencias intelectuales en la política.

El fascismo y los efectos del conflicto armado en Europa hacen que la idea de la “determinación social del conocimiento” se desplace hacia unos Estados Unidos en los que tal noción agrega argumentos al cuestionamiento del consenso social y político anterior a 1918, ya desarrollado desde el fin de la Gran Guerra, y que ponía en entredicho el objetivismo dominante en las ciencias sociales de ese país. Una orientación crítica que, sin embargo, se mantiene en alto poco tiempo como consecuencia de la Guerra Fría, pues desde allí gana espacio el entendimiento de la sociedad como un sistema en equilibrio

estático, que es más afín a la imagen que sobre sí mismo forjaban los Estados Unidos en su nuevo papel de potencia global (Fontana, 2001).

En la sociología, esta necesidad histórica encarna en el estructural-funcionalismo, que recoge la cuestión de la relativa independencia de los intelectuales en un sentido diferente al europeo. Y es que, a diferencia del talante crítico y la pretensión de síntesis general que a los intelectuales se les atribuye en la discusión alemana, en Estados Unidos la reflexión se centra en el “rol social” que éstos desempeñan, cuyo sentido radica en los requerimientos funcionales que cumple la cultura como subsistema social, en el marco de una sociedad estable. Si se comprende que esa sociedad tiene como modelo a la Norteamérica triunfante post Segunda Guerra Mundial, se entiende que tales requerimientos refieran, en concreto, a la desactivación del peligro comunista internacional, que podría haber introducido una brecha social en suelo estadounidense. Por ello, la clave de la sociología de los intelectuales desarrollada en los Estados Unidos, en medio de este conflicto internacional, es la desradicalización del papel social de este sujeto en favor de un “experto” al servicio de organizaciones privadas y del Estado (Pecourt, 2013).

Talcott Parsons (1969) establece las coordenadas con que el funcionalismo de matriz estructuralista analiza a los intelectuales. Su punto de inicio, la distinción entre sistema social y sistema cultural supone que, si el primero organiza las necesidades de interacción de personas y grupos que actúan en una determinada situación, el segundo modela los significados que dotan de sentido a tales interacciones. De tal suerte, el rol del intelectual es gestionar los asuntos de carácter normativo, a través de los sistemas de significados con que se evalúan las acciones de acuerdo con criterios prefijados: su función social, así, es elaborar los marcos simbólicos que regularizan el orden social existente.

Para Parsons, es en ese proceder que los intelectuales adquieren una autonomía relativa respecto de las responsabilidades propias de la sociedad, aun cuando ello signifique desarmar la idea mannheimiana: los intelectuales se “desligan” de los intereses sociales por ser los que priorizan el significado de los sistemas simbólicos sobre la interacción con los grupos sociales (Parsons, 1969). Desde su relativa autonomía, proponen los estándares

universales (Pecourt, 2013), dándole un cariz de objetividad que se consolida en su responsabilidad fundamental: resguardar los imperativos de la máxima objetividad de la ciencia y la búsqueda de soluciones teóricas y empíricas (Parsons, 1969).

Una posición similar adopta Edward Shils (1972), aunque bajo el más conservador vínculo de la pureza y el desinterés de los intelectuales con respecto al conocimiento y la tradición. Para él, en tanto reflexionan innatamente sobre el universo que los rodea y las reglas que gobiernan al mundo, son guardianes que conectan con lo sagrado (Pecourt, 2013), ubicándose más allá de lo mundano –que identifica con el mundo de la política-, en una maniobra que retrotrae la figura del intelectual a la del sacerdote, pero esta vez en un mundo secularizado que no parece estar tan desencantado como dijera Weber. Los intelectuales, en este sentido, son una minoría en comunión con los símbolos, a la que le caben los roles de crear, conservar y reinterpretar los productos culturales de generaciones pasadas, y de transmitir tales creaciones a quienes no puedan experimentarlas.

Tanto Parsons como Shils identifican a los intelectuales con categorías ocupacionales que cumplen funciones sociales precisas, que contribuyen a la perpetuar el orden social. Aunque su aparición es vista como producto de la creciente especialización de funciones, no explican ni los pormenores de tal división ni la estructura de los grupos que emergen. De este modo, su sociología de los intelectuales se convierte en una especie de “sociología de las ocupaciones”, en tanto amplía la definición del intelectual, incluyendo a todos aquellos dedicados a las tareas simbólicas, insistiendo en la especialización y mayor profesionalización de este colectivo (Pecourt, 2013).

En lo referente a su relación con el poder, Parsons (1969) cuestiona el activismo político de los encargados de producir la cultura, ya que aquel no sólo quebraría el equilibrio entre los diversos roles sociales, sino también volvería ineficaz su actividad, a riesgo de desaparecer. Para él, los “intelectuales proféticos” sólo logran una influencia genérica en el debate público, ya que no cuentan ni con los medios políticos ni económicos para incidir. Los “intelectuales específicos”, por su parte, logran mayor influencia, pero en subcampos culturales específicos y gracias al monopolio de sus competencias técnicas. En un proceso

inevitable, si los procesos de especialización modernos pluralizan el mundo cultural, los intelectuales con pretensiones de una visión unitaria –generalmente marxista- no son sino desviaciones que, de todos modos, no interrumpen el paso hacia una “era post-ideológica”. Por su parte, para Shils (1972), la relación de los intelectuales con el poder se expresa en que también pueden ejercer funciones de autoridad. Empero, esa colaboración “terrenal” se produce solamente como sostén de la legitimidad de los gobernantes. Reformulando el problema weberiano, la legitimidad de la autoridad dependería de la creencia de la gente, aunque ésta no dependa de la experiencia cotidiana, sino de la tradición que los intelectuales resguardan. Así, el vínculo con intelectuales no debiese instigar actividades revolucionarias, sino la cooperación con la clase política.

Una falencia recurrente del estructural-funcionalismo es su tendencia por rehuir el conflicto social. Parsons y Shils son ejemplos de ello, toda vez que ubican a las comunidades intelectuales tan alejadas del resto de la sociedad, que no es posible su relación con otros grupos sociales. Ahora bien, existen otras propuestas que incluyen las tensiones implicadas en la relación del intelectual con el poder, manteniendo, de todos modos, la desradicalidad antes mencionada. La primera es la de Robert K. Merton (1965), quien funge a los intelectuales con el cultivo y la formulación de conocimiento, fijando su función social en el rol que cumplen los especialistas ligados al conocimiento social, político y económico, que se diferencia, internamente, por el tipo de “clientela” que los contrata. Sitúa la relación entre intelectuales y poder en el contexto de los órdenes burocráticos que moderan sus posibilidades de acción. Así, abocándose al estudio específico de las ciencias sociales, les atribuye tres características en su relación con la política, destacando la debilidad de la misma: (1) la indeterminación de los resultados de las ciencias sociales; (2) la desconfianza entre intelectuales y políticos; y (3) la percepción de los políticos respecto a conocer mejor las problemáticas sociales que los intelectuales (Merton, 1965).

Para Merton, de todos modos, la posición estructural es determinante para la capacidad de maniobra de los intelectuales (Pecourt, 2013), dado que ella les otorga plataformas distintas para su accionar. Así es como distingue entre el “intelectual independiente” -cuya clientela es el público- y el “intelectual burocrático” -cuya clientela son los políticos de las

organizaciones para las que desempeña funciones asesoras, directas o indirectas-. Sin embargo, sólo este último se vincula con la política, generalmente a organizaciones burocratizadas. En la propuesta mertoniana, mientras más cercano se encuentra el intelectual de los centros de decisión, mayor potencial de ejercer influencia tiene. Su *integridad* –como recurso de legitimación- no viene dada por la plataforma en que ejerce sus habilidades, sino que depende de su posición en la estructura ocupacional y, sobre todo, de los valores perseguidos. Por tanto, el conflicto entre cada tipo de intelectual y la política depende de sus valores e intereses y de las diversas posiciones estructurales que ocupan.

Merton, en definitiva, dando cabida al conflicto social, es superficial el vínculo que establece entre los intelectuales y el poder en la burocracia pública. Esto, dado que sólo se aproxima a las estructuras formales del poder, obviando las de orden factual. Los intelectuales, de este modo, son meros asesores de la política, escamoteando fenómenos propios de la dominación político-ideológica, que no necesariamente se reproducen en el espacio institucional. A su vez, se pierden de vista sus posiciones políticas, ya que, como meros funcionarios, parecen comportarse sólo como asépticos tecnócratas.

Aborda también el conflicto social Lewis Coser (1970), quien aborda a los intelectuales como una élite más que contribuye a la estabilidad social a través de su rol en la cultura. Es una categoría numéricamente pequeña, pero cualitativamente importante, de hombres que difieren del número mucho mayor de personas ocupadas en la manipulación de símbolos en las artes, las ciencias y la religión. Así, el autor se distancia de una sociología de las ocupaciones, diferenciando a los intelectuales de los que denomina “técnicos mentales”, encargados de operaciones mentales especializadas pero distintas a las de los creadores intelectuales, que además gozan de desprenderse de las tareas inmediatas y pragmáticas que exige lo cotidiano. Si los técnicos mentales viven *de* las ideas, los intelectuales lo hacen *para* ellas, entregándose a un conjunto de valores generales que trascienden los estrechos compromisos profesionales y que se evidencia en su constante actitud crítica.

Relevando la importancia de las instituciones, plantea que los intelectuales surgen siempre y cuando existe un ambiente institucional que favorezca su manifestación. Pasan de ser

agregados a tener conciencia de su accionar cuando se les proporciona un marco –el ágora, la Piazza o el distrito de cafés- en el que pueden reproducir sus perspectivas y estilos de vida, que es lo que tienen en común (Coser, 1970). Asimismo, necesitan de un auditorio o círculo de personas a quienes dirigirse, que les proporcione el reconocimiento que los legitima socialmente, a la vez que necesitan del contacto regular con sus colegas para establecer reglas y normas comunes. Esta socialización los dota de autoconciencia y de un *ethos* particular, e incluso de cierta solidaridad de clase (Coser, 1968). El intelectual ha ejercido funciones de legitimación y de crítica, así como, en casos excepcionales, ha logrado detentarlo él mismo. En todos los casos, el vínculo ha generado debate entre los propios intelectuales y en la sociedad general.

Aunque integra el conflicto, Coser no deja de insistir en el equilibrio de poderes, que visualiza entre tipos sociales diferentes como el intelectual y los miembros del poder político. Así, en su conceptualización, los intelectuales y los técnicos mentales no hacen referencia a personas sino a roles sociales, por lo que las disputas son más desviaciones del sistema social que conflictos insuperables en términos estructurales (Coser, 1970).

Crítico del funcionalismo, Charles Wright Mills, que no se despegaba de nociones como el rol-estatus, adopta más genuinamente los elementos críticos de la propuesta de Mannheim al denunciar los límites de la autonomía intelectual en su país y en el mundo. Su propuesta se liga a su “sociología del conocimiento”, cuya base es la consideración general de que los hombres viven en “mundos de segunda mano”, en los que existe entre conciencia y existencia una serie de significados, proyectos y comunicaciones que se interponen, y que organizan el conocimiento y las percepciones (Wright Mills, 1964). Tales interpretaciones no son más que manipulaciones procesadas previamente, a través del lenguaje y los símbolos, llevando a que los términos de la interpretación individual no sean propios.

En las sociedades modernas, los hombres dependen cada vez más de los puestos de observación, los centros de investigación y los depósitos de información que establece el “aparato cultural”, estructura fenomenal en que radica la posibilidad de conocer y elevarse por sobre los acontecimientos insensatos de la vida cotidiana, para así captar sus

significados reales. Tal capacidad depende del asiento que se tenga en el mismo aparato cultural, en donde sólo algunos participan como “trabajadores culturales” (Wright Mills, 1964). Esta categoría es la que integra a intelectuales, artistas y científicos, caracterizados por representar el papel de innovadores en sus áreas, contribuyendo a la producción, distribución y consumo de los objetos culturales. Sorteando las definiciones enumerativas, relativas a ocupaciones, el autor señala que los *intelectuales* son quienes innovan en los estudios humanos y en la literatura, diferenciándose de los *profesionales* que son los que practican “rutinas consagradas de saber y poder” que los alejan de tal espacio creativo.

La preocupación de Wright Mills (1970) radica en el destino de los objetos culturales producidos, distribuidos y consumidos por los trabajadores culturales y la sociedad en su conjunto. Puesto que considera que el campo de la política del trabajador cultural –la política de la cultura- es coextensivo al de la política, sostiene que la primera puede servir tanto para justificar el poder existente como para oponerse a las decisiones de la autoridad. Todo esto, a través de labores conscientes como un libro, un dibujo o un panfleto. Distingue, por ello, entre la política de la labor cultural y las opiniones políticas o actividades explícitas de los trabajadores de la cultura, señalando que existe diferencia entre representar un papel político y ser, en virtud de la propia obra, políticamente importante.

Por último, dentro de la tradición funcionalista es posible considerar la propuesta Alvin Gouldner (1980), que influye en la interpretación sobre el ascenso de las tecnocracias en la América Latina de los ochenta. Él sostiene que la intelectualidad, en los marcos del cambio estructural producido en los setenta en el mundo desarrollado, deviene en una clase social por sí misma, capaz de subvertir la estructura de poder dominante. Para ello se vale de una racionalidad emancipadora que reclama su autoridad sobre la base del conocimiento que posee, en sociedades en que aquel se torna central para las dinámicas del poder.

Muy a tono con las teorías que proyectan el advenimiento de una sociedad “postindustrial”, en la que se produce la transición hacia un modelo basado en la información y el conocimiento, alcanzando a las relaciones de poder, la estratificación social y la reconfiguración de los valores sociales, políticos y culturales (Touraine, 1973; Bell, 1994),



Gouldner (1980) observa que, en el contexto del capitalismo avanzado, la producción en masa de trabajadores calificados y profesionalizados da lugar a la conformación de un nuevo grupo social que enfatiza en su autonomía no como un valor espiritual, sino como expresión de su interés de clase. Compuesta tanto por una *intelligentsia* cuyos intereses son primordialmente técnicos, como por intelectuales con intereses críticos, emancipadores y hermenéuticos -y, por ende, políticos-, esta clase se posiciona en la sociedad usando el recurso de una lingüística elaborada, privativa para otros sectores sociales, que adhiere a la cultura del discurso crítico. En ese tránsito, el desarrollo de su conciencia la lleva a querer autodeterminarse, dando batalla para constituirse en una clase propiamente tal, frente a los resabios de las clases dominantes de la sociedad industrial.

### 2.2.2. ¿Estrato social reclutable o producto histórico de las clases?: la tradición marxista

La intelectualidad y los intelectuales, como objeto de reflexión, es también parte de la tradición de pensamiento marxista. Principalmente, sus controversias se vinculan a la cuestión de su función social y de su posición y orientación en el complejo de correlaciones de fuerza en una sociedad. Tres elementos las caracterizan: (1) un enfoque eminentemente político-práctico, que surge al calor de la acción política, con predominio del análisis de clases y en desmedro de aproximaciones que atribuyan rasgos extramundanos a los intelectuales o les otorguen excesiva importancia a las personalidades; (2) que la idea de función social en el marxismo no refiere a requerimientos funcionales de un orden social, sino al producto histórico del propio desarrollo del capitalismo y del patrón de acumulación dominante en una sociedad histórica particular; y (3) que la intelectualidad y los intelectuales son portadores de intereses sociales –con diversos grados de autonomía-, en base a los cuales se ubican en el proceso social de la producción.

La tradición clásica<sup>11</sup> ubica a la intelectualidad como parte de la gama de estratos sociales que el desarrollo capitalista produce entre la burguesía y el proletariado (Bilanski, 2012),

---

<sup>11</sup> Se habla de tradición clásica siguiendo la periodización de Anderson (1987), en la que se incluyen tanto a los herederos inmediatos de Marx y Engels como a la generación siguiente, desplazando el eje geográfico de la cultura marxista hacia la Europa oriental y central.

por lo que sus rasgos específicos se buscan en el tipo de trabajo que realizan sus miembros, en este caso, el trabajo intelectual. Pero éste, que la diferencia del proletariado constituye la raíz de todo un problema teórico al que se le dan soluciones diversas. Es que, considerado como históricamente reservado por los burgueses para sí, la especificidad del trabajo intelectual lleva a definir, en un primer momento, a los miembros de la intelectualidad como un “estrato” de la burguesía desligado de los intereses obreros.

El desarrollo del capitalismo monopolístico de fines del XIX, sin embargo, relativiza esta afirmación inicial, al complejizar la división social del trabajo con la cada vez mayor especialización de funciones. Las implicancias contenidas en la distinción entre trabajo manual y trabajo intelectual, por esto mismo, cambian, al sostenerse que, si el primero esclaviza el cuerpo y deja libre la conciencia, el segundo libera al cuerpo y esclaviza la conciencia. De allí se siguen dos consecuencias: primero, que los obreros, en tanto trabajadores manuales, son libres de conciencia para adscribir a la socialdemocracia; segundo, que, si los intelectuales dependen de la burguesía, en la medida en que viven a cuenta de la ganancia industrial o de la renta agraria, mantienen sólo un interés indirecto por mantener la explotación capitalista, de modo que es posible atraerlos políticamente, dado que no existe una relación intrínseca con la clase burguesa (Bilanski, 2012).

Las propuestas surgidas en el seno de la II<sup>o</sup> Internacional parten de esta última premisa, aunque den lugar a propuestas enfrentadas respecto a la potencialidad política de los miembros de la intelectualidad para la lucha obrera. Así, mientras unos postulan que el partido no puede rechazar la colaboración de los intelectuales al ser estos elementos imprescindibles para el desarrollo de la teoría revolucionaria, otros afirman que sólo el proletariado puede elaborar la teoría que lo conduzca a su emancipación.

Karl Kausky y Max Adler consideran que los intereses económicos no son determinantes de la pertenencia de los intelectuales a la burguesía, por lo que no es un recurso suficiente para atraerlos hacia la socialdemocracia. Aun así, Kautsky (1980) señala que el aumento de la oferta de intelectuales que provoca la modernización capitalista pueda generar un descontento entre ellos, al generarse una demanda insuficiente por sus labores. Para Adler

(1980), en cambio, la insuficiencia del interés económico en los intelectuales se debe a la importancia de la cultura en el trabajo intelectual. En efecto, este autor traslada el debate a la esfera de la cultura y, específicamente, a cómo el capitalismo obstaculiza el pleno desarrollo de ésta. De suerte que plantea como táctica la de convencer a la intelectualidad de que la superación del sistema capitalista permite la liberación espiritual necesaria para el desarrollo del trabajo intelectual, argumento que debiese funcionar si se considera que el interés de clase de los intelectuales no es burgués ni proletario, sino “cultural”.

Kautsky (1980) lo objeta alegando que difícilmente los intelectuales son un grupo con intereses de clase comunes, por lo que no se puede decir que tengan intereses materiales o espirituales homogéneos. A lo sumo, comparten rasgos aristocráticos o elitarios al monopolizar el acceso a la educación en las sociedades, por lo que no es posible inducirlos como clase a una alianza con el proletariado, sino sólo individualmente. Trotski (1969), por su parte, también lo hace, enfatizando en cómo, pese a las promesas que puedan ofrecerse a los intelectuales, ellos no dan señales de acercarse a la socialdemocracia. Algo que para Adler (1980) se debe a la incomprensión que estos muestran respecto a qué es el socialismo -al presentárseles sólo en su faz política y no como un movimiento cultural universal, en torno al cual se unan los trabajadores manuales e intelectuales-, pero que Trotski (1969) niega, indicando que su lejanía con la clase obrera se debe al propio desarrollo capitalista, que absorbe “la crema de esta clase”, atraída a los beneficios económicos.

En Trotski (1969), la actitud de la intelectualidad respecto al socialismo sólo puede modificarse radicalmente por un viraje político objetivo, que modifique la correlación de fuerzas. El paso de la intelectualidad al colectivismo sólo se produce cuando la promesa de victoria sobre la burguesía se torna real y palpable, siendo posible crear tales condiciones únicamente a través de la acumulación de poder político por parte de la nueva clase social: quizás pueda surgir en el proceso de lucha directa e inmediata, pero no antes.

Estos esfuerzos teóricos no deben hacer olvidar que, como tal, no existe intelectualidad marxista en Europa occidental hasta la Gran Guerra y la crisis del 1929. Esto se debe a que, por un lado, en países como Alemania no había muchos intelectuales de izquierda y en

otros -como Francia- predominaban viejas ideologías de izquierda anteriores al marxismo; y, por otro, a que la sociedad burguesa a la que pertenecían los intelectuales era aún una empresa próspera (Hobsbawm, 2015). La masa de intelectuales se vuelve hacia Marx a través de Lenin. La historia del marxismo entre los intelectuales de occidentales es, en gran parte, la historia de sus relaciones con los partidos comunistas que sustituyen a la socialdemocracia como principales representantes del marxismo. En ese contexto, se trata de una relación problemática, no sólo por el poco campo que dejan estos partidos a la actividad por la que los intelectuales reciben su nombre, sino porque la ortodoxia comunista cambia rápidamente (Hobsbawm, 2015).

Del pensamiento marxista europeo surgido desde los años veinte, enfrentado a la necesidad social y a la interpretación mecanicista heredada de la II<sup>o</sup> Internacional, la propuesta más destacable es la de Antonio Gramsci. Reactualizando el principio captado por Marx y Engels sobre la esencia del hombre como actividad “crítico-práctica” o “revolucionaria”, observa que los intelectuales surgen como grupo sólo al desarrollarse la división social del trabajo, que constituye el núcleo fundamental del desarrollo de las fuerzas productivas. Cuando, producto de la especialización de funciones, se desprende la actividad “intelectual” de la actividad integral de los hombres, como si ésta fuera apenas una dimensión parcial, aparecen los intelectuales en la sociedad. Sin embargo, contraria a una categoría *a priori*, dada desde siempre y diferente de la actividad productiva material, para Gramsci (1967) el estudio de los intelectuales debe hacerse en los marcos de la estructura de clases de la sociedad, la cual está históricamente constituida, de manera que la forma y la función de los intelectuales también varía en el tiempo.

Su propuesta resulta del análisis que realiza sobre el problema de la hegemonía proletaria sobre las masas campesinas y de las diferencias sociales que internamente ello genera en la estructura social y productiva de la Italia de principios del siglo XX. Contrario al mecanicismo economicista, para Gramsci (2002) era claro que el análisis del desarrollo capitalista en ese país debía incluir la comprensión de las estructuras políticas e ideológicas que mantenían al sur campesino en una condición de atraso económico y social en comparación al norte industrial. Observa que, como consecuencia del desarrollo capitalista

y de los progresos de la sociedad moderna, al viejo tipo de intelectual o “intelectual tradicional” (sacerdotes, abogados, notarios, médicos) -que fuera fundamental para la organización de las sociedades rurales- se agrega otro, vinculado a la industria, que organiza técnica y especializadamente la ciencia aplicada, al tiempo que posee un modo de vida fundamentalmente urbano. Por su parte, diferentes a los intelectuales urbanos, los intelectuales “medios” de las zonas rurales están subordinados a los grandes intelectuales del sur, los cuales fungen como “clave de bóveda” del *bloque agrario*, esto es, del modo de dominación social y político del sur italiano, impidiendo el resquebrajamiento de la estructura bajo la cual las masas campesinas se mantienen en un estado de desafección frente a la lucha política del proletariado industrial del norte.

La explicación para ello la encuentra en la existencia de diversos tipos de intelectuales que movilizan su producción cultural e ideológica, de acuerdo con el nexo que tienen con diferentes grupos sociales en conflicto (Gramsci, 1999). Así, al plantearse la pregunta sobre si son los intelectuales un grupo social autónomo e independiente o bien si cada grupo tiene su propia categoría especializada de intelectuales, responde que ambas formas conviven en la realidad concreta. Existen, por una parte, categorías especializadas de intelectuales pertenecientes a grupos sociales específicos, esenciales dentro de la estructura económica (burguesía y proletariado). Pero también una asimilación de otros estratos en los que hay intelectuales tradicionales.

Los primeros, son los “intelectuales orgánicos”: aquella capa de intelectuales que todo grupo social que emerge sobre la base de una función esencial en el mundo de la producción económica produce, con el fin de entregarse homogeneidad y una conciencia de su propia función en el campo económico, en el social y político (Gramsci, 1999). Ellos son “especializaciones” de aspectos parciales de la actividad primitiva del tipo social nuevo que la nueva clase saca a la luz, es decir, son fruto de la diferenciación social moderna. No obstante, ella supone que aquellos intelectuales son los encargados de desarrollar los aspectos parciales y necesarios para la reproducción de la clase esencial de la que nacen, no sólo referida a los factores económicos, sino que también a los extraeconómicos, que sirven para mantener y reproducir el orden social (Gramsci, 1999).

Por otro lado, existen intelectuales autónomos a los grupos sociales esenciales, que a menudo son categorías sociales preexistentes -como los eclesiásticos-, conscientes de su continuidad histórica y de su “calificación”, lo que les proporciona una autoimagen de seres autónomos e independientes del grupo social dominante. Estos intelectuales tradicionales logran reproducirse en base a un déficit al interior de los grupos subalternos: existen, a juicio de Gramsci (1999), grupos sociales incapaces de elaborar sus propios intelectuales o de asimilar a otros estratos, tal como sucede con el campesinado en Italia.

La relación entre los intelectuales y el mundo de la producción no es inmediata, puesto que está mediada por el tejido social y superestructuras en que los intelectuales se desempeñan como funcionarios. Gramsci (1999) plantea dos modos por los que se posicionan orgánicamente los estratos intelectuales en relación con las clases fundamentales. Por un lado, la “sociedad civil”, esto es, el conjunto de organismos vulgarmente llamados “privados”; y, por otro, la “sociedad política o Estado”, correspondiente a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad y al de “dominio directo” o de mando que se expresa en el Estado y el gobierno jurídico.

En definitiva, los intelectuales pueden ser divisados como una suerte de “encargados” por el grupo dominante para el ejercicio de las funciones subalternas de la hegemonía social y del gobierno político. Esto se realiza por la vía de consensos “espontáneos” en las masas, o bien mediante el aparato de coerción estatal que asegura legalmente la disciplina entre los grupos que no “consienten”, ni activa ni pasivamente, a tal dominio. Allí la gama de medios de reproducción ideológica es extensa, incluyendo el sermón, la escuela, la instrucción, la moral, la justicia, la asistencia, entre otros (Gramsci, 1999).

### 2.2.3. De regreso a la autonomía de lo cultural: la episteme, los campos y el “intérprete”

Se señalaba que uno de los avatares que presentó el “giro cultural” para el desarrollo del pensamiento social y político fue cuestionar el papel del intelectual en la sociedad. Esa crítica se desencadenó sobre todo en sociedades con mayor tradición de debate público como Francia. País, justamente, en donde se intentó superar el existencialismo con el

“estructuralismo”, que, interpelando a una serie de disciplinas y corrientes teóricas previas, abarcó un conjunto de intentos teóricos cuyo principio aglutinador fue el “descubrimiento” de la primacía del lenguaje o del “símbolo”. Sin embargo, a poco andar, dada la inestabilidad de una corriente tan variada, se produjo una ambigua pero concreta transformación que dio paso, por un lado, a la reducción a una especie de cientifismo, a método y técnica analítica (en la semiótica) y, por otra, en el terreno específico de la mutación del estructuralismo en ideologías activas de las cuales podían deducirse consecuencias éticas, políticas e históricas, al “post-estructuralismo” (Fontana, 2001).

Este cambio, que surge del rechazo de los jóvenes de los años sesenta a la ortodoxia académica que basaba sus análisis en causas económicas y sociales, fue trocado por la crítica a los textos y por el análisis cultural, teniendo en común una reivindicación del papel de la cultura que fue apuntalada por una serie de nuevos planteamientos antropológicos absorbidos por otras disciplinas de las ciencias sociales. De este modo, el estudio de la cultura como producto de la sociedad cedió terreno al de la “construcción cultural de la realidad” (Fontana, 2001), conllevando no sólo una vuelta a enfoques defensores de la autonomía cultural dentro de la organización societal, sino que, incluso, en los casos más extremos, a plantearse derechamente que la cultura estaría por sobre la sociedad, en el sentido de enfatizar más las representaciones sobre la realidad que la realidad misma.

En ese panorama Michel Foucault plantea su visión sobre los intelectuales, sosteniendo que la acción de estos se sustenta en su relación con los “regímenes de verdad” imperantes dentro de la ciencia y, en general, dentro de la sociedad. Para él, tradicionalmente la politización del intelectual se realizó a partir de la posición que tal personaje ocupara en la sociedad burguesa y en el sistema capitalista, así como en su propio discurso, pues en aquel descubría las relaciones políticas que la gente común no percibía. Al intelectual, así, se le permitía arrogarse el derecho a hablar de lo verdadero y la justicia, en tanto representante de la universalidad, fuera por su elección moral, teórica o política (Foucault, 1979).

Pero con la extensión de los medios de comunicación e información, las masas ya no necesitan de este personaje para saber. Se desplaza la importancia de los intelectuales a

enfrentar el sistema de poder que obstaculiza, prohíbe e invalida ese discurso universal, y el saber que él extiende. Logrando mayor inmediatez con las luchas cotidianas, sus nuevos adversarios asumen otras formas (multinacionales, aparatos judiciales, policial) que lo obligan ya no a ayudar a la “toma de conciencia” de los demás, sino a hacer aparecer ese poder difuminado. La lucha, por ello, ya no es totalizadora sino parcial, entendido como lo local o lo regional. Así, ya los intelectuales no cumplen el papel histórico de ligar teoría y práctica, dado que la relación entre ellas cambia: la teoría ya no traduce una práctica, sino que es práctica en sí misma (Foucault, 1979).

Distingue entre los intelectuales universales y específicos, siendo el escritor –en sentido amplio- la expresión más plena del primero, como portador de significaciones y valores en los que todos pueden reconocerse. El segundo, por su parte, deviene en el “sabio-experto” que vincula la posición específica que ocupa en el orden del saber con su posición política (Foucault, 1979). Ahora bien, hoy el intelectual predominante es quien ocupa una posición específica ligada a las funciones generales del dispositivo de verdad de la sociedad, sumado a su posición de clase y condiciones de vida y trabajo. La lucha del intelectual, por tanto, se produce a nivel del “régimen de verdad” imperante, aunque esto no signifique luchar *en favor* de la verdad, sino en torno al estatuto de verdad y al papel económico-político que ésta juega. No es liberar la verdad de todo sistema de poder, sino separar el poder de la verdad de las formas de hegemonía, en el interior de las cuales funciona (Foucault, 1979).

En otra propuesta, Pierre Bourdieu considera a los intelectuales personajes bidimensionales que sólo existen y subsisten como tales si es que, por una parte, son investidos de una autoridad específica conferida por el mundo intelectual autónomo -esto es, independiente de los poderes religiosos, políticos y económicos- cuyas leyes específicas ellos respetan, y si, por otra, implican tal autoridad en las luchas políticas (Bourdieu, 1992). Entendiendo a los individuos configurados por la ciencia como agentes, Bourdieu (1995) señala que estos son socialmente constituidos como activos y actuantes únicamente en los *campos*, en donde producen efectos sobre él. Esta premisa teórica lo lleva a plantear la existencia de un *campo intelectual*, de cuyo funcionamiento depende el carácter específico de los intelectuales y de lo que éstos aportan a la lucha política.



Como en todo campo social, predomina un tipo específico de capital en disputa que diferencia a aquél de los otros: el capital simbólico. Pero este capital que diferencia a la generalidad de los campos culturales (artístico, científico, intelectual) respecto de otros campos (político, económico), se diferencia internamente como *capital simbólico específico* (Gil, 2009), en conjunto con los grados de autonomía relativa respecto del campo de poder (Bourdieu, 1992). Para el campo intelectual -y fundamentalmente el subcampo de las ciencias sociales-, el capital simbólico específico es la *autoridad científica o intelectual*, que, definida inseparablemente como capacidad técnica y como poder social, constituye la capacidad de producir, imponer e inculcar la representación legítima del mundo social.

En todo caso, la autonomía relativa de este subcampo es reducida, debido a que el poder de representación legítima del mundo social es una cuestión que permanentemente es objeto de luchas en el campo de poder (Bourdieu, 1976). La autonomía relativa, además, no sólo considera la naturaleza de las coacciones externas y el modo en que se ejercen, sino también las formas de resistencia opuestas al campo en cuestión (Bourdieu, 1995). En el campo intelectual, y específicamente en el de las ciencias sociales, el derecho de admisión es poco exigente y la censura propiamente científica es reducida, dado que proposiciones sin sustento tienen muchas posibilidades de afirmarse (Gil, 2009). La reivindicación de la autonomía, que está inscrita en la existencia misma de cada campo de producción cultural, siempre debe tener en cuenta obstáculos y poderes que continuamente se renuevan. En el caso de las sociedades contemporáneas, la producción cultural se enfrenta a una mercantilización de la cultura, en donde el dominio de la economía se ejerce no sólo externamente por la vía de los mecenazgos privados o estatales, sino también de modo interno mediante el control de los medios de producción y difusión cultural, y hasta de las instancias de consagración (Bourdieu, 1992). Por ello, al interior de las ciencias sociales los agentes más heterónomos tienen más posibilidades de éxito, dado que comúnmente están dotados de apoyos políticos, materiales e institucionales (Gil, 2009).

Es necesario considerar al campo intelectual en el contexto más amplio del *campo de poder*, dado que éste asigna, como resultado de las relaciones de fuerza y de lucha en su

interior, la posición determinada que en el mundo social ocupan los intelectuales (Bourdieu, 1971). Por más autonomía existente, el campo intelectual se encuentra siempre determinado en su estructura y función por la posición ocupada en el interior del campo de poder. La posición de los intelectuales debe analizarse en relación con la estructura de poder, a la vez que se considera la estructura de las relaciones objetivas entre las posiciones de los grupos en competencia en el campo, y se cruza el análisis de estas estructuras externas con el del *habitus*, que permite entender las disposiciones ético-políticas que guían la producción cultural de los intelectuales. Aunque la base de su autoridad es específica a un campo social, las características de su poder social los llevan a ser quienes hablan con la ambición de lo universal. En relación con el *habitus*, su producción cultural siempre está atada al “inconsciente histórico” de la experiencia del campo intelectual singular en el que se forman y movilizan (Bourdieu, 1992). Esto, al menos en el campo intelectual, está a la base del conflicto entre los intelectuales de un mismo país o entre países diferentes.

Una tercera aproximación influyente es la de Zygmunt Bauman (1987), quien describe al “intelectual postmoderno”. Término antitético no sólo a la noción misma de intelectual, sino a su contenido, en la medida que parte de la premisa de que el intelectual, tras la disolución del marxismo como alternativa política viable en las sociedades occidentales y debido al alto desarrollo de la cultura de masas y de la sociedad de consumo, no es capaz de establecerse como “conciencia” de su sociedad, constituyéndose en ejemplo para sus compatriotas, como defensor de la razón y la libertad. Así, si el intelectual de la modernidad *legislaba* sobre la sociedad, imponiendo sus percepciones de la realidad a una ciudadanía sin capacidad de réplica, el “intelectual postmoderno” no intenta imponer una determinada visión sobre las masas, sino facilitar la comunicación entre los diferentes colectivos o comunidades de sentido que conviven en las sociedades multiculturales. Tienen la capacidad de trascender su propia comunidad de origen, para actuar como *intérpretes* en el diálogo entre miembros de culturas diferentes, sin inscribirse plenamente en ninguna de ellas. De tal suerte, si el legislador poseía la autoridad para establecer los límites entre la cultura de élite y la cultura popular, entre la minoría y las masas, el intérprete pierde esa capacidad y se sumerge en las corrientes de la cultura popular como cualquier otro miembro de la sociedad (Bauman, 1987).

Visto así, el “intelectual postmoderno” de Bauman es similar a la intelectualidad “sin ataduras” de Mannheim, pero sin su papel central en las sociedades modernas: como mediador de los procesos ideológicos que mantienen o quebrantan el orden social. De este modo, se deja a los intelectuales fuera de los grandes intereses sociales, al constatar que su rol de vanguardia y provocación, esto es, el modernismo triunfante arraigado en su figura se desploma, ante un mundo globalizado que poco entiende y poco puede controlar.

Finalmente, Russell Jacoby (1987) problematiza la relación entre las generaciones intelectuales y la vitalidad de la cultura pública. Para este autor, si bien es importante la cada vez mayor prevalencia de las fuerzas del mercado en lo que es o no públicamente visible -incluyendo el papel de la televisión en la “mediatización” de los intelectuales-, enfatiza en cómo la reestructuración de las ciudades, la desaparición de la bohemia y la expansión universitaria afecta a los intelectuales. En particular, se preocupa menos del eclipse del público que de los intelectuales públicos (publicistas, editores de revistas no comerciales, autores de panfletos, escritores sobre temas generales). Así, a causa de los cambios estructurales, especialmente la hegemonización de la universidad sobre la vida intelectual, los intelectuales más jóvenes ya no necesitan ni quieren un público más amplio: los campus son sus hogares, los colegas su auditorio y las monografías especializadas sus medios; a lo que se suma que su progreso y salarios dependen de la evaluación de especialistas, dependencia que afecta lo que abordan y el lenguaje que emplean.

### **2.3.El pensador, el ideólogo y el tecnócrata de las políticas de ajuste: la especificidad latinoamericana**

Los desarrollos reflexivos propiamente latinoamericanos han dado lugar a una serie de líneas matrices que orientan el rumbo de las ciencias sociales locales, tal como, desde antes, lo hace su reconocida ensayística. Primero, dentro de ellas se advierte la búsqueda permanente de una identidad americana, asociada a la vocación universalista y cosmopolita que permea a unas sociedades marcadas por su situación periférica en el mapa mundial del conocimiento y que, a raíz de ello, produce un desfase entre asimilación intelectual y reordenamiento institucional, derivando en que se cumplan más tardíamente ciertas

empresas conectadas a la actividad cultural. Segundo, se encuentra la idea de que los pueblos latinoamericanos proceden de una matriz común, histórica y cultural, que determina una especie de solidaridad en los destinos de las sociedades locales. Tercero, predomina la pregunta por el devenir latinoamericano, surgida en la costumbre de ubicar, geográfica, cultural y económicamente a la región en los marcos de una matriz de subalternidad –periférica, dependiente, excluida, colonizada-, que, por tal debilidad, les impediría a las ciencias sociales dejar de articular pasado, presente y futuro, derivando aquello en una orientación hacia la política de éstas (Aguirre, 2003).

El problema, sin embargo, es que para algunos aquello distorsiona la necesaria independencia que debiese tener el pensamiento, así como la propia actividad de la intelectualidad, puesto que impide dotar al campo intelectual regional de una autonomía similar a la propagada en Occidente en el siglo XX (González, 2008). Para otros, por el contrario, es justamente esa permanente vinculación entre acción y pensamiento lo que distingue al pensar latinoamericano, siendo difícil separarlo de la política (Sigal, 1991).

Lo anterior implica que el asunto de la autonomía en el juicio, relevante a raíz de la complejización que experimentan las sociedades latinoamericanas a comienzos del siglo XX, se presenta no como una oposición entre dos categorías puras, *autonomía* o *compromiso* (posible solamente ante la existencia de campos de poder autónomos), sino como un dilema permanente. Dilema que debe ser mirado a la luz de las condiciones histórico-concretas a las que se enfrentan los intelectuales en el subcontinente, a partir de las cuales emergen nuevas conceptualizaciones sobre su carácter y función.

De este modo, lo propio en el siguiente apartado es que esa supuesta dualidad entre actuar y pensar, entre formular los medios o los fines, no se resuelve en favor de ninguna de las dos opciones. Cuestión que, sobre todo entre observadores externos, puede llegar a ser visto como un problema, un déficit o una “desviación” del pensamiento regional.

### 2.3.1. Intelectualidad y construcción de la nación. ¿Hombres de acción o de ideas?

En la segunda mitad del siglo XIX, la línea divisoria entre los escritores latinoamericanos estaba entre el liberalismo y el conservadurismo. Todos, compartiendo una sólida formación clásica y no pocas veces el mismo origen social, dejan registro de sus diferencias en los debates constitucionales y sobre los Códigos Civiles. La oposición se despliega en torno al grado de secularización al que deben adherir las nuevas naciones latinoamericanas, pues mientras el anticlericalismo liberal defiende la educación laica, la separación del Estado y la Iglesia y la libertad de expresión y creencia, los conservadores más recalcitrantes y católicos se muestran afines a un integrista asociado a la mantención de la educación religiosa en las escuelas públicas y a un control sobre las conciencias, proveniente tanto de la fijación del catolicismo como religión oficial como de la prohibición del culto privado (Monsiváis, 2007).

A la cabeza de tal esfuerzo destaca el primer tipo de intelectualidad latinoamericana: los “pensadores”. Hombres de acción y de pensamiento, que, entre sus miembros, cuentan con personajes como Bolívar, Bello o Sarmiento, figuras que toman en sus manos la doble tarea de “inventar” la nación y de gobernar sus países. Se trata de personajes que no pueden encerrarse ni en la categoría de políticos ni de intelectuales actual, puesto que, identificados con el pensamiento liberal -republicano o democrático-, usan su condición de juristas, periodistas o militares para fungir en un mismo movimiento proyectos culturales con programas de gobierno. Son, por eso mismo, fundadores de instituciones políticas, universidades y escuelas primarias, al tiempo que autoridades políticas o funcionarios de gobierno. Bajo la triple consigna de construir la Patria, desterrar la ignorancia y denunciar la desigualdad (Monsiváis, 2007), realizan una labor determinante para la trayectoria de las nacientes naciones. Y, dada la importancia de su posición, desarrollan una actitud crítica que abre espacio a las querellas con otros líderes y grupos intelectuales y políticos.

Rama (2004) conceptualiza aquello a través de su concepto de *ciudad letrada*, en torno al cual sostiene que, fundamental para la permanencia del dominio social desde la Colonia y hasta el siglo XX, es la operativa de un grupo especializado que, imbuido de una elevada

conciencia de sí mismo y de su ministerio, cumple una destacada función de dirección cultural dentro de las sociedades latinoamericanas, como ente administrativo que busca separar civilización de barbarie. Aunque surge como parte de la empresa evangelizadora, la *ciudad letrada* permanece en el tiempo, logrando transformar su control sobre la letra en un potencial autónomo que institucionaliza en audiencias, capítulos, seminarios, colegios y universidades, que heredan los intelectuales de los albores de la República, accediendo a cargos políticos en los nuevos países que emergen.

Pero desde comienzos del impulso modernizador de fines del XIX, se produce una ruptura con la inercia decimonónica que promueve la profesionalización de la cultura, resultando de ello una reducción significativa de la habitual doble función que habían ejercido los hombres públicos, como letrados y políticos, pasando a desempeñarse en un rol secundario como consejeros de estos últimos (Altamirano, 2010). Esa profesionalización, que ya ha reconfigurado el campo cultural al llegar la década de 1920, aleja de la política a una importante franja de profesionales liberales, los cuales, a raíz de la complejización de esta actividad, la dejan en manos de una nueva camada de políticos profesionales. Una profesionalización del escritor que, de todos modos, es selectiva, puesto que casi ninguno logra vivir únicamente de lo que escribe, permaneciendo ligado a las funciones estatales o al ejercicio de periodista (Rama, 2008).

Dentro de las definiciones de esta intelectualidad, Marsal (1966) señala como intelectuales a los que generalizan el saber, en forma más o menos literaria, para un público más amplio que su propio circuito profesional, pudiendo ser creadores o difusores del conocimiento. Distingue una “intelectualidad liberal”, que asume como base del cambio social las transformaciones de la cultura por sobre los cambios económicos y tecnológicos, por lo que sitúa su interés temático en cuestiones como la identidad o el carácter nacional. Contrasta lo material con lo espiritual, dando preeminencia a la excepcionalidad de sus países.

Zermeño (2003), por su parte, distingue al “pensador” del “intelectual”, por poseer este último un interés centrado en las letras y la cultura que remeda a la época del humanismo. Esa es, a su juicio, la seña del paso del siglo XIX al XX: de la consagración del actor

político y del sujeto de ideas en un mismo individuo, a la diferenciación social que produce la emergencia del académico y del científico en América Latina. Paso que, sin embargo, no lleva a la intelectualidad a renunciar a su vínculo con la política, sea por las necesidades vitales señaladas o por la debilidad institucional que en sus países se los impide.

Entonces, hablar de una estructuración del campo intelectual latinoamericano por fuera del campo político no es acertado. Impedir que la discusión sobre ideas se proyecte hacia ideologías políticas de más largo alcance, no tiene asidero en América Latina. Poco sentido tiene, además, dicotomizar las funciones del intelectual latinoamericano como “hombre de ideas” u “hombre de acción”, en la medida que esa doble actividad es justamente lo que lo define como tal, al menos desde mediados del siglo XIX y hasta comienzos del XX.

### 2.3.2. Intelectualidad y modernización social: el ideólogo del desarrollo económico

Dominado el campo cultural por escritores en la primera mitad del XX, desde fines de los cuarenta crece el número de científicos sociales (economistas, sociólogos e historiadores), dada la expansión de medios de comunicación tanto editoriales como audiovisuales (Monsiváis, 2007) y el mayor acceso, especialmente entre las capas medias, a los beneficios de la modernización social, en especial en lo educativo. Aquel cambio se produce en medio de los reajustes de la segunda posguerra y del predominio alcanzado por las ideologías de la modernización en América Latina, las cuales instauran una “época de urgencia” respecto a la necesidad de llevar a cabo una transformación total de las estructuras sociales, políticas y económicas del subcontinente, que se diagnosticaba eran ineficaces para asumir los nuevos desafíos venideros, dado su atraso (Medina Echavarría, 1963).

Esto es significativo en un contexto en el que la propia idea de desarrollo cambia. En efecto, el verbo con que se refería al crecimiento ya no será más *desarrollarse* sino *desarrollar*, lo que implica una actuación que puede hacerse activamente. En paralelo, aparece una nueva concepción de la pobreza en términos de “subdesarrollo”, de modo que el mundo comienza a dividirse entre países “desarrollados” y “subdesarrollados”. Ambos, iguales en dignidad y estatus, no son vistos desde ahora como formas contrastantes, sino

como parte de un continuo, esto es, como fases de un único proceso. Ser desarrollado, entonces, implica haber hecho “lo adecuado”, lo que entre los científicos sociales fomenta un esfuerzo por arribar a una fórmula única y definitiva de concretarlo (Fontana, 2001).

La “teoría de la modernización” se convierte en la viga maestra de esta meta intelectual y política. Los factores para completar “las etapas del crecimiento económico” se convierten en el fundamento teórico de la Alianza para el Progreso, y ello en una tarea para una intelectualidad que se autopercibe como élite mandatada a apoyar la reestructuración de los valores y actitudes vigentes, a sortear el atraso económico y a contribuir a solucionar la crisis de integración social que genera el proceso de cambio (Lipset y Solari, 1967). Los intelectuales, en especial los científicos sociales, ligados a un enfoque empírico y pragmático, profesionalizante y mayormente funcionalista y cuantitativo (Garretón, 2014), conducen los esfuerzos nacionales por alcanzar el desarrollo económico.

En torno a estas coordenadas se estructuran las definiciones sobre el carácter y la función social de los intelectuales, en un contexto que se complejiza y que tiene a las “sociedades dependientes” como marco de análisis. El propio Marsal (1966) va a distinguir entre los antiguos ideólogos políticos, herederos del siglo XIX y adscritos al nacionalismo cultural, y una intelectualidad desarrollista -la de los *ideólogos del desarrollo económico*- que experimenta el dilema de investigar su realidad con marcos de referencia extranjeros, al ser educados en universidades occidentales. Diferencia a estos dos tipos de intelectualidad de una tercera de carácter marxista, opuesta al espiritualismo nacional de los ideólogos liberales y a la neutralidad valorativa de los científicos sociales del desarrollo, para la cual el problema radica en su lejanía respecto a las posiciones de poder y, por ello, en su limitada capacidad de intervención política durante la primera mitad de los sesenta.

Tales rasgos los confirma Di Tella (1966), para quien estos son nuevos intelectuales que emergen con credenciales académicas de las ciencias sociales y que destacan por cumplir un rol estratégico para la toma de decisiones en los proyectos de desarrollo latinoamericanos. Son productores de ideas que ejercen una función más asesora que directiva, aunque algunos de sus miembros desempeñen funciones cercanas al poder, no



pudiendo acceder, sin embargo, a la categoría de “los que mandan”. Su centralidad está en la incapacidad de cualquier grupo tomador de decisiones para actuar sin un grupo intelectual detrás, en tanto ellos producen las justificaciones de la acción y los materiales informativos y científicos necesarios para guiar esa acción.

Un tópico de relevancia problematizado en esta época es la relación entre intelectuales y universidad. Sobre ese emplazamiento *sui generis* para la acción de los intelectuales, sobre todo por el grado de politización de los planteles en América Latina, Soares (1970) identifica al espacio estudiantil como uno aislado, cerrado y “amortiguado”, que permite desarrollar valores propios, independientes de la sociedad general. A su juicio, existe una disonancia entre la posición ideológica de los estudiantes y su clase social, señalando que lo que opera entre los aspectos estructurales y superestructurales es la importación de ideologías “extrañas” a los valores dominantes.

En resumen, la figura del ideólogo del desarrollo económico, cuya base en cada país es cierta ideología del desarrollo nacional, a través de la cual se intentan aglutinar intereses sociales contradictorios, resulta de la especialización y profesionalización de las funciones intelectuales y de la tecnificación con que se asocia la trayectoria de la modernización.

### 2.3.3. Intelectualidad y lo nacional-popular: populismo, socialismo y democracia

En paralelo a esta figura se constituye relevante sobre todo en los años sesenta: el *ideólogo del partido o movimiento político*. Este personaje, colaborador de las fuerzas sociales organizadas, que apoya su formación y actividad, mezcla habilidades discursivas y negociadoras propias de la política, con otras técnicas e intelectuales. Lo hace bajo diversas orientaciones políticas, aun cuando se haya tendido a asociar a las organizaciones de la izquierda. Su existencia, a menudo, como consecuencia lógica del binarismo desarrollo/subdesarrollo, ha sido vista como expresión del atraso social y cultural de las sociedades latinoamericanas y, en general, del llamado Tercer Mundo, en relación con el desigual acceso a la educación que hay en éstas y a causa de la escasa racionalización que pervive en su funcionamiento estatal (Uricoechea, 1967).

Las líneas de conceptualización en torno a esta forma de intelectualidad han sido desarrolladas en torno a dos problemáticas presentes en la historia latinoamericana: la relación entre la intelectualidad y el partido y aquella entre la intelectualidad y los sectores populares, sean estos últimos considerados como proletariado organizado o bien como un indiferenciado “pueblo”, en los contextos en que operan regímenes populistas.

Las primeras elaboraciones sobre ambas relaciones surgen en década del veinte. En ese agitado contexto, cuando en los campos cultural y político se erige como movimiento social el de la juventud y se impone la interpretación generacional, un espacio que se multiplica es el de las revistas culturales que cruzan las letras y la política, en el genérico espacio de las izquierdas latinoamericanas. Las numerosas *Claridad* del subcontinente enfatizan colocar al intelectual “al lado” de los humildes, del pueblo y de las luchas sociales. Así, se permite que, a la par del intelectual, emerja como concepto el de “trabajador”, subrayando su lugar social ligado a la producción y la decisión de los estudiantes universitarios de “bajar” de su torre de marfil para acercarse al pueblo organizado. En particular, bajo influencia anarquista y marxista, las capas medias y, en general, los grupos antioligárquicos instauran la siempre reivindicada relación entre obrero y estudiante (Funes, 2006).

En estos años, además, la deriva epocal que agita el diálogo entre la *vieja* Europa y la *joven* América, se adopta, para definir la función social del intelectual, en a lo menos dos caminos. Por un lado, aquel que lo caracteriza como guardián de la tradición, cuya tarea es “activar conciencias” y representar a los grupos marginados (pobres e indígenas), ejerciendo un “liderazgo moral frente a la mediocridad general” o ser guía, intérprete y traductor del espíritu nacional, llevando adelante una “misión civilizatoria” (Funes, 2006).

Por otro, se encuentra una posición relevante como la de Mariátegui, quien analiza la función social del intelectual en torno a las coordenadas de la modernidad y, a lo largo de su obra ensayística y periodística, aísla y valora los atributos que le son inherentes como sujeto social. Así, agrupa a los intelectuales en cuatro tipos: los “de panteón”, asociados al orden tradicional que en América Latina quiere decir “positivista y académico”, es decir,

que escriben, producen y se identifican con el poder; los “de la reacción”, que, oponiéndose a la sociedad burguesa, buscan en el pasado las formas de suturar la crisis del presente; los “de izquierda”, que intervienen y actúan políticamente en la dirección del cambio y la impugnación del viejo orden, demostrando un compromiso vital que, sin embargo, no renuncia a cierto esnobismo asociado a su preferencia por especular antes que actuar; y los revolucionarios, izquierdistas que han recorrido un camino de maduración hacia una práctica política decididamente volcada a la causa revolucionaria (Funes, 2006).

Ahora bien, al avanzar las décadas, la elaboración sobre el nexo entre intelectualidad y clase obrera se complejiza, tanto por la maduración de los grupos políticos de izquierda como por la mayor penetración del marxismo en América Latina. Lo promueve la tensión entre una elaboración teórica y una práctica política que ven en tal nexo algo “necesario”, en oposición a la experiencia de los intelectuales con los trabajadores, que mostraba hasta qué punto eso que parecía necesario era posible. Por lo mismo, en el seno de la izquierda, el mayor incentivo para pensar tal problema se encuentra en los países en donde proliferan los populismos, especialmente en Brasil y la Argentina.

En este último país, tal debate es arduo tras el fin del primer peronismo, especialmente en la izquierda socialista, toda vez que ésta busca escapar de la marginalidad política, ampliando sus bases de apoyo más allá de las capas profesionales. Su problema estratégico es cómo lograr el encuentro entre unos intelectuales no peronistas con una clase obrera que sí lo es en una aplastante mayoría. Del mismo modo, a nivel teórico, se intenta sortear la táctica, ocupada por todos los populismos clásicos, de recusar todo discurso crítico contra esta ideología alegando una supuesta impostura de los intelectuales, al no poder entender a los intereses populares por su posición social, así como tampoco poder responder a los intereses nacionales por ser “europeizantes” (Portantiero y De Ípola, 1981).

Portantiero (1957) aborda esto desde el enfoque generacional. Allí, parte del dilema del joven de clase media que se siente atraído culturalmente por los obreros y que se hace o trata de hacerse su dirigente político, siguiendo el deseo de hegemonía de su propia clase contra el pueblo. La forma de superar aquello, sin embargo, es que los jóvenes intelectuales

rompan sus ataduras de clase y se solden a la “clase progresiva”, subordinándose a los “viejos” de ésta (a la vieja vanguardia política). De este modo, el esfuerzo político debe situarse en que los intelectuales de clase media sean capaces de renunciar a sus privilegios económicos y se sumen al pueblo, subordinando a este último la cultura que, por su condición de clase, poseen en medida superior.

José Aricó (2005), sin embargo, critica a Portantiero por omitir que esa forma de presentar el problema encubre que ella es producto de diferencias reales en términos de ideas y posiciones concretas. Si bien no arriesga una respuesta definitiva a la pregunta sobre cómo vincular a intelectuales no peronistas con franjas obreras que sí lo son, afirma que o el intelectual es producido por la propia clase o la alianza entre intelectuales y obreros se resuelve en la política. Y es que sólo allí se procesarían las diferencias entre posiciones sociales e ideas, que son con las que se parte al producirse el acercamiento entre ambos.

En Brasil, Carlos Nelson Coutinho (2016), reapropiándose conceptos gramscianos, aborda la relación entre cultura y democratización y, más precisamente, entre esta última y los intelectuales. Así, toma la idea de los aparatos “privados” de hegemonía, en tanto expresión de una organización de la cultura no directamente subordinada al Estado, sino que resultante de la trama compleja y pluralista de la sociedad civil que se conforma en las sociedades modernas. En ese marco, los intelectuales pueden articularse con una esfera de organismos “privados”, ejerciendo sus actividades *a través y en el seno* de esas formas autónomas de creación y difusión cultural. De este modo, con la emergencia de la sociedad civil y su organización de la cultura, los intelectuales se ligan a sus clases de origen o de adopción -y, por medio de ellas, a la sociedad como un todo- a través de la mediación de tales aparatos. Ello permite que eclosionen formas de intelectualidad diferentes a las del funcionario de Estado o del intelectual “sin vínculos” (cuya actividad sólo se compromete consigo mismo), tales como el intelectual del partido, el ligado al sindicato o el que trabaja en periódicos. El “intelectual orgánico”, por tanto, sin perder necesariamente su autonomía e independencia, posee mayor conciencia del vínculo indisoluble entre su función y las contradicciones concretas de la sociedad.

#### 2.3.4. Intelectualidad y tecnocracia: los tecnócratas de las políticas de ajuste

Buena parte de los estudios que abordan el asunto de las tareas intelectuales de la política en América Latina en las últimas décadas, se centran en el ascenso de las tecnocracias que impulsan las reformas de ajuste estructural. Empero, estos responden a un momento histórico particular y no a la singularidad del fenómeno tecnocrático en las sociedades modernas (incluyendo la latinoamericana), que existe desde la formación de estas.

En efecto, el *ethos* tecnocrático se relaciona con los sucesivos proyectos de instalación de la modernidad, empujados por un cúmulo de creencias (en el racionalismo, el cientificismo, el industrialismo) que, a su vez, configuran el seguimiento de conceptos como el progreso, la industrialización, la racionalidad, la ciencia y la técnica (Estévez, 2006). Por ello, la tecnocratización de las sociedades se vincula al hecho de que la ciencia y la tecnología pasen de ser instrumentos para modernizarse a fines en sí mismos, deviniendo en una ideología que no reflexiona sobre los fines morales de las aplicaciones científicas y que reduce la teoría del conocimiento a la teoría de la ciencia (Habermas, 1992). La tecnocracia como sujeto y la tecnocratización de las tareas intelectuales es un fenómeno cuya valoración no se rige por una sola interpretación. Y es que, en una doble línea de debate, la tecnocracia y su discurso pueden ser definidos como la expansión de la racionalización instrumental que coloniza los espacios del entendimiento comunicativo (Habermas, 1992) o como un actor cuyo conocimiento es significativo en la sociedad, ante la necesidad de resolver la complejidad organizada que en ella se acrecienta (Bell, 1994).

En América Latina, en el siglo XX el fenómeno tecnocrático se dio en estrecha ligazón con la emergencia y ascenso de los sectores medios, toda vez que en torno a su ideología - incluyendo valores como el mérito, el positivismo de hacer de la ciencia principal guía del Estado (en vez de la religión), la expansión de la educación pública o el fortalecimiento de la ciudadanía- se defienden valores contrarios al Estado oligárquico. En el siglo XX, por su parte, el desarrollismo se vale de un personal tecnocrático para empujar planes y programas de desarrollo, en base a un reclutamiento de técnicos que excede los roles estratégicos en

áreas tradicionales del Estado oligárquico, tales como la seguridad, y que los extiende a espacios como las oficinas de planificación o de industria (Silva, 2010).

La última oleada de dictaduras militares, sin embargo, lleva al fenómeno tecnocrático a adoptar nuevos rasgos. En particular, ya en los setenta se vislumbra el ascenso de nuevas tecnocracias, conducidas por una ideología científicista y economicista, que integran las alianzas de poder en que confluyen militares y fracciones del empresariado industrial y financiero, nacional e internacional (O'Donnell, 1972; Cardoso y Faletto, 1977). Destaca como novedad el que, a su pretensión científicista, agregan el predicamento de que el mercado es el mejor asignador de recursos. Esto último, propio de una pléyade compuesta, en su mayoría, por economistas “monetaristas”, al extenderse a otras áreas como la administración o la política, origina una específica *tecnocracia de las políticas de ajuste*.

El de tecnocracia, de todos modos, es un concepto polisémico. Uno en el que, siguiendo a Plaza (2015), pueden distinguirse tres enfoques aplicados empíricamente en las ciencias sociales. Primero, la tecnocracia entendida como una élite que penetra dentro de la administración estatal y que, a diferencia de los dos grupos que históricamente imperan en la conducción del Estado moderno<sup>12</sup>, goza de acceso y autonomía en la toma de decisiones en sus respectivas áreas de conocimiento, aun cuando incluso pueda tomar decisiones no necesariamente técnicas o circunscritas a su propia *expertise*. Tanto la sociología como la ciencia política han teorizado en torno a una serie de tipos ideales que surgirían al combinar distintas proporciones de habilidad política y técnica, tales como los políticos-técnicos (*technopols*), los tecnoburócratas y los tecnócratas, usando para ello criterios de mérito, calificación, educacionales, profesionales y/o de prestigio social (Joignant, 2010).

Estrada (2005: 263) ha propuesto el concepto de *élite intelectual de la producción política* para designar a “la fuerza productiva social de la producción política de las reformas

---

<sup>12</sup> La élite política, representante al interior del Estado de los intereses de los grupos sociales y encargada de la definición de los fines en las sociedades modernas, a partir de los mecanismos de representación que ella establezca como legítimos; por otra parte, la élite burocrática, subordinada a la anterior y encargada de evaluar los medios concretos para llevar adelante los fines sancionados por la élite política (Weber, 2008).

estructurales, intérprete del ‘interés capitalista general’ de la época, que al tiempo que produce, es producida, es producto social y es consumo social y, dadas las condiciones actuales del consumo, prefigura nuevas condiciones de la producción y del consumo”. Se trata de un grupo que, detentando el monopolio de ciertas calificaciones y destrezas relativas al conocimiento, es una especie de intelecto general del capital, con la función específica de conducción política (directa o mediada) de un proyecto constituyente de nuevas formas de dominación y hegemonía. En ese sentido, antes que un elitismo relativo a una misión modernizadora (“ideólogo del desarrollo económico”) o al escaso acceso al conocimiento (*ciudad letrada*), Estrada lo sitúa en la concentración del poder político, económico y social, y de las decisiones políticas en el orden neoliberal.

En segundo lugar, se encuentra el enfoque institucional, preocupado por la relación que se establece entre el aumento de complejidad en las sociedades modernas y la necesidad de una gestión eficiente. En él, la “institucionalidad tecnocrática”, o devenida en ello, es la que no implica directa o nominalmente la representación de intereses, permitiéndole a su personal disfrutar de una mayor autonomía y capacidad operativa, por sobre la esfera política y la arena democrática. Lo significativo, de este modo, es cómo, a partir de sus propios valores de eficiencia, tales instituciones logran colonizar desde sus paradigmas otros espacios donde se desarrolla política pública (Plaza, 2015).

Finalmente, el enfoque de la tecnocracia como ideología. Allí se busca comprender a la tecnocracia a nivel de su mentalidad, en tanto sujeto que comparte un conjunto de perspectivas generales sobre la manera de formular e implementar políticas públicas. Paradojalmente, la ideología tecnocrática rechaza las limitaciones ideológicas y políticas y centra su atención en los objetivos del método y en recomendaciones con arreglo a logros y fines (Markoff y Montecinos, 1994). Por ello, los tecnócratas comparten una forma de analizar los medios instrumentales utilizados para lograr fines sociales y un conjunto de criterios implícitos para evaluar el éxito político (Centeno, 1992). De modo que, más que un sistema ideológico compartido, su mentalidad se centra en la configuración de patrones de reconocimiento, generación de opciones, y posicionamiento de la agenda que determina en gran medida la elección final de resultados (Centeno, 1992).

La potencia de ese marco es tal, que la intelectualidad tecnocrática no sólo determina la validez de las respuestas a determinadas problemáticas, sino también las preguntas admisibles que la política y la sociedad deben hacerse. Esto constituye el último paso de la escisión entre fines y medios en la definición de las tareas intelectuales y los sujetos que las llevan adelante, a causa de lo que se ve como la negación definitiva de los primeros.

### 2.3.5. Mediatización, masificación y redes transnacionales: ¿una intelectualidad “postmoderna” desde América Latina?

Una última línea teórica sobre la intelectualidad latinoamericana se vincula a los conceptos de globalización y postmodernidad, en diálogo con la discusión europea y estadounidense, pero con problemáticas propias relacionadas con las estructuras en que impacta este cambio. Así, por ejemplo, si bien la cuestión de los públicos siempre ha sido una dimensión de análisis de los intelectuales, hoy este asunto alcanza nuevas dimensiones a partir del problema de la “mediatización” de ellos. De modo que, si Debray (1979) sostenía que el intelectual posterior a 1960 tendía a convertirse en celebridad televisiva, trastocándose su interés por cultivar su independencia en favor de alcanzar una columna personal, un programa de radio o de televisión, más tarde Bourdieu (1997) considera que los periodistas usurpan a los intelectuales su función, pues median entre el pensamiento y el gran público, a la vez que el intelectual se ve obligado a popularizar su discurso y a adaptar su imagen.

En América Latina, Montaña (2013) destaca que, aun cuando el ascenso de los *mass media* no significa el fin de la acción intelectual convencional, al estructurarse el nuevo espacio público sobre la base del principio mediático, los intelectuales clásicos se adaptan mal, puesto que los términos de la discusión y sus contenidos son condicionados por elementos ajenos a las lógicas del bien común (como el entretenimiento y el *rating*). Esto pone en evidencia la necesidad de contar con un perfil de intelectual que reactualice sus modalidades de intervención a fin de acompañar con nuevos esquemas de inteligibilidad las vías de construcción de sociedades democráticas en el marco del capitalismo.



Otro tema contemporáneo es el de la masificación del trabajo intelectual, vinculado tanto al derrotero de la universidad pública en la región como a la multiplicación de las redes transnacionales que los intelectuales establecen entre sí y con el resto del mundo. Una visión crítica sobre ello es la de Carlos Monsiváis (2007), para quien, desde los ochenta, se produce un desplazamiento de la *ciudad letrada* tradicional, surgiendo una *intelligentsia* humanista que trabaja en instituciones de gobierno y universidades, sobre todo privadas. Los “expertos” asumen las tareas intelectuales en su gran mayoría, al tiempo que un buen número de casas editoriales son absorbidas por *holdings* internacionales; el libre mercado norma la vida literaria como nunca y el crecimiento de la industria académica masifica la *ciudad letrada*. Esta situación tiene efectos sobre la universidad pública, la cual entra en una crisis intelectual y financiera, en tanto la aparición de la industria académica en las humanidades y las ciencias sociales canjea la teoría de “la torre de marfil” por la de las especialidades a ultranza. Así pues, pese a la profusión de revistas, libros, conferencias, simposios y mesas redondas, predomina una prescindencia del debate universitario en la sociedad, puesto que lo que se comenta ocurre en otros lugares como la prensa, las revistas, los medios electrónicos e incluso los partidos.

Una última propuesta teórica, influyente en América Latina, es la de Brunner y Flisfisch (1983). Visualizan una creciente intelectualización de la división y organización social del trabajo, cuyos efectos duraderos serían una mayor centralidad de las funciones intelectuales en general, un mayor peso específico de los trabajadores intelectuales, una importancia en aumento de la educación superior como aparato formativo de los trabajadores y de distribución de bienes valiosos, un rol crucial del Estado y de las políticas públicas en la construcción y desarrollo de los sistemas intelectuales de la sociedad, y nuevas formas de dominación inherentes a la intelectualización de la vida económico-social y cultural.

Sostienen que la constitución de la categoría intelectuales estriba un desafío de importación para las clases subalternas, pues éstas se juegan la ruptura con su subordinación social en la distribución más equitativa de los capitales de la sociedad. En ese sentido, abordan el tipo de estrategias que adopta la intelectualidad, diferenciando el sentido de las individuales respecto a las colectivas. Así, para el caso de las primeras, el problema de la relación entre

el cálculo originado en las situaciones de mercado y las exigencias de racionalidad sustantiva de valores se resuelve por medio de una compatibilización precaria que adopta la forma del compromiso. Las estrategias colectivas, a su vez, son aquellas perseguidas por un agregado de individuos frente al mercado de posiciones y en función de la valorización de posiciones relativamente escasas pero compartidas, que garantizan la monopolización de las oportunidades, propiciando formas de cierre social, en base a la tradición, por razones afectivas, por racionalidad de valores o con arreglo a fines. El primer caso es claro en los partidos políticos, mientras el segundo describe a las asociaciones profesionales.

Tales tesis han sido actualizadas hace unos años (Brunner y Flisfisch, 2014), siendo agregadas tres nuevas ideas. Primero, que ya no hay intelectuales a los que se les pueda adjudicar una funcionalidad determinada, porque tienden cada vez menos a una vinculación orgánica de clase, concentrándose en las controversias propias del campo del cual forman parte dentro del campo intelectual, que goza de autonomía relativa. Segundo, que en la sociedad actual no es requisito para la preservación del sistema capitalista una ideología que legitime su operación, de modo que la noción de hegemonía y el protagonismo de los intelectuales se ha redefinido, volviendo ociosas las creencias sobre la legitimidad del sistema y, en general, sobre el papel de los ideólogos. Y tercero, que la masificación de la educación superior diluye el carácter de servidores públicos que tuvo la élite cultural de clase media en la etapa nacional-popular, dado que al interior de la masa en incremento de trabajadores del conocimiento se libran ahora las principales batallas materiales y simbólicas. Esto significa que la expansión de la educación terciaria lleva a que la lucha entre grupos sociales se dé en los marcos del conocimiento, y ya no como lucha de clases.

Para estos autores, el resultado de lo anterior es la conformación de un campo intelectual “postmoderno”, ligado a la masificación y universalización de la educación superior. En él desaparecen las “minorías selectas” de grandes intelectuales, predominando más bien diferentes funciones del conocimiento distribuidas entre diversos grupos de trabajadores intelectuales. Esto impulsa toda clase de redes intelectuales, realizándose el principio por el cual, a mayor intelectualización de la sociedad y niveles de escolaridad, menor es el peso de los intelectuales en la sociedad. Se trata, en ese sentido, de una propuesta teórica que

reactualiza casi completamente la visión weberiana que identifica especialización con intelectualización, marginando la existencia de los intelectuales.

## **2.4. Fuerzas político-intelectuales y conflicto social. La mirada propia**

Luego de presentar los trazos fundamentales del debate dado al interior de la sociología occidental sobre la relación entre los intelectuales y el poder, así como la especificidad histórica y conceptual y las personificaciones que emergen de ella para y en América Latina, cabe exponer la síntesis propia que se propone a partir de tal relación y contraste.

### **2.4.1. Intelectualidad organizada y poder en América Latina: producción cultural y reproducción social en sociedades dependientes**

Al comienzo del presente capítulo se diferenciaba entre intelectualidad e intelectuales, haciendo ver que estos últimos, caracterizados por su visión global y una orientación estratégica hacia la política, constituyen, por definición, una élite social -aunque no en el sentido funcionalista que le asigna, normativamente, una función modernizadora o de mejoramiento de la sociedad- dentro del conjunto general de “productores culturales” en una sociedad moderna determinada. Una categoría social específica que, siendo elitaria conceptualmente, en América Latina lo es también históricamente y aún más hoy, tanto por la concentración del poder y de las decisiones políticas que se profundiza en las últimas décadas (Estrada, 2005), como por los niveles de exclusión política que se alcanzan en algunos países cuyos niveles de avance del neoliberalismo son mayores (Ruiz, 2013).

Ciertamente, sólo el estudio de la intelectualidad no basta para formular una interpretación general de la organización de la cultura en una sociedad<sup>13</sup>. Además, como principio

---

<sup>13</sup> Se retoma la definición de Williams (1994) para entender a la cultura como sistema significativo realizado, mediante el cual un orden social se comunica, se reproduce, se experimenta y se investiga, pero sin restringirse a las “actividades intelectuales y artísticas”, sino apelando a todas las prácticas significativas insertas en una gama de actividades, relaciones e instituciones, de las cuales algunas son manifiestamente “culturales”. Con mayor precisión, en este trabajo se abordan solamente lo que este autor denomina “formas tradicionales de producción intelectual”, entre ellas, la escritura y el debate público.

analítico, es necesario considerar el estudio de la intelectualidad y de los intelectuales en relación con los diversos grados de imbricación existentes entre las relaciones sociales culturales y el marco de relaciones sociales generales en cada sociedad, en un tiempo determinado (Williams, 1994; Gramsci, 1999). Esto implica entender que la función social de los intelectuales depende de las condiciones generales de la organización social y del modo de producción dominante, variando por lo tanto de una sociedad a otra en diferentes tiempos históricos. En el caso de este trabajo, el modo de organización social es moderno y el modo de producción capitalista. Siendo así, y a partir de lo extraído de la revisión teórico-conceptual presentada, se debe asumir que cualquier producción cultural o aspecto del terreno de la cultura nunca podrá declararse ajeno al terreno de lo político: la intelectualidad en general y los intelectuales en particular, por más que puedan estar alejados de la política, nunca lo estarán de lo político.

América Latina esto debe precisarse. En principio, especificando su modo de producción como un capitalismo dependiente, cuya modernidad asume un carácter subalterno frente a los polos culturales del capitalismo “original”. En tal relación, lo propio de la producción cultural regional es que el pensamiento social y político se funda en una práctica que se apropia de ideas provenientes de estos polos, mezclándolas con inquietudes y preguntas propias que luego dan vida a una producción peculiar y, a menudo, innovadora. Pero, además, por el carácter dependiente de su desarrollo, es también propio de la región una estrecha relación entre la intelectualidad y el Estado, uno que, sobre todo durante el siglo pasado, fue determinante para la conformación de las relaciones sociales y políticas y, en general, para la emergencia del orden societal latinoamericano (Faletto, 1989). Es por eso por lo que la intelectualidad en general y los intelectuales en particular, como otros actores sociales regionales, han necesitado de la política -particularmente de aquella orientada al y desde el Estado- para influir en sus sociedades y en su propia condición. Tal soporte, por cierto, no se reduce a la política institucional, sino, en un sentido más amplio, a la orientada a disputar el espacio de la toma de decisiones en los países latinoamericanos<sup>14</sup>, haciéndose parte de la pugna por obtener los recursos sociales y políticos que el Estado ofrece.

---

<sup>14</sup> Así, la noción de poder utilizada remite a la propuesta weberiana (Weber, 2008), según la cual el poder supone la posibilidad de que un individuo o agrupación imponga su propia voluntad, inclusive contra la

En ese sentido, vale la distinción entre factores de poder formal y factores de poder real, realizada por González Casanova (1969). En efecto, estos últimos son aquellas instituciones políticas que influyen directamente en las decisiones gubernamentales, y cuya acción como instituciones políticas es ajena a las teorías euroamericanas de la democracia liberal, en donde se plantea que la negociación y la toma de decisiones deben realizarse bajo los marcos del conocimiento público o de lo que hoy se conoce como *transparencia*. Así, si el mexicano en los años sesenta identificaba como sus ejemplos a los caudillos y caciques regionales y locales, las Fuerzas Armadas, el clero y el empresariado nacional y extranjero (organizado en gremios sectoriales o nacionales), hoy podrían agregarse también los grupos tecnocráticos, cuyas formas de acción y organización también quedan fuera de la deliberación democrática en muchos sentidos.

A causa de los rasgos de su estructura de poder, en América Latina se mezclan aspectos formales del poder con otras modalidades clientelísticas o familísticas de ejercerlo. Esta especificidad histórica sobre la que se asienta la acción social y política en la región tiene como consecuencia, para el caso de la intelectualidad y los intelectuales, el reconfigurar las tensiones propias de la autonomía relativa y de la distancia relativa entre el proceso social general, así como también las de la producción cultural y reproducción social de los componentes de tal sujeto.

En tal sentido, y dada su influencia, cabe mencionar que, para América Latina, tiene poco asidero el énfasis que Bourdieu (1976) pone en el funcionamiento del campo intelectual para caracterizar a los intelectuales, más allá de que sea necesario considerar su lucha dentro de este terreno por monopolizar las oportunidades y el mercado de posiciones. Es que la influencia de la intelectualidad en la región, y sobre todo de la ligada a las ciencias

---

oposición de los demás. Como poder económico, ello refiere a la posesión de bienes y servicios y la posibilidad de monopolizar los intercambios en el mercado. Como poder social, a aquella estimación social específica –positiva o negativa- del honor otorgado a una cualidad común a muchas personas. Y, como poder político, implica la posibilidad de dirigir o influir en la dirección de una asociación política, de preferencia el Estado en las sociedades modernas. Esta última esfera del poder es central para el presente trabajo.

sociales, tiene menos que ver con la autoridad científica alcanzada en este subcampo o en el campo intelectual general, que con el tipo de vínculo mantenido con la política. Esto es lo que variadas interpretaciones critican, asumiéndolo como un lastre del subdesarrollo (Marsal, 1966; Sigal, 1991; Brunner y Flisfisch, 2014) y no como un rasgo específico<sup>15</sup>.

Por otro lado, se debe partir de la base de que la intelectualidad incidente es siempre aquella organizada, es decir, aquella que actúa socialmente de modo colectivo. En principio, porque sólo en el plano de las ilusiones es posible afirmar que las voces descollantes contribuyen al proceso histórico valiéndose solamente de su propio prestigio. Pero, también, porque si se apunta al establecimiento y mantención de un dominio social y político relativamente estable -como ocurre con la forma histórica que adopta el neoliberalismo en América Latina-, éste únicamente es posible, habiendo o no intencionalidad, por la acción de grupos organizados que lo impulsen y sostengan.

Visto así, el estudio de las relaciones sociales culturales en el marco de las relaciones sociales generales debe considerar, analíticamente, la posibilidad de encontrar tanto relaciones variables entre productores culturales e instituciones sociales identificables, como relaciones variables en las que los productores culturales han sido organizados o se

---

<sup>15</sup> Por esto, cabe suscribir lo sustantivo de la crítica de Kohan (2006: 401) respecto a la imbricación “anómala” entre campo intelectual y política, que ha suscitado un debate en América Latina, en relación al uso que hicieron del concepto bourdiano de *campo*, durante los ochenta, los académicos que fueron a su vez ‘los intelectuales sesentistas’: “Durante los años ‘80 se puso de moda en la academia argentina y en otras academias latinoamericanas recurrir a la terminología del joven Pierre Bourdieu (principalmente la noción de ‘campo’, contrapartida en su obra de la noción de ‘habitus’) para explicar la génesis, desarrollo y consolidación de los grupos intelectuales. Manipulando a *piacere* aquellos textos de Bourdieu, algunos intelectuales ex marxistas (autodenominados en forma presuntuosa ‘postmarxistas’) legitimaban de este modo su aggiornamento y su ingreso a la socialdemocracia. El gran error de los 60 -arriesgaban en sus papers académicos- fue no respetar la profesionalidad de los campos intelectuales. La política lo invadió todo”. El problema, entonces, habría sido la ‘indiferenciación’ entre el campo intelectual y el político. Ahora bien, como señala Candiano (2015: 277), el uso político del concepto de campo intelectual lleva a “parcializar de tal modo la mirada que impediría acceder a una comprensión del proceso en cuestión, ya que la distinción en ‘campos’, pertinente a lo que atañe a un estudio de las especificidades culturales, se convierte en una excusa conceptual que permite descontextualizar lo que es un tipo particular de producción social”.

han organizado a sí mismos como formaciones culturales (Williams, 1994). Aquí, las formaciones culturales estudiadas son lo que se denominará *grupos político-intelectuales*.

Lo anterior implica un interés por el comportamiento sociopolítico de tales grupos, en base al análisis de sus procesos sociales de producción cultural, en donde se incluyen tensiones y conflictos variados. Esto es, se trata de un análisis del comportamiento sociopolítico que tiene en cuenta su heterogeneidad y conflictividad inherente, pues toda organización político-intelectual tiene reglas de constitución y modalidades de relación con el exterior, sea con un campo de especialización intelectual o con la sociedad toda. Esas modalidades, además, deben considerarse en el marco del cambio histórico y del orden social general, derivando de ello relaciones simples o complejas, nacionales e internacionales. En el caso de este estudio, importa destacar a la intelectualidad organizada que vehiculiza su acción social, en representación o no de grupos políticos o de clase específicos, a través de instituciones vinculadas tanto a la estructura de poder formal (Estado, partidos políticos, etc.) como a la de poder real, nacional y extranjera, incluyendo a *think tanks*<sup>16</sup>, gremios, universidades y ONGs, todas las cuales pueden llegar a incidir en la lucha por el poder.

Finalmente, se debe tener en cuenta que la producción cultural toda y particularmente la de la intelectualidad en su conjunto, está activamente construida en relación con el orden social imperante o deseado, razón por la que correctamente debiese hablarse del estudio de sus procesos de reproducción cultural (Williams, 1994). Reproducción que, para lograr estabilizarse materialmente, necesita no sólo de unas ideas y discursos que puedan ser difundidos, sino también de una base social que sea capaz de producir culturalmente esa reproducción, innovando o divulgando lo ya existente, y formando a los nuevos cuadros encargados de ello. Es que la reproducción social y cultural es el gran problema de los

---

<sup>16</sup> Cabe diferenciar entre centros académicos privados, *think tanks* y Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Los primeros, también llamados centros de estudios, son agrupaciones que promueven la investigación de problemas sociales y adopta, en general, una orientación favorable al desarrollo y al cambio (Brunner, 1985). Los *think tanks* (tanques de pensamiento) son agrupaciones funcionales al sistema político y a la idea de una “democracia de mercado”, aunque operan con métodos tomados del mundo académico, los cuales combinan con tácticas propias de la comunicación publicitaria (Gárate, 2012). Las ONG, por su parte, son agrupaciones orientadas a la acción en beneficio de la comunidad (Huneus et al., 2014).

grupos intelectuales. La estabilidad de su dominio es la variable crítica en su conformación de hegemonía. Así pues, se prioriza, dentro de la intelectualidad organizada que se analiza, a aquella capaz de producir culturalmente su propia reproducción. De allí la relevancia de considerar las relaciones sociales entre los intelectuales y los trabajadores intelectuales o, lo que es lo mismo, de la intelectualidad en su conjunto.

#### 2.4.2. La ideología y su naturaleza como producción cultural

Eagleton (1997) sostiene que la centralidad de las ideas es cuestionable, en tanto los grupos dominantes suelen disponer de técnicas de control social a menudo más prosaicas y materiales que la referencia a “discursos hegemónicos”. No siempre es necesario que los grupos suscriban o interioricen valores ideológicos dominantes, siempre y cuando hagan más o menos lo que se espera. Sin embargo, cualquier orden dominante debe otorgar a sus subordinados el suficiente significado para que se siga en él. En ese sentido, tratándose de sociedades capitalistas las analizadas, su relación con la ideología es fundamental.

La ideología es “ese aspecto de la condición humana bajo el cual los seres humanos viven sus vidas como actores conscientes en un mundo que cada uno de ellos comprende de diverso modo” (Therborn, 2005: 1-2). De manera que, siendo la cultura un sistema significativo con el que se comprende y proyecta la existencia social, ello se enmarca en complejos procesos sociales de “interpelación” o alusión dirigidos hacia los grupos sociales. El marco ideológico, por su parte, es un nivel de disputa, en donde las ideologías se superponen, compiten, chocan, se hunden o refuerzan unas con otras. En este nivel penetran las producciones culturales que transforman los imaginarios sociales. Por ello, la ideología es antes un medio (con contenido variable y elaboración y coherencia relativa) que un objeto, e incluye tanto las nociones y las experiencias cotidianas como las elaboradas doctrinas intelectuales (Therborn, 2005).

Ahora bien, pese a que toda producción cultural es ideológica -es decir, significativa-, no toda práctica cultural es *ideología* o *dirigida por la ideología*, pues si bien al considerar la producción cultural en relación con la ideología se hace referencia a la formación y



transformación de la subjetividad humana, de esta implicancia no deriva la omisión del conjunto de procesos reales y complejos a través de los cuales una cultura o una ideología son en sí mismas producidas (Williams, 1994).

La función de la ideología es la organización, el mantenimiento y la transformación del poder en la sociedad. Y el movimiento dialéctico de ella opera en el doble sentido de la palabra “sujeto”: por una parte, dando cuenta de personas subyugadas a una fuerza u orden determinado y, por otra, aludiendo a hacedores o creadores de algo, esto es, a potenciales sujetos transformadores de la historia. Por aquello es que, evitando conceptualizaciones restrictivas, que hablan sólo del poder dominante, cabe asumir que las ideologías no funcionan como aglutinantes sociales que únicamente someten a un orden dado, sino también que capacitan para una acción social consciente, e incluso para acciones orientadas a un cambio gradual o revolucionario (Therborn, 2005).

Las ideologías dominantes y de oposición utilizan una serie de estrategias ideológicas, entre las cuales se incluyen la unificación, la identificación espuria, la naturalización, el engaño, la universalización y la racionalización (Eagleton, 2005). Esto no lo hacen, sin embargo, universalmente, sino como posibilidad integrada a la producción ideológica. Esto significa que no se puede atribuir a la ideología ninguna característica invariable, sino relativa a su configuración histórica y las características de los procesos socioeconómicos y políticos que se desenvuelven internamente (Therborn, 2005). De tal suerte, y a contrapelo de cualquier esencialismo, las ideologías tienen un carácter relacional, que les otorga su composición más bien fragmentada y desarticulada, dado que existen intereses en conflicto con los cuales se negocia continuamente. Por otro lado, siempre es bueno recordar que las creencias profundamente persistentes han de sustentarse, necesariamente, en el mundo que revela la actividad práctica. De manera que la materialidad de las ideologías está ligada a la constitución de nuevas formas de subjetividad humana, tanto como a los cambios que experimentan las existentes. Es decir, está ligada a la generación y cambio de las ideologías y a la configuración de las relaciones entre ideologías dadas.

De allí que para Therborn (2005) existan cuatro rasgos posibles de asociar a la condición material de las ideologías. Primero, que las ideologías sólo existen en formas históricas, en grados de importancia y modos históricos de articulación con otras ideologías, es decir, tienen historicidad. Segundo, que las ideologías funcionan en una matriz material de afirmaciones y sanciones, y dicha matriz determina sus interrelaciones, es decir, tienen materialidad<sup>17</sup>. Tercero, que, en sociedades de clase, todas las ideologías existen en formas históricas de articulación con diferentes clases e ideologías de clase, lo que no significa que esa influencia remita a la ideología y práctica de los miembros de una sola clase. Finalmente, que la configuración de las ideologías, sean o no de clase, está *sobredeterminada* por la constelación de las fuerzas de clase.

Con todo, si es válido esto, para sociedades dependientes como las latinoamericanas los últimos dos puntos deben ser matizados. Por una parte, recordando la difícil constitución de clases en la región y, por tanto, ampliando la afirmación hacia una convivencia entre grupos y clases sociales (Fernandes, 2008). Por otra, respecto a que el anclaje material de las ideologías refiere no a las clases en sí mismas, sino a las condiciones históricas particulares que, a nivel económico y social, interna y externamente, determinan las posibilidades de los procesos que ocurren al interior de estas formaciones sociales (Cardoso y Faletto, 1969). Sólo así es posible observar el modo en que se despliegan, en el proceso político interno, los intereses de estos grupos y clases. Así, haciendo referencia a Medina Echavarría (1963), la mudanza de una configuración social marcha paralela con la disolución de una ideología y -se podría agregar- con la conformación de otras nuevas.

En otro ámbito, también respecto de la especificidad regional, cabe precisar aún más el carácter ideológico de las producciones culturales de las capas intelectuales que más se ven beneficiadas con el giro neoliberal: las tecnocracias y, en general, la intelectualidad vinculada a la economía y la administración. En efecto, la apertura al esquema de

---

<sup>17</sup> Acá se considera la separación analítica entre la dimensión ideológica o discursiva y la no discursiva. Así, “si cada ideología funciona en el marco de una matriz de afirmaciones y sanciones, la competencia, la coexistencia o el conflicto de las diferentes ideologías depende de matrices no discursivas” (Therborn, 2005: 29). Es el poder, entonces, lo que determina la prevalencia de una ideología sobre otra.

modernización neoliberal, si bien no necesariamente coincide con las sociedades que lo recepcionan (Faletto, 1991) -al tratarse de sociedades en las que existen altas dosis de concentración del poder y en la toma de decisiones políticas-, por aquél logran gran influencia las élites que vehiculizan estas interpretaciones ideológicas, por más que, en algún momento, sea incoherente la relación entre tal ideología y las actitudes, conductas y creencias de la mayoría de la población (Medina Echavarría, 1963).

Siguiendo a Boltanski y Chiapello (2002), no sólo en la etapa neoliberal la adhesión al proceso capitalista ha requerido de justificaciones. La calidad del compromiso con aquél depende de los argumentos que puedan ser invocados para justificar los beneficios que tal adhesión aporta a nivel individual y colectivo, definidos ellos en términos del bien común que implican. Así, toda forma histórica particular que adopte la acumulación capitalista en el tiempo requiere de un *espíritu del capitalismo*, entendido como la ideología que justifica el compromiso con este modo de producción. Una ideología constituida por el conjunto de creencias asociadas al orden capitalista, que contribuyen a justificarlo y a mantener, legitimándolos, los modos de acción y las disposiciones que le son coherentes. Esto dota al capitalismo de una dimensión moral y normativa que por sí mismo no posee.

En perspectiva histórica, y con inusitada fuerza tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la principal fuente de justificaciones del capitalismo ha sido la ciencia económica, con argumentos que suelen presentarse como no ideológicos y no basados en principios morales, aunque hagan referencia a resultados globales conforme a un ideal de justicia, así como a uno de bienestar general. Estos argumentos han sido de tres tipos: el que plantea que el interés individual contribuye al interés colectivo o, mejor, que el crecimiento de la riqueza, sea de quien sea su beneficiario es, desde esta perspectiva, considerado como un criterio del bien común; el que, recurriendo a la idea según la cual la empresa privada competitiva es siempre más eficiente que la organización no lucrativa, supone que la mercantilización y privatización de los servicios es lo socialmente más aceptable y beneficioso; finalmente, el que señala que la libertad política sólo es posible como efecto colateral de la libertad económica. En su actual variante, las dos últimas ideas son para el capitalismo las más relevantes (Boltanski y Chiapello, 2002).

El aparato justificativo que incorpora el espíritu del capitalismo debe ajustarse a las formas concretas adoptadas por la acumulación del capital en una época y sociedad determinada, incorporando otros esquemas diferentes a los heredados por la teoría económica. De este modo, para mantener su poder de movilización, el capitalismo incorpora recursos que no están en su interior, nutriéndose de las producciones culturales contemporáneas, aunque ellas tengan fines distintos (Boltanski y Chiapello, 2002).

En resumen, la disputa por el orden social en las sociedades modernas capitalistas, esto es, el conflicto social y político que se produce en ellas tiene una dimensión particular en la lucha ideológica, no sólo vinculada a la propaganda sino también a ideas y conceptos más complejos, e inclusive a nivel de actitudes, hábitos y sentimientos menos conscientes y formulados (Williams, 1994). De ahí que este trabajo se enfoque en las conexiones entre las creencias formales y conscientes y la producción cultural propia de ciertos grupos, vistas tanto a través del contenido manifiesto de sus producciones como de las relaciones, perspectivas y valores que tales creencias legitiman o normalizan.

#### 2.4.3. Fuerzas político-intelectuales y controversias ideológicas en conflicto: una síntesis conceptual

Así como nada de lo producido intelectualmente es algo enteramente original, prácticamente ningún proyecto político lo es. A menudo lo que hay es una reinterpretación o instrumentalización de ideas -sociales, políticas y económicas- ya existentes, y, sólo en algunos casos, alguna innovación sustantiva. En realidad, siendo determinantes las necesidades del presente en política, cualquier proyecto histórico, teniendo ciertas bases intelectuales previas, siempre es construido en la práctica.

En tales procesos, el papel que juegan la intelectualidad y los intelectuales en una sociedad pocas veces es visible masivamente. Y es que ellos, por sí mismos, no tienen la capacidad suficiente para empujar la implementación de sus ideas y menos para hacerlas dominantes. El paso del proyecto al programa político, tanto para quienes combaten el orden social

como para quienes lo defienden, sólo es posible en base a la acción de una fuerza social y política organizada que dé sentido al uso de tales ideas y las empuje racionalmente.

Así, la penetración e implementación de las ideas, sobre todo en sociedades complejas, es un problema de poder. Sin la venia de lo político, los proyectos intelectuales orientados a ese campo podrán tener un valor en sí mismos, pero no necesariamente incidirán en la realidad. Y es que, si la actividad intelectual no se piensa con esta proyección política, se estanca en el propio mundo de referencia de las élites intelectuales, valorizándose en sí mismas y haciendo sentido solamente a los miembros de tal grupo. No se trata, entonces, de que la *ciudad letrada* se politice –pues siempre lo está, por acción u omisión–, sino que se politicen los proyectos. Ello implica que el empuje de éstos se asocie a fuerzas sociales y políticas que los vuelvan programas potencialmente realizables. Lo que cuenta, entonces, no son las personalidades intelectuales, sino el viejo problema de la organización, de una con orientación y racionalidad política, pero, además, como tantas veces, que remita al aún más viejo problema del paso de lo social a lo político.

Lo que predomina en diferentes tiempos históricos son condiciones materiales, necesidades vinculadas a la mantención o superación de la dominación existente. Son conflictos sociales en torno a los que se valorizan políticamente las ideas y, en su conjunto, los proyectos, aunque ello no ocurra siguiendo el sentido original de las ideas que sirven como sustrato. En ese conflicto intervienen *fuerzas político-intelectuales*, es decir, fracciones de la intelectualidad de un país o región que poseen anclaje social -algún tipo de organicidad interna, entendida como capacidad de producción y reproducción de sí misma y de producción ideológica- y que logran vincularse o producir fuerzas políticas reales, representativas de intereses sociales, que le otorguen potencial viabilidad en la política a sus propuestas. Esto es un nivel superior respecto a lo que se ha denominado antes como grupos político-intelectuales, pues no teniendo necesariamente efectos políticos, el fin de este tipo de agrupamientos la producción colectiva de ideas de variado tipo.

La observación de *fuerzas político-intelectuales* implica interrogarse por las alianzas (vínculos e intereses sociales y políticos) que establecen con bases sociales y políticas los

grupos organizados que les dan vida para sustentar su intervención, por los contenidos y orientaciones de su producción ideológica y por los medios con que ejercen influencia, así como su confluencia o no con otras fuerzas político-intelectuales existentes<sup>18</sup>.

Ciertamente, rara vez los procesos sociales y políticos adoptan la forma esperada por los movimientos o grupos organizados que intervienen en ellos, de modo que cuando se habla de la *intervención* de estas fuerzas político-intelectuales, se habla necesariamente de un enfrentamiento, descubrimiento y adaptación a las circunstancias no siempre esperadas. Es decir, de la práctica política misma. Teniendo en cuenta ello, en este trabajo se ha buscado trazar el mapa de las fuerzas político-intelectuales enfrentadas en un espacio y tiempo histórico determinado. Y se habla de enfrentamiento para evitar asumir la inevitabilidad de los procesos analizados -en este caso, el desembarco neoliberal y su consolidación en dos países latinoamericanos-, pensándolos más como largos procesos de conflictividad social y política en el que participan facciones de intelectualidad organizada.

Se habla, además, de fuerzas político-intelectuales, porque alejados de la entrada teórica que singulariza a los miembros de este grupo como personajes notables o como meros “productores simbólicos”, se lo aborda como un sujeto social más, que, actuando colectivamente, logra incidir políticamente en sus sociedades, interviniendo en la orientación del modelo de desarrollo, que es justamente de lo que se trata cuando se dice neoliberalismo. Ello significa que logran hacerse partícipes de las transformaciones estructurales (incluyendo la renovación de las funciones del Estado, de los mecanismos de procesamiento de conflictos, en la política económica, etc.), empujándolas a través de sus producciones ideológicas, sin olvidar la tarea de legitimación o de crítica que suelen realizar. Temporalmente, aquello significa que la intelectualidad en general y los intelectuales en particular no sólo pueden actuar antes de los cambios (impulsándolos o frenándolos) o después de éstos (legitimándolos o criticándolos), sino también como actores ligados al proceso mismo de su formulación e implementación social y política.

---

<sup>18</sup> Siguiendo a Williams (1994), las *fuerzas político-intelectuales* no son monolíticas, pues tienen diversas afiliaciones culturales, religiosas o de otro tipo, heredadas o desarrolladas, al tiempo que experimentan procesos de diferenciación interna, frecuentemente por áreas de especialización o tipos de trabajo.

Respecto a la ideología, lo que se analiza como marco general es la constitución de *capacidades hegemónicas* y luego sus cursos de realización efectiva. Tales capacidades implican discursos y dispositivos técnicos, prácticas e instituciones que las produzcan y reproduzcan. Su realización, además, supone un consenso en torno a la necesidad de que predominen. Así, en el estudio de ello se enfatiza las *controversias ideológicas*, entendidas como experiencias de confrontación de posiciones político-intelectuales producidas por la intelectualidad organizada, en torno a problemáticas socialmente construidas y valoradas como consecuencia del mismo proceso político nacional o regional, y que evidencian los intereses propios o ajenos expresados por las fuerzas que se enfrentan. En particular, importan los temas de confrontación ideológica relacionados con el tipo de modelo de desarrollo y de Estado, pues ellos son centrales en la transformación neoliberal.

Considerando tanto doctrinas o ideas intelectuales elaboradas como nociones y experiencias cotidianas, más que una producción político-intelectual en detalle, lo que interesa es cómo ésta se inserta en el contexto más amplio de las relaciones sociales generales. De este modo, concentrando la investigación empírica en el enfrentamiento producido en el campo de las ideas, la interpretación de este enfrentamiento necesariamente excede aquello, pues, en último término, tiene que ver con las dinámicas sociopolíticas más ampliamente producidas en los casos nacionales seleccionados.

## **2.5.Marco metodológico**

### 2.5.1. Caracterización de la investigación

La presente investigación es de tipo interpretativa al ahondar en el papel que juega la intelectualidad argentina y chilena tanto en la sociogénesis como en los cursos de consolidación del neoliberalismo en la historia reciente, a través de un estudio comparativo enmarcado en la especificidad latinoamericana de este fenómeno.

La temporalidad que subyace a este trabajo es de tipo longitudinal, puesto que, con el auxilio de la historia, se pretende reconocer cambios y continuidades en las intelectualidades analizadas. Respecto al grado de intervención, esta investigación es de tipo no experimental, en tanto no se pretende ni es necesaria la manipulación de las variables, sino la comprensión y observación de éstas.

La estrategia metodológica es de tipo histórico-comparativa, dado que el análisis de situaciones nacionales requiere del reconocimiento de variables específicas que permitan su comprensión, en el sentido de que la construcción de casos típicos nacionales es un recurso heurístico que permite a la investigación situarse en un punto medio entre la uniformidad de la situación latinoamericana y la absoluta inconmensurabilidad entre países (Franco, 1973).

Respecto al tipo de fuentes, se ha optado por trabajar con fuentes documentales y fuentes bibliográficas de carácter teórico y empírico, distinguiéndose entre fuentes primarias y secundarias. En el primer caso, se ha recurrido a libros, revistas académicas y de debate político, ensayos, documentos de trabajo e informes técnicos, entrevistas y notas de prensa, con el fin de pesquisar la producción ideológica de las intelectualidades nacionales, así como a otra de carácter empírico que ha permitido obtener datos y constatar hechos relativos a su comportamiento social y política durante el período estudiado.

En segundo lugar, se ha hecho un amplio uso de fuentes de información secundarias, siguiendo el argumento de Skocpol (1994: 181-182) según el cual, especialmente en la investigación comparada, “si un tema es demasiado grande para una investigación absolutamente primaria –y si están disponibles estudios excelentes realizados por especialistas-, las fuentes secundarias son apropiadas para su utilización en un estudio determinado”. Allí, puesto que se estableció un amplio espacio temporal de indagación, la investigación ha obligado a una recolección ampliada y variada de documentos, incluyendo libros, periódicos, revistas, charlas y conferencias académicas dirigidas a estudiantes, trabajadores o grupos vinculados a instituciones con influencia en la sociedad.



En definitiva, ambos tipos de fuentes se componen de materiales de índole permanente, de carácter escrito, a los que se puede acudir como fuente o referencia en cualquier momento o lugar, sin que se altere su naturaleza o sentido (Cazares et al., 1999).

#### 2.5.2. Técnicas e instrumentos de producción de información

La investigación documental es la técnica más recurrente para abordar los fenómenos históricos, pues al tratarse de un fenómeno del pasado reciente, lo indicado es remitirse a todo lo escrito o analizado en torno a éste. Para Cazares et al. (1999), este tipo de análisis no es sólo propio de la etapa de desarrollo de la investigación, sino que incluye, en su aplicación tradicional, incluso al proceso por el que se revisan los documentos mínimos para el planteamiento del problema sociológico. Su técnica característica es la elaboración de fichas bibliográficas, con el objeto de tener a mano los datos y así localizar en el momento oportuno los materiales de investigación.

Pese a la universalidad de esta técnica para la investigación sociológica (Cazares et al., 1999), ella ha sido adaptada a los objetivos del presente trabajo, tal como sigue:

- 1) Fichaje bibliográfico central: Se generó un esquema de documentación que sirvió como punto de arranque y dispositivo para acceder a los datos del estudio. Este aumentó de tamaño con el transcurso del proceso investigativo, a medida que se sumaban, como efecto de “bola de nieve”, más documentos al listado inicial.
- 2) Análisis de fichaje central: Una vez establecido el fichaje central, se inició el análisis de la bibliografía acopiada. Ello implicó: (a) una lectura minuciosa de la bibliografía, reteniendo apuntes pertinentes; (b) la elaboración de fichas de contenido de cada documento, incluyendo autor, título, edición, lugar, fecha y número de páginas; (c) la segmentación de los apuntes según las dimensiones teóricas predefinidas; (d) la reconstrucción del fichaje bibliográfico central, integrando y eliminando documentos, según su mérito; y (e) la lectura de la nueva bibliografía y la elaboración de sus subsecuentes fichas de contenido.

- 3) Análisis y redacción: Se ordenaron e interpretaron los datos producidos, iniciando luego la redacción del informe final. Ya existiendo un orden que mostraba el momento en que la información de los textos comenzaba a saturarse, la atención estuvo puesta en resguardar la calidad del diseño y del análisis de la información.

### 2.5.3. Estrategias de análisis

#### *Análisis de los lenguajes políticos*

Tanto respecto del análisis de las fuentes documentales como de la bibliografía teórica, particularmente en el caso de los estudios sobre la relación entre los intelectuales y la política, la metodología acostumbrada fue la del estudio del texto (o de la idea del texto) en sí mismo (es decir, lo que el texto *dice*) o -apuntando a superar los absurdos históricos de éste- la del estudio del contexto social, bajo la premisa de que las ideas de un texto determinado deben entenderse *en términos de* su contexto social.

Por el contrario, y siguiendo la propuesta de Skinner (2000), se asume que la comprensión de textos presupone la aprehensión de lo que pretendían significar y cómo se pretendía que se tomara ese significado. De ello se sigue que entender un texto deber ser entender tanto la intención de ser entendido como la de que esta intención se entienda, que el texto mismo como acto deliberado de comunicación debe al menos encarnar. Así, el principio subyacente es que todo texto político está inserto dentro de una polémica y el trabajo de quien lo estudia debe ser reconstruir el contexto de esa polémica, intentando con ello comprender lo que “está haciendo” el autor con el texto dentro de ella.

Esto significa ocuparse de los usos dados a las ideas en las polémicas y en los argumentos políticos. Lo que importa no es una intencionalidad mental, individual, sino aquella que está en la arena pública. Esta decodificación se obtiene de la comparación con otros textos y el análisis del papel que cada uno juega, es decir, qué tipo de intervención constituye. En fin, se trata de reconstruir los *lenguajes políticos* subyacentes a las obras en cuestión.

### *Análisis comparativo-integrado*

El presente estudio es de tipo N pequeña, pues, a menor cantidad de casos, se pudo analizar una mayor cantidad de variables. De este modo, se apuntó a lograr un equilibrio entre la descripción y la capacidad explicativa, usándose la lógica inductiva para determinar las regularidades entre los casos observados. En el proceso de selección de los casos se usó el Método del acuerdo o de la similitud, al compararse experiencias nacionales diferentes entre sí y buscar entre ellas lo común (Szmolka y De Cueto, 2011).

El análisis comparado y, en general, el ejercicio analítico basado en tipologías supone la realización de una serie de pasos que, al igual que con el análisis documental, fueron parte del proceso investigativo llevado adelante. Estos pasos, siguiendo a Franco (1973), fueron: (a) la elección de dimensiones que posibilitaron la comparación, basada en criterios teóricos y empíricos; (b) la exposición de dimensiones; (c) el establecimiento de puntos críticos, en el sentido de dar cuenta de los niveles característicos de satisfacción de la necesidad expresada en los indicadores; (d) la comparación; y (e) la integración de las dimensiones, dando cuenta de lo similar o lo disímil en relación a las variables usadas.

La opción analítica con que se complementa el análisis comparativo es el “análisis integrado” propuesto por Cardoso y Faletto (1969). En particular, la determinación recíproca entre estructura y proceso. Esto plantea vincular concretamente los componentes económicos y sociales del desarrollo en el análisis de la actuación de los grupos sociales. Así, no se trata de agregar al conocimiento de los condicionantes estructurales del giro neoliberal los factores sociales, entendidos también como variables estructurales. Por el contrario, se trata de llevar adelante el doble esfuerzo de, por una parte, considerar la totalidad de las condiciones históricas particulares -económicas y sociales- a partir de las cuales se produce los giros intelectual y neoliberal en América Latina, y cuál es su expresión internamente en los casos nacionales; y, por otra, comprender, en estas situaciones estructurales dadas, los objetivos e intereses que dan sentido, orientan o alientan el conflicto entre los grupos intelectuales y los movimientos sociales que movilizan a

sociedades como las latinoamericanas. En consecuencia, se asume que la estructura social y política se modifica en tanto distintas clases y grupos sociales logran imponer su interés, su fuerza y dominación al conjunto de la sociedad. Además, con el relevo de los intereses y valores que orientan la acción, se excluye la idea de un cambio social producido naturalmente, dando paso al enfrentamiento entre grupos con orientaciones divergentes.

Para Cardoso y Faletto (1969) el asunto es observar cuál es la determinación de los modos que adoptan las estructuras de dominación, porque mediante ella se comprende la dinámica de las relaciones de clase. Y, enseguida, se pueden captar las transformaciones del orden político, comprenderse los factores institucionales-políticos y los procesos económicos como procesos sociales. Tal modo de observación implica, además, una intersección teórica donde el poder económico se expresa como dominación social, es decir, como política. Es a través del proceso político que una clase o grupo económico puede imponer al conjunto de la sociedad un modo de producción propio, o, por lo menos, intentar establecer alianzas o subordinar al resto de los grupos o clases, con el fin de desarrollar una forma económica compatible con sus intereses y objetivos. Este es el proceso general en el que se enmarca la específica lucha entre facciones intelectuales, pudiendo ser representantes o no de ciertos grupos o clases sociales. Asumir la propuesta de la estructura-proceso, por tanto, permite enmarcar las decisiones individuales y colectivas en el contexto más amplio de las relaciones sociales generales.

#### 2.5.4. Muestra y unidad de análisis

La muestra es de tipo no probabilística, ya que se opta por un muestreo teórico, en el que la selección de los casos es intencionada por consideraciones teóricas y empíricas. El criterio de aproximación a las unidades de información es el proceso de “bola de nieve”, originado en el carácter seminal que tuvo la muestra inicial de documentos. La unidad de análisis, por su parte, es el nivel nacional, es decir, los casos nacionales comparados.

### 2.5.5. Variables de análisis

En base a los criterios teóricos e históricos antes expuestos, se ha desarrollado un marco de referencia sobre el cual se analizan los casos nacionales. Este integra los diversos cursos de profundización del neoliberalismo en cada país, así como la naturaleza del régimen político imperante a lo largo del período estudiado, pues sobre estos elementos se desenvuelve el proceso político que condiciona el enfrentamiento entre las fuerzas político-intelectuales.

Respecto a lo primero, siguiendo a Ruiz (2013), la experiencia argentina se asocia a la categoría de “neoliberalismo revertido”, esto es, una experiencia histórica en que se retrotrae la transformación heredada a modalidades próximas a las orientaciones nacional-populares, en donde diversas fuerzas sociales se rearticulan clientelaramente en torno al Estado. Por su parte, la experiencia chilena expresa un “neoliberalismo ortodoxo o avanzado”, pues ahí la transformación neoliberal tiende a adoptar un desarrollo ininterrumpido, alcanzando con ello mayores grados de profundidad y madurez, al punto de mercantilizar prácticamente todos los ámbitos de la vida social.

Respecto al régimen político, si se tiene en cuenta que la última oleada de golpes militares en el Cono Sur portaba -en mayor o menor medida- un sentido refundacional diferente al de los “cuartelazos” del siglo XX (Touraine, 1989), es claro que la distinción entre régimen político autoritario y régimen político democrático es insuficiente. En vez de eso, y más allá de definiciones formales, lo que importa son los rasgos políticos e ideológicos de tales regímenes, que varían a lo largo del tiempo<sup>19</sup>.

Por último, se eligen los casos de Argentina y Chile, pues estos son ejemplos de variantes de lo nacional-popular -populista y de frente popular (Weffort, 1968)- y, por ello, de modos de relación diferentes entre intelectualidad y poder político en el siglo XX.

---

<sup>19</sup> Se usan como sinónimos los conceptos de régimen autoritario, dictadura o régimen militar, pese a que existe toda una discusión sociológica y politológica al respecto. Para una síntesis, véase Tusell (1996).

En base a estos criterios, se definen tres variables de análisis que permiten la comprensión de los casos y su comparación, en el contexto de la especificidad latinoamericana:

- I. Tradición político-intelectual nacional: Variable que apunta a las tensiones que históricamente condicionan la relación entre la intelectualidad y el poder en el contexto nacional, generando un estilo nacional de institucionalización de la cultura (Halperin Donghi, 1988) que arraiga. Se compone de dos dimensiones:
  - i. Grado de autonomía/dependencia estatal del campo intelectual.
  - ii. Grado de autonomía/dependencia en la relación universidad/Gobierno/Estado.
  
- II. Modalidad de producción/reproducción cultural de fuerza político-intelectual: Variable que apunta a la composición y acción de los grupos intelectuales organizados. Se compone de cuatro dimensiones:
  - i. Homogeneidad/heterogeneidad (intereses sociales o de clase).
  - ii. Tipo de vinculación a grupos o clases sociales (temporal u orgánico).
  - iii. Vinculación/ no vinculación transnacional (creación, intermediación, divulgación).
  - iv. Estrategias de intervención en política (partido político, centro de pensamiento, etc.)
  
- III. Naturaleza de controversia ideológica: Variable que apunta al proceso de construcción social de las problemáticas confrontadas, considerando su contenido y la forma en que se constituyen las posiciones ideológicas enfrentadas. Se compone de dos dimensiones:
  - i. Contenido de producción ideológica (afirmaciones y sanciones)
  - ii. Nivel de penetración del debate (experto o sentido común).

## **2.6.Hipótesis de trabajo**

A nivel de casos nacionales, las hipótesis de trabajo son:

En Argentina, el intento de refundación neoliberal se ve truncado porque tal proceso es conducido por una fuerza político-intelectual que no logra hegemonizar al conjunto de intereses sociales que tienen expresión política, tornando inestable su dominio. En ello inciden tanto la característica “puja distributiva”, como la tradición intelectual local que excluye a los intelectuales de las decisiones políticas.

En Chile, el giro neoliberal se consolida por la hegemonía que alcanza, sobre el conjunto de intereses sociales que tienen expresión política, la fuerza político-intelectual que la conduce. En ello inciden tanto los términos sobre los cuales se propicia el proceso de transición democrática, como la ruptura que se produce con el tipo de relación entre intelectualidad y sociedad que predominara en la etapa nacional-popular.

A nivel comparativo, las hipótesis de trabajo son:

El comportamiento sociopolítico de la intelectualidad latinoamericana en el período 1980-2003 confirma su especificidad histórica como productor y ejecutor de sus propias ideas en el ámbito político. De tal suerte, su papel en el proceso de instalación y consolidación neoliberal en la región se expresa en ciertas imágenes de “lo moderno” que ellas producen.

### III

## ARGENTINA

---

### 3.1. Un viejo problema argentino: la política sin los intelectuales

En diciembre de 1984, en el marco de una reunión que convocó a un significativo grupo de escritores argentinos en la Universidad de Maryland para dialogar sobre los efectos que el “Proceso de Reorganización Nacional” había provocado sobre el ámbito cultural del país, el historiador Tulio Halperin Donghi, en su estilo, ilustraba el problema de fondo que, cada cierto tiempo, enfrenta la intelectualidad argentina:

En los años durísimos que se quisiera creer que han pasado, eran muy numerosos, como sabemos, los argentinos que contribuían con su talento y experiencia a enriquecer la vida cultural y científica mexicanas, y ofrecían esa contribución invocando con tan imperiosa insistencia el alto ejemplo ofrecido por su tierra de origen, que no dejaban de provocar en sus huéspedes una cierta exasperación, expresada a menudo de modo mexicanamente discreto y cortés en la pregunta de por qué un país en que talentos y destrezas estaban tan generosamente distribuidos se encontraba en situación que hacía, al parecer, urgente escapar de él (...) la réplica era frecuentemente una confesión de éstos, pese a su excepcional sagacidad, eran incapaces de resolver ese enigma (Halperin Donghi, 1988: 27).

Siendo un lugar común el señalar que la relación entre los intelectuales y el poder es de suyo conflictiva, pareciera ser que en la experiencia argentina tal tensión se profundiza. Pese a su importancia excepcional en la conformación de la sociedad y del diseño institucional del Estado, durante la mayor parte del siglo XX la distancia, cuando no el conflicto, entre el campo de la cultura y el campo político ha sido más frecuente que su convergencia (Sigal, 1991). Ni los partidos nacionales, ni los sindicatos y gremios, ni el Estado, y menos los militares, han estimado deseable la intervención de los intelectuales en tanto tales.

Eso tiene raíces históricas. A poco andar su historia republicana, el consenso de las élites regionales de las provincias del Río de la Plata, enlazado en torno a la ciudad de Buenos Aires y al caudillismo de Rosas, propicia, entre otras acciones represivas, la expulsión de la joven Generación del '37 (Safford, 1991). En el siglo XX, la experiencia peronista marca



un antes y un después en este asunto, no sólo porque el gobierno de Perón mantiene una tensa relación con la intelectualidad local -fuera ésta partidaria o antiperonista (Fiorucci, 2004)-, sino porque produce una ruptura que, latente tras la inmigración masiva y la sociedad “aluvial” que toma forma desde fines del XIX (Romero, 1975), estalla y persiste hasta ahora: la tensión entre élites y masas como marco que envuelve la relación entre los intelectuales y la política.

En el siglo XX, por tanto, la especificidad argentina radica en el hecho de que el nacionalismo popular, que da sustento ideológico al peronismo como doctrina, régimen de gobierno y relación entre Estado y sociedad (Weffort, 1968), instala la sospecha sobre la función social de los intelectuales en la sociedad civil<sup>20</sup>. Esto es lo que experimenta, como se dijo, la intelectualidad de la izquierda socialista a los pocos años de caer Perón, cuando debe enfrentarse a una clase obrera mayoritariamente peronista que se resiste a ella (Aricó, 2005). Pero también afecta a la intelectualidad liberal que, orgullosa de su cosmopolitismo, es tildada de “europeizante”, en un contexto en que lo nacional y lo popular van asimilándose paulatinamente (Portantiero y De Ípola, 1981).

Pese a una vida cultural con un alto dinamismo intelectual y a una mayor independencia del campo cultural local al comparar con otras experiencias latinoamericanas, los vaivenes ideológicos y políticos de la sociedad penetran con llamativa agudeza, primero a causa del giro cultural y político provocado por el primer peronismo y luego, a la caída de éste, por la agudización del conflicto que sigue a la Revolución Cubana, que avanza hasta adquirir un lenguaje de guerra civil previo a la última dictadura (Sigal, 1991).

En general, durante el siglo pasado, este estilo nacional cultural deviene característico modo de institucionalización de la vida pública argentina, en el que el conflicto central de

---

<sup>20</sup> Una sospecha situada en la dislocación entre los intereses de uno y otro grupo social, en el contexto de un régimen político con importantes rasgos de autoritarismo. En efecto, el peronismo se asimila a una forma autoritaria en la que, afectándose derechos individuales de grupos sociales específicos como los intelectuales -por ejemplo, a través de la limitación de la libertad de expresión-, aquello coexiste con significativas experiencias de libertad concreta individual en el caso de los campesinos y obreros (Germani, 1962).

la intelectualidad se genera en torno a la búsqueda de la continuidad en la carrera individual y la lealtad a preferencias científicas, culturales o ideológico-políticas que, en una ocasión u otra, ponen a aquélla en riesgo (Halperin, Donghi, 1988). Este individualismo y arraigo identitario deriva en un temprano anquilosamiento de la institucionalidad cultural y en el desinterés por fortalecerla -como lo evidencia el derrotero inestable del sistema universitario argentino antes del último golpe de Estado-, tendiendo la intelectualidad a adoptar también las prácticas corporativistas del sistema político. Esto la aleja paulatinamente de la formulación de proyectos nacionales a partir del interés de un grupo o clase social específico (Faletto, 2002), pese a la persistencia de una vocación nacional -incluso en el pensamiento revolucionario- empeñada en la revitalización de un “pasado de gloria” atribuido al país, a causa del relativo predominio económico y cultural que alcanzara en la región a comienzos del siglo XX (Halperin Donghi, 1988)<sup>21</sup>.

Con todo, y pese a esta mayor autonomía relativa de la intelectualidad local -vinculada al mayor desarrollo de las burguesías locales y, por ello, a un mayor volumen de producción cultural desarrollada al alero del mercado (Halperin Donghi, 1988)-, el intelectual en ejercicio de funciones estatales ha sido un hecho intermitente y poco trascendente después de la asunción del radicalismo al poder en la década de 1910 (Altamirano, 2010). Desde comienzos del siglo pasado, en la Argentina los intelectuales declinan paulatinamente de actuar como letrados y políticos para desenvolverse como consejeros de estos últimos. Esta situación, que para Sigal (1991) es signo de su alejamiento de la política y no del ámbito de

---

<sup>21</sup> Se debe recordar el fundamento de lo nacional-popular para entender esto: la incapacidad de las clases dominantes, insertas en la lógica externa del capital total, para asumir la dirección del proceso social de modo completo, a raíz del desarrollo desigual del capitalismo. Así, por su debilidad, éstas tienen dificultades para dirigir el proceso económico-social con un sentido integrador, que permita hacer aparecer a la sociedad en general como “avanzando hacia adelante” y a ellas mismas ejerciendo un liderazgo claro e indiscutido, lo que coloca límites a la capacidad de generar consenso y producir hegemonía. Por eso no existe hegemonía de clase en las experiencias latinoamericanas, siendo generalmente el “pacto social” la expresión política de la modernización capitalista, esto es, el intento por gestar un equilibrio entre los principales grupos sociales, que permite ampliar la base del orden sin modificarlo (Portantiero y De Ípola, 1981). En la Argentina, el sistema político nunca ha logrado estructurarse como sistema con raigambre real dentro de la sociedad, sino como una negociación permanente entre intereses caudillescos, a nivel gremial y sindical, en lo que se conoce como “puja distributiva” (Faletto, 2002). Tal dinámica ha tenido una derivada concreta en el campo intelectual.

lo político, en la medida que no puede concluirse que un aspecto del terreno de la cultura sea por naturaleza ajeno a éste, remite, a contrapelo de esta afirmación, a considerar el peso específico que también ha tenido el Estado argentino en la configuración de su sociedad.

Y es que, volviendo al dilema del paso de lo social a lo político, si bien es cierto que no solamente aquellos que se proponen conscientemente intervenir en la política dejan su marca en la cultura del país (Sigal, 1991), no lo es menos que, para forzar cambios globales, fundamentalmente sobre el modelo de desarrollo, los intelectuales argentinos han debido vincularse a la política orientada al Estado, aunque no necesariamente institucional, buscando incidir en el proceso de toma de decisiones. Así, sin haber paradoja, sino dos procesos distintos, la Argentina mantiene una tradición político-cultural caracterizada, de un lado, por un campo intelectual atravesado por la incidencia de lo político; y, de otro, por una intelectualidad permanentemente excluida de las decisiones políticas, pese a su prolífica producción y alta difusión de ella en el espacio público.

### **3.2. El disímil reacomodo de la intelectualidad argentina en la “década perdida”**

El “Proceso” argentino, como parte de la oleada de golpes militares cuyo objetivo fue romper con la dinámica de la política nacional-popular, tiene como eje de transformación una política económica abocada a modificar la “estructura industrial protegida” y a reducir la participación de los asalariados en la distribución del producto. Ambas cuestiones, desde la óptica antipopular que orientara al régimen, eran vistas como las fuentes de la excesiva deuda pública y privada arrastrada. La solución, por tanto, venía dada por la desarticulación de las bases sociales de las alianzas populistas promovidas por el peronismo, a través de su exclusión sobre la orientación del Estado (Ruiz, 2013).

Acompañando a la violencia política, esa disposición se fragua en las oficinas del Ministerio de Economía. Es durante la prolongada gestión del ministro José Alfredo Martínez de Hoz (1976-1981) que se intenta un viraje estatal hacia el capital agroexportador y financiero, a través de medidas de liberalización del mercado interno que buscan acrecentar la vinculación con el exterior (Rapoport, 2010). Pese a un esperanzador

comienzo, el desenlace es un estallido económico que tiene como trasfondo el inicio de la “crisis de la deuda” que acompaña a las economías latinoamericanas en los ochenta. Tal motivo, sumado a la derrota en Malvinas y la movilización popular por alzas salariales y en contra de las violaciones a los derechos humanos, acaba con la dictadura, quedando como herencia una debacle económica que, entre otros síntomas, contaría una altísima deuda externa y una crisis social generada por la drástica caída de los salarios, hiperinflación y altas tasas de desocupación y pobreza (Rapoport, 2010).

Pero, más allá de este fracaso, entre los sucesos a destacar dejados por la gestión cívico-militar se encuentra la activa participación de una nueva intelectualidad tecnocrática en el seno del gobierno. Ante las exigencias impuestas por el deterioro económico, ella participa en el equipo de Martínez de Hoz actuando con relativa autonomía y a contrapelo de los principios del liberalismo vernáculo argentino. Y es que, pese a que el gabinete económico promueve al inicio un plan de recuperación de los ingresos del Estado por la vía de una apertura comercial que disminuyera la protección arancelaria de ciertos bienes, tras la subida a tres dígitos de la inflación en 1978, radicaliza su postura: se contrae la oferta monetaria a través de la reducción del gasto público (Heredia, 2015). Aquello, empero, exige racionalizar la administración pública, reducir la inversión en infraestructura y privatizar empresas estatales, generándose una fuerte oposición en la facción más estatista de la Junta Militar, liderada por el almirante Emilio Massera, como expresión del nacionalismo económico castrense. En concreto, se sospechaba que el empequeñecimiento de las reparticiones públicas pudiera hacer crecer el desempleo, amenazando con ello la legitimidad de un gobierno ya cuestionado en otros frentes (Canelo, 2004).

En tal escenario, la continuidad de Martínez de Hoz dependía de un plan alternativo que permitiera aunar criterios. Este llegó de la mano de un grupo de jóvenes economistas recién integrados al equipo económico, quienes, haciendo gala de la sofisticación de sus herramientas, proponen un plan de medidas ya no enfocadas en el control de la cantidad de dinero, sino en la balanza de pagos y la fijación de algunos precios (Heredia, 2015). De este modo, bajo promesa de reducir la inflación y estimular el crecimiento, la “tablita cambiaria” -primer experimento monetarista en suelo argentino- se pone en práctica al

aminorarse las críticas de la Junta<sup>22</sup>, logrando, pese a su infortunado derrotero, posicionar por primera vez a estos cuadros tecnocráticos en la primera línea del poder político.

Si bien su ingreso al aparato del Estado se produce como consecuencia del deterioro que éste venía experimentando en sus capacidades desde los años setenta (Sidicaro, 2010), tal episodio es el punto de llegada local del proceso más amplio de “norteamericanización” de la economía mundial, que en América Latina se expresa como reacción a la hegemonía del “estructuralismo cepalino” en los cincuenta y sesenta. En ese contexto, la especificidad argentina viene dada por dos elementos. Primero, porque la conexión de los estudiantes con el saber económico global es impulsada por instituciones privadas y no por universidades públicas, siguiendo el señero ejemplo del Instituto Torcuato Di Tella (Plotkin y Neiburg, 2005). Ellas financian estudios de postgrado en el extranjero y entablan puentes con varias agencias internacionales (FMI, Banco Mundial, BID) que más tarde son claves en la negociación de la deuda argentina. Segundo, porque la formación internacionalizada de los “monetaristas” argentinos tiene un sello empresarial, al ser apoyada por gremios que, desde los años sesenta, buscan ensanchar su capacidad de intervención en el debate público, apoyando la creación de espacios de producción ideológica que les permita resistir el avance de la izquierda y del peronismo, este último proscrito desde 1955.

El empresariado local lamentaba que la radicalidad de las posiciones progresistas tornara cada vez más burda la justificación de sus intereses, al tiempo que le quitara efectividad a la lucha gremial para difundir su orientación política. Asumía, además, que las estructuras corporativas de los gremios no habían logrado adaptarse a los nuevos tiempos, marcados por el surgimiento de nuevos parámetros de inversión y gestión surgidos en la economía. Tal rigidez, se estimaba, había impedido a las entidades corporativas consensuar una estrategia común, cayendo en disputas internas (Ramírez, 2010). Los centros académicos privados y *think tanks* que surgen de esta iniciativa, además de apoyar económica e institucionalmente la formación profesional de sus cuadros económicos y administrativos

---

<sup>22</sup> Se habla de experimento pues la “tablita cambiaria” se basó en lineamientos teóricos que apenas databan de 1976, y respecto de los cuales no existían antecedentes de aplicación exitosa en el mundo. Con él, se fija una devaluación de la moneda local inferior a la tasa de inflación prevaleciente (Heredia, 2015).

afines al empresariado, sirven como plataforma de debate y proyección de ellos hacia el aparato estatal, desempeñando un papel relevante en la elaboración y ejecución de políticas económicas en la dictadura y los posteriores gobiernos democráticos.

Destaca, en primer lugar, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), que, nacida de la concurrencia de las cuatro principales patronales del país<sup>23</sup>, concentra la mayoría de los cuadros tecnocráticos que acompañan a Martínez de Hoz, para luego, al caer el régimen, transformarse en la consultora de las grandes empresas privadas (Heredia, 2012). También está el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA), cuyos fundadores, Carlos Rodríguez y Roque Fernández, asesoran sobre el enfoque monetario de la balanza de pagos a la Junta Militar, siendo hoy relevante en el mundo privado (Heredia, 2012)<sup>24</sup>. Por último, la Fundación Mediterránea (FM) y, específicamente su Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IEERAL)<sup>25</sup>, que, obteniendo una alta valoración en el mundo privado en los años setenta y ochenta, alcanza una dimensión aún mayor cuando su líder, Domingo Cavallo, se convierte en el ministro de Economía de Menem, a la vez que los cuadros de esta agrupación colonizan el Estado y el Gobierno (Ramírez, 2007).

### 3.2.1. La crisis desarrollista y el asalto de la intelectualidad empresarial

En la Argentina de los años ochenta, la clave ideológica que se impone en el debate político, y que delinea las coordenadas de desembarco del neoliberalismo, es la cuestión inflacionaria. No obstante, la inflación no alcanza un estatuto de importancia en la

---

<sup>23</sup> Fundada en 1964, allí concurren la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) (Ramírez, 2012).

<sup>24</sup> Fundada en 1978, es creada por el empresariado vitivinícola mendocino y grandes grupos económicos como Bunge & Born. Aquí se desempeñan la mayoría de los “Chicago Boys” argentinos (Cortina, 1997).

<sup>25</sup> Fundada en 1977, su antecedente inmediato es la Comisión de Estudios Económicos y Sociales, que funda la Asociación de Industriales Cordobeses en 1969 para dar respaldo técnico a las exigencias gremiales de descentralización productiva. Ellas, bajo el liderazgo de este gremio, congregan a los industriales del interior del país contra la autoridad nacional (Ramírez, 2012).

discusión intelectual argentina sino hasta mediados de los sesenta, cuando la subida de los precios se torna persistente e incluso se agrava en cada nuevo año fiscal (Neiburg, 2005).

Su relevancia para el manejo económico siguió siendo marginal y únicamente fue defendida por una minoría ligada al pensamiento liberal, manteniéndose encerrada en la discusión especializada (Heredia, 2015). Ello se debe tanto al escaso desarrollo empírico y teórico sobre el tema, como al predominio de la escuela estructuralista para la cual el verdadero problema nacional era el desarrollo (Heredia, 2015). En efecto, para esta última la inflación es parte de un problema mayor de debilidad de la estructura productiva y de las relaciones comerciales con el exterior. Así, su aumento se imputa a la contradicción entre el dinamismo del sector industrial, volcado a sustituir importaciones, y al relativo estancamiento del sector agropecuario, orientado a la demanda interna y externa, y único capaz de obtener divisas. Su raíz estructural, entonces, se ubica en los desequilibrios cíclicos de la balanza de pagos y en la “puja distributiva”, lo que incluso llevara en algún momento a que se le considerara un “mal necesario” para lograr el desarrollo (Pinto, 1976).

Para el liberalismo económico, en cambio, la inflación está asociada al “dirigismo” estatal, que provoca un exceso monetario dado por la emisión irresponsable de un Estado que gasta más de lo que gana, particularmente en lo que respecta al incremento de los costos provocados por las demandas salariales y la raíz política de su intervención (Heredia, 2015). En esa trayectoria, el episodio monetarista en dictadura anticipa un quiebre ideológico al ser aislado el problema inflacionario como uno de importancia en sí mismo y al margen del objetivo de largo plazo del desarrollo nacional, contraviniendo la postura de un liberalismo vernáculo celoso de abrir los mercados al exterior (Sidicaro, 2010).

Esto último es políticamente relevante, puesto que en Argentina la ampliación de la base económica del sector industrial y su vinculación al sector exportador y financiero, tanto nacional como extranjero, conducen al país a una desolidarización de la “alianza desarrollista” y a un aumento de presiones en contra de un Estado al que se tilda de ineficaz en cuanto empresario. Los sectores medios, por su parte, se sienten amenazados por el crecimiento de la demanda popular, que consideran va en menoscabo de sus posibilidades,

especialmente cuando ésta se satisface a través de la inflación. En suma, la inflación encubre un conjunto de contradicciones ya no posibles de sobrellevar (Faletto y Kirkwood, 1976). Y, en tal circunstancia, fijar la atención en la inflación como problema central del debate público, hace visible una disputa por controlar el elemento que podría acabar con la pugna distributiva al interior del Estado de Compromiso (Ruiz, 2013).

Al llegar Alfonsín al poder en 1983, y pese a las expectativas democráticas que genera su discurso centrado en la política, se profundiza la crisis heredada de la dictadura, redundando no sólo en el errático rumbo que adopta su gestión, sino en que, al sumarse los fallos en materia económica, se produzca, en el seno del Estado y del Gobierno, un traspaso de funciones a grupos ajenos a la militancia radical, pese a la molestia de los “hombres de partido” (Sidicaro, 2010). Esto, además, fortalece la capacidad de intervención del gran empresariado (sobre todo nacional), el cual, en línea con la debilidad de las formaciones sindicales del peronismo, adquiere tal grado de incidencia que la agudización de sus pugnas internas condiciona ostensiblemente las políticas económicas del Ejecutivo (Ruiz, 2013).

La heterogeneidad de sus intereses no evita una unión detrás del argumento común de reducción del Estado, de apertura de la economía a la competencia externa, de privatización de empresas públicas, desregulación de la economía y de introducción de un sistema de reglas claras. Bajo la creencia que cada sector tenía respecto a que sus demandas e intereses serían los atendidos con una reforma que implicara la retirada del Estado, se extiende un discurso anti-estatista cuya retórica neoliberal es usada por los empresarios para presentar y justificar sus demandas corporativas en el campo político, presentándolas como parte de un proyecto más amplio (Beltrán, 2006).

Esto se consolida al transcurrir la década, a partir del espacio ganado por los economistas monetaristas en el debate político, pues sus ideas se perfilan como las mejor preparadas para enfrentar los avatares que impone la crisis. El primer hito que apoya este avance es la remoción del ministro de Economía, el radical Bernardo Grinspun, cuyo plan de reactivación basado en el distribucionismo nacional-popular fracasa, en favor de Juan Sourrouille, quien apuesta por reactivar el crecimiento apoyándose en el sector exportador



y haciéndose acompañar de un equipo de tecnócratas independientes ligados al Cedes y al IDES<sup>26</sup>, consolidando así la “desradicalización” del gobierno (Pavón, 2012).

Al poco tiempo, empero, y en vista de que sus medidas anti-inflación tampoco funcionan, se propicia un enfrentamiento entre estos economistas, mayoritariamente cepalinos, y los cuadros monetaristas. Esto se produce en la segunda mitad de la década, en encuentros disciplinares y de la gran empresa, en los medios de comunicación y a partir de una serie de publicaciones y debates públicos y privados (Heredia, 2006). Los pormenores de estas discusiones alcanzan cierta masividad pública, en tanto encuentran interés en una población ya acostumbrada a ligar los desequilibrios macroeconómicos con su propia reproducción social, a partir del manejo de una serie de “cifras sociales” (PIB, precio del dólar, tasa de inflación), cuya variación se torna clave para la propia existencia (Neiburg, 2005).

Este interés público, la premura del presente y la escasez de alternativas políticas, instala paulatinamente una ruptura en la discusión argentina sobre economía: ante los nulos efectos de las medidas contra la inflación y el crecimiento de la deuda nacional, se impone la idea de alivianar “de política” y de posturas ideológicas a los asuntos económicos. Ello redundaba en que lo sustantivo del debate experto, pese a su centralidad para la vida de los argentinos, se reduzca aún más a los especialistas, tornándose privativos sus detalles incluso para los políticos (Heredia, 2015). La brecha generacional instaurada en la universidad estatal a causa de la represión autoritaria, y que escinde a los viejos maestros desarrollistas de las nuevas generaciones, se activa por estos años, anticipando la homogenización que el pensamiento económico muestra en los años noventa. En lo inmediato, los sucesivos fracasos llevan a abandonar las opciones de largo plazo, atizándose con ello el estricto

---

<sup>26</sup> Fundado en 1958 por Aldo Ferrer, el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), especialmente a través de su revista *Desarrollo Económico*, sirve como espacio de debate a la intelectualidad progresista argentina y latinoamericana. En los setenta, se fundan una serie de institutos de investigación ligados al IDES y financiados con fondos internacionales, que alcanzan gran influencia en democracia: el Cedes y el Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración (Cisea). Mientras el primero es hegemonizado por sociólogos y politólogos, el segundo, originalmente volcado a la administración pública, nuclea a economistas y científicos sociales de diverso origen (Heredia, 2004).

límite que se establece entre la dimensión económica y los hechos políticos, castigando fuertemente la orientación económica estructuralista (Heredia, 2015).

La separación entre economía y política se propicia, entonces, bajo la apelación a un “realismo” tecnocrático que, legitimado en el carácter científico de la disciplina económica, entiende a ambos mundos como irreductibles el uno del otro. La política, se señala, entorpece cualquier salida a la crisis, mientras la escalada inflacionaria de 1985 ayuda a enfatizar aquello, anulando cualquier política basada en la redistribución, estabilización y reactivación de largo plazo (Heredia, 2006). Así pues, la derrota de los economistas “estructuralistas” se sella, al ser desplazada la discusión sobre el desarrollo y negarse la deliberación política como momento de definición de la política económica.

La ventaja de los monetaristas, asimismo, se expresa en la posibilidad de negociar más directamente con los intereses empresariales. La puesta en marcha del Plan Austral (1985) lo refleja, toda vez que, al insistirse en el apoyo al sector exportador con la creación de una nueva moneda, el congelamiento del tipo de cambio y de la mayoría de los salarios y precios, se anticipa el carácter drástico e intempestivo de las medidas que de allí en más se adoptan en la Argentina. La pedagogía monetarista que acompaña a la crisis logra, además, que la población se empape de la *lingua franca* de los expertos (Heredia, 2012)<sup>27</sup>, aumentando la legitimidad de sus planes de estabilización de corto plazo, que buscan transformar a la población en agentes económicos “más racionales” (Heredia, 2015).

El Plan Austral fracasa tras dos años de implementación, pese a los esfuerzos de Sourrouille y el alfonsinismo. Habiendo aumentado la pugna entre facciones obreras, el Presidente decide incorporar a sectores más “conciliadores” aumentando los salarios y precios del sector público, desatándose la reacción de un empresariado cada vez más subordinado a los grandes grupos económicos (Bernal, 2006). Contrasta con tal fortalecimiento obrero la irrupción de una marginalidad urbana surgida de la pauperización

---

<sup>27</sup> Según Camou (2006), los economistas profesionales triplican sus intervenciones en la prensa entre 1985 y 2005, al tiempo que los graduados de universidades extranjeras y *think tanks* reemplazan a los representantes de organizaciones civiles y políticas.

de los sectores medios y populares afectados por la crisis, que pierden los beneficios ligados a sus ocupaciones (Rapoport, 2010). Tal multitud es la base de apoyo menemista en las elecciones presidenciales de 1989, siendo determinante en los años siguientes.

### 3.2.2. La fragmentación peronista y su intelectualidad “renovadora”

La alianza política que lleva al poder a los militares tiene como eje de acción la desarticulación de las bases sociales del peronismo, concentrando la represión en los miembros del movimiento sindical argentino (Ruiz, 2013). Ello reduce la actividad sindical y la importancia política de sus dirigentes (Romero, 2012), al tiempo que el deterioro en la estructura productiva y del empleo contribuye a desarticularlos gremialmente (Sidicaro, 2010). De este modo, al llegar los años ochenta, el debilitado tejido social y laboral que se había reactivado a nivel nacional en 1979, lo hace con menos afiliados, pocos recursos económicos y escaso reconocimiento político. Además, junto con los cambios estructurales, las referencias simbólicas de la identidad peronista tambalean, toda vez que su historia reciente estaba plagada de hechos de violencia, que tanto la izquierda como la derecha del movimiento habían reivindicado en su momento como arma política (Pavón, 2012).

La oposición, por su parte, no contribuye a mejorar el escenario, puesto que Alfonsín y el radicalismo redefinen los términos del debate, designando como responsables de la represión autoritaria a un supuesto “pacto militar-sindical”, que pone en jaque a varios jefes sindicales del Partido Justicialista. Con todo, en el seno del movimiento peronista el poder de los sindicatos sigue predominando al designarse candidatos y líneas de acción, sobre todo ante el debilitamiento del ala partidaria del movimiento, que hace crecer en términos relativos el poder de los gremios, lo cual da cuenta de lo desmembrado del asunto, en la medida que los sindicatos lideran a pesar de su debilidad estructural (Sidicaro, 2010).

La derrota del candidato peronista Ítalo Luder a manos de Raúl Alfonsín en las elecciones presidenciales de 1983 genera una crisis al interior del peronismo, durante la cual parte importante del movimiento cargó las culpas en la dirigencia sindical, acusándola de poca ductilidad para ampliar las alianzas (Sidicaro, 2010). Esa caída acelera el desencuentro que

internamente sostienen algunas facciones peronistas, sobre todo para sacar de los puestos de liderazgo a los sectores más ortodoxos vinculados al pasado de derechización del movimiento y, en muchos casos, a la dirigencia sindical. Ello da lugar a un movimiento renovador, que nuclea a un heterogéneo grupo de dirigentes peronistas y que es impulsado, a nivel nacional, por importantes dirigentes de base como Antonio Cafiero, Carlos Grosso y Carlos Menem. La Renovación Peronista nace oficialmente en 1985, de una alianza de políticos urbanos progresistas, caudillos provinciales y el “Grupo de los 25” de origen sindical (Levitsky, 2004). Lo hace declarando la necesidad de replantear la conducción del movimiento y de forjar un recambio político generacional, en donde la dirigencia política predominara por sobre los sindicalistas (Garategaray, 2013).

El antecedente intelectual de esta tendencia es la revista *Unidos*, nacida en 1983 y dirigida por Carlos “Chacho” Álvarez, en la que convergen miembros disidentes de la dirigencia política justicialista e intelectuales afines al peronismo, que articulan un discurso basado en el intento de síntesis de los valores nacional-populares –típicamente peronistas- de la nación, la unidad, el liderazgo y el pueblo; con los democrático-liberales, vinculados al consenso, la deliberación, la democracia representativa y el Estado de derecho (Garategaray, 2013). Por ello, su objetivo interno es la transformación del movimiento peronista en un partido político con estructuras normales –la “revolución de las formas” (Pavón, 2012)-, así como una democratización interna de todos los espacios, que se ve como un paso necesario para contribuir, hacia afuera, a las aspiraciones democráticas de la sociedad argentina. Aquello significa abandonar las liturgias tradicionales, adoptar el parlamentarismo democrático y disminuir el peso de los sindicatos en la toma de decisiones (Sidicaro, 2010), en tanto aquellas –se decía- eran impulsadas por la presión corporativa.

*Unidos* viene a cubrir la ausencia de un pensamiento “progresista” al interior del peronismo, a la vez que hace posible que el movimiento incorpore entre sus filas a hombres de las ciencias sociales, de la filosofía y de otras disciplinas, que pertenecían a la academia y se ligaban a la política (Sigal, 1991). Diferente a los años en que Perón estaba vivo, el peronismo renovador es capaz de producir intelectuales propios, aun cuando los mismos tengan luego tanto o menos éxito que aquellos incorporados al peronismo original, más

tarde marginados del poder por el caudillo (Fiorucci, 2004). Como señala Horacio González, participante de este espacio:

la Universidad justo en ese momento retomaba la sociología que había sido interrumpida, se creaba la carrera de ciencias políticas. Entonces ahí apareció todo lo que el alfonsinismo leía, que era lo mismo que leíamos nosotros, es decir fuimos los *alfonsinistas del peronismo* (...) esto presupone distintos tipos de críticas a la razón populista. De modo tal que la revista *Unidos* impresiona como intento de jugar dos lenguajes: el de un peronismo democrático y el de la teoría de la participación social y de la democracia con determinación, que era lo que se discutía en esa época (...) pretendía crear un lenguaje político que en ese momento no existía en Argentina (cit. en Pavón, 2012: 203, énfasis propio).

La revista acompaña el proceso de renovación y le da una dimensión intelectual que, paradójicamente, la Renovación por sí misma no tenía (Pavón, 2012). Esto, por cuanto el intento por rearticular internamente a las dirigencias políticas tiene como intención final, partiendo de la crítica política y programática, la de impulsar un espacio para volver al poder (Sidicaro, 2010). La dimensión intelectual, por otro lado, proviene del diálogo que, a través de la revista, se genera entre los peronistas renovados –sobre todo los intelectuales- y otras culturas políticas, fundamentalmente la izquierda socialista (Pavón, 2012). Así, la Renovación, casi sin proponérselo, expresa un intento de adaptación a las nuevas condiciones sociales y políticas (Sidicaro, 2010) ya advertidas por los dirigentes peronistas en el repliegue electoral del movimiento.

Políticamente, este intento pareció funcionar cuando, a la par del declive de la popularidad sindical, en 1987 el movimiento renovador se impone en las elecciones legislativas (Garategaray, 2013), ante un alfonsinismo acosado por diversos sucesos relativos a la activación militar y los derechos humanos –el alzamiento carapintada de Semana Santa y la Ley de Obediencia Debida-, así como por la escalada de huelgas por parte de la CGT de Saúl Ubaldini y la propia crisis económica. En aquella ocasión, mientras Carlos Menem es reelegido gobernador por La Rioja, Antonio Cafiero gana en la Provincia de Buenos Aires. Tal triunfo desata una disputa entre ambos por ser el próximo candidato presidencial peronista. Concretamente, esa primaria constituye un punto de inflexión para la Renovación y su ala intelectual, que crece en su ambición por concebir un proyecto alternativo junto a los socialistas.

La campaña que enfrenta a Cafiero y Menem en las primarias presidenciales de 1988 es un buen antecedente de las estrategias político-intelectuales que se imponen en la Argentina de la década siguiente, porque mientras Cafiero intenta mostrarse como el candidato más renovador, Menem, anticipando la correlación de fuerzas consolidada al interior del peronismo, utiliza aquello y la cercanía de él con Alfonsín, para atacarlo (Garategaray, 2013). Así, la defensa de los principios democrático-liberales y la estrechez del acercamiento del movimiento renovador con el círculo político e intelectual de Alfonsín suscita controversia entre algunos reconocidos miembros del ala renovadora, quienes se alertan ante la posibilidad de que la Renovación se mimetice con el alfonsinismo. Esto es lo que tempranamente percibe un intelectual como Nicolás Casullo (2008: 230), peronista y miembro del movimiento renovador:

El peronismo no va a poder plantear una comprensión propia, una redefinición distintiva, si no reencuentra el recorrido real de su participación en la trama histórica cultural: esa que lo lleva a su crisis final. No va a poder discutir con fortuna los propósitos del presidente radical si entra también en el juego de esconder al peronismo (...) Si se le sigue otorgando a la interpretación alfonsinista la potestad de nuestra ausencia como historia desgarrada, y como desgarradora de la Historia.

Además de la cercanía a Alfonsín, Menem también usa a su favor una serie de dicotomías que reducen el espacio político. Entre ellas, la oposición del centralismo de Buenos Aires frente al federalismo y los intereses del Interior; frente al carácter intelectual de Cafiero, opone el carácter plebeyo del peronismo y de él mismo como representante del pueblo; frente a la razón, el carisma; y frente a la institucionalización del movimiento en partido, la defensa del carácter movimientista del peronismo (Garategaray, 2013). La estrategia de Menem, además, se sostiene en la debilidad del proyecto renovador, particularmente en que la discusión político-intelectual no logra contrapesar la presión del sindicalismo, aun fundamental para ganar cualquier elección. En efecto, la pérdida de poder que supone para el sindicalismo la institucionalización y democratización interna del peronismo le granjea a Menem el apoyo de los sindicatos más grandes –CGT Azopardo y la '62-, convergiendo en su candidatura la mayoría de los dirigentes sindicales y caudillos partidarios de la provincia de Buenos Aires, liderados por Eduardo Duhalde (Sidicaro, 2010), quien es su compañero de fórmula para la Vicepresidencia.

De este modo, el intento de la Renovación cae a manos de uno de sus fundadores. Y así, si el “peronismo renovador” asume el diálogo y busca abandonar la táctica de deslegitimación del adversario para contribuir -siguiendo el lema alfonsinista- a una “consolidación democrática”, la propuesta de Menem, por el contrario, resignifica la obra de Perón y antes que apelar a estructuras decisionales democráticas o a una dominación racional-legal, reactualiza la necesidad de liderazgos caudillescos que, a su juicio, la “patria peronista” necesita. Así lo deja claro en uno de sus discursos de campaña:

Es un tiempo para las sanas rebeldías, la recreación de esperanzas, las audaces utopías...se trata de escuchar la voz del Pueblo que siempre es la voz de Dios (...) Los argentinos, exhiben muestras de una madurez política que, a menudo, supera largamente la evidenciada por su clase dirigente....El hombre argentino ha señalado su camino...Quienes se resisten a ver esta esencia, con la excusa de asumir posturas pseudomodernistas o intelectualoides, están faltando a una responsabilidad histórica y pretenden convertir al justicialismo en un simple partidito liberal (Menem, 1988: 5).

Ahora bien, aun cuando el peronismo se encontraba desarticulado y sus bases sociales e ideológicas adolecían de fortaleza y criticidad al finalizar los años ochenta, la situación terminal del alfonsinismo, y con ello de buena parte del radicalismo, refleja algo evidente: el peronismo se muestra como el único actor político en condiciones de negociar los intereses argentinos. Pero ¿qué peronismo? En lo inmediato, el triunfo de Menem en la precandidatura justicialista genera un reacomodo de las fuerzas internas en torno a su figura, tanto a nivel de cuadros políticos como técnicos, que pasan a integrar su comando de campaña. Así, a fines de 1988, se conforma en torno al candidato justicialista la ecléctica “Comisión de Economía”, integrada por Domingo Cavallo, Eduardo Curia, Marcelo Diamond, Guido Di Tella, Rodolfo Frigeri y Roberto Lavagna. De ellos, sólo Curia es un colaborador habitual de Menem. Tanto Di Tella, Frigeri y Lavagna provienen de la facción “cafierista”, mientras Cavallo es el único independiente, aunque el con mayores redes empresariales y con un equipo de cuadros técnicos -venidos de la Fundación Mediterránea- dispuesto a aterrizar en un eventual gobierno (Pavón, 2012).

A esas alturas, aun cuando están en las antípodas de los intereses de la “patria peronista”, los temas de la desregulación comercial, la privatización de empresas públicas y la apertura

económica ya remozan el relato nacional-popular del peronismo. Ahora bien, solamente pueden hacer eso, pues al interior del equipo las diferencias se mantienen: mientras Cavallo y Di Tella plantean la tesis del “*shock* de confianza”, tanto con acreedores externos como con los agentes económicos internos, el resto plantea su preocupación por expandir el mercado interno y una línea de privatizaciones pautada y de ritmo lento (Camou, 1998). La extensión de la crisis y la hiperinflación que saca antes de tiempo a Alfonsín de su cargo habrá de “suavizar” las diferencias. En este punto, el rol intermediario de los economistas profesionales, y especialmente de la intelectualidad empresarial, que equilibra intereses políticos y comerciales de organismos multilaterales, empresarios, sindicalistas y operadores financieros, se torna fundamental (Camou, 1998).

Lo que pudo ser una renovación del peronismo es aplastado por la desalentadora pero cierta constatación de que quienes se resisten a la modernización partidaria son más que los renovadores. El triunfo en los comicios internos de la “antiélite menemista” (Sidicaro, 2010), paradójicamente, abre una nueva puerta a la intelectualidad empresarial, que además de las presiones corporativas, ahora logra introducir, con fuerza y escasa mediación estatal, toda una camada de técnicos y profesionales encargados de sellar el giro neoliberal.

### 3.2.3. ¿Consejeros del Príncipe? La intelectualidad socialista y la democracia imaginada

Hace pocos años, la escritora Beatriz Sarlo (2004) recordaba: “lo que a mí me encuentra profundamente sin presupuestos es la revolución conservadora neoliberal. Nos tomó sorpresivamente. Lo que digo es que lo que se esperaba de Menem no era bueno, pero no era lo que vino”. Con esta frase la escritora sintetiza la desazón que provocara el giro neoliberal entre la intelectualidad de izquierda<sup>28</sup>, a la vez que demuestra que tal incredulidad no es más que un síntoma de que, más allá de la histórica debilidad política del socialismo argentino, la respuesta se encuentra en el propio desplazamiento que experimenta el campo político-intelectual tras producirse el último golpe militar.

---

<sup>28</sup> Cuando aquí se habla de la “izquierda argentina” se remite a los grupos socialistas, aun cuando valga recordar que el espectro político incluye desde la izquierda nacional hasta el trotskismo.



El principal movimiento de inicios de la transición es liderado por un importante sector de la izquierda intelectual de los años sesenta y setenta, que expresa sus debates en dos revistas fundamentales del período: *Controversia*<sup>29</sup> (1979-1981) y *Punto de Vista*<sup>30</sup> (1978-2008). La primera, heredera de la cordobesa *Pasado y Presente*, nuclea a los socialistas gramscianos que confluyen en el exilio mexicano, así como a algunos miembros del peronismo revolucionario. Para esta revista el reconocimiento de la derrota constituye el punto de partida para toda reflexión política y cultural posterior, de modo que la autocrítica alcanza no sólo al accionar, sino también a los instrumentos teóricos usados (Pavón, 2012). Confluyen entre estos intelectuales tanto la crisis de los modelos de transición al socialismo, como el específico problema argentino respecto a cómo transitar de la dictadura a la democracia (Patiño, 1997). De allí que surjan como temáticas centrales la crisis del marxismo, el análisis de la izquierda argentina y latinoamericana, el peronismo, la redefinición de la labor intelectual en democracia y el exilio. Por otra parte, en *Punto de Vista* se apuesta a poner en circulación otros discursos –abarcando desde la crítica cultural y la teoría literaria hasta la reflexión sociológica–, que en sí mismos implicaban formas de resistencia al silencio autoritario (Patiño, 1997).

Al abrirse la etapa democrática, la existencia de estas revistas determina ya la existencia de una autocrítica consolidada y el comienzo de la elaboración de nuevos principios teóricos y prácticos desde los cuales pensar la disputa política. Esto significa, dentro de la lectura que comparten ambos espacios, cuestionar el camino revolucionario, el modelo del intelectual comprometido (que había alejado a éste de su actividad específica) y la propia tradición ideológica –en general, dentro del marxismo– que se había asumido<sup>31</sup> (Elizalde, 2009).

Esto significaría que, al regresar los intelectuales exiliados en México, se forme en 1984 el Club de Cultura Socialista, como un espacio en que convergen ambos grupos intelectuales

---

<sup>29</sup> Ejerció como director Jorge Tula, mientras su Consejo de Redacción estaba integrado por José Aricó, Carlos Abalo, Sergio Bufano, Rubén Caletti, Nicolás Casullo, Ricardo Nudelman, Juan Carlos Portantiero, Héctor Schmúcler y Óscar Terán (Patiño, 1997).

<sup>30</sup> Sus fundadores fueron Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano (Patiño, 1997).

<sup>31</sup> Ello generó un debate con otros espacios de la corriente marxista, que vieron en esta renovación una salida injustificada del marxismo y un acercamiento peligroso al pensamiento liberal-burgués. Ver Patiño (1997).

en torno a los valores de la democracia, el pluralismo, el tratamiento de las diferencias y el respeto por las minorías, así como el Estado de derecho (Elizalde, 2009). El sentido de este espacio es la realización de una revisión intelectual para dar curso a un pensamiento socialista “renovado”, cercano al paradigma democrático, que pueda ponerse al servicio de una visión alternativa que permita el cambio político (Patiño, 1997).

En paralelo a esta convergencia, en la política contingente se iniciaba el gobierno de Alfonsín, cuyo proyecto se plantea en términos de una doble ruptura: con el pasado y con los actores de ese pasado (Vommaro, 2006). Aquello coincide con la autocrítica del naciente socialismo “renovado” que fue acercándose al Presidente. En efecto, Alfonsín llega al poder con el objetivo declarado de reconstruir la “patria imaginada” y de darle unidad a un país arrasado por una crisis social y política profundizada por los militares. En ese intento, el mandatario buscaría estrechar lazos con personalidades del mundo de la cultura y de la academia, para darle estatura intelectual a su proyecto, haciéndolo por fuera de su partido. Por fuera, en tanto la debilidad interna del radicalismo era un síntoma de la propia debilidad de las fuerzas políticas argentinas, diezmadas tras la dictadura.

El mítico grupo Esmeralda surge de esta inquietud de Alfonsín, sin que se trate de una iniciativa organizada desde el radicalismo. Ese heterogéneo e inorgánico grupo apuntala las decisiones políticas presidenciales desde dos ámbitos: el trabajo de medios, la evaluación de la imagen presidencial y opinión pública; y desde la elaboración de ideas que sirvieron para construir sus discursos públicos (Elizalde, 2009). El mito se construye en torno a la participación de intelectuales destacados como los socialistas Juan Carlos Portantiero y Emilio De Ípola, además de Eliseo Verón, Francisco Delich y Juan Carlos Torre. Asimismo, parte importante de los técnicos y profesionales reclutados para estas tareas provienen de instituciones independientes como el Cisea, el Cedes y el IDES (Pavón, 2012). Aunque se trata de colaboraciones individuales y remitidas a tareas específicas que no necesariamente suponen tratar directamente con el Presidente, la participación de miembros del Club de Cultura Socialista sirve de correa de transmisión de ideas discutidas al calor de las reuniones semanales o de los debates mantenidos en los medios escritos.

Posiblemente, lo que vincula al campo intelectual con el político es la propia figura de Raúl Alfonsín (Elizalde, 2009), específicamente, la posibilidad que en él se vieron varios intelectuales de construir una democracia política, necesidad sobre la cual el pensamiento socialista renovado tenía un profundo convencimiento. Como señala Carlos Altamirano, fundador de *Punto de Vista* y participante del Club de Cultura Socialista, “el alfonsinismo era la izquierda posible en el espacio, que podía operar, obrar contra la imagen de una izquierda confinada exclusivamente en la crítica y la denuncia, y con poca gravitación en el espacio político” (cit. en Pavón, 2012: 149).

El tema central que vincula a Alfonsín con los intelectuales socialistas es la construcción del orden democrático y la relación entre socialismo y democracia. Siendo un tópico desarrollado sobre todo por la fracción exiliada en México, se inicia con la recuperación de la idea de *orden*, entendiendo la democracia como una forma de éste, que abre la posibilidad del disenso. Partiendo de una apropiación de las ideas gramscianas, este grupo plantea al consenso como la realización de aquel orden, el cual, sin embargo, no disuelve las diferencias, sino que reconoce la posibilidad del disenso y de procesar los conflictos (Portantiero, 1988). Algo como esto ya se articula en el pensamiento de José Aricó (1980: 16) durante su exilio mexicano en el número 9-10 de la revista *Controversia*:

el ideal socialista se sostiene como tal sólo a condición de admitir al método democrático como camino de su efectivización. Sólo así el mundo incontenible de lo diverso y de lo complejo puede abrirse paso de una manera no negativa (...) La pluralización social, y por lo tanto el método democrático de resolución de las diferencias en eterno proceso de aparición y desaparición (los “nuevos sujetos sociales”), aparecen así como los fundamentos sobre los cuales el socialismo puede abrirse paso.

Avanzado el gobierno de Alfonsín, el debate al interior del Club de Cultura Socialista da vida a la revista *La Ciudad Futura*<sup>32</sup>, convertida en el espacio de divulgación y discusión de las nuevas elaboraciones socialistas, ahora imaginadas en una relación directa con la realidad argentina, y no desde el exilio. En sus páginas, Portantiero y José Nun plantean la noción de “pacto democrático”, que da a conocer Alfonsín (2000) como su principal objetivo político durante su discurso de Parque Norte en 1985. Esta idea sostiene la

---

<sup>32</sup> Fundada en 1986 por José Aricó, quien comparte la dirección con Portantiero y Jorge Tula (Pavón, 2014).

importancia de que las fuerzas políticas arriben a un compromiso que, respetando la especificidad de los movimientos sociales, delimite un marco global desde el cual los conflictos y diferencias puedan coexistir (Elizalde, 2009). Y es que, como objetivo estratégico, la propuesta de estos intelectuales -y de muchos de su generación- es la implantación de un nuevo concepto de democracia que esté acompañado de una renovación de la cultura política, así como de nuevas instituciones democráticas. Ello, en tanto el diagnóstico era lapidario al recordar la historia política del país:

la democracia representativa como forma de gobierno de partidos jamás existió en la vida asociada de los argentinos. La democracia, o lo que se designaba como tal, fue una forma de gobierno de fuerte impronta cesarista (...) Puesto que durante los escasos y transitorios periodos de democratización que nos tocó en suerte, lo que se daba en realidad era un cesarismo exacerbado, donde la plaza ocultaba la corporativización de los actores sociales (...) (por ello) colocar en un nivel derivado y secundario las formas jurídicas e institucionales de una sociedad, no sólo es un error teórico, sino también el claro indicador de una situación social de neta separación entre Estado y sociedad, entre sociedad política y sociedad civil, entre economía y política (Aricó, 1986: 36).

¿Cuánto de esto fue posible? En realidad, muy poco. Al ser la relación con los intelectuales una iniciativa personal del Presidente y, generalmente, no existir relación alguna con la máquina partidaria del radicalismo, las ideas difundidas en los discursos no pudieron ser implementadas (Elizalde, 2009). Eduardo Issaharof, psicoanalista organizador del grupo independiente que asesoró a Alfonsín, señalaba: “Esmeralda hizo aportes importantes a los discursos, pero no estuvo acompañado de fuerza política” (cit. en Pavón, 2012: 140). Y es que la convergencia entre los intelectuales socialistas y el Presidente no surtió el efecto modernizante que alguna vez Alfonsín pensó para el radicalismo. El socialismo “renovado”, aun cuando tuvo a algunas de sus figuras cerca del poder, no contó con capacidad política o la base social necesaria para desarrollar su proyecto.

Ahora bien, retomando el sinsabor de Beatriz Sarlo, ¿por qué no hubo capacidad política para al menos intuir el camino que adoptaba la Argentina en los años ochenta? Posiblemente, porque a pesar de la creatividad intelectual y la riqueza de las propuestas sobre la democracia y el socialismo, como plantea Elizalde (2009), los aportes del grupo Esmeralda tuvieron que ver con la construcción de la democracia política desde lo discursivo. No más que eso.

En realidad, la preeminencia de este discurso de reinención de la democracia, que apeló no sólo a construir democracia política en un lugar en el que nunca la hubo, sino que además se atrevió a dejar el pasado de lado para plantear la construcción de una nueva cultura política, no toma en cuenta la profundidad del cambio económico y social que se producía en la Argentina. Más bien, conjuga un culturalismo y un politicismo excesivos en torno al problema democrático, lo que le impide observar cómo las raíces estructurales, económicas e ideológicas de la Argentina nacional-popular se transforman a una enorme velocidad desde la dictadura en adelante. Esta, de hecho, va a ser la autocrítica que hagan los socialistas en *La Ciudad Futura*, tras el triunfo de Carlos Menem en la elección presidencial de 1989: “Seguramente la ansiedad de muchos de nosotros por construir un régimen democrático de gobierno en la Argentina, tras décadas de autoritarismo, nos hizo caer en una exageración ‘politicista’, en un desdén por los hechos sociales estructurales sacrificados a una visión demasiado autónoma de la política. Fue un error”.

### **3.3.El poder de la ideología en el desembarco neoliberal argentino**

La larga década de los noventa, hasta llegar al *default* de 2001, está marcada por la “revolución copernicana” económica y política (Romero, 2012) que emprende el gobierno de Menem al implementar las reformas de ajuste estructural que trastocan el modelo de acumulación argentino, desplazándolo hacia la égida neoliberal. A contrapelo de la esperanza que suscitara la vuelta del justicialismo al poder, sobre todo en vastas franjas populares y medias que proyectaban un “salariazó” y la recuperación de su poder adquisitivo, la administración menemista ejecuta una apertura económica sin precedentes, privatiza buena parte de las empresas públicas e impone una leonina reforma del Estado y una profunda desregulación de los mercados y actividades financieras (Rapoport, 2010). Quiebra así con el peronismo histórico, el que, aun siendo pragmático en sus intervenciones económicas, nunca había dejado de alentar la industria nacional ni la integración social de las franjas populares y medias que lo apoyaban.

Además de la reconfiguración política y económica, los noventa arrastran el origen de profundos cambios culturales que hacen mutar el campo intelectual y la cultura política argentina. Los intelectuales, y la sociedad argentina en general, ven desarticularse los anclajes sociales originados en el primer peronismo, determinantes en la dinámica política y cultural de posguerra (Casullo, 2008). Las condiciones de existencia de los grupos urbanos ligados a la industria y de los otrora vigorosos sectores medios van deteriorándose, con una hondura que contribuye a acrecentar los bolsones de pobreza de las grandes ciudades argentinas, sobre todo tras la hiperinflación de 1989 (Ruiz, 2013). El alza de precios socava el esquema agroexportador, dominante por décadas, contribuyendo a que el capital financiero internacional hegemonice la economía.

Mucho tienen que ver en ello las huestes tecnocráticas que asumen la dirección, planificación y ejecución de la política económica y social. Estas, sin mayores contrapesos desde unos partidos políticos abrumados por el escenario económico y la transformación en sus bases sociales, convierten a la Argentina en un escenario de experimentación neoliberal. El primer aviso lo da la composición variopinta de la ya mencionada “Comisión de Economía” que acompaña al candidato Menem, con la que se quiere explicitar la promesa de un cambio en el modo de enfrentar la deuda y la inflación nacional (Pavón, 2012). Sin embargo, el acuerdo con los “capitanes de industria” y el ingreso de sus funcionarios al gobierno demuestra, sobre todo a las bases peronistas, que el pragmatismo justicialista podía extremarse hasta el punto de girar hacia la privatización y apertura económica, con el consiguiente perjuicio para las franjas populares que habían votado por Menem, anticipando la fragmentación y distanciamiento de estas con su gobierno (Pereira, 2007).

El comportamiento corporativista del capital nacional –incluyendo a agropecuarios, industriales y financieros- y sus sucesivos desencuentros, se habían mostrado decisivos a la hora de profundizar la crisis argentina y desgastar la administración alfonsinista. De allí que Menem apueste a acordar con el empresariado local una serie de medidas de liberalización económica tendientes a apoyar al sector exportador, el cual dirige la operación desde el propio Ministerio de Economía al colonizarlo funcionarios ligados a tales franjas empresariales. Durante 1989, altos ejecutivos del poderoso grupo agroexportador e

industrial Bunge & Born ocupan este cargo. Su plan de estabilización –el Plan BB- busca reducir el desequilibrio externo y fiscal a partir de alzas en las tarifas públicas y combustibles, incluyendo una devaluación, apertura al extranjero y eliminación parcial de la promoción industrial (Peralta, 2007). Poco dura aquello, sin embargo, tras una devaluación y una segunda hiperinflación ese mismo año, fracasando la ofensiva del sector exportador (Peralta, 2007). En un segundo intento, ahora bajo la gestión de Erman González, se lleva adelante el Plan Bonex, que busca reducir la liquidez para disminuir la inflación, al tiempo que se convierte la deuda interna en externa y se liquidan las obligaciones de los grandes grupos económicos con el Estado (Brenta, 2002).

En paralelo, bajo la presión de los industriales, durante estos dos primeros años el gobierno logra definir tempranamente los términos institucionales de la reestructuración estatal. Mediante las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica, se fijan líneas de descentralización y de subsidiariedad con el sector privado, preparándose con ello el escenario para el sucesivo desprendimiento de empresas estatales, a la vez que se avanza en una cancelación parcial de la promoción industrial y de exportación, favoreciéndose aún a los grandes proveedores tradicionales de las empresas estatales: la “patria contratista” (Ruiz, 2013). Se suman a ello gestos políticos como la incorporación al gobierno de personajes ligados al liberalismo tradicional argentino, el indulto a los militares y un giro en la política diplomática que fortalece el vínculo con los Estados Unidos, nuevamente a contracorriente del peronismo histórico (Pavón, 2012).

En 1990, la inflación alcanza un 2300%, dando cuenta del fracaso del Plan Bonex y, así, de la alianza del justicialismo con el capital nacional (Rapoport, 2010). Como con Alfonsín, los enfrentamientos entre exportadores e industriales y luego entre industriales y financieros hacen patente que estos primeros planes no logran sobreponerse al corporativismo de los gremios. Pese a que la represión autoritaria, la pedagogía monetarista y la violencia del desempleo y de la hiperinflación (Basualdo, 2001) generan un disciplinamiento en importantes franjas de la población, la conflictividad gremial y de importantes franjas sindicales del peronismo traban temporalmente la puesta en marcha de los ajustes neoliberales. Específicamente, la segunda hiperinflación de comienzos de los

noventa advierte que aún no se encuentran definidos ni los roles ni la importancia relativa de cada actor socioeconómico en disputa (Sidicaro, 2010). Por lo que los planes BB y Bonex pueden ser vistos como fallidos ensayos que evidenciaron el fracaso de la ofensiva exportadora e industrial por liderar la transformación neoliberal, haciendo patente que no sería el capital nacional el que lo encabezaría (Basualdo, 2001).

Hasta antes de 1991, el modo en que se produciría el giro neoliberal no estaba claro. Pero mientras, jugando con la vaguedad del significado de las reformas que impulsaba, el gobierno acumulaba poder político y montaba alianzas de corto plazo con sectores cuyos intereses eran contradictorios, usando una política de compensaciones (privatizaciones, favorecer el ingreso de socios locales con inversionistas extranjeros) y de disciplinamiento (uso discrecional de la apertura económica). Por ello, si las alianzas del gobierno con determinados actores empresariales facilitan la ejecución de las reformas, sólo favorecen a aquellos con mayor capacidad de presión individual y con acceso a instancias de decisión política (Beltrán, 2011).

Por otro lado, en el Ministerio de Economía la crisis provocada por la reversión inflacionaria se suma al escándalo por corrupción ligado a las privatizaciones que hace caer al ministro González a fines de 1990. La imagen presidencial decae y los sindicatos presionan contra la privatización y exigen un aumento salarial, atormentando internamente al peronismo. Es en ese marco que asume Domingo Cavallo, desde hace años candidato de la prensa para asumir tal ministerio, aun cuando no fuera el preferido de la banca ni de los organismos internacionales (Heredia, 2015).

Durante la década, la vinculación de la intelectualidad con Menem fue inorgánica y desordenada. A diferencia del de Alfonsín, su gobierno no proveyó ni un proyecto político colectivo ni una visión de futuro, sino encargarse de la crisis inmediata (Pavón, 2012). No obstante ello, entrega una oportunidad única de incidencia a los tecnócratas neoliberales, quienes se fortalecen en la misma medida que la política y los políticos son desdeñados ante cada nuevo acto de corrupción. En efecto, el gabinete de Menem opera dividido en dos. De un lado, el ala política, en manos de su círculo cercano -proveniente de sus años de



candidato populista- y, de otro, el ala económica, que ejecuta las medidas de ajuste en condiciones de relativo aislamiento de las presiones partidarias, determinando que los peronistas deban secundar una política económica que estaba en las antípodas de sus principios históricos (Torre, 1998). La habitual desconfianza del peronismo en los intelectuales públicos y la actitud de Menem de depositar en sus hombres de confianza las tareas de gobierno, entonces, se unen para dar la bienvenida a los “expertos”, venidos de universidades privadas como la UCEMA o la Universidad de San Andrés (Pavón, 2012).

### 3.3.1. La Convertibilidad como ideologismo y los economistas alcanzan el poder

La Ley de Convertibilidad e Indexación de 1991 -que equipara el valor del peso argentino y del dólar estadounidense y que prohíbe la emisión de moneda sin respaldo de divisas- es la pieza local en torno a la cual se forja el giro neoliberal argentino. Con ella se acelera la integración de la economía al mercado financiero externo al ampliarse la previsibilidad local para los actores económicos, reduciéndose los ataques especulativos y contribuyendo al crecimiento económico (Ruiz, 2013). Se trata de una apuesta del gabinete económico de Menem, que luego se convierte en el recurso a través del cual éste logra procesar temporalmente los conflictos de intereses que genera la crisis arrastrada.

La Convertibilidad no sólo no estaba en el Consenso de Washington, sino que lo contradecía, pues la “tasa de cambio competitiva” que se consigna en el quinto punto de éste, si bien no se asocia necesariamente a una moneda local devaluada, sí apunta a evitar tipos de cambio sobrevaluados (Heredia, 2015). Por ello, los organismos multilaterales la consideraban anacrónica (Nemiña, 2006) y los funcionarios del FMI hacían hincapié en las raíces sociales, políticas e institucionales del problema inflacionario, relevando la necesidad de un crecimiento nacional sustentado en cierta competitividad de la producción local (Babb y Buira, 2004). Desconfiaban de la paridad cambiaria y enfatizaban en la política fiscal como medida para recuperar el tranco económico, pues sin equilibrio presupuestario tal política no se sostenía (Heredia, 2015).

Las reformas institucionales y la paridad cambiaria no deben pensarse como parte de un mismo plan o “modelo” ideado integralmente (Basualdo, 2001). La Convertibilidad, más bien, responde a un plan alternativo asumido en última instancia por Cavallo y su equipo, pese al rechazo que históricamente muestran a una apertura como la invocada (Heredia, 2015). Y es que, siendo impulsada como una medida temporal, la Convertibilidad se vuelve permanente tras lograr una eficacia política, social y económica dada por el control de la inflación y por la apertura de un intervalo de aparente bonanza que, en los primeros años, se sustenta en la entrada masiva de capitales externos atraídos por las privatizaciones, altas tasas de interés y la seguridad de cambio que implica la paridad peso-dólar (Ruiz, 2013). Se mantiene, además, porque se inscribe en las prácticas financieras, productivas y comerciales y se transforma en el pilar de todos los contratos del país (Heredia, 2015).

Por otro lado, al poder articularse las reformas y la Convertibilidad, la idea de un “modelo” adquiere legitimidad, dividiéndose el mapa político entre los afines al modelo de “economía capitalista de mercado” y los “estatistas”. Esa dicotomía, pese a su artificialidad, le imprime un peso extra a la posibilidad de abandonar este plan, pues hacerlo parece devenir motivo para dejar el “modelo”, con la consecuencia de que para hacerlo es menester proponer todo un programa alternativo (Sidicaro, 2010).

La Convertibilidad emerge como la forma de integrar al país al mundo globalizado, en un sentido estrictamente económico: es la forma de captar los préstamos y divisas que necesita la transformación económica. De allí que la extranjerización de la economía se presente como símbolo de integración y modernización, aun cuando imponga un crecimiento del endeudamiento externo y una subordinación al mandato de organismos multilaterales como el Banco Mundial o el FMI, destruya la industria local y transforme a la especulación financiera en el principal negocio de los capitales externos y locales (Fair, 2014).

Menem y su equipo logran una compleja articulación ideológica entre los valores neoliberales, liberal-democráticos y conservadores, encadenándolos a la tradición nacional-popular y a la doctrina peronista. Lo hacen en torno a la idea de “democracia”, mezclando elementos de la tradición participativa, popular y social de ésta con elementos ortodoxos en

el plano económico, pluralistas liberales en el plano político y conservadores en lo social. Tal síntesis vincula la democracia política con la económica y, a ambas, con una globalización asimilada al neoliberalismo (Fair, 2014).

En términos políticos, la Convertibilidad tiene el efecto de elevar la popularidad del gobierno y de debilitar a los beneficiarios del modelo de acumulación previo, fortaleciendo a nuevos actores. Permite, asimismo, “gobernar” la economía, al disciplinar la lucha entre grupos económicos y fracciones del capital, imponiendo el dominio del capital financiero y la apertura económica a la penetración de empresas transnacionales en el proceso productivo (Peralta, 2007)<sup>33</sup>. De este modo, en tanto problema político, implica la renuncia estatal en el plano de la regulación de la moneda, cediendo potestad a otros actores (Ruiz, 2013). Entre ellos, a una intelectualidad tecnocrática que acrecienta su poder de decisión en la esfera estatal, como consecuencia de la prescindencia del Estado en materias de control comercial y monetario. Esto refuerza, además, su papel como intermediarios, cada vez más autónomos, de los actores nacionales e internacionales que participan y se benefician de una transformación que los tiene como principales defensores.

#### *El ascenso “mediterráneo” y la inhibición política de los gremios tradicionales*

En su formulación, la Convertibilidad tiene el sello intelectual de la corriente monetarista y la estampa política de un equipo de profesionales proveniente de modo mayoritario desde la Fundación Mediterránea, con incrustaciones del CEMA y la FIEL. En su implementación, lo determinante son tanto la premura impuesta por los *shocks* hiperinflacionarios de fines de 1980 como el pragmatismo del gabinete económico.

Cavallo, aunque contrario en un inicio, a poco de asumir como ministro constituye un grupo para evaluar la paridad, compuesto por sus colegas Roque Fernández, Carlos Sánchez, Juan José Llach y el jurista Horacio Liendo. Las dudas del equipo, a excepción de

---

<sup>33</sup> El plan introdujo condicionamientos de paridad cambiaria, un aumento de la deuda externa –pública y privada- afectada por las tasas de interés, la entrada de inversiones externas por la privatización de empresas estatales y emprendimientos en industrias y servicios comerciales y financieros (Peralta, 2007).

Fernández (líder del CEMA, presidente del Banco Central y “Chicago Boy” de origen), se ubican en las potenciales consecuencias perniciosas de la Convertibilidad sobre la estructura productiva (Pavón, 2012). Esta preocupación era consecuente con su trayectoria: Cavallo, Sánchez y Llach provenían de la Fundación Mediterránea, cuyo vínculo con el empresariado industrial era extenso<sup>34</sup>. Pero su pragmatismo posterior también lo era con los objetivos políticos de este organismo. En efecto, siendo lo suyo un trabajo político-intelectual que nace para articular los intereses industriales cordobeses, en aquél siempre medió otro objetivo de largo plazo preocupado de alcanzar incidencia nacional:

“La idea de ellos (Pagani y Astori, empresarios cordobeses que apoyan su fundación) era crear una corriente de opinión desde Córdoba, y desde el interior del país, favorable a los cambios que debían darse en las reglas del juego de la economía. Ellos pensaban que obviamente esto se haría finalmente desde la política. Por ejemplo, la obsesión de Astori –y en alguna medida también de Pagani- era identificar a los líderes políticos y económicos del futuro. Y así como él ‘apostaba’ a mí como economista, apostaba a Fernando de la Rúa como político, y apostó a Carlos Menem también (...) Mi propósito era organizar un equipo, que yo ya tenía en mente porque era el mismo con el que habíamos venido trabajando en la Universidad [Nacional de Córdoba] y en la Provincia. Enriquecer ese equipo, o reforzarlo con gente joven, con los mejores estudiantes que fuésemos detectando en la Universidad, para estudiar los temas con un sentido muy práctico, es decir, para pensar las soluciones a los problemas. Y hacerlo escribiendo trabajos que pudieran presentarse en los ámbitos académicos, pero que fundamentalmente sirviesen para la discusión con los empresarios, incluso con los dirigentes gremiales, por supuesto con las autoridades políticas, y sobre todo que sirviera para el debate público” (Cavallo, 2001: 95-96)

A diferencia de la Fundación Mediterránea, mientras el CEMA siempre estuvo tensionado entre la constitución de una entidad educativa que contribuyera a elevar el nivel de los economistas argentinos y la producción de investigaciones sobre problemas concretos

---

<sup>34</sup> Cavallo siempre había dado cuenta de este estrecho vínculo. Así, como subsecretario técnico y de coordinación del Ministerio del Interior durante la dictadura, impulsa un plan para controlar la tasa de interés y limitar el alcance de la garantía de los depósitos, dando una mano a los industriales endeudados. Por esos años, además, en su paso por la presidencia del Banco Central, impulsa las medidas que licúan los pasivos de los deudores privados en moneda nacional, implementando un seguro de cambio para atenuar los compromisos de quienes habían tomado créditos en dólares en el exterior, lo que significó estatizar la deuda privada (Heredia, 2015). Por último, el estudio que da origen a la Fundación Mediterránea, en el que se analizara la asimetría en la distribución del gasto público entre las provincias y la municipalidad de Buenos Aires, es una idea reciclada más tarde por Cavallo para apuntalar el desequilibrio regional y proponer -desde su posición de Canciller- varios de los lineamientos con los que nace el Mercosur (Ramírez, 2010).

(Cortina, 1997), la FIEL -ejerciendo por mucho tiempo como principal consultora de los grupos económicos locales-, tras estar en la primera línea económica de la dictadura, pierde peso ante los posteriores gobiernos democráticos (Ramírez, 2007).

Los “mediterráneos”, pese a haber participado también en equipos económicos de la dictadura, estrechan sus redes en democracia hasta convertirse en una alternativa ineludible para Menem<sup>35</sup>. En los ochenta, esta fundación crece exponencialmente: de ser una organización pequeña, con apenas 26 socios -entre pequeñas y medianas empresas cordobesas-, y financiar a 5 investigadores jóvenes en 1977, casi veinte años después llega a contar con 432 socios (121 empresas nacionales líderes y 32 grupos económicos), ampliando sus redes a las principales provincias y financiando a más de 50 investigadores con amplio roce internacional, varios partícipes del gobierno de Menem (Ramírez, 2012).

Con esta fuerza, además de las necesarias condiciones políticas -mayoría parlamentaria, colaboración sindical, cohesión del gabinete económico y confianza presidencial (Huneus, 1997)-, la Convertibilidad pudo expeditamente ponerse en marcha gracias al alineamiento que se produce entre el Ministerio de Economía y el aparato estatal, copado por cuadros “mediterráneos” (Basualdo, 2001). Y es que, junto a Economía, es controlado el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, accediendo a manejar la entrada y salida de recursos desde el Estado (Ramírez, 2012). A nivel estatal, habiendo cuadros afines en el Banco Central – prontamente autonomizado-, también los hay en bancos oficiales como el Nación, Hipotecario Nacional y Nacional de Desarrollo (Heredia, 2015). La Cancillería, por último, cierra esta trenza de poder, ya no con Cavallo a la cabeza, pero sí con los asesores de su confianza que apoyan la gestión de Di Tella, viabilizando el alineamiento entre las medidas de ajuste, el comercio exterior y las relaciones internacionales (Ramírez, 2012).

---

<sup>35</sup> En los ochenta, aprovechan sus sólidos lazos con la UCR para ocupar cargos en el Ministerio de Economía y en la Secretaría Ministerial de Comercio Exterior. Además, valiéndose de su estatus de reputado polemista, Cavallo abre una segunda línea de penetración como diputado aliado al Justicialismo, fuerza política en la que gana influencia aprovechando el característico déficit doctrinal de ésta en materias económicas y gracias a que asesores “mediterráneos” apoyan el trabajo legislativo de varios congresistas (Ramírez, 2010).

Por otro lado, el apoyo empresarial a las reformas no responde a una coalición empresaria preexistente, sino a apoyos selectivos definidos por las autoridades ante la persistencia de la inflación y crisis de las finanzas públicas. Como se mostró antes, las corporaciones no son las que acuerdan con el gobierno de Alfonsín las medidas económicas de 1987, sino un grupo *ad-hoc* de grandes empresarios, quienes conforman el denominado “Grupo de los 8”, con representantes de la industria, banca, comercio, agricultura y construcción. De este modo, con Menem, los antiguos adversarios del peronismo ven al fin implementarse lo que venían reclamando con insistencia desde los años cuarenta, convirtiéndose este pequeño núcleo en uno de los apoyos más consecuentes de su gobierno (Beltrán, 2011).

Con todo, el apoyo efectivo, la ambivalencia o derechamente el rechazo, viene dado, en el conjunto de la economía, por la distribución desigual del beneficio y perjuicio que se produce entre los actores empresariales, y que depende significativamente del tipo de vinculación al mercado internacional y de su tamaño relativo. Así, mientras en el agro y la industria la tendencia a favorecer a los actores más grandes y orientados al exterior fracciona e inmoviliza políticamente a sus gremios más importantes, el capital financiero se escinde hasta el punto de favorecer completamente a los banqueros internacionales, que hacen prácticamente desaparecer las matrices financieras locales (Beltrán, 2011).

En el agro, la principal tensión se centra en que al ser los mercados internacionales los asignadores de precios, ello redundará en las ganancias. Así, creciendo la producción de granos a grandes volúmenes en los noventa, y también los rendimientos por hectáreas, baja la rentabilidad por unidad producida (Peralta, 2007). El acceso al crédito permite sostener esto por un tiempo, pero en la medida que se deterioran los bancos regionales, se fortalece la unidad de los agropecuarios de menor tamaño, desafiando la primacía de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Desde un inicio, además, la SRA se bate entre apoyar al gobierno u oponerse a su adversario histórico: el peronismo. Una vez que opta por lo primero y se decide a apuntalar una estrategia negociadora en vínculo con los banqueros, genera una tensión con los pequeños y medianos productores y sus organizaciones -Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coniagro-, que exigen compensaciones específicas al gobierno y denuncian los efectos devastadores de la

financierización y monopolización extranjera de su actividad (Heredia, 2003)<sup>36</sup>. La ambivalencia con que este sector defiende la Convertibilidad, sin embargo, es evidente, pues mientras los grandes exportadores se solazan con la liberalización de los precios, la supresión de los controles a la comercialización, la disminución de los aranceles a la importación de bienes de capital y la reducción de impuestos, los productores orientados hacia el mercado interno y de menor tamaño exigen más proteccionismo ante el embate de las multinacionales, especialmente de la economía estadounidense (Sidicaro, 2010).

Los industriales, por su parte, pese al perjuicio que significa la apertura económica, no cuestionan mayormente a la Convertibilidad, sino tardíamente. Inclusive, tras el Efecto Tequila de 1994-95 -la devaluación del peso mexicano-, cuando se torna evidente la desestructuración de varias ramas de la actividad manufacturera, la extranjerización de las empresas más dinámicas y se registran los mayores niveles de inversión (Dossi, 2009). La clave es que la Unión Industrial Argentina (UIA) debe equilibrar una heterogeneidad de demandas e intereses que le impiden actuar unitariamente. Por ello, alterna una política de apoyo incondicional y de reclamo a las reformas, con predominio de lo primero. En paralelo, sus cuadros económicos, que exceden su colaboración con la Fundación Mediterránea encontrándose en otros espacios como la Universidad Católica Argentina (UCA), son incapaces de articular una alternativa (Beltrán, 2011).

En contraposición, mientras el agro y la industria se tensionan internamente y van siendo marginados políticamente en la primera mitad de la década, las entidades bancarias se unifican en favor de la banca privada y extranjera, y alcanzan una posición determinante no anclada solamente en la centralidad del sector financiero ante el derrotero del tipo de cambio, sino en un posicionamiento de la banca y una convergencia del sector financiero con los grandes actores del resto de la economía y con la tecnocracia empresarial, construida desde mucho antes (Heredia, 2003).

En efecto, dentro de los enjuiciamientos con que políticamente se abre paso el alfonsinismo está el apuntar a los banqueros como culpables del desastre económico de la dictadura, por

---

<sup>36</sup> Hasta llegar al paro agropecuario de 1999, como reacción a la privatización de los bancos regionales.

cuanto la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba)<sup>37</sup> juega un papel clave en la legislación económica propuesta por la Junta en 1978. En medio de la efervescencia democrática, ello incentiva a la organización a replegarse de la discusión pública, no sin antes reorientar su labor hacia la producción de pensamiento estratégico, reduciendo sus intervenciones, desde 1983, a la realización de la Convención Anual de la Banca Privada Nacional. Este evento, en las dos décadas siguientes, se transformaría en un hito que va a congrega a los principales actores gremiales y políticos del debate económico argentino, contando entre sus participantes con economistas de diversas orientaciones teóricas. Su sello está dado porque mientras se imitaba el vocabulario y la organización de las reuniones científicas, abriéndose el debate a problemas estrictamente económicos, se establecían soluciones unánimes y unívocas. Entre ellas, las de la desregulación, la privatización de empresas públicas y la flexibilidad laboral. Además, opera como espacio de sociabilización de autoridades, expertos y hombres de negocios, en tanto el evento es inaugurado y clausurado por el propio Presidente de la República (Heredia, 2003; Bernal, 2011).

La Adeba buscó mostrar que su posición estaba por sobre las disputas intraempresariales, por cuanto sus críticas a la intervención del Estado y su defensa en favor de la iniciativa privada no estaban condicionadas por la relación entre la Argentina y el mercado mundial, en el sentido de imponerse como el sector económico en torno al cual el desarrollo nacional se orientaba. Asimismo, a diferencia de los representantes del agro y la industria, la identidad de los banqueros trató de despojarse de su vínculo con lo nacional, defendiendo su asociación a flujos internacionales del capital en “estado puro”. Se insistía, así, en que la legitimidad de la Adeba no estaba dada ni por la referencia a un “pasado glorioso” ni por el prestigio de un grupo restringido de notables, sino por la posesión de un saber y de una práctica específica: la de los economistas y de los hombres de negocios (Heredia, 2003).

Pero una vez conseguida esta legitimidad social inicial y tras fortalecerse la cuota de poder de los banqueros privados y extranjeros ante cada fracaso de los gobiernos nacionales en sus negociaciones con los organismos internacionales de crédito, los organizadores de la

---

<sup>37</sup> La Adeba nace como un nuevo actor socioeconómico en 1972, a partir de la escisión que un grupo de banqueros privados de capital nacional realiza ante el inminente triunfo del peronismo (Heredia, 2003).



Convención Anual abandonan sus pretensiones ecuménicas, restringiendo sus invitaciones sólo a los centros de pensamiento privados y *think tanks* que compartieran el espíritu de la Adeba. El debate, por tanto, pasa de parecer un diálogo que considera opciones diversas de enfrentar la crisis, a uno orientado a buscar la mejor forma de difundir las ideas propias de los banqueros y sus intelectuales (Heredia, 2015). Esto se extendió hasta los años inmediatamente posteriores a la crisis mexicana, cuando la Convención Anual desaparece al comenzar a predominar la negociación directa y en privado de los banqueros con las autoridades estatales y del Gobierno. Ello, en línea con la fundación de la Asociación de Bancos Argentina, tras concertarse e internacionalizarse la banca (Heredia, 2003).

En definitiva, la reconfiguración orgánica de la estructura productiva y financiera permite una articulación temporal de los intereses empresariales en los primeros años de la Convertibilidad. Trastocado el modelo de acumulación y sacudido el mapa de los actores involucrados, la ideología de la globalización y del “modelo” disciplina el corporativismo del empresariado. En los marcos de la concentración y extranjerización de la economía, además del deterioro de la producción nacional, el gobierno encuentra aliados en las fracciones más grandes del capital, a la vez que se debilitaban sus variantes más pequeñas. Ante la falta de alternativas, la postura ideológica del empresariado fue tanto más taxativa cuanto más generales fueron las premisas defendidas. Así, cuando se hizo evidente que los intereses de la industria y del agro se verían afectados, sobre todo desde 1995, los voceros de ambas ramas se apertrechan en la defensa de los “lineamientos generales del modelo”, sin pronunciarse respecto a la paridad peso-dólar que está a la base de su deterioro (Sidicaro, 2010). Y es que, habiendo crecimiento económico y estabilidad inflacionaria, se invoca, para sortear las críticas a la Convertibilidad, un supuesto proceso de modernización en curso. El matrimonio entre peronismo y liberalismo tecnocrático, así, desintegra la identidad de los gremios tradicionales, pues, tal como ocurre con la SRA, los lleva a abandonar sus fundamentos identitarios, especialmente su antiperonismo (Heredia, 2003).

Con el apoyo de esta inédita alianza y a causa del apoyo e inhibición empresarial, se proyectan los cuadros tecnocráticos que apuntalan la Convertibilidad. Los “mediterráneos”, conectados estrechamente a los intereses del gran capital nacional, predominan sobre sus

colegas más transnacionales del CEMA y la FIEL, que igualmente apoyan el ajuste económico. Movilizan, así, durante la primera mitad de los noventa, un prestigio y una red de relaciones robusta e influyente, que opera con éxito ante la prescindencia estatal que les otorga una agencia mayor respecto a otros actores tradicionales de la política argentina.

### *La Convertibilidad y la homogenización del debate económico*

El Efecto Tequila de 1995 abre la puerta a un cuestionamiento del “modelo”. Pero, pese a que tras ella los analistas pronostican una devaluación y una apertura en la discusión pública, al ser cuestionada su orientación liberal y sobre todo la corrupción del gobierno durante el proceso de privatizaciones, no surgen iniciativas de remoción de la Convertibilidad desde la oposición, incluyendo a políticos y economistas de este bando (Heredia, 2015). En ello, por cierto, opera el cálculo político, pero también la habilidad del Presidente para reelegirse amparado en un cambio constitucional que es apoyado por el radicalismo y construido al alero de los viejos sentidos discursivos del peronismo histórico (Canelo, 2011). Es favorecido, además, por los beneficios que la apertura económica trae para el poder adquisitivo de las capas medias y por el establecimiento de un conglomerado social heterogéneo que, reflejando los cambios sociales producidos en los últimos veinte años, confirma su poderío en cada elección legislativa (Pucciarelli, 2011).

Ideológicamente, sin embargo, es determinante la homogenización del debate económico. Mantienen intacta a la Convertibilidad, pese a los cuestionamientos que surgen, tanto el ostracismo heterodoxo como el aplanamiento que sufre el pensamiento económico en la Argentina en los noventa. Así, pese a que esta política no es inmediatamente asociable a la ortodoxia neoliberal, quienes se reconocen miembros de tal corriente son los que adhieren con más fuerza al modelo económico. Aún más, su prestigio en universidades y centros de investigación se afianza, en Argentina e internacionalmente, después y no antes de las reformas de Menem (Heredia, 2015). En el caso de los heterodoxos -entre ellos, los estructuralistas cepalinos-, se impone la premura del tiempo presente en desmedro del largo plazo. Los tiempos de la política inhiben a la intelectualidad opositora e incluso la alientan a autocensurarse (Heredia, 2015). Empero, a diferencia de los años ochenta, tal autocensura

encuentra un campo ya hegemonizado por el pensamiento ortodoxo y, sobre todo, por una forma de organización político-intelectual que orilla a los centros de estudio de estos grupos hacia las directrices de unas agendas técnico-políticas internacionales que, a cambio de recursos, delimitan el campo de lo enunciable (Heredia, 2012).

Los centros de “refugio”, asociados con orientaciones políticas democráticas, de centro y centroizquierda, que funcionaran como amparo transitorio de los científicos sociales a la espera de la normalización de las universidades y del Conicet, giran en los noventa, especialmente en el ámbito de la ciencia económica, hacia el alineamiento de unas agendas internacionales que, por ejemplo, desestimaban los problemas macroeconómicos como cuestiones ya resueltas (Heredia, 2012). A ello se suma una nueva “americanización” de la actividad intelectual en esta década, asociada ahora a la conformación de un “mercado de la *expertise*” (Heredia, 2012). En efecto, apareciendo como más “independientes”, los nuevos *think tanks* y centros de estudio orientados a la formulación de políticas y a la consultoría profesional a empresas y al Estado, se comportan como agentes de mercado que se ajustan a la demanda. Así, pese a decaer el control del empresariado sobre los contenidos de los expertos (incluso de los que contrata o produce), se genera una homogenización previa y *a priori* de tales contenidos (Heredia, 2012). En ese sentido, lo más sustantivo es la indiferenciación ideológica de los viejos y nuevos centros académicos privados, dando lugar a una unificación teórica y metodológica que se corresponde con la estabilización macroeconómica y una fuerte especialización que acaba con las disidencias teóricas.

Por último, la falta de cuestionamiento a la Convertibilidad se explica por la venia del FMI. Este organismo distingue a la Argentina como ejemplo de disciplina presupuestaria, adoptada y ratificada en democracia, ilustrando la posibilidad de superar los *shocks* externos sin mayor desorden (Babb y Buira, 2004). Ello lo lleva a suscribir con el país un acuerdo que designa a la Convertibilidad “principio rector” de la política económica local, haciendo depender aún más la estructura económica de su mantenimiento (Nemiña, 2006).

Ahora bien, abierto el campo de la crítica, paradójicamente ella provino del ala más ortodoxa a Cavallo y su equipo. Liderada por los cuadros locales provenientes de la Escuela de

Chicago, concentrados en el CEMA y la FIEL, le achacó al gabinete económico la mala aplicación de las medidas de ajuste y, al gobierno y Estado, su mal funcionamiento consecuencia de la corrupción. Los ideólogos neoliberales sitúan como principal enemigo al populismo, asociado al modelo económico del peronismo de guerra (Fair, 2014). Así, anclada al relato de las reformas de “segunda generación”, esta ortodoxia sostiene que las causas de la inestabilidad están en las deficiencias en la institucionalidad de las reformas:

“Durante la corriente década, la Argentina ha experimentado un cambio profundo en su política regulatoria hacia los servicios públicos, que ha significado mejoras notables en la eficiencia en la asignación de recursos productivos y en la minimización de costos, avances tecnológicos, mejoras de calidad y disponibilidad de servicios, etc. Sin embargo, además de estos avances importantísimos, también se han verificado distintas fallas en la regulación, producto en muchos casos de diseños inadecuados de los mecanismos de selección de oferentes y de las pautas contractuales establecidas. Estas dificultades no sólo disminuyeron las ganancias de productividad y bienestar alcanzables, sino que también generan cierto malestar que intenta ser políticamente aprovechado con propuestas no siempre tendientes a su solución” (FIEL, 1998: 9)

En paralelo a este diagnóstico, el “Tequilazo” también propició un parteaguas en el poder detentado por los economistas de la Fundación Mediterránea. Esto, porque si hasta 1996 controlan el Ministerio de Economía, el desbarajuste mexicano y sus efectos saca a Cavallo y permite la proyección de Roque Fernández, quien gana relevancia en la coyuntura. Tal decisión encuentra a una Fundación Mediterránea ya debilitada. Y es que, habiéndose convertido en una inmensa productora de informes técnicos y lineamientos ideológicos, que contaba entre sus socios a lo más granado de las empresas líderes y los grupos económicos locales y una red de poder en el Gobierno y el Estado, ese triunfo rotundo, paradójicamente, produjo un éxodo que vació al IEERAL quitándole a sus mejores investigadores, sin que estos puedan ser reemplazados rápidamente por becarios más jóvenes (Ramírez, 2012).

Una “victoria pírrica”, entonces, ya que, al copar la estructura del poder gubernamental y estatal, se vacían las bases sociales que lo sustentan. De este modo, si ya el mecanismo de dominación ideológica en que se amparaba su poder -el Plan de Convertibilidad- era débil y dependía de un inestable equilibrio que sólo podía ser transitorio, queda en evidencia su incapacidad para sostener la reproducción social y cultural exigida a toda fuerza político-intelectual que se precie de tal. Como consecuencia, al ser Cavallo depuesto de su cargo, tal

debilidad en el reclutamiento de nuevos socios y en la formación de cuadros deviene un repliegue que, hasta hoy, ha alejado a esta organización de la primera línea de discusión sobre políticas públicas (Heredia, 2015).

La crisis de la Fundación Mediterránea permite el ascenso de los cuadros del CEMA al Ministerio de Economía y al Banco Central. Y allí, el grueso de los “Chicago Boys” argentinos, apoyados por un FMI que defiende la Convertibilidad como “modelo exportable” (Nemiña, 2006), marcan un quiebre en el manejo de la economía. Es que, mientras los “mediterráneos” habían divisado los peligros que anticipaba la crisis mexicana, los del CEMA renuncian a mayores ajustes, exacerbando la orientación inicial de la Convertibilidad hacia una “dolarización” de la economía. Inauguran, así, una política que intenta administrar lo alcanzado, pero sin tener a mano los recursos que las privatizaciones le habían prodigado al gobierno en la primera mitad de los noventa (Heredia, 2015).

### 3.3.2. Pobreza y corrupción: el desvarío de la intelectualidad progresista

La capacidad hegemónica del neoliberalismo no sólo se realiza en los efectos políticos y económicos que produce el ajuste estructural impulsado por el gobierno de Menem. También lo hace en los mecanismos ideológico-técnicos con los que se pretende dar solución a problemáticas sociales atribuibles a la crisis de los ochenta y a la transformación neoliberal. La pobreza, entre ellas, es la más destacable, pues, pese a la lejanía con que la Argentina la observara en el siglo pasado, al circunscribirla sólo a la realidad de otros países de la región, el deterioro económico y social la torna acuciante. Así, ella y la corrupción vehiculizan una respuesta del progresismo local al peronismo neoliberal. Sin embargo, junto con mostrarse políticamente insuficiente, tal alternativa atiza el desembarco neoliberal desde otro flanco político-ideológico: el de la política social focalizada.

#### *Peronismo y “nueva cuestión social”: el vínculo experto entre pobreza y corrupción*

Paulatinamente subordinadas a un patrón de acumulación financiero y global, las clases y grupos sociales dominantes argentinos encuentran sus mecanismos de legitimación en la

difusión de los paradigmas de la sociedad de consumo y la mundialización, entendidos como fenómenos irremediables e irreversibles. Empero, por la volatilidad de lo externo, la orientación de ese constructo ideológico hacia las capas populares, y sobre todo hacia las bases sociales de un peronismo mutado en agente del neoliberalismo, debe necesariamente articular tal relato modernizador con la identidad nacional-popular aún persistente. En ese ejercicio, el discurso peronista es adaptado a los “nuevos tiempos”, pretendiendo *actualizar* la doctrina del general Perón (Canelo, 2011).

Se mezclan elementos de la ideología neoliberal con otros de la tradición peronista, haciendo un uso político que, a partir de una relectura de la historia peronista -ya ensayada por la Renovación en los ochenta (Garategaray, 2012)-, permite a Menem legitimar las reformas tanto en relación a un pretendido fomento de la unidad continental -extendiendo regionalmente el discurso de la “comunidad organizada”-, como en torno a la idea de que con ellas se avanza en un proceso iniciado por el propio Perón en su segunda Presidencia, cuando acepta el ingreso de inversiones extranjeras (Fair, 2014). Tales recursos políticos son claves para generar adhesiones y consolidar apoyos político-electorales entre el Partido Justicialista (PJ) y, sobre todo, entre un sindicalismo peronista que no muestra una lealtad automática dada la dureza con que actúa el gobierno (Canelo, 2011).

Desde la transición a la democracia, al interior del movimiento peronista se gesta un recambio político mediante la proliferación de organizaciones barriales que dan origen a fuerzas provinciales lo suficientemente fuertes como para cuestionar los liderazgos *de facto* del sindicalismo en su relación con el partido. Se reemplaza, así, paulatinamente, la dependencia de los recursos sindicales -claves en la dictadura- por los del Estado, incentivándose el uso de los cargos públicos para cimentar alianzas con los activistas barriales o zonales (“punteros”), y para edificar las “agrupaciones” o redes de apoyo informales que comienzan a operar al margen de los sindicatos gracias al patronazgo. De este modo, a lo largo de la década, los recursos públicos pasan a convertirse en el principal vínculo entre el PJ y sus militantes (Levitsky, 2004; Pucciarelli, 2011).

En los noventa, esta situación y el propio deterioro económico y social hacen fracasar sistemáticamente los intentos por reconstruir una organización fuerte que supere la fragmentación sindical, imponiéndose la negociación individual de los líderes sindicales. Ello queda reflejado en cómo la CGT pierde el control sobre los diputados sindicales, quienes pasan a deber favores ahora a los dirigentes partidarios. Así, si a nivel de la conducción, los sindicatos son desplazados de la coalición dominante en el partido, a nivel de las bases sociales las redes clientelísticas sustituyen a los sindicatos como vínculo primario entre el PJ urbano y sus afiliados (Levitsky, 2004). Estos cambios en la composición orgánica y del poder al interior del peronismo es lo que permite al gobierno de Menem morigerar la resistencia sindical a las reformas neoliberales. Y es que la “desindicalización” del PJ se advierte en el hecho de que las redes de patronazgo detentan más poder que las sindicales en las ciudades industrializadas, asemejándose el peronismo urbano a los aparatos clientelistas predominantes en las provincias (Levitsky, 2004).

Ahora bien, este declive de las fuerzas sindicales en favor de nuevas agrupaciones barriales es un hecho que, en la discusión político-intelectual, termina siendo asociado, en la segunda mitad de los años noventa, a otra problemática que, siendo también producto de los efectos políticos y sociales producidos por la “década perdida”, excede a cualquier movimiento político al tratarse de un fenómeno global dentro de la sociedad argentina: la pobreza.

En 1984 se pone en funcionamiento el Programa Alimentario Nacional (PAN), programa masivo de asistencia alimentaria de las clases populares, que mostró por primera vez la magnitud de las transformaciones sociales experimentadas en el país desde mediados de los años sesenta, y mediante el cual el gobierno de Alfonsín institucionaliza a la pobreza como un problema de connotación pública y ya no ajeno a la Argentina. Este programa es, además, el primero en el que se utilizan criterios de focalización en la distribución de los recursos, toda vez que se distribuyen alimentos entre una población específica que se asocia al cumplimiento de ciertas condiciones de pobreza extrema determinadas por el “Mapa de Emergencia Social” que se elabora a partir de los indicadores de vivienda medidos por el Censo de 1980 (Grondona, 2016).

La urgencia por producir herramientas de medición para viabilizar este tipo de medidas, contra la consideración inicial que veía en la pobreza un fenómeno excepcional para el cual debían concebirse programas temporales orientados a su rápido tratamiento (Vommaro, 2011), hace que adquiera importancia la pregunta por quiénes son los pobres, en desmedro de aquella enfocada en saber dónde ubicarlos (Grondona, 2016). De tal suerte, emergen instrumentos como la definición de una “línea de pobreza” o de una “canasta básica”, que cambian el foco de las políticas sociales. En particular, si en los años sesenta el problema de la marginalidad -antecedente regional de los estudios sobre la pobreza- se centraba en la relación capital-trabajo, en los ochenta, bajo el influjo de la focalización social y de la artificiosa vinculación entre democracia y “superación de la pobreza” que hace el gobierno (en contraposición a la de dictadura y pobreza), adquiere importancia la administración de políticas para los márgenes sociales. Así, importando cada vez menos el salario y la variación de los salarios reales, los esfuerzos se enfocan en mejorar los ingresos y/o solventar las Necesidades Básicas Insatisfechas (Grondona, 2016).

Ello reduce el problema de la marginalidad y de la pobreza a un asunto técnico, cuestión que, en medio de la hondura que alcanzan la precarización e informalización del mercado de trabajo, abre la puerta para que se extienda una visión descriptivista de tales fenómenos. Por ella, éstos se desagregan en cada vez más indicadores, derivándose en una explicación basada en una supuesta *heterogenización* de la pobreza, que da lugar a un esfuerzo por distinguir subpoblaciones pobres y “grupos vulnerables”, con el fin de maximizar la eficiencia de las políticas sociales. Articulando este enfoque con un interés por analizar las estrategias familiares de supervivencia y el “comportamiento de los pobres” (nupcialidad precoz, tasas de natalidad, etc.), desde fines de los años ochenta prolifera una explicación sobre la pobreza que deriva con facilidad en trazos de estigmatización y culturización. En los noventa, a ello se suman indagaciones cualitativas sobre las percepciones y representaciones de la pobreza, en las que confluyen desde apropiaciones locales del debate europeo sobre el “fin del bienestar”, hasta una línea de investigación sobre la vida cotidiana y los sentidos de las microinteracciones, así como aquella cuyo imperativo, de gran impacto en el Estado y la academia, es el “escuchar la voz de los protagonistas” (Grondona, 2016).



El vínculo entre pobreza e inflación marca el camino durante el gobierno de Menem, como un recurso de contraste con los episodios hiperinflacionarios y de desestabilización democrática asociados a la experiencia alfonsinista. Se refuerza, así, el régimen descriptivista<sup>38</sup> y, aun cuando el diagnóstico de la *heterogenización* de la pobreza y de la fuerza de trabajo no es equiparable sin más a las estrategias neoliberales de intervención promovidas por el Banco Mundial, ellas predominan. En efecto, al alero del Informe sobre la pobreza en Argentina que esta institución difunde en 1995, se instala la idea de que ha emergido una “nueva Argentina” descendiendo los niveles de pobreza a causa de la exitosa estabilización económica de la primera mitad de la década. En ese informe se postula, además, la importancia de las políticas compensatorias orientadas hacia los “perdedores” de la apertura económica. Ello, en aparente oposición con los economistas neoliberales y expertos del FMI, que afirman que el desempleo y la pobreza serán superados una vez estabilizado el crecimiento económico (Vommaro, 2008a).

Tal mirada sobre la pobreza en la Argentina se institucionaliza en 1994 con la creación de la Secretaría de Desarrollo Social, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios (Acuña et al., 2002). Desde allí, con un discurso de “gerencia social”, el equipo de esta repartición asume como soluciones la multiplicación de programas sociales focalizados y el fomento de la participación de la “sociedad civil” (Vommaro, 2008a). Mediante la implementación de los “fondos de inversión social”, ya puesto en marcha por el Banco Mundial en otros países de América Latina, se pretende “complementar” las reformas económicas con reformas sociales, poniendo en práctica un paradigma de políticas focalizadas y descentralizadas cuyo objetivo no es tanto la transferencia de recursos como la de “capacidades”, entendidas como el “empoderamiento” de los pobres para construir redes de ayuda y así alivianar los efectos de los programas de ajuste (Vommaro, 2008a).

Este programa lo despliega una “burocracia paralela” a la estatal, bajo el impulso de garantizar una “flexibilidad” y “eficiencia” que se presuponen contrarias a los modos de

---

<sup>38</sup> Se elaboran “perfiles de pobreza” -conjuntos de variables asociadas a condiciones de pobreza más agudas o estables- y se extiende la preocupación por la vulnerabilidad respecto de la *reproducción* de la pobreza, dando lugar a nuevas subpoblaciones asociadas con grupos etarios o con las jefaturas de hogar (Grondona, 2016).

acción propios del aparato público (Acuña et al., 2002). A ella se suma la burocracia estatal y el grupo de consultores vinculados al Sistema de Evaluación y Monitoreo de Programas (Siempro) los que, bajo contratación puntual, efectúan trabajos de consultoría tanto en el diseño como en la aplicación y evaluación de los programas. Ambos grupos, dentro y fuera del Estado, que concentran los recursos destinados por los organismos internacionales para la “lucha contra la pobreza”, convierten a este círculo en una especie de *think tank* al interior del propio Estado (Grondona, 2016).

En la progresión de programas nacionales focalizados se entrecruzan principios de acción y actores diversos, aunque todos incluidos en la óptica de la participación de expertos y de la “sociedad civil” (Grondona, 2016). En esa articulación, hacia fines de los noventa, emergen lecturas expertas que, más cercanas al progresismo neoliberal, critican el accionar del Banco Mundial, pero sin traspasar la barrera de una crítica moral. En efecto, autores como Javier Auyero (1999), partiendo de un diagnóstico similar al que explicara la transformación del PJ, sostiene que, al convertirse las redes sociales de los pobres en “redes clientelares”, políticas públicas como las empujadas por el Banco Mundial, pese a su pretendido deseo de democratización, terminan fortaleciendo a la propia pobreza y al clientelismo imperante en los barrios. Ello, en tanto la distribución de tales ayudas, realizada a través de los municipios y de las organizaciones sociales en los barrios populares, son movilizadas por los “punteros” de los partidos políticos mayoritarios.

Auyero (2001) llega a estas conclusiones, sin embargo, partiendo de un diagnóstico errado: la “retirada del Estado”. Así, asume que el clientelismo se ha transformado en una necesidad para los pobres, toda vez que los sectores populares desempleados y empobrecidos sufren de un abandono estatal que los deja presos de las redes territoriales de clientela para acceder a los bienes necesarios para resolver sus problemas de subsistencia. De ello deriva una crítica moralizante al actuar de los operadores políticos, fundamentalmente peronistas, al someter la ayuda estatal al apoyo político.

La consecuencia de una crítica como ésta -de la que Auyero es sólo un ejemplo- es invisibilizar el asunto sustantivo: el carácter focalizado de las políticas sociales. En efecto,

al asumir que se había producido una “retirada del Estado”, se oscurece la modificación del principio regulador de su presencia en la sociedad y en los territorios populares, que es su verdadero cambio. Su nueva manera de estar presente es a través de la multiplicación de políticas sociales focalizadas distribuidas descentralizadamente, vale decir, la misma modalidad invocada por el Banco Mundial cuando llama a una “vuelta del Estado”. Esta visión nubla la centralidad de la focalización en la nueva relación entre Estado y sociedad, opacando el hecho de que la fidelidad política, si bien existente, no explica por sí misma el acceso a los bienes públicos, en la medida que la focalización social introduce un elemento novedoso y determinante: la exigencia de ciertos criterios impuestos “desde arriba” a los intercambios político-territoriales. Y es que, además de apoyo político -en los casos en que la distribución de los recursos es utilizada políticamente-, también se debe cumplir, dependiendo de los requisitos fijados por la tecnocracia estatal, con otros indicadores como edad, composición familiar o disposición al trabajo (Vommaro, 2008a).

Finalmente, de este análisis se deriva un elemento que se repite en la producción político-intelectual sobre la pobreza de esos años: la asociación inmediata entre pobreza y clientelismo, entendiendo a este último como la entrega de prebendas a cambio de favores políticos. Ello, pese a que el clientelismo, más allá de los sectores populares -y dentro de ellos los pobres-, es un fenómeno que atraviesa grupos y clases sociales en la Argentina. Asimismo, de tal ligazón se deriva, arbitrariamente, una defensa estigmatizadora de los pobres, en tanto se asume que sólo se vinculan con la política por medios prebendarios, sobre todo si ese vínculo es con el peronismo (Vommaro, 2008b).

Entender esto, sin embargo, necesariamente lleva a considerar la evolución que había experimentado el fenómeno de la corrupción en la Argentina de esos años. Es que, si a comienzos de la década ésta se va a vincular a las privatizaciones de las empresas públicas y, en un sentido más profundo, al proceso de concentración económica que se extiende, en la segunda mitad de los años noventa la atención gira, esta vez bajo el lema de una “lucha por la transparencia”, hacia el control sobre la asignación de los préstamos entregados por los organismos multilaterales para paliar las situaciones de pobreza. Es ese encuentro entre la “lucha contra la corrupción” y la “lucha contra la pobreza” como problema cultural, lo

que produce una nueva forma de *expertise* ligada a la pobreza y a la relación de los sectores populares con el Estado y los partidos: la “lucha contra el clientelismo”. A eso se vincula la “lucha por la transparencia”, que alcanza importancia en la agenda de los organismos multilaterales, implicando que los préstamos asignados al Estado comiencen a tener como condición de atribución el control externo de sus usos (Vommaro 2008b).

Estos programas de “transferencias condicionadas”, asocian pobreza y desempleo a la vez que, al distribuir una suma fija de dinero mensual para contribuir a la reproducción de las familias pobres, introducen el principio de “contraprestación”. Bajo la idea de que además de distribuir dinero es necesario que los pobres recobren “capacidades”, los programas instituyen la obligación de realizar algún tipo de trabajo social o comunitario (Vommaro, 2008a). Tal condicionalidad, particularmente bajo el gobierno de la Alianza, sirve como prenda de negociación en los conflictos con los movimientos sociales territoriales emergentes, especialmente con los “piqueteros”. Pero, sobre todo, para disminuir el conflicto social en el plano subnacional y local (Acuña et al., 2002).

En definitiva, subyace a la idea sobre la relación de los pobres con la política que, mientras más pobre se está, menos independiente se es. Ello, en el contexto de una Argentina en la que, desde los años ochenta, las capas medias, a las que pertenecen las tecnocracias, comienzan a considerar como un valorpreciado la independencia en política (Canelo, 2011). De allí la defensa paradójicamente estigmatizante de los pobres que ellas realizan. Defensa que se asocia a la crítica hecha a las políticas del Banco Mundial, en una clave que, sin embargo, no hace sino consolidar la racionalidad neoliberal dentro del Estado argentino.

### *La deriva política de la intelectualidad progresista y su desilusión*

En los años noventa, como contracara del “menemismo”, militantes y simpatizantes de centroizquierda y algunos de izquierda, peronistas díscolos y disidentes, algunos radicales y socialcristianos, abrazan el sueño de un movimiento político que buscaría atravesar ideológicamente a la sociedad argentina, tomando banderas del campo progresista. Este

movimiento participa en las elecciones parlamentarias de 1991 bajo el nombre de Frente por la Democracia y la Justicia Social (Fredejusos), pero logra incidencia política real solamente desde 1993 cuando pasa a llamarse Frente Grande, especialmente por su oposición a la reforma a la Constitución y por capitalizar el descontento con el radicalismo que cunde tras el acuerdo entre Alfonsín y Menem en el Pacto de Olivos, y que permite la reelección de este último (Pucciarelli, 2011).

Liderado por Carlos Álvarez -del “Grupo de los 8”, diputados peronistas que renuncian al PJ al producirse los primeros atisbos del giro menemista-, por la dirigente de Derechos Humanos Graciela Fernández Meijide y por el dirigente demócratacristiano Carlos Auyero, el Frente Grande logra convocar a una pléyade de importantes intelectuales, entre los que destacan Beatriz Sarlo, Carlos Altamirano, José Nun, Vicente Palermo, Atilio Borón y Santiago Kovadloff (Pavón, 2012).

Tras obtener importantes triunfos electorales, a fines de 1994 este conglomerado se alía con el partido PAIS, la Unidad Socialista y el Partido Demócrata Cristiano, para dar origen al Frente País Solidario (Frepasso). Esta coalición política, nacida para promover un candidato presidencial para la elección de 1995, se caracteriza por el estrecho vínculo que une a intelectuales y políticos, especialmente en torno a la elaboración de discursos orientados a los medios de comunicación y expuestos por algún dirigente. Pero también por tratarse de un “partido liviano”, en donde ambos grupos no logran engarzar su actividad sobre bases sociales más amplias. Así, pese a obtener cerca de un tercio de los votos en 1995, relegar a la UCR al tercer lugar y constituirse en tercera fuerza de la Cámara de Diputados, carece de una fuerza electoral estable más allá de cierta penetración en el electorado urbano, particularmente en Capital Federal, Gran Buenos Aires y Rosario (Pavón, 2012).

En 1997, el Frepasso orienta su política de alianzas hacia la UCR para conformar la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación (la Alianza), obteniendo en octubre de ese año un triunfo en todo el país en las elecciones legislativas. Esta misma coalición lleva al radical Fernando de la Rúa a la Presidencia de la República en 1999, en fórmula con Fernández Meijide. Sin embargo, a poco andar, la mayor capacidad política y orgánica del radicalismo

invisibiliza a las dirigencias del Frepaso, desmoronándose su estructura. Un desenlace que, si bien es explicable en parte por el apuro de las dirigencias del Frepaso por no esperar a que el crecimiento constante reafirmara al movimiento como segunda fuerza por encima del radicalismo (Canelo, 2011), remite a una debilidad política anterior vinculada al contenido progresista que articula a esta fuerza.

En efecto, el Frepaso, haciendo eco de una centralidad política puesta en la “lucha contra la corrupción”, construye sobre la base de este discurso moralizador sus fundamentos programáticos, antes y después de converger con el radicalismo en la Alianza (Canelo, 2011). La alternativa política que se articula en contra de Menem lo hace en torno a la probidad y, con ello, la promesa de mejorar la gestión estatal. Una promesa en la que resuena la ambición electoral de corto plazo y la renuncia, a su vez, a una construcción ideológica de más largo aliento, y que, en medio de un avance arrollador del gobierno de Menem, explica por qué el sentido más pragmático de los radicales les da ventaja.

En verdad, la importancia desmedida que el progresismo da a la corrupción -fenómeno perenne en la Argentina- como problema central de la política de fin de siglo, radica en un impacto mediático dado por su asociación posible con la larga estadía de Menem en la Casa Rosada, y con el accionar de su principal adversario político: el peronismo (Pucciarelli, 2011). Es decir, la asociación inmediata entre pobreza, corrupción y peronismo, formulada en torno al fenómeno del clientelismo, encuentra su deriva política en esta rearticulación del progresismo argentino. Aún más, la interpretación que recurrentemente han hecho diferentes personalidades de esta intelectualidad, fundamentalmente desde las ciencias sociales, respecto a las causas que explican la fuerza política del peronismo, dando excesiva importancia al discurso doctrinal y al vínculo entre líder y masas, los ha empujado a ver por igual manipulación y un ficticio enfrentamiento entre “dos Argentinas” (Neiburg, 1995).

### 3.3.3. Inercias de fin de siglo y reconstrucción del campo intelectual argentino

Perdida su apariencia de solidez, se impone en la discusión pública que las únicas opciones posibles para dar término a la Convertibilidad son la dolarización o la sobrevaluación del

peso. De la devaluación poco se habla, pues la percepción general es que ella tendría acarrearía una caída drástica de los salarios y una corrida especulativa (Heredia, 2015). Los economistas heterodoxos se debaten entre las promesas progresistas de la Alianza o la mantención de la paridad cambiaria. Sus argumentos en contra del “modelo” apuntan a la dependencia local de las fluctuaciones comerciales y financieras internacionales, y a la relación entre Convertibilidad y degradación social. A esa altura, dan menos importancia al déficit presupuestario y ven la degradación de las finanzas públicas no como la causa, sino como consecuencia de las falencias del “modelo”. Los ortodoxos, por su parte, aunque se mantienen alineados con la austeridad como forma de estabilización, se culpan entre sí por no haber aprovechado la ocasión de profundizar y fortalecer la Convertibilidad. Ello se ve reflejado en el enfrentamiento entre los equipos de Cavallo y Fernández (Heredia, 2015).

Al asumir como mandatario, De la Rúa designa como ministro de Economía al también radical José Luis Machinea, inclinando la balanza hacia una UIA (el ministro tenía un vínculo histórico con ella) que tardíamente decide afrontar los efectos negativos que ha ocasionado la paridad cambiaria a sus socios. En 1999, se quiebra definitivamente el apoyo irrestricto del “Grupo de los 8” a esta política, cuando un puñado de asociaciones se escinden para formar el “Grupo Productivo”, exigiendo ajustes a la política económica sostenida hasta ese momento. Poco antes, la propia UIA y sus afiliados han comenzado a defender la devaluación como contrapropuesta, en tanto perciben como insuficientes las compensaciones otorgadas (Dossi, 2009). En contraposición, la ABA, representante de la banca internacionalizada, se muestra partidaria de la dolarización, apuntando a unas reformas de “segunda generación” que incrementen la descentralización, introduzcan incentivos económicos y resuelvan, mediante políticas públicas, las asimetrías de información y restricciones a la competencia (Beltrán, 2011).

En ese contexto, y pese a que las esperanzas puestas en la Alianza apuntan a la adopción de nuevas definiciones en materia económica, el equipo económico de Machinea, ante el riesgo de un desastre electoral a causa del ajuste, busca compensar las desventajas de la Convertibilidad con medidas que eviten su abandono. Así, mantiene los ejes económicos centrales de la etapa menemista al profundizarse las políticas ortodoxas, aunque

incorporando un estilo más austero y mejorando el “modelo” con las reformas éticas e institucionalistas impulsadas por el Consenso de Santiago (Beltrán, 2011).

La mantención de estos ejes profundiza, además, a la política social focalizada. Así, entre 1999 y 2001, se enriquecen los instrumentos para la medición de la pobreza -se suman “las brechas de pobreza”- y se construye una nueva narrativa declinacionista en la que los años noventa se describen de modo menos optimista, destacándose el efecto de las crisis internacionales como indicadores de “vulnerabilidad” de la economía argentina (Grondona, 2016). La justificación empleada por la Alianza para mantener tales lineamientos es situar como problema de fondo la insuficiencia del crecimiento de la primera mitad de la década, que habría impedido mantener la demanda por fuerza laboral -no existiendo recuperación del crecimiento tras las sucesivas crisis- y redundado en incrementos en la subocupación, desocupación, pobreza, precariedad e intermitencia del empleo (Grondona, 2016). Así, con argumentos estructuralistas, se busca desalentar la crítica a los fundamentos de la política social y económica llevada a cabo hasta ahí, acusando factores externos o internos -pero ajenos a las medidas de ajuste- para explicar la profundización de la crisis argentina.

Manteniendo la Convertibilidad, se busca atraer a capitales externos que la viabilicen, apuntando a la corrupción como principal obstáculo para la credibilidad ante los mercados. Siguiendo las recomendaciones de un FMI que hace entrega de dos grandes préstamos de salvataje en 2000 y 2001, se busca reactivar la economía enfatizando en el ajuste estructural y en la reducción del déficit fiscal. Por esto Machinea anuncia una reforma tributaria, un “impuestazo”, que, no obstante, termina gravando a los asalariados, a la población de menores recursos y a los sectores medios; después, una reforma laboral que busca cambiar las condiciones de la negociación salarial y reducir su duración en años (Peralta, 2007).

Tras una nueva fuga de capitales, que gatilla la renuncia de Machinea, asume como ministro el economista jefe de la FIEL, Ricardo López Murphy (otro ex alumno de Chicago), en marzo de 2001. Impulsa un plan extremo de estabilización que recorta los fondos estatales, incluyendo a las universidades públicas, provincias, servicios de inteligencia del Estado y cajas de jubilación (Peralta, 2007). Sin embargo, este rumbo



quiebra a la Alianza, desatándose la oposición del Frepaso en el Congreso y movilizaciones masivas de gremios, estudiantes y sindicatos.

Por ello, a 15 días de su asunción López Murphy es reemplazado por Cavallo. El plan de este último es reducir el recorte, subordinando todo gasto estatal a la recaudación tributaria (“déficit cero”). Pero, a diferencia de su primer ciclo como ministro, ahora no cuenta con la anuencia de las corporaciones empresariales. Así, al intentar modificar la Carta Orgánica del Banco Central para flexibilizar la Convertibilidad y permitir una política monetaria más expansiva, se abre una pugna con el empresariado que se aferra a ella. De este modo, retorna el conflicto latente entre un sector financiero externo beneficiado y ahora temeroso de perder su control sobre la política económica, y un empresariado local perjudicado por ella y nucleado en torno a la UIA y los exportadores agropecuarios (Ruiz, 2013).

En paralelo, los inversores incrementan sus retiros de depósitos y se fugan los capitales. En último momento, además, los organismos multilaterales giran y apuntan a terminar con la paridad (Nemiña, 2011). Pese a los intentos de Cavallo por ganar el apoyo de la CGT oficial que se había opuesto a López Murphy, a través del pago de la deuda estatal al sistema de obras sociales, se desencadena el descontento del movimiento piquetero y se intensifican los cortes de ruta. Buscando continuar con el ajuste, pero traspasando los costos a otros sectores sociales -primero, mediante el Megacanje, y luego a través del “corralito”- involucra de lleno en la conflictividad a los sectores medios, al fracasar en su intento por contener la fuga de capitales y la recesión, desatándose la crisis política (Peralta, 2007). El caos se generaliza, se decreta Estado de Sitio y se busca un acuerdo con el peronismo, tras cuyo fracaso de De la Rúa renuncia a fines de 2001.

Tras ello, el país sigue un accidentado curso de sucesiones presidenciales, agravándose la inestabilidad del sistema político con la fragmentación de un peronismo cuyos parlamentarios se dividen entre designar una figura para concluir el mandato de la Rúa hasta 2003 o convocar a elecciones anticipadas. En enero de 2002, finalmente la Asamblea Legislativa nombra a Eduardo Duhalde como mandatario, que asume en alianza con el radicalismo y un sector del Frepaso (Peralta, 2007).

### *Polaridades y herencias en el campo intelectual tras el estallido*

La debacle de 2001, corolario de unos opacos años noventa, sienta las bases para una recomposición del debate público y del campo intelectual argentino. Esto es alentado por las definiciones políticas que emergen desde la intelectualidad, en torno a la polaridad abierta respecto a cómo superar la crisis social y política.

En tal sentido, la de corte liberal, tradicional o tecnocrática, articula la suya en un discurso sobre la tutela de los derechos individuales, la defensa de la libre acción económica y el desarrollo del interés privado. Sectores nucleados en torno al diario *La Nación*, el Instituto Nacional de Historia, el Instituto de Historia Militar Argentino y las universidades de San Andrés, Di Tella y Católica de Argentina, sostienen que en la Argentina se experimenta una situación de decadencia moral ante los hechos violentos ocurridos. Su posición, asimismo, concentra la responsabilidad en los gobiernos y en el conjunto de las políticas aplicadas y sus efectos. Ello, buscando legitimar una salida a la crisis que implique la renovación de la dirigencia política, reformando el sistema político y logrando “grandes acuerdos nacionales”, para recomponer la legitimidad institucional. Expresan, además, un temor al desbande social, motivo por el cual introducen el tema de la autoridad (Pulleiro, 2011).

La intelectualidad progresista o liberal-democrática, por su parte, defiende la idea de que el conflicto es posible de encausar institucionalmente. Su principal preocupación es la potencial desintegración del Estado y la Nación que deje el escenario de crisis política y que, como consecuencia del estallido del poder central, derive en un potenciamiento de los liderazgos provinciales. Por ello, su interés gira en torno al asunto de la gobernabilidad (Pulleiro, 2011) y sus mejores elaboraciones apuntan a cambiar el régimen político transitando hacia un Estado capaz de compensar los desequilibrios generados por el libre funcionamiento de las relaciones económicas. Alertan, empero, que en ese escenario el actor central es el peronismo, del mismo modo que no son las “puebladas” que dieron por tierra a De la Rúa las que permitirán realizar tal cambio (Sarlo, 2001).

Por último, erige una tercera posición -aunque minoritaria y heterogénea- la fracción de la intelectualidad crítica que se une a la resistencia social de los años noventa y que reivindica las nuevas formas organizativas que irrumpen en la Argentina de fin de siglo. Ella comparte el diagnóstico de que, tras la crisis, se ha perfilado un “cambio de época” en el que se divisa el fin del ciclo neoliberal (Pulleiro, 2011). En su desarrollo más consistente, tal ciclo se asocia no con Menem, sino con la dictadura y antes, fundamentalmente al asociarse el neoliberalismo casi exclusivamente al ascenso del capital especulativo (Borón, 2001). Esta posición pone sus expectativas en las organizaciones de desocupados y las asambleas populares, pues asume que allí se ha constituido una nueva sociabilidad política, así como la base de una fuerza popular que expresa la alianza entre sectores medios y trabajadores (Pulleiro, 2011). Y es que, para intelectuales como Atilio Borón (2001), la crisis social y política produce un cambio cultural que deja entrever una “potencia constituyente”, contraria a la impunidad de los gobernantes, al constituirse en un “juicio sumario” de la sociedad civil a la política. Así pues, es justamente este grupo el que adopta la cuestión de la corrupción y del desprestigio de la política como bandera propia, apuntalando el descontento que habría representado el movimiento de protesta autodefinido como “antipolítico” que prolifera a comienzos del nuevo siglo (Pavón, 2012).

Ahora bien, la crisis deja herencias que afectan fuertemente el vínculo entre tecnocracias y Estado. En efecto, el Ministerio de Economía deja de ser el espacio de consagración para los economistas argentinos, produciéndose un repliegue hacia la actividad universitaria y profesional (Heredia, 2015). Además, la invocación de cuadros político-intelectuales provenientes de centros académicos privados y *think tanks* para participar de la política gubernamental entra en crisis, pues deja de producirse orgánicamente. Y es que, apenas considerados en la etapa de formulación de los programas sociales, y mucho menos en el monitoreo y la evaluación, la colaboración de estos centros se torna más esporádica y menos determinante para el rumbo de las políticas económicas y sociales (Uña et al., 2009).

En definitiva, estas tensiones y herencias, al tiempo que rehabilitan el debate ideológico y técnico en la Argentina, marcan el tipo de configuración que muestra el campo intelectual en la siguiente década, cuando se inicia la etapa kirchnerista. Allí, con el reingreso de las

fuerzas nacional-populares a la alianza de poder, las formas tecnocráticas pierden eficacia, aunque sin desaparecer (Pavón, 2012), del mismo modo que entre la intelectualidad crítica emergen nuevas polaridades que ordenan su accionar, fundamentalmente en torno al apoyo o no a este gobierno, cuyo estilo está dado por su tendencia a construir discursivamente dicotomías y nuevos enemigos (Sidicaro, 2011; Chávez, 2013).

### **3.4. Pragmatismo, descomposición social y ensimismamiento intelectual**

La política antipopular llevada adelante por la última dictadura cívico-militar obtuvo resultados parciales, en tanto los militares deben replegarse a sus cuarteles sin haber solucionado los dos problemas para los que habían sido invocados: refundar el orden político y resolver la crisis del modelo económico desarrollista, agotado desde hacía una década. Esa doble herencia, que durante el gobierno de Alfonsín se profundiza, delimita el espacio y las temáticas que atizan la disputa entre las fracciones de la intelectualidad local, ante la oportunidad que abre la democracia para redefinir los horizontes de lo posible, tal como se ve en los movimientos de cada trinchera.

La tónica del período es la escisión entre el campo intelectual y el campo político. En el caso de los economistas ligados a los intereses empresariales, ella se enmarca en la paulatina separación -que ellos ayudan a forzar- entre la “ciencia económica” y la deliberación política. Es así como tecnocráticamente se desplaza el foco desde las causas a las soluciones para enfrentar el descalabro social y económico que aqueja al país. En ese sentido, la necesidad de reducir el papel del Estado sobre la economía se impone no necesariamente por la fortaleza de sus argumentos, sino que por la fuerza de los hechos. Y es que, como lo sugiere el comportamiento errático del empresariado, su convencimiento sobre el papel obstaculizador de la política para salir de la crisis no tiene que ver con la veracidad de los argumentos tecnocráticos, sino que con su acertada percepción respecto a que el modelo de desarrollo nacional-popular, tal como estaba, no podía seguir manteniendo el tipo de relaciones sociales en que se había sustentado hasta entonces (Beltrán, 2006). El mayor aliciente a la posición de la intelectualidad empresarial, entonces, no es su triunfo en el “combate de las ideas”, sino el brusco giro que la crisis obliga a dar,

imponiéndose los tiempos de la política por sobre las soluciones de largo plazo. Así, no es un efecto ideológico lo que unifica a las corporaciones empresariales y a los economistas (incluidos monetaristas y estructuralistas), sino la presión de una época que agoniza.

Lo mismo ocurre con el argentino de a pie: no es que aquél, al terminar la década, muestre estar convencido de que la mejor salida a la crisis son las medidas de *shock* que hoy se conocen como neoliberales (el triunfo electoral de Menem en 1989, invocando los valores clásicos del peronismo, así lo confirman) o, peor aún, que se haya consolidado una base de legitimidad sobre la cual descansara la necesidad de implementar este giro. Más bien, la legitimidad sustantiva que se instala refiere al acuerdo respecto a adoptar medidas *distintas* a las usadas hasta ese momento, abriéndose un amplio espacio de maniobra para ensayar novedosos planes en materia de política económica, tal como queda refrendado, durante los años noventa, con el controvertido Plan de Convertibilidad.

Toda esta política, además, es impulsada por un gobierno peronista como el de Menem, cuyo liderazgo se forja, a nivel nacional, sólo a partir del proyecto alternativo que, internamente, impulsa la tendencia renovadora, y que tiene como sello inédito la conformación de un espacio político-intelectual que incluso la acerca a la izquierda socialista. Lo paradójico, sin embargo, es que esa apuesta, habiendo cumplido su objetivo de devolver al poder al peronismo tras la derrota de 1983, sólo logra tal cometido renunciando a la renovación de las estructuras del movimiento y a la cercanía que pudo profesar por los valores democráticos. Por ello, a la hora del balance, la Renovación sirve, a lo sumo, para proyectar nuevos candidatos, y, más allá de la astucia política de éstos, para desnudar que tal intento no es sino consecuencia de la debilidad estructural que experimentan las bases sociales del peronismo y de la deslegitimidad que afecta a su identidad política. La Renovación, en ese sentido, no constituye una fuerza político-intelectual, pues su propuesta no logra arraigar en tales bases peronistas. La debilidad de estas últimas, de hecho, va a proyectarse durante los años ochenta, permitiendo, tras el *shock* inflacionario y la crisis política de fines de la década, encumbrar a los mismos tecnócratas que habían ayudado a profundizar el deterioro de la estructura productiva y del

empleo desde la dictadura, como portadores de una esperanza que muchos argentinos veían renovada al volver el peronismo al gobierno.

Por otro lado, en la izquierda socialista, desde donde surgen las mejores elaboraciones teóricas del período, la separación entre el campo intelectual y el político adquiere la forma del ensimismamiento. Y es que, si bien varios de sus miembros estuvieron cerca del Poder Ejecutivo, su colaboración con éste se realiza de manera inorgánica y ajena a un proyecto conjunto que no se quedara sólo en una pretensión sobre la democracia, sino que en la realización de la misma. Pero, sobre todo, el ensimismamiento radica en el encierro que conlleva centrar los esfuerzos no en la construcción democrática como tal, sino en una versión de la democracia como algo meramente político e institucional, que deja en las sombras la profundidad que alcanza la crisis social y económica. En ese sentido, así como la Renovación peronista sucumbe al internismo político, los socialistas se empeñan en un proyecto que, más allá de su calidad intelectual, no encuentra condiciones para su desarrollo. A su endémico problema de anclaje social, entonces, el socialismo argentino, en medio de las rupturas ideológicas que mundialmente se producen a fines de los ochenta, suma un enceguecimiento intelectual forjado, paradójicamente, en la ambición de su propia propuesta democrática, la que, sin embargo, en la medida que quiso, como Alfonsín y el peronismo renovado, negar el pasado y los actores de ese pasado, termina imponiendo lo deseado a lo observable.

Ahora bien, a diferencia del peronismo renovado y de los socialistas, las tecnocracias empresariales logran constituirse en fuerza político-intelectual. En primer lugar, porque ellas resisten mejor los efectos desestructurantes de la “década perdida”, al alero del poderoso gremio industrial -aun determinante en la economía argentina de los ochenta-, los tempranos vínculos que construye con el capital financiero local y extranjero, y con los técnicos e intelectuales de las agencias internacionales de crédito. Y es que los “mediterráneos”, la franja tecnocrática que domina el mercado del conocimiento empresarial en los ochenta y luego las instituciones y cargos más relevantes del Estado y el Gobierno en la primera mitad de los noventa, es un grupo de origen nacional-popular que deviene neoliberal. Uno que, teniendo a favor su enorme red de relaciones con el gran

empresariado, pragmáticamente asciende al poder con una política abiertamente anti-industrial, aprovechando la paulatina independencia que la crisis le había otorgado, tanto a raíz de la expansión de sus servicios a nuevos sectores empresariales, como por la pérdida de control que sobre sus actos acusan los industriales.

Pese a ello, el dominio que alcanza la intelectualidad empresarial en los años noventa es menos producto de las capacidades hegemónicas que construye en la década previa, que del vacío político e intelectual que deja el fracaso de Alfonsín y de los primeros intentos por combatir la hiperinflación. Es una dominación sin consenso, débil, que se construye en torno a un instrumento de política económica del que descrea el propio ministro Cavallo. Pero, sobre todo, que se vale de la debilidad de las fuerzas nacional-populares que han sido sacudidas por la crisis. En efecto, la Convertibilidad, transformada en el ideologismo del poder, que amedrenta a sus críticos sin programas alternativos que aseguren la estabilidad política y económica simultánea, se constituye como tal, por una parte, gracias a la debilidad de un empresariado maniatado ya no solamente por sus propias pugnas sectoriales, sino por el peso determinante que alcanzan grandes grupos económicos que sofocan la emergencia de definiciones corporativas más amplias; y, por otra, gracias a una sociedad empobrecida y descompuesta. En el fondo, se trata de cómo la oposición organizada, al no existir, se convierte en una forma de consentimiento.

El giro neoliberal impulsado por Menem y Cavallo es funcional a la cultura política peronista de conservación del poder. El pragmatismo político que allí hay, empero, no puede descansar en su simple desnudez ante la crisis de alternativas políticas. De ahí la necesidad de un plan, incluso de uno heterodoxo como la Convertibilidad, que esconde un trasfondo refundacional de la economía y que da paso a un breve dominio de los economistas monetaristas. Uno que, sin embargo, desde el desajuste de 1995, muestra su fragilidad y deja en evidencia no sólo lo precario de la estabilidad provista por la Convertibilidad, sino también de los recursos políticos con que la franja “mediterránea” se mantiene en el poder. Y es que el grupo de Cavallo no logra hegemonizar al conjunto de la intelectualidad económica argentina ni a los intereses que ella representa. Por el contrario,

en cuanto se presenta la oportunidad, arrecian las críticas y colapsa, inclusive, la afinidad circunstancial con su apuesta económica declarada por los organismos internacionales.

En ese sentido, comprobándose la hipótesis para el caso argentino, es posible señalar que la refundación neoliberal en este país se trunca por la incapacidad de su conducción política e ideológica para hegemonizar al conjunto de intereses sociales con expresión política. Entre ellos, a un empresariado local que, pese al favorecimiento desmedido del sector financiero, logra rearticularse para revertir la situación, en paralelo a unos sindicatos que vuelven a poner en marcha la “puja distributiva”. El rechazo que esto conlleva hacia Cavallo y su equipo, y, en general, el repliegue de los economistas a la academia y el ámbito profesional tras 2001, expresa cómo la tradición de rechazo a los intelectuales en la política opera una vez que las franjas tecnocráticas en el poder impulsan medidas para refundar el modelo de desarrollo, superando la invocación inicial a sólo manejar los efectos de la crisis.

Aun así, los reacomodos producidos en la concepción de Estado desde mediados de los años ochenta, con el objeto de combatir la crisis social, dejan una estela neoliberal que permanece y se profundiza con Menem y De la Rúa. Como se dijo, con Menem afuera, la pobreza y la corrupción reclaman la explicación de su derrotero. Y tal conducción política, en el seno de una oposición sin proyecto, articula a radicales, socialistas y peronistas renovados. En ese tránsito, la política social focalizada es planteada por los organismos internacionales como solución a la descomposición social y al clientelismo, encontrando recepción en el progresismo que acompaña al Presidente radical, pues allí se vislumbra también una forma de combatir al peronismo. Es así como se alienta una perspectiva ideológica que perdura incluso al reingresar las fuerzas nacional-populares al escenario político, una vez superado el trágico desenlace que da la bienvenida al nuevo siglo.

Es el ensimismamiento intelectual de este progresismo y la penetración ideológica neoliberal al calor de la crisis, entonces, lo que caracteriza el giro intelectual en la Argentina. Uno que, de todas maneras, por el amplio debate que genera -con resistencias visibles e intelectuales hablando incluso de un *posneoliberalismo* que se inicia-, indica que su desarrollo se produce en los marcos de un “neoliberalismo revertido”.



## IV

### CHILE

---

#### **4.1. La tradición intelectual chilena: dependencia estatal y eficacia política**

En Chile, los intelectuales han tendido a ser “hechos estatales”, tanto por su inclinación a formar parte de la clase política y representar la ideología oficial, como por reconocerse en una función pública destinada a educar a una vasta capa de profesionales y técnicos (Brunner y Flisfich, 1983). Tal estilo cultural se origina en el singular modo por el que se institucionaliza la vida pública del país, imperando más la invariabilidad que el dinamismo, y más la escasez que la abundancia en la vida cultural, debido al predominio indisputado de la aristocracia local, sustentado en el menor dinamismo económico del país, que afecta en la cultura a su vez por la escasa tendencia de este grupo a innovar (Halperin Donghi, 1988).

Ante aquella falta de exuberancia, las élites participantes del campo cultural -inclusive los representantes del poder- tienden a asumir una conciencia más clara de los requisitos que su tarea les impone. Ella, irremediablemente ligada a los derroteros de la acción estatal a causa de la estrechez económica, ha asociado la incorporación a la función pública con una dirección de progreso social nacional (Brunner, 1981), motivo por el cual la colaboración profesional con las políticas estatales ha predominado por sobre la dimensión más crítica del trabajo intelectual (Faletto, 2002). Presente esta última de todos modos, ha circunscrito sus preocupaciones al marco de la esfera estatal, en virtud de la otra especificidad del proceso chileno: el contraste entre una estructura subdesarrollada y una organización sociopolítica avanzada (Pinto, 1971), originada en una tradición de organización estatal, distintivamente impersonal en la región, anclada en el temprano ordenamiento portaleano del siglo XIX y que ha sido trascendente como cultura política (Ruiz, 2013).

La temprana definición de un marco institucional para la vida cultural nacional, más allá de su magnitud o sofisticación, impone entre la intelectualidad chilena una tendencia hacia la acción colectiva, en contraposición al individualismo intelectual argentino. Y es que, en la medida que ello abre una tendencia a perpetuar la institucionalidad, les permite a los

intelectuales chilenos participar de modo más eficaz en los esfuerzos por afrontar los problemas del momento político (Halperin Donghi, 1988).

Socialmente, durante el siglo XX son los sectores medios los que proveen los principales cuadros de la intelectualidad local, y las que ejercen una hegemonía cultural dado el peso que asumen en el Estado, desde donde propician una política de compromisos y redistribuciones del poder social, económico y cultural. Estos grupos fijan el problema de la conformación de la cultura nacional, y de los grupos y clases que expresan a través de ella su hegemonía, como tema central de la centuria (Brunner, 1981). Lo hacen en torno a un “nacionalismo educativo” y a una preocupación por la unidad nacional, enraizada en la amenaza de una cuestión social cuya traducción práctica asocia a la cuestión de la lucha de clases en las ciudades y en los centros de concentración proletaria (Subercaseaux, 2010).

Aun así, en el ámbito ideológico, junto con la cuestión nacional, la intelectualidad chilena encuentra sus basamentos en dos tradiciones político-culturales diferentes. De un lado, una cultura de raíz oligárquica que perdura en sus transformismos y se difunde como “cultura política” de compromisos hasta la década del cincuenta, y que encarna en un pensamiento corporativo y antimoderno, de raigambre católica, que promueve, a través del desciframiento del presente a través del pasado colonial, la restauración de un dominio autoritario a la usanza portaleana (Correa, 2004). De otro, una cultura socialista que, articulada en torno a elementos libertarios y marxistas, acompaña el proceso de constitución cultural de los grupos subalternos, pese a ser sometida, a lo largo del siglo, a un rígido sistema de subordinaciones y exclusiones (Brunner, 1981). Ambas tradiciones, atravesadas por el sentido de crisis y de acción que caracterizan al pensamiento chileno del siglo XX, las catapultan como idearios sobre y para el espacio de la política (Correa, 2004).

Dentro de la dinámica social y política del siglo pasado, la apertura que supone la irrupción de los sectores populares en la vida política desde los años veinte y el ascenso de un proyecto “desarrollista” que busca ampliar y consolidar el mercado nacional, revitaliza y torna central el lazo entre la intelectualidad y un mundo popular organizado que crece. Pero, mientras ese vínculo es pensado de modo asistencialista entre los grupos intelectuales

de la tradición cultural oligárquica -en la órbita del ideario socialcristiano e hispanista (Correa, 2004)-, haciendo eco de una preocupación por mejorar la condición social proletaria que es visible en instituciones como el Partido Conservador o la Iglesia Católica, es solamente en el espectro de la izquierda marxista y sus partidos que ello se piensa y ocurre -no sin dificultades- en virtud de objetivos de democratización social y política.

En efecto, como consecuencia del anclaje social en torno al cual se estructuran tales partidos y organizaciones afines, así como por la naturaleza del propio proyecto socialista, el vínculo entre intelectualidad y fuerzas sociales organizadas es un hecho más recurrente. Por lo general, en la forma de un apoyo a la formación y actividad política de estas últimas o mediante la emergencia de cuadros intelectuales cuyo origen de clase son los propios sectores populares. Ahora bien, contra imágenes de diverso tipo, en tanto la representación de las organizaciones políticas de la izquierda chilena se limita por mucho tiempo a fracciones específicas del mundo popular organizado, y no a la mayoría, la figura del “intelectual comprometido” constituye una excepcionalidad en el curso histórico chileno<sup>39</sup>.

La ampliación del interés de la intelectualidad chilena por la democratización e integración de los sectores populares se corresponde con el ciclo de acelerada modernización que avanza entre los gobiernos de Frei Montalva y Allende. Aquél es atribuible, sin embargo, a una fracción específica de la intelectualidad de la época: la surgida del proceso de fundación, institucionalización y profesionalización de las ciencias sociales, liderada por sociólogos y economistas, y que consolida un circuito de reproducción de académicos y estudiantes (Garretón, 2014). Varios de ellos, orientados a la producción de soluciones técnicas para los “problemas nacionales” (agrícolas, industriales, educativos) y al análisis global de la sociedad a través de la investigación empírica, vertebran el discurso ideológico del Partido Demócrata Cristiano (PDC) tras un sentido común sociológico que habla de una “crisis integral” de la sociedad en términos de valores y estructuras. En ese sentido, por

---

<sup>39</sup> No supone negar episodios específicos de radicalización intelectual que dan lugar a expresiones concretas de la denominada “alianza entre trabajadores manuales e intelectuales”, base de la cultura socialista. Por ejemplo, el proceso que origina el Frente Popular y, antes, el Partido Socialista de Chile (PS) (Faletto, 2009).

primera vez en el siglo XX se perspectiva un futuro de revolución de las estructuras heredadas del pasado decimonónico (Correa, 2004)<sup>40</sup>.

El acceso al poder de esta intelectualidad se produce con un bagaje de ideas surgido del despliegue de la mirada sociológica, que encuentra en la imagen de la sociedad ofrecida por la investigación social y económica un modelo de acción que la lleva a proponer un proyecto revolucionario y de integración social a la vez (Brunner, 1981). Su acceso se fortalece por la cercanía entre académicos y profesionales de organismos internacionales con los políticos, particularmente del PDC y del PS, y por el efecto de la Reforma Universitaria sobre el acercamiento entre política y ciencias sociales. Este último se acentúa y tensa en torno a la concepción del socialismo tras el triunfo de la Unidad Popular, al proponerse avanzar hacia aquél por la vía legal (Huneeus et al., 2014).

Chile, de este modo, muestra, por su escasez de medios y de voluntad de sus grupos dominantes, una tradición cultural nacional altamente dependiente del Estado, que tiende a acercar a los intelectuales a la ideología oficial y a la política. Con ese telón de fondo, la intelectualidad chilena, proviniendo en su mayoría de los sectores medios, ha sido capaz de imprimirle su identidad cultural a los modos y aspiraciones de otros sectores sociales como la clase obrera. Lo contrario -la imposición de los intereses populares sobre el accionar intelectual- se manifiesta, sin embargo, sólo breve y parcialmente en los años del ciclo modernizador más importante del siglo XX chileno, terminado abruptamente en 1973.

---

<sup>40</sup> En torno a la idea de “crisis”, desde la Generación del Centenario en adelante se adjudican los logros del siglo precedente al autoritarismo estatal de sus inicios (Correa, 2004). En los sesenta, sin embargo, por influencia del marxismo y del estructuralismo, las voces críticas se reorientan. De ahí que la ambigua noción de “comunitarismo”, sobre la que se erige el proyecto del PDC, asome como una especie de deriva progresista de última hora, que expresa la síntesis entre la ideología del desarrollo económico de la Cepal y elementos del socialcristianismo previo. Tal apuesta, que no prospera políticamente, estrecha la relación entre proceso político y proceso social en las ciencias sociales chilenas, en una mezcla que mantiene rasgos de tecnocratismo y del clientelismo característico del antecedente conservador del PDC (Yochelevzky, 1985).

## **4.2.El maridaje de los adversarios en el neoliberalismo autoritario**

La dictadura cívico-militar chilena se eleva como un ejemplo excepcional en América Latina, pues alcanza los mayores grados de refundación social y política del último período autoritario que sacude a la región. Los militares chilenos, en connivencia con los sectores civiles que apoyan el golpe militar de 1973 y otros que se suman más tarde, impulsan una experiencia autoritaria que sepulta la “vía chilena al socialismo”, la economía desarrollista y la política nacional-popular impulsada desde los años cuarenta. Se instala, así, un curso neoliberal que no se ha detenido hasta hoy, y que incluso profundizan gobiernos civiles posteriores. Esa capacidad refundacional es inédita, además, por tratarse del único caso latinoamericano en que el desembarco neoliberal se produce en dictadura, a contrapelo del resto de experiencias regionales, en las que el ajuste estructural se produce en democracia, particularmente en la década de los noventa (Ruiz, 2013).

Tal refundación no se logra sin antes resolverse, al interior del régimen, la pugna por los términos que guían el rumbo de la dictadura. Pugna que, entre 1973 y 1975, enfrenta a los defensores de un desarrollo nacional menos popular y quienes alientan la transformación radical del patrón de acumulación capitalista. En el primer grupo, los “neodesarrollistas”, participan el PDC, sectores de la vieja derecha y el nacionalismo militar; mientras, en el segundo, los “neoliberales”, lo hacen los gremialistas de la Universidad Católica (PUC), un grupo de economistas monetaristas formados en la Universidad de Chicago y profesionales de la Universidad de Chile (UCH) (Correa, 2011). Del mismo modo, y condicionado mutuamente con tal pugna, entre los partidarios del régimen se produce un segundo enfrentamiento, ahora por el liderazgo sobre la Junta Militar, entre los grupos militares, que se dirime en favor del Ejército y en desmedro de la Fuerza Aérea, permitiendo a Augusto Pinochet erigirse al frente del conjunto de las Fuerzas Armadas (Valdivia, 2003).

Pese a que los militares ascienden al poder bajo la promesa de devolver en breve tiempo el poder a los civiles, tras reestablecer el orden y superar la crisis económica, el rumbo de los hechos derriba las esperanzas -sobre todo del PDC- de retornar a la normalidad política y de que la vieja derecha nacionalista ingrese al Gobierno. Ello, como resultado de la nueva

alianza dominante que se erige, producto de las pugnas antes mencionadas, compuesta de nuevos cuadros económicos y políticos que cierran el círculo en torno a un Pinochet que personaliza el régimen, pero en la que también operan los liderazgos de Jaime Guzmán, Miguel Kast y los “Chicago Boys” (Huneus, 2000). Con la abrupta apertura externa, esta alianza social se fortalece en la acelerada nueva vinculación de capitales locales con la égida financiera internacional, que sella la formación de nuevos grupos económicos (Arriagada, 2004). Vínculo, entre el sector más internacionalizado del empresariado local y los militares, que sólo es posible por la debilidad del sector productivo chileno, incapaz de forzar pactos a la alianza emergente, aún en condiciones subordinadas, tal como ocurre en otras experiencias regionales como la argentina (Ruiz, 2013).

Los actores políticos que apoyan el golpe militar, así como los principales líderes políticos e intelectuales del régimen, parten del diagnóstico de que la crisis política desencadenada en 1973 no es producto únicamente de las acciones de la Unidad Popular, sino, sobre todo, del fracaso de la democracia y del papel negativo jugado por los partidos políticos en el siglo XX (Jara, 2006). Con esta idea fuerza, la Junta y los ideólogos del régimen asumen la despolitización de la sociedad como tarea estratégica, en el sentido de desarticular material y culturalmente a las bases sociales y dirigencias políticas que sustentan el avance de la izquierda en el siglo pasado (Ruiz y Boccardo, 2014).

El Gremialismo -derecha estudiantil y académica que emerge del enfrentamiento a la Reforma Universitaria de los años sesenta- es el grupo que dota de expresión política y de una estrategia de poder a la alianza social dominante, en la medida que, inspirado en el corporativismo hispanista, articula, en peculiar fórmula ideológica, ese patrón de pensamiento conservador con un liberalismo económico anclado en el pragmatismo estadounidense (Cristi, 2015). Guzmán, que apuntala las tesis contrarias a la democracia (Fontaine, 2001), lidera a este grupo en una trayectoria que lo lleva, al inicio, a impulsar estatalmente la divulgación de los valores corporativistas del franquismo (Jara, 2006), para luego, desde fines de los setenta, asumir una noción de democracia autoritaria, protegida, integradora, tecnicada y de “auténtica” participación social, que reduce este concepto a un mero procedimiento de elección de autoridades (Correa, 2004).

Este giro tiene sus raíces en el reclamo de los gremialistas y la derecha tradicional ante el aislamiento internacional del régimen y el impacto que causa el desmantelamiento de las instituciones franquistas. Ello torna prioritaria la institucionalización, buscando conjurar el peligro de un gobierno militar transitorio que pudiera dar paso a un “gobierno de los partidos” (Jara, 2006). Se insiste, por ello, en desconcentrar el poder político de Pinochet, asentarlos en nuevas instituciones y fijar un plazo para su permanencia en la jefatura, avanzando hacia un régimen civil donde los militares ejerzan un rol tutelar. Un ideario que anima la Constitución de 1980, aprobada en un plebiscito carente de oposición.

Este cambio, que afecta los principios corporativos de la primera hora, abre paso al neoliberalismo. Guzmán se convence, a través de sus contactos con los economistas formados en Chicago, y la lectura de Hayek y Novak, que la defensa de la subsidiaridad y de los cuerpos intermedios es coherente con la defensa del mercado y la propiedad privada (Cristi, 2015). Así, si bien la convergencia entre dos vertientes del ideario conservador chileno, el nacionalismo y el corporativismo, explican la génesis del golpe militar y los primeros años del régimen, el añadido neoliberal reconfigura sus elementos ideológicos (Correa, 2004). El nacionalismo y su idea de Estado fuerte se desvanecen, y el corporativismo, aunque desvirtuado en sus aspectos institucionales, sobrevive al asimilarse al neoliberalismo mediante el aporte del principio de subsidiariedad (Cristi, 2015)<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> Este hilo de continuidad entre los contenidos iniciales de la cultura oficial y la institucionalización antidemocrática de la Constitución de 1980 profundiza, paradójicamente, la marginalidad política de la intelectualidad conservadora. Y es que la reinterpretación de la subsidiaridad la divide en dos tendencias. Una que asimila masivamente los elementos de la ideología neoliberal, a cambio del fortalecimiento de los rasgos autoritarios del régimen; y otra, minoritaria, que nuclea a nacionalistas contradichos en su respeto a las tradiciones, a las relaciones “naturales”, a los cuerpos intermedios y a la superioridad de lo espiritual sobre lo material, ante el avance incontrarrestado de criterios mercantilistas (Pinedo, 2002). Las preocupaciones de este último grupo se expresan en los trabajos tardíos del historiador Mario Góngora, quien, de ser simpatizante, pasa a criticar al régimen y a condenar el giro neoliberal por tratarse de un “materialismo” ajeno al espíritu hispánico chileno, por evitar la participación del Estado en el desarrollo nacional y por la excesiva economización de la sociedad, la que, a su juicio, complota contra el “ser nacional” (Góngora, 2011).

Esta particular forma de instalación del neoliberalismo chileno, más allá de sus elementos intelectuales, se asume en unas condiciones políticas y sociales determinadas. Por una parte, relativas a la temprana dirección económica que adopta el régimen y, por otra, vinculada a la desarticulación social y política de los viejos actores sociales. Respecto a lo primero, tras el fracaso de la política antiinflacionaria de los primeros años -y que a raíz de la caída del precio del cobre y el alza internacional del petróleo da lugar a una recesión- los economistas de Chicago toman el control de los ministerios de Hacienda y Economía, asumiendo la conducción estatal de la economía y dotando a la dictadura de un proyecto de refundación capitalista del que carecía (Gárate, 2013a).

Desde su irrupción en 1975 y hasta la crisis de 1982, el giro económico opera en una versión dogmática de neoliberalismo puro. Con este se busca controlar los desequilibrios macroeconómicos, la inflación heredada, eliminar la función productiva del Estado y las instituciones corporativas (sindicatos y colegios profesionales) y abrir una integración internacional inédita. Para ello se impulsa, entre otras medidas, la supresión de los controles de precios, la liberalización del mercado financiero, la reducción del sector empresarial estatal a través de su privatización o restricciones de operación, la privatización del sistema de pensiones y de parte del servicio de salud, la devolución de empresas y tierras expropiadas a sus antiguos propietarios, la supresión de derechos sindicales y una reforma tributaria favorable a ciertos sectores privados (French-Davis, 2004). La excepción entre las privatizaciones es Codelco, excluida por la presión de los militares nacionalistas, por su peso central en las finanzas públicas y el manejo de la política cambiaria (Valdivia, 2003). Además, se aprovecha la modernización agropecuaria heredada de la Reforma Agraria, que da impulso a nuevas actividades productivas agroexportadoras, el ascenso de nuevos propietarios rurales y el ingreso al sector de la inversión extranjera (Huneus, 2000).

Este proceso es posible en la medida que se desarticula la capacidad de presión sobre la acción estatal de los viejos actores sociales. El sindicalismo ve arrasada su organización -por represión directa o coerción legal- y las condiciones laborales que afirman su identidad sociocultural (Ruiz, 2013). De una desregulación *de facto* del mercado laboral por la represión, una suspensión de la negociación colectiva y una magra fiscalización de la



normativa vigente en los primeros años, que afecta al empleo público y que crea un subempleo institucionalizado (Drake, 2003), se avanza hacia una desregulación formal del mercado laboral. Esta última se asienta definitivamente con el Plan Laboral de 1979, el cual refunda la legislación sindical y la negociación colectiva, al debilitar el poder negociador de los sindicatos, los cuales son considerados como órganos “monopolizadores del trabajo” y “distorsionadores de los salarios” (Ruiz, 2013). En tales circunstancias, y pese a la condena del grueso del mundo sindical a estas normativas, éste lo emplea para reanimar su actividad, mientras rearticula sus vínculos con los partidos, sectores de la Iglesia Católica y sindicatos extranjeros. El movimiento sindical sufre una crisis, debido al cambio en el modelo productivo, atizando un proceso de desindustrialización y afectando a los sectores de la construcción, industria y minería, bases tradicionales del poder sindical (Drake, 2003).

En consecuencia, al iniciarse los años ochenta, se encuentra ya habilitado, intelectual y políticamente, el engarce ideológico que da su peculiar forma al desembarco neoliberal chileno. Una modalidad en la que, al carecer el discurso neoliberal de una orgánica base social de apoyo, torna insoslayable la contraparte militar en el Estado y el reconocimiento de ésta como una salvadora “clase política” (Ruiz, 2013). Aquel es el relato de los grupos de poder que apoyan al régimen desde un comienzo, aunque lo es sobre todo de aquellos que se benefician de los cambios que éste impulsa en los años venideros.

#### 4.2.1. La *reproducción ampliada* de la intelectualidad neoliberal en dictadura

Bajo la dictadura, el proyecto neoliberal aprovecha las bases creadas por la modernización precedente para fundar una nueva clase financiera, comercial y agrícola, con amparo en el impulso estatal (Ruiz, 2015). Tras la crisis financiera de los ochenta y la intervención estatal para enfrentarla, sigue una reactivación basada en la exportación, que acelera la formación de grupos económicos ligados a capitales externos y a empresas transnacionales (Arriagada, 2004). Aunque a fines de tal década hay una reactivación respecto a sus críticos inicios, no se trata de un empresariado dinámico y moderno, sino de una concentración económica bajo orientaciones especulativas y de ganancias a corto plazo, con una baja autonomía del manejo estatal. De este modo, el “legado modernizador” del neoliberalismo

autoritario chileno no consiste sino en un reordenamiento de los mecanismos acumulativos, que favorece al capital financiero, pero que no implica una potenciación productiva, sino, por el contrario, la destrucción de una economía de largas décadas. Un cambio que no fue obra de una burguesía modernizante, sino del poder militar aliado con grupos tecnocráticos y un empresariado especulador abocado a la riqueza súbita (Ruiz, 2015).

Como consecuencia de la falta de oposición dentro y fuera del régimen, en los años más intensos de su gestión, los economistas monetaristas que conducen tal refundación detentan un poder enorme en sus manos. Pero, en la medida que esa acción es interrumpida por la crisis y la Junta releva de sus cargos a los integrantes del equipo económico (Huneus, 2000), la viabilidad política de tal proyecto, con los matices propios que impone su instalación chilena, pasa a depender ya no sólo de desarticular las resistencias a éste, sino también de la superación de los episodios de inestabilidad económica que acarrea. En tal escenario, junto al aval del régimen, es clave un contexto internacional que apoye la labor de la tecnocracia neoliberal, con un discurso legitimador, mercados abiertos y una amplia disponibilidad de divisas provenientes de los petrodólares, que fluyen a los países en desarrollo (Correa, 2011). Siendo el chileno un caso paradigmático para la reconfiguración global del capitalismo, inclusive en momentos en que el régimen pierde apoyo político internacional, se mantiene el sostén extranjero a las medidas económicas internas, cuyo fin es consolidar la transformación en curso (Otano, 2005).

Ahora bien, además de este tiempo indefinido con que cuenta la implementación de la transformación económica, su defensa y proyección no se explica sin la capacidad de *reproducción ampliada*, social, cultural y económica, que distingue a la intelectualidad neoliberal chilena de sus pares latinoamericanos. Y es que, en la alianza en el poder, el papel de ella es doblemente importante, pues, como su principal componente civil, no sólo pone a disposición del régimen los cuadros que conducen ideológica y políticamente el giro refundacional, sino que ayuda a crear y forma parte de los grupos sociales organizados que económica, política y culturalmente defienden, hasta hoy, los pilares de tal cambio.

### *La demanda estatal por una nueva visión sobre la sociedad y la economía*

Respecto al posicionamiento de estos cuadros neoliberales, es preciso considerar que, aun cuando la eficacia de su actuar se debe principalmente a la debilidad de un empresariado industrial que opone escasa resistencia, también tiene que ver con la homogeneidad en la composición e ideología de la élite que impulsa la transformación. Ésta, compuesta casi exclusivamente por un contingente retornado de estudiantes becados en Chicago, exhibe un alto grado de cohesión intelectual y política, dada no sólo por una formación académica similar, sino por un diagnóstico común sobre la realidad del país (Rosende, 2016) que tempranamente es sintetizado en un Plan de Recuperación Económica (Fontaine, 1988).

Ese grupo, que ya realiza docencia en Chile desde fines de los años sesenta, es fruto del convenio de enseñanza e investigación que el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago establece con la PUC en 1954 y que se pone en marcha dos años después (Hachette, 2016). Tal vínculo, propuesto por la Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos y apoyado por Fundación Rockefeller en colaboración con algunos reconocidos profesores de Chicago, tiene como objetivo mejorar el nivel de capacitación en economía en Chile, para así fomentar la investigación básica sobre economía y promover un análisis riguroso de las políticas (Rosende, 2016). A poco de terminar el programa inicial, con una prórroga, otras son las fuentes de financiamiento que se unen, incluyendo a la Fundación Ford, Fullbright y becas como las del Banco Central y Presidente de la República, que facilitan el ingreso de nuevos estudiantes (De Castro, 2016). De modo que, en un inicio, el grueso del financiamiento de este proyecto de formación se sustenta en instituciones privadas, en un proceso que logra realizarse en sus ambiciones solamente una vez que se entra en la etapa autoritaria.

En dictadura y una vez en el poder, los “Chicago Boys”, esto es, la élite político-intelectual que encabeza el primer momento de implantación neoliberal en Chile, dirigidos por Cauas y De Castro, profundizan aquel proyecto de reproducción social y cultural echando mano a recursos estatales. En efecto, entre fines de los setenta y mediados de los ochenta, se eleva el número de becas “oficiales” disponibles para estudiar un postgrado en Economía en el

extranjero, especialmente en universidades estadounidenses. Tal impulso viene dado por la alianza que entronca a esta élite, respaldada por la Universidad de Chicago y la PUC, con el Gremialismo desde fines de los setenta y que les permite a neoliberales y gremialistas copar espacios en el Estado y el Gobierno, incluyendo reparticiones como los ministerios de Hacienda y Economía, la Secretaría de la Juventud y los gobiernos locales, así como la Oficina de Planificación Nacional (Odeplan) (Huneus, 2000). En lo fundamental, es desde esta última repartición que Miguel Kast, subsecretario y luego ministro de la cartera, inicia una sistemática inclusión a puestos de confianza de un elevado número de economistas monetaristas, convirtiendo a Odeplan, a principios de los ochenta, en el principal espacio de reclutamiento de la nueva burocracia del régimen (Huneus, 1998).

Bajo el argumento de obtener una “enseñanza actualizada” en economía, en un momento en que el interés por adquirir conocimientos en esta materia iba va en aumento en Chile a través de la carrera de Ingeniería Comercial y de algunos postgrados incipientes, se legitima como interés general del Estado la producción de nuevos cuadros entrenados en las nociones de subsidiaridad y las ideas del monetarismo estadounidense, en tanto entidades como Odeplan y el Banco Central direccionan recursos y prioridades para potenciar el proceso de evaluación y diseño de políticas públicas (Huneus, 2000).

Con todo, la reproducción es tal sólo en la medida que se aceleran sus tiempos. Así, como ocurre con quienes optan por Chicago, pese a que el interés institucional de tal universidad es recibir un número importante de alumnos latinoamericanos en su Programa de Doctorado, lo que opera en la realidad es la preferencia por una capacitación de dos años que da lugar a un grado intermedio de Master, siendo pocos los casos en que los becados vuelven con el PhD en Economía, el cual requiere de una estadía más larga y de un mayor esfuerzo académico, a la vez que implica un costo mayor (Rosende, 2016). Entre 1975 y 1980, un número creciente de profesionales se interesa por perfeccionarse en Chicago, manteniéndose un promedio de cinco alumnos chilenos por año, con un hito de diez en 1981 (Rosende, 2016). Se logra, así, en poco más de un lustro, producir un contingente importante de profesionales con formación básica en Economía, muchos de los cuales,

además, prontamente ejercen como docentes en las universidades locales, contribuyendo a la estandarización de la disciplina económica.

Algo similar ocurre con un número aún mayor de profesionales -un promedio de seis entre 1975 y 1981- que acude a realizar estudios de postgrado en Administración (MBA). Para ellos, no obstante, en tanto se ofrecen menos becas y vínculos laborales con el gobierno, requiriendo más esfuerzos privados, el incentivo está en empaparse de los conceptos y lógicas de la “economía de mercado” que se extiende por el mundo. Mismo incentivo para quienes aprenden finanzas, en tanto la financierización global encuentra justificaciones teóricas y prácticas en la propia Escuela de Negocios de Chicago, desde donde se amplían los alcances de la llamada “hipótesis de las expectativas racionales” (Rosende, 2016).

A partir de 1983, por efecto de la crisis, disminuye el flujo de chilenos que viaja a estudiar postgrados en Economía, con o sin ayuda estatal. Así, a los diez estudiantes de 1981, le siguen dos en 1982 y ninguno en los años siguientes, hasta comienzos de la década de los noventa cuando se retoma el intercambio. En el caso de los MBA, durante la segunda mitad de los ochenta, un flujo considerable concurre a Chicago a tomar cursos de economía, pero no con el fin de convertirse en economistas, sino en empresarios, en relación con el auge del “*business-economics*” o estudios focalizados en el área de negocios, que incorporan sólo selectiva y funcionalmente los conocimientos en economía (Rosende, 2016).

Concatenada a esta reproducción social y cultural se produce simultáneamente otra de orden político, asociada a la entronización de ciertos principios ideológicos en el seno de la acción estatal. De la condena al Estado como entidad incapaz de administrar y crear riqueza eficientemente que pulula como parte del ideario neoliberal y gremialista, se deriva el relevamiento de un actuar reducido de éste, en base a la redefinición del objeto de las políticas sociales. En efecto, estas últimas se identifican únicamente con la reducción de la extrema pobreza y la creación de condiciones para que los no pobres resuelvan por su propia cuenta su reproducción social en el mercado. Una renuncia a la perspectiva de derechos sociales universales, que a su vez se asocia al ideologismo que ve como condición del bienestar general solamente el crecimiento económico. Tales principios, a la base del

enfoque de focalización del gasto social y, por tanto, de una concepción subsidiaria del carácter del Estado, se difunden en el interés por consolidar valores como la libertad individual y la igualdad de oportunidades (Ruiz, 2015).

La difusión de estas coordenadas, desde el lugar privilegiado del poder estatal, es impulsado como base ideológica de las políticas públicas desarrolladas por el régimen. Y, en ese esfuerzo, es de trascendencia el impulso que Odeplan da al enfoque de política social basado en las premisas del gasto focalizado y la evaluación de los proyectos de inversión. Esto incide en una brusca disminución del gasto social, el cual apenas alcanza un 16% del PGB en 1980, para luego comenzar a recuperarse hasta alcanzar el 20% del PGB de gasto social existente en 1970 (Ffrench Davis, 2004). Se vincula, además, con el interés del régimen por manejar la diferenciación del mundo popular, en donde a los trabajadores integrados a las empresas se los acusa de ser un sector privilegiado, pues, vía presión sindical y política, se apropiarían de un bienestar vedado a los “verdaderos pobres” (Baño, 2003). Así pues, se concentra el apoyo estatal en la marginalidad, llevando adelante una focalización de subsidios a la pobreza abocada a desarrollar un “pinochetismo popular”, que, logrando cierta eficacia al inicio, no evita que la fijación nominal de tales traspasos no sólo impida la incorporación de nuevos beneficiarios, sino que disminuye paulatinamente su valor al no reajustarse a las variaciones inflacionarias (Huneus, 2000).

En Odeplan se elaboran varias iniciativas de reforma económica y social que, por los fundamentos territoriales de la focalización, dotan de relevancia a las municipalidades, a alero de las cuales los gremialistas cimentan la futura Unión Demócrata Independiente (UDI) (Huneus, 2000). La focalización se abre paso en virtud del esfuerzo de los nuevos tecnócratas por mantener a raya la inflación y por la importancia que luego adquieren el sector privado y el mercado en áreas en las que antes estaba vedada su participación. Esto, producto de un segundo ciclo de privatizaciones que abarca nuevas funciones estatales y dimensiones del patrón de desarrollo (Ruiz, 2013). El desmantelamiento de los servicios públicos, llevado adelante entre 1980 y 1981, mediante el traspaso de gran parte de la provisión estatal de salud, educación, vivienda y previsión a manos privadas, afecta las condiciones de vida de los viejos sectores medios y obreros antes beneficiados por el

énfasis redistributivo del gasto social, ahondando sus respectivas diferencias con otras franjas medias y populares bajo las mayores brechas de ingresos (Baño y Faletto, 1999).

Por otro lado, un segundo nivel de penetración de estos principios ideológicos que sustentan la noción subsidiaria del Estado es el enfoque de evaluación social de proyectos. Y es que éste, suerte de metodología y técnica que operativiza la apuesta de focalización del gasto, es concomitante a la reproducción cultural de los especialistas en Economía y Administración en los marcos del neoliberalismo. Si bien la premisa de evaluación de los proyectos sociales es inherente a la profesionalización de las ciencias sociales, y se impulsa en los años de posguerra como etapa necesaria en la ejecución de proyectos de desarrollo, la interpretación neoliberal de tal noción se aleja sustantivamente de la precedente. Y es que, mientras la doxa monetarista se basa en el cálculo de los “precios sociales” -propuesto por Arnold Harberger, organizador influyente de los “Chicago Boys” chilenos-, entendidos como el precio de referencia que se tendría que pagar por un bien o servicio en condiciones de competencia perfecta, incluyendo los costos sociales de los privados (Fontaine, 2016), para la economía del desarrollo los beneficios sociales que crean las inversiones son justamente aquellos que no cuantificables -en términos de costo o ahorro económico-, toda vez que la evaluación de los proyectos debe apuntar no sólo a su tasa de rendimiento económico sino también a los efectos ligados a aspectos sociales como las actitudes o valores que incentivan y afectan la disposición económica (general o particular en un área), la capacidad de organización e innovación (en términos sociales e institucionales) y la capacidad de cumplimiento o ejecución de las tareas económicas (Hirschman, 1969).

No sólo se trata del contraste entre una perspectiva de la programación social y otra que apela a la espontaneidad del liberalismo económico, sino, sobre todo, de la diferencia entre una perspectiva estructural que intenta considerar el mutuo condicionamiento de las esferas sociales y otra que, en base a un individualismo metodológico, atomiza los efectos de la economía considerándolos como suma de hechos aislados. Una opción en la que, además, se ajustan los grados de determinación que se atribuyen tanto a los criterios técnicos como a las decisiones políticas en relación con los proyectos de inversión (Faletto, 1996b).

Así pues, a mediados de 1976, Odeplan y el BID firman un convenio para un Programa de Asistencia Técnica en Preparación y Evaluación Social de Proyectos -compuesto de una fase teórica y otra práctica, con alrededor de seis meses de duración-, el cual se imparte durante dos años, se instala en el Instituto de Economía de la PUC y es dirigido por Ernesto Fontaine, egresado de la primera generación de “Chicago Boys”<sup>42</sup>. Desde 1978, el convenio adquiere un carácter regional, en tanto el Gobierno chileno entrega quince becas a participantes extranjeros cada año. Ello permite que el curso se proyecte sin mayores cambios hasta el año 2003, cuando se transforma en Diplomado universitario. En un balance presentado por el propio Fontaine (2016), contabiliza, hacia el año 2006, un total de 1200 profesionales egresados del Programa a lo largo de su historia, de los cuales 180 son extranjeros. Asimismo, de los más de cien cursos intensivos regionales impartidos, se registran, según sus cálculos, alrededor de 2500 profesionales egresados.

De modo que, en el grado de institucionalización que alcanza la difusión de los principios y métodos neoliberales en el aparato público chileno durante los años ochenta, se divisa un notable ejemplo histórico de reproducción social y cultural de una fuerza político-intelectual contemporánea. Y es que la élite político-intelectual que llega al poder en 1975 amplía la base social afín a su proyecto, ya no predominando en ese esfuerzo la vía privada de colaboración internacional entre universidades, sino mediante la promoción de una demanda estatal por postgrados extranjeros en economía, finanzas y administración, que impone la asimilación forzada de una nueva visión económica.

---

<sup>42</sup> Una difusión que parte en el Estado, cuando, a fines de los setenta, Kast y otros ministros logran imponer el condicionar la entrega de recursos a los ministerios al aseguramiento de rentabilidades sociales positivas, que debían calcularse siguiendo esta metodología. Con ese incentivo, el nivel de institucionalización que alcanza este enfoque termina excediendo al tipo de políticas sociales por las que se opte, por cuanto se transforma en requisito para la autorización de cualquier política social, cuando, en 1979, se crea el Sistema Nacional de Inversión. Tras ello, todas las iniciativas de inversión pública han debido seguir un estricto itinerario para su presentación, formulación y evaluación al Mideplan (hoy Ministerio de Desarrollo Social), que recomienda o no a Hacienda su inclusión en el presupuesto presentado al Congreso cada año, ya sea para asignación de fondos para nuevos estudios de preinversión o para su ejecución y puesta en marcha (Fontaine, 2016).



En concomitancia con esta “acumulación original” financiada por el Estado, se establecen las condiciones para que la reproducción social y cultural de esta nueva visión económica pueda continuarse localmente y extenderse al mundo privado. En efecto, mediante la labor de las escuelas de Economía de las principales universidades chilenas (UCH y PUC) y de otras instituciones que nacen a partir de la nueva Ley General de Universidades de 1981, las cuales reciben a contingentes de graduados en el extranjero que pasan rápidamente a formar parte de sus plantas académicas, se sucede un proceso de emergencia de nuevas generaciones de economistas, ingenieros y administradores formados en los códigos de un conocimiento científico-social homogéneo, que incluso llega a naturalizar una visión idealizada de los mercados como sistemas morales completos que combinan, por un lado, una visión ideal de actores racionales, y, por otro, una visión empírica, en que los mercados funcionan de manera permanente (Undurraga, 2012)<sup>43</sup>.

Esta renovación ideológica, expresada en el mundo privado como un cambio en la forma de hacer negocios y gestionar las empresas (Undurraga, 2012), asume como nuevo marco operacional su integración “horizontal”, ganando terreno la constante rotación en su propiedad, su agrupamiento en *holdings* y la predilección por maximizar utilidades financieras antes que desarrollar capacidades productivas (Ruiz y Boccardo, 2014). Se vuelve necesaria, así, la profesionalización de la administración y la gestión, que en los ochenta da impulso a un potenciamiento en la formación de cuadros ejecutivos con credenciales académicas de alta calificación en la gran empresa, dentro y fuera de Chile. Unos que reproducen la sinergia entre la visión economicista neoclásica y los saberes y herramientas de la gestión profesionalizada, resultando, por una parte, en un “*management duro*” orientado al cálculo, la eficiencia y al control de los gastos y, por otro, acompañado de un discurso que reivindica el liderazgo, la creatividad y la innovación (Undurraga, 2012), todos valores del *nuevo espíritu del capitalismo* (Boltanski y Chiapello, 2005).

---

<sup>43</sup> Quedan pendientes indagaciones específicas en relación con el número de graduados y su trayectoria laboral y sobre el aporte de otras universidades extranjeras a este proceso de reproducción, en tanto los fundamentos monetaristas ya eran mundialmente hegemónicos a mediados de los ochenta (Anderson, 2003).

### *La incrustación neoliberal en el empresariado y la defensa del modelo*

El proceso de *reproducción ampliada* no se completa sino una vez superados los peores efectos de la crisis económica de 1982, cuando emerge en Chile, mezclándose nueva y vieja fortuna, un grupo de “nuevos empresarios” (Montero, 1997) que se disemina y llena los nichos de negocio abiertos por la dictadura, y cuya élite, devenida en nuevos grupos económicos, está atravesada no sólo social -por cuadros empresariales de pasado tecnocrático que se benefician personalmente del giro neoliberal impulsado- sino culturalmente por el mencionado desembarco forzado de una nueva visión económica, en tanto los gremios empresariales adoptan los fundamentos de aquella como parte de su relato de defensa del modelo económico y de su papel en la sociedad.

La relación entre los gremios empresariales<sup>44</sup> y el régimen, hasta antes del arribo de los “Chicago Boys”, se caracteriza por la incapacidad de los primeros para instalar una visión nacional que supere la mera protección a sus empresas. La política de este breve periodo es gradualista y principalmente centrada en revertir el proceso de estatización, pero sin que el Estado deje de tener un rol activo en el fomento de las actividades productivas. El empresariado nacional, en su celo corporativo, no logra superar la visión acotada a sus intereses gremiales, ni instalar una visión de proyecto nacional que lo coloque a la cabeza de un proyecto nacional-popular autoritario, controlador de los desbordes institucionales a partir del uso de la fuerza de los militares (Arriagada, 2004). Se trata, en ese sentido, del fracaso del modelo de sustitución de importaciones y, con ello, de un tipo de élite económica que se había constituido al alero del Estado y en alianza con los sectores mesocráticos administrativos del Gobierno.

La privatización del “Estado empresario” y la apertura económica, así como la privatización de los servicios del Estado social, delinean al empresariado y, sobre todo, a los grupos económicos que emergen. En el primer caso, la subasta de empresas públicas,

---

<sup>44</sup> Con la Corporación de la Producción y del Comercio (CPC) a la cabeza, junto a sus cinco ramas: Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y Cámara Central de Comercio (CCC).

así como la de la participación estatal en la banca, evidencian la inclinación más especulativa que productiva del empresariado que emerge (Ruiz, 2013). Esto impulsa la concentración de la propiedad de las empresas y bancos enajenados, ahondando la red de intereses que emerge entre bancos y empresas adquiridas por los grupos económicos, dada la desregulación financiera y la débil fiscalización. En efecto, los grupos que controlan la banca compran empresas públicas con créditos de sus propias entidades financieras (Huneus, 2000), lo que socava la posición de los grupos ligados a la actividad industrial (Montero, 1997). El ingreso masivo de productos importados y la insostenible competencia para el sector productivo local, se compensa en estos grupos con altas y desreguladas tasas de interés sobre los activos financieros y las ganancias del capital por la compra de empresas a bajo precio. Algo vedado al sector industrial. De modo que, aparte de articular a los grupos económicos, las privatizaciones descapitalizan a buena parte de la actividad productiva (Moguillansky, 2001), bajo el patrón rentista adoptado.

El segundo embate de mercantilización crea sobre los servicios sociales no tanto nuevos grupos económicos sino nuevos nichos de acumulación, toda vez que la expansión capitalista avanza hacia nuevas esferas de relaciones sociales. Emerge, así, un “capitalismo de servicios públicos” que ampara sus procesos de acumulación en un rentismo sustentado en los “fondos de pensiones” y en el subsidio estatal, manejando una masa de capital inédita en la historia local (Ruiz, 2015).

La drasticidad de este cambio, sin embargo, no genera una rebelión empresarial. Por el contrario, los gremios de la gran empresa entregan su apoyo político al régimen. Lo entregan pese a que son paulatinamente excluidos de la participación y consulta en la generación y aplicación de la política económica, situación que se torna absoluta tratándose de los gremios representativos de la pequeña y mediana empresa (Arriagada, 2004). Esto ocurre porque buena parte de los integrantes de los gremios empresariales que juegan un papel clave en el derrocamiento de la Unidad Popular, dejan de ser actores relevantes en los años siguientes. La escasa o nula influencia de estos en el periodo 1975-1983, no obsta para que, en esa misma etapa, diversas grandes firmas y, sobre todo, algunos de los mayores grupos económicos, ejerzan un desmedido poder en el diseño de las políticas públicas. Así,

la representación de intereses no se canaliza a través de los gremios, sino por la vía de firmas individuales o de algunos poderosos conglomerados. De tal suerte, lo que los gremios pierden o aceptan perder como influencia, producto de los reacomodos generados por el ajuste económico, es conquistado por los más grandes grupos económicos de la época, sus representantes, departamentos de estudios y demás mecanismos de influencia.

Ejemplos de ello son los grupos Cruzat-Larraín, Vial y Edwards, vinculados a importantes “Chicago Boys” que ocupan puestos clave en el gabinete económico del gobierno, y los cuales controlan cerca del 37% de la propiedad de 250 grandes empresas chilenas, un 40% de los activos bancarios y un 30% de los créditos otorgados por las “financieras” (Dahse, 1979). Este tipo de relación afecta los patrones de inversión, al crear diferentes grados de confianza en la política económica entre diversos grupos. Y es que los que tenían acceso privilegiado al poder estaban en condiciones de hacer apuestas a futuro con muy escaso riesgo, al contrario de quienes carecían de tal información y contactos y que deben caminar a ciegas. De este modo, los conglomerados más tradicionales y los líderes de las asociaciones empresariales, por tanto, no pueden competir en condiciones de igualdad con quienes tienen ese acceso privilegiado (Arriagada, 2004).

Este proceso da lugar a una oleada empresarial de nuevo tipo, originada en un enriquecimiento súbito vinculado a la articulación entre bancos y ex matrices estatales. Una pléyade empresarial que, sin embargo, fracasa en su gran mayoría al poco tiempo, por la debilidad de un estilo especulativo -fundado en el fácil acceso al capital externo de empresas y bancos locales, así como en la convicción de un respaldo estatal implícito (Huneeus, 2000)- que hace crisis en 1982 cuando el gobierno declara la devaluación, ante una contracción del comercio y de los flujos de capital ocasionada por un endeudamiento excesivo que torna insostenible la fijación cambiaria y deteriora rápidamente la economía.

Golpeando a los sectores medios, el alza de la deuda provocada por esta devaluación también hace colapsar a gran parte de la insolvente banca local, acarreando empresas ligadas a ella dentro de los nuevos grupos económicos. Habiéndose elevado los precios, sumido en recesión el país, crecido el desempleo y provocándose las primeras protestas, las

medidas, no obstante, se orientan a frenar el déficit en balanza de pagos manteniendo la centralidad del sector exportador (Ruiz, 2013). Se inicia un proceso de estatización de casi la totalidad de la banca, y, con ello, se estatizan indirectamente cientos de empresas -varias de ellas poco años antes privatizadas- que, incapaces de pagar sus deudas, habían ido a morir a los bancos (Arriagada, 2004). Aquello se acompaña de un trato preferencial para las rentas del capital en desmedro de las rentas del trabajo, ungido en una nueva reforma tributaria que reduce el impuesto a la renta, en la carga al ahorro y la inversión, concentrando más la recaudación sobre el consumo y su carácter regresivo, y que crea instrumentos para postergar el pago de impuestos (Larraín y Vergara, cit. en Ruiz, 2013).

En el marco de esta crisis se produce una división al interior del régimen, que se expresa, también, en una fractura al interior de las asociaciones patronales. Los gremios empresariales salen de la oscuridad e inician una franca crítica a la política neoliberal. Hacia el tercer trimestre de 1983, la presión de los empresarios y de muchos políticos al interior del régimen está cerca de expulsar a los “Chicago Boys” de la conducción económica. Pero Jarpa, ministro del Interior, despierta desconfianza entre los grandes empresarios. Su retórica es grata para los pequeños y medianos y apunta a una política heterodoxa. La CPC, la Sofofa y las grandes asociaciones empresariales, después de un periodo de crítica, prefieren, entonces, alinearse en una coalición de nuevo liderada por los “Chicago Boys”, y que encuentra un fuerte apoyo en *El Mercurio*, la mayor parte de la prensa económica y, sobre todo, en la burocracia del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la banca internacional (Montero, 1997).

La impronta neoliberal sigue siendo resistida por sectores neo-corporativistas que habían sido perjudicados con el paquete de reformas de los “Chicago Boys”. Y es que la política económica impulsada por este grupo priva de espacios a muchos empresarios cuyo éxito es la búsqueda de rentas a través de sus conexiones con el poder político, esto es, cuyas ganancias no provenían de aumentos de la productividad de sus empresas, sino de conseguir del poder político resoluciones o decretos que les otorgaran créditos subsidiados, privilegios cambiarios, fijaciones favorables de precios o tarifas (Arriagada, 2004).

Ahora bien, el reemplazo desde un enfoque neo-corporativo a uno neoliberal, que se asienta en la élite político-intelectual que hegemoniza la administración del Estado y del Gobierno y que, según se ha dicho, se consolida en la reproducción social y cultural de sí misma, a costo del Estado en buena medida, y en la medida en que conforma una base social que la excede y que no necesariamente actúa en el aparato estatal sino también en el mundo privado, se fortalece también en la emergencia de una nueva élite empresarial de la que forman parte cuadros tecnocráticos beneficiados con las medidas económicas del régimen.

En efecto, una vez superados los peores efectos de la crisis económica, emerge, a mediados de los ochenta, un grupo de “nuevos empresarios” (Montero, 1997) que tras suyo portan la experiencia de la Unidad Popular, la crisis inflacionaria de mediados de los setenta y el desastroso final del *boom* económico. Aquél es integrado por ex funcionarios públicos que eran parte de la tecnocracia del régimen y que idearon mecanismos para quedarse con las empresas que estaban encargados de privatizar (Ponce, Saieh, Yuraszeck) (Mönckeberg, 2015); por grupos económicos que, al no endeudarse en exceso en el ciclo previo, sobreviven a la crisis y que, al tener liquidez, también se benefician de las privatizaciones realizadas en ese período (Angelini, Matte, Luksic) (Arriagada, 2004); y por el arribo de capitales multinacionales que marcan fuerte presencia desde esa fecha (Mönckeberg, 2015).

Esta nueva “capa geológica” (Arriagada, 2004), heredera de las crisis sucesivas, tiene como resultado más relevante de su convergencia el incentivo a la desnacionalización de la economía chilena. Y es que proviniendo sobre todo desde los elementos de la intelectualidad tecnocrática que se suman a este nuevo grupo al amparo del régimen, se constituye, junto a nuevos empresarios, toda una pléyade de directores y gerentes, surgida de la venta que estos mismos personajes hicieron de sus empresas a capitales transnacionales, a partir de lo cual, sin embargo, se mantienen en la dirección de éstas, ya no como propietarios sino como administradores, pasando a gozar sus ingresos, paradójicamente, de la seguridad propia de la burocracia.

Este tipo de “empresarialidad” se amplía, además, al reactivarse la vinculación del tipo “puerta giratoria”, que caracteriza entre 1971 y 1981 las relaciones entre los grandes

negocios y las autoridades del régimen que resuelven la política económica, asunto que prueba el largo inventario de altos funcionarios que pasan, sin tránsito de continuidad, desde los más altos cargos en la conducción económica del gobierno a los directorios de los bancos y de las empresas -particularmente, las recién privatizadas-, e incluso a la propiedad de importantes paquetes accionarios o activos en estas sociedades (Mönckeberg, 2015).

Por otro lado, esta incrustación tecnocrática neoliberal alienta a que el empresariado cambie su relación con el Estado. Contra la tradición empresarial pragmática y acomodaticia, este actor, a través de sus gremios, gira hacia posturas más proyectivas que reactivas. El comportamiento zigzagueante de los hombres de empresa en la etapa nacional-popular cede paso, paulatinamente, a la necesidad de definir principios básicos sobre el papel de los empresarios en la sociedad y la imagen que proyectan hacia el país (Álvarez, 2015). En ese sentido, articulando el principio ideológico de defensa de la propiedad privada -de tipo reactivo y que había configurado la acción gremial contra la Unidad Popular, aglutinando desde el pequeño comerciante al gran empresario con vínculos internacionales- con otros razonamientos más generales sobre el orden social y económico, en los años posteriores a la crisis, cuando se produce un alza en los niveles de crecimiento, se pone en marcha una acción gremial que, al mismo tiempo que alega la centralidad del empresario en la sociedad, toma la iniciativa política -ante la atomización de los partidos de derecha- para defender la “obra” de la dictadura (Campero, 2003).

El empresariado, entonces, aparece como un actor ideológico y político, y no sólo económico; como protagonista de los grandes debates nacionales, dispuesto a defender su proyecto; y como un actor que considera debe ser oído en el momento de la toma de decisiones sobre el futuro del país, alejándose de sus papeles aparentemente neutrales o pasivos de antaño (Montero, 1997). De este modo, la segunda mitad de los ochenta ve surgir un empresariado decidido a conservar el modelo económico que lo ampara (Campero, 2003). Una actitud por la cual no renuncia a la actitud defensiva que arrastra desde la época de Allende, por más que sí lo haga -como lo evidencia su “pinochetización” en la campaña del Plebiscito de 1988- al pragmatismo de antes, en favor de un dogmatismo

en defensa del supuesto éxito del modelo económico, la defensa y proyección de la actividad empresarial y el supuesto papel social del empresariado (Álvarez, 2015).

Es el cambio en el carácter social del empresariado (sobre todo en su franja financiera, cuya importancia crece por la financierización de la economía), dado por el ingreso de nuevos grupos tecnocráticos a sus filas, el que, entonces, impulsa su giro proyectual en la segunda mitad de los ochenta. Giro que, como una nueva actitud política, se extiende en adelante como un nuevo tipo de acción gremial encabezada por los grupos económicos y las nuevas grandes riquezas. Y en él, pese a lo que se ha señalado (Arriagada, 2004; Álvarez, 2015), sólo marginalmente interviene la experiencia de la Unidad Popular, pues el gran empresariado que había cumplido roles dirigentes en el derrocamiento de Allende ya ha perdido su influencia tras las crisis económicas.

En resumen, en Chile se produce un ejemplo histórico de reproducción social y cultural de notable eficacia política, contracara de la desarticulación de toda resistencia social o política organizada (partidaria, sindical o incluso intelectual), a cuya potencia es dable atribuir el carácter refundacional del autoritarismo chileno, en tanto aquél se juega en la posibilidad histórica de defender “en caliente”, esto es, en el mismo campo de la actividad política a lo largo de la dictadura (aunque éste estuviera vedado de manera formal), la consolidación de una implantación neoliberal que no sigue un camino lineal sino zigzagueante, pese al favorable escenario con que cuentan sus defensores.

Se trata, de tal suerte, de una *reproducción ampliada* que cuenta con dos momentos. Uno que, encontrando sus antecedentes en la colaboración académica internacional que provee al régimen de la élite político-intelectual que conduce la transformación económica, implica un acelerado proceso de reproducción social y cultural, a cuenta de un Estado que sienta las bases para que esa acumulación originaria luego se extienda a la empresa privada; y otro, que, a partir de la transición de ciertas franjas de tal intelectualidad al mundo empresarial, erige a éstas como su base sustantiva, articulando al sector social que detenta en democracia la mayor capacidad de presión sobre la política estatal: el nuevo empresariado (Ruiz, 2015). Esta *reproducción ampliada* da vida a un nuevo circuito cultural del



capitalismo chileno (Undurraga, 2012), en el que proliferan empresarios, directores de empresas, operadores financieros, intelectuales y técnicos, que reemplazan a la antigua alta tecnocracia pública ligada a las grandes empresas estatales (Ruiz, 2013), y que comparten una misma visión de mundo y que, como se verá, se fortalece en democracia.

#### 4.2.2. La renovación del carácter social de la política: la crisis intelectual socialista

La desarticulación social y política experimentada por los partidos de la oposición a la dictadura -especialmente el Partido Socialista y aquellas formaciones nacidas en las postrimerías de los años sesenta (MAPU, MIR e IC)-, crea las condiciones para que los intelectuales asuman un liderazgo inédito y sin contrapesos en el seno de estas organizaciones, permitiéndoles definir, en buena medida, los términos de la transición democrática chilena.

Esto lo hacen mediante la elaboración de una teoría política de la transición que viabiliza la vía de la negociación con el régimen a partir del reconocimiento del marco constitucional establecido, completando un relato sobre el cambio social y político que predomina en los años siguientes (Ruiz, 2017). Esta teoría política se construye a partir del establecimiento de una concepción particular de la política, que define los actores que legítimamente pueden (y deben) desempeñarse en ella.

Su realización trae aparejada una doble ruptura con las formas asumidas por la política chilena desde los años cuarenta. Por un lado, una escisión entre lo político y lo social, que torna excluyente el acceso a la política; y, por otra, una escisión entre lo político y lo intelectual, que reduce la dimensión imaginativa de la política a la administración, la “gestión experta” y la racionalidad del mercado, en reemplazo del debate racional que confronta proyectos de sociedad alternativos.

Tales rupturas sientan las bases tanto para los acuerdos y concesiones posteriores que - cristalizada en una “transición pactada”- establece la élite política opositora con el legado

de la dictadura, como para las definiciones políticas y económicas propias que, desde los años noventa, adoptan los nuevos gobiernos civiles.

*Pragmatismo y profesionalización de la política: la escisión de lo social y lo político*

La represión sobre los partidos políticos que lideraron el gobierno de la Unidad Popular y el carácter desestructurante de la instalación neoliberal sobre las identidades sociales nacional-populares, otorgan un papel central a franjas reducidas de políticos e intelectuales que, dentro y fuera del país, asoman con la responsabilidad de construir una oposición política al régimen. Al avanzar los años ochenta, en tanto la viabilidad para reconstruir tal oposición pasa a depender cada vez más de la ayuda internacional y del trabajo intelectual - única forma pública y tolerada de hacer política, a causa de la represión (Puryear, 2016)-, la importancia de los intelectuales se acrecienta, puesto que, en tanto se mantiene la ilegalización de los partidos políticos de izquierda, los centros académicos independientes, que albergan a intelectuales expulsados de las universidades y a políticos reconvertidos al trabajo intelectual, se convierten en focos de resistencia a la dictadura. En efecto, en la medida en que mediante ellos se logran vehicular recursos económicos y políticos y un trabajo intelectual sistemático, se convierten en los principales lugares de encuentro de la oposición, rebasando su inicial objetivo como espacios de refugio transitorio (Silva, 1991).

Siendo los centros académicos independientes un fenómeno transversal dentro de las identidades políticas de la oposición, es en torno al proceso de renovación socialista que emerge el pensamiento que dota de sentido y proyección a la transición a la democracia chilena. Un proceso político e intelectual que supone un giro desde concepciones marxistas hacia otras socialdemócratas (vinculado al giro ideológico de algunas izquierdas europeas), y que, pese a anclarse en el PS, lo excede con largueza. En Chile, además, es un proceso en el que los intelectuales vinculados al PS pugnan por su propio ascenso en las estructuras de poder y en el proceso político en curso, que luego se proyecta hacia la transición y los venideros gobiernos civiles (Ortiz, 2007). Esos intelectuales se abren espacio en la reconfiguración de la élite nacional durante la transición, desplazando a las burocracias partidarias vinculadas a la conducción de organizaciones sociales, lo que ayuda a imponer

un sello elitista sobre el proceso político y a marginar a las dinámicas tradicionales ligadas a tales organizaciones sociales (Ruiz, 2017).

La renovación socialista trae un cambio de los liderazgos dentro de la propia izquierda. En la segunda mitad de los ochenta, es el ascenso de dicho liderazgo, que tiene lazos más débiles con las bases sociales movilizadas, el que acrecienta su peso sobre el proceso de transición y gravita en la configuración del sistema político democrático. Es un curso en el que pierden poder aquellas burocracias partidarias ligadas a dichas bases sociales (Ortiz, 2007). Así, la precariedad adolecida por una izquierda desarticulada -cuyas dirigencias son asesinadas o sobreviven clandestinamente- dota a los intelectuales y políticos que sortean el asedio de la dictadura de un inédito escenario en el que la determinación mutua del eje social con el ideológico, típico del período previo, se torna prácticamente inexistente.

En esas circunstancias, el proceso de renovación socialista deviene central en la producción de un relato asociado a la transición y a la propia democracia, y en la reformulación de los idearios políticos, en consonancia con los intereses elitarios apostados en el pacto de la transición (Ruiz, 2017). Se habla, así, de una “intelectualidad orgánica de la democracia”, que impone una idea de la misma reducida a sus dimensiones político-formales, al omitirse sus dimensiones sociales y económicas, consideradas como fuente de riesgos para las primeras (Baño, 1985).

Los grupos político-intelectuales que forman parte de la renovación socialista son mayoritariamente parte de la facción de la izquierda chilena que leyó el golpe de Estado como un fracaso estratégico y no como una derrota política. En torno a esa diferencia encabezan, desde la segunda mitad de los setenta, una dura autocrítica al pensamiento de izquierda, su proyecto, las formas y las ideas matrices que lo articularon, con el fin de refundar ideológica e identitariamente a este sector político (Moyano, 2010).

En la década siguiente, tal acción avanza, tras analizar los cursos de transformación impulsados por la dictadura, hacia una *nominación* del futuro, en la que se incluyen el deber ser de la política, el futuro político de la nación y la salida a la dictadura (Moyano,

2010). Una que se hace en diálogo con el pasado reciente, dado que se apoya en una lectura crítica de la política nacional-popular chilena, emergiendo desde allí, influido por los avatares del proceso de transición a la democracia, una particular concepción de la política, que niega el vínculo de ésta con lo social, naturalizando las condiciones excepcionales vividas en dictadura, cuando predomina la ausencia de control ideológico de los partidos y, por ello, la autonomización del rol del intelectual respecto a estos (Baño, 1985).

El primer paso para la legitimación teórica e histórica de una concepción de la política de este tipo es la crítica a la izquierda de la Unidad Popular por desatender a las capas medias. Se apunta con ello tanto a lo estéril de un intento de revolución socialista que no contara con las mayorías necesarias como a que ese déficit político habría funcionalizado el malestar de tales sectores en favor de la reacción que origina el golpe de Estado (Moulian, 1982; Garretón, 1983). Tempranamente ello empuja dentro del pensamiento renovado la idea de que el problema político para la articulación de cualquier oposición es la amplitud de la alianza política, entendida básicamente como el establecimiento de un vínculo con el PDC. Como corolario, además, en tanto es la izquierda la más debilitada, se asume que ella debe realizar las mayores concesiones (Ruiz, 2017).

Se abre, de este modo, un amplio espacio para la crítica no sólo de la experiencia de la Unidad Popular, sino de las estrategias clásicas de la izquierda, de los actores que se privilegiaban desde el marxismo y, más adelante, de la mayor parte de sus premisas (Alvear, 2016). No sólo se impugnan las visiones que apuntan a la necesidad de haber dotado de una defensa armada al gobierno de Allende, sino que a la estrategia de alianza de clases que la vertiente liderada por el PS sostuvo hasta 1973: el Frente de Trabajadores. Asimismo, se les achaca a las estrategias de cambio de la Unidad Popular el haberse “saltado” las instancias parlamentarias y el principio de negociaciones y transacciones del sistema político, alienando más a las capas medias (Garretón, 2003).

La otra gran crítica que recorre al pensamiento renovado se dirige al funcionamiento del sistema de partidos durante el siglo XX, y que permite la instalación, durante la década, del principio de autonomía de lo político, bajo una concepción de la democracia posible basada

en la conformación de un bloque por los cambios que no debía articularse en torno a un proyecto ideológico, sino que pragmático y coyuntural (Moyano, 2010).

En efecto, el núcleo del cuestionamiento compartido por los intelectuales que intervienen en este debate es hacia un tipo de politización que tendió a asumir que “todo es político”, en el sentido de que sólo lo político -en particular, el vínculo con los partidos políticos y, en ese sentido, con proyectos ideológicos- torna legítimo a lo social. La estructura político-partidaria habría estado imbricada con el conjunto de las organizaciones sociales, lo que habría debilitado y hecho dependientes a las organizaciones autónomas de la sociedad civil, al tiempo que habría impuesto como fundamento incuestionable la subordinación de todos los ámbitos de la vida social a la política, validando como actores legítimos sólo a aquellos con capacidad de expresarse en la esfera pública a través de la política de partidos (Garretón, 1982, cit. en Moyano, 2010; Tironi, 1983)<sup>45</sup>.

Tratándose de un tipo de politización aún presente en el Chile de comienzos de los ochenta, en momentos en que se buscó articular una oposición política efectiva a la dictadura, los intelectuales de la renovación socialista proponían salidas a menudo disímiles. Así, para Manuel Antonio Garretón (1982, cit. en Moyano, 2010) debía superarse esta imbricación entre política y sociedad entendiendo al momento político-partidario sólo como uno más, al tiempo que la oposición debía sobreponerse a la falsa dicotomía entre el partido como refugio político (alejado de la relación con lo social y por ello como una vanguardia) y el movimientismo que subsume en él lo político o posterga su disputa. Por el contrario, para Eugenio Tironi (1983) la modalidad del “todo es política” no sólo era errada, sino que constituía un sinsentido, en tanto la política había devenido una actividad profesional, por el grado de institucionalización en que se encontraba. A su modo de ver, una visión así impedía la acción creadora de orden y consensos, pues aislaba a la oposición y llevaba a la

---

<sup>45</sup> Sin aún poder definirse el grado de influencia que ejerce en este debate, cabe señalar la importancia del libro del politólogo Arturo Valenzuela, *The Breakdown of Democratic Regimes. Chile* (1978, The John Hopkins University Press). Texto que explica el fracaso de la Unidad Popular en virtud de la crisis de lo que se denomina la política de los “tres tercios”, es decir, el hecho de que en el sistema de partidos chileno se habría impuesto un centro político (el PDC) incapaz de servir de puente y conglomerar mayorías para las transformaciones radicales. Es traducido y publicado por Flacso a fines de los ochenta (Valenzuela, 1989).

izquierda al “segundo fracaso” de mantenerse resistiendo a la dictadura, cuando debía asumir las transformaciones radicales que ésta había impulsado.

Desde 1983, a partir de las jornadas de protesta, el predominio de las movilizaciones y la violencia urbana, se produce una bifurcación que, al interior del pensamiento renovado, origina dos estrategias políticas. Por un lado, la que privilegia la “salida pactada” con el régimen y en la que predomina un contenido normativo en torno al consenso político, en contra de un proyecto ideológico. Ello, bajo el diagnóstico del fracaso tanto de la salida insurreccional (incautación de arsenal del FPMR en Carrizal y atentado fallido a Pinochet) como de la idea de ingobernabilidad política por la vía de movilizaciones populares (al decaer la participación en las protestas). Por otro, la estrategia alternativa es la que, teniendo a la vista el alza de la movilización social en las poblaciones de Santiago, supone que ésta ha configurado un nuevo actor social, rebelde y juvenil, que destruirá la sociedad capitalista con todo el andamiaje partidario que la articulaba y sostenía (Moyano, 2010a).

La presión interna y externa -pese al endurecimiento de la represión y la declaración de Estado de Sitio que supone el “reordenamiento institucional” tras la política de apertura de Jarpa (Huneeus, 2000)- apura una táctica de repliegue militar, que estimula no sólo un mayor fraccionamiento de la oposición, sino que anima a justificar las diferencias y elaborar una teoría de acceso al poder (Ruiz, 2017). Los grupos medios opositores, más capaces de resolverlo, la formulan. En cambio, la vía de movilización popular carece de ello (Salazar, 2006), entrampada en la polaridad entre una acción política de resistencia pública o la ‘reconstrucción del movimiento popular por la base’ (Garcés, 2010).

El colapso ideológico de la izquierda y de la idea de socialismo, apuran su derrota y exclusión de la transición negociada (Alvear, 2016). La oposición política busca un diálogo apuntando a la amenaza de desintegración que porta la rutinización de las protestas. Se alega que en el “movimiento poblacional” coexisten, junto a la desclientelización forzada,

procesos de desintegración orgánica bajo las transformaciones ocurridas que, más que un movimiento propiamente tal, indican una anomia políticamente inconducente<sup>46</sup>.

La preocupación de los sectores que atizan la salida pactada apunta a que las protestas marginales pueden poner en peligro la transición a la democracia. Esta es la pregunta que recorre, por ejemplo, el seminario *Movimientos sociales urbano-populares y procesos de democratización*, organizado por SUR y reproducido en el número 14 de la revista *Proposiciones*, de agosto de 1987. Tironi (1987b: 65) dirá en su ponencia:

“Los pobladores, por tanto, son una representación de ese fenómeno aparentemente abstracto de la desintegración social. La reacción que provocó la agitación de las poblaciones en el resto de la sociedad -en especial en los grupos medios-, reveló a su vez cómo la violencia social actualiza la amenaza de la disolución de la comunidad; y cómo ese peligro se transforma luego en respaldo a una solución autoritaria. La agitación de los pobladores, en fin, mostró que el problema de la democracia en Chile está indisolublemente unido a la tarea de suministrar bases de cohesión material, institucional y moral a la nación”

Haciendo eco de las formulaciones que explican el fracaso de la Unidad Popular por la falta de apoyo de las capas medias, se difunde la idea de que la violencia urbana puede volver a alienarlas, aunque ahora de la recuperación de la democracia, empujándolas a respaldar la permanencia del autoritarismo.

Pese a que ciertos sectores de la intelectualidad renovada les reconocen a las movilizaciones sociales el haber reconstruido la sociedad civil parcialmente y transformar los regímenes militares (la “transición invisible”), se asume de modo general que ello no es suficiente para lograr el término de la dictadura: “sin momento político, no hay fin de la dictadura y transición democrática” (Garretón, 1987: 131).

---

<sup>46</sup> El estudio que definió en buena medida esta caracterización es *Pobladores: luchas sociales y democracia en Chile* (Dubet et al., 2016). Obra originalmente publicada en francés en 1989, presenta los resultados de la “intervención sociológica” -método touraineano de estudio de los movimientos sociales- realizada al movimiento de pobladores chileno entre 1985 y 1986 en Santiago. Esta investigación fue financiada por el Ministerio francés de Asuntos Extranjeros, por intermediación de Alain Touraine, cuyo laboratorio, el Cadis de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, se asoció a SUR (Cortés, 2016).

Ahora bien, ¿de qué trata ese ‘momento político’? Pese a la existencia de voces dentro del pensamiento renovado que habían defendido la combinación y el carácter dialéctico de la relación entre las movilizaciones sociales y procesos políticos (institucionales e ideológicos) específicos (Garretón, 1987), la interpretación que se impone para explicar el carácter de las protestas populares deja sin margen a tal alternativa. Y es que, junto a la nominalización del “movimiento poblacional” como una expresión del deterioro de los lazos sociales a raíz de las transformaciones provocadas por la crisis económica, se generaliza como explicación del debilitamiento paulatino de las protestas populares el hecho de que estas *mezclan* demandas por democracia con otras por democratización. En este esfuerzo por separar, entonces, el ‘momento político’ de la transición, termina asociándose exclusivamente con la dimensión institucional de lo político, homologándose aquello a una tarea que debiese asumir la ‘clase política’ que lidere tal proceso. Al respecto, nuevamente Tironi (1987a: 17) será el más elocuente, cuando, sintetizando las conclusiones emergidas del seminario antes mencionado, afirme que la transición a la democracia:

“equivale al procedimiento a través del cual la clase política -en toda su variedad- se pone de acuerdo en cómo dar término a un régimen autoritario. Y este proceso debe ser reconocido como distinto al de la elaboración de respuestas para otros problemas sociales o económicos” (Bajo esa premisa) “sería necesario, entonces, reconocer la transición como un momento político, que requiere de una (momentánea) desarticulación entre lo político y lo social. Tal ruptura, sin embargo, sólo aparece posible a condición de que también se rompa el *imaginario político latinoamericano*, que confunde *democracia* (noción que alude al campo político institucional) con *democratización* (noción que alude, en cambio, al campo socioeconómico)” (cursivas propias).

El precio por pagar para alcanzar la democracia formal, entonces, es la subordinación de las demandas sociales a las exigencias del orden político. Es la postergación de la democracia sustantiva: se instala, así, definitivamente, la exigencia de escindir lo social y lo político.

Aun así, el proceso de construcción de una legitimidad social y política no está completo si sólo se sustenta en la negación de las alternativas, en este caso, en la negación de la estrategia de transición por la vía insurreccional. Más bien, necesariamente debe ser elaborada, como parte de ese proceso de construcción ideológica, una justificación *en positivo*, que identifique material y teóricamente a lo que se antepone a esa alternativa. En el caso de la transición a la democracia chilena, tal justificación se afirma, materialmente,



en la existencia de una clase política y, teóricamente, en el carácter profesionalizante de la política.

En efecto, abierta la puerta a la idea de escindir lo social y lo político, tal tesis se fragua en el supuesto carácter profesionalizante de la política, que, de ser esbozado a comienzos de los ochenta como superación del tipo de politización que predomina en la política nacional-popular chilena, se torna en táctica política para fortalecer el relato de acceso al poder de esta parte de la oposición<sup>47</sup>. Así, el ‘momento político’, ese que pondría fin a la dictadura, aunque capitalizando lo logrado por las movilizaciones sociales, pasa a ser propiedad de un partido o de una coalición política. Instrumentos que, sin embargo, a partir de la justificación comentada, son reducidos a los avatares y las decisiones de una clase política que debe escindirse de su base social -dado que no necesita someter sus decisiones a la deliberación de ésta- y, por ello, puede suplantarla al instrumentalizar el contenido de sus demandas. Se justifica la elitización de la política que se proyecta a los gobiernos civiles.

Bajo estos términos, se llama a acelerar la transición a fin de establecer un mínimo de legitimidad social. El itinerario de la transición es aceptado por la mayoría de los partidos opositores, prevaleciendo en el sindicalismo, los colegios profesionales y las federaciones estudiantiles. La transición avanza aislando a los grupos marginales y sus movilizaciones, lo que permite un control del proceso en manos del centro político y los sectores medios. Se reconstituyen rápidamente los partidos políticos, mientras en el seno del régimen no hay cohesión entre los adherentes civiles de este tras la figura de Pinochet (Ruiz, 2013).

La derrota de la estrategia transicional por la vía insurreccional, entonces, es total. Y es que, contra el mito según el cual el plebiscito de 1988 es impuesto a la dictadura por la movilización social, cabe recordar que aquél estaba previsto en el itinerario transicional definido por la Constitución de 1980, que entra en vigor el 11 de marzo de 1981 (Thielemann, 2015). De tal suerte, la construcción de un relato de exclusión de la

---

<sup>47</sup> Tironi, en 1983, decía: “la política no es una actividad masificable, como se hace creer desde su versión imperialista. En efecto la política ha devenido una actividad profesional, que exige vocación y talento especiales, precisamente por el grado de institucionalización en que se desenvuelve” (Tironi, 1984: 67).

movilización popular tiene mucho más que ver con los términos en los que se negocia la “transición pactada”, que con la real potencialidad política de las protestas. Dicho de otro modo, la atención a los peligros que entrañaría la violencia urbana (que llevan a retomar la lectura sobre el fracaso de la Unidad Popular) encuentra su sentido en la posibilidad de que no se respete lo definido con los militares y civiles del oficialismo.

La dictadura y sus transformaciones terminan con las bases sociales e intelectuales de la determinación mutua del eje social con el eje político-ideológico, que caracterizó a la política nacional-popular chilena durante el siglo XX. Una serie de estrategias político-ideológicas, mayoritariamente producidas en el seno del proceso de renovación socialista, definen los términos de una modalidad de transición a la democracia que es excluyente, puesto que apela a postergar toda discusión sobre proyectos de sociedad, alternativos al modelo dejado por la dictadura. Ello, para lograr el máximo número de adherentes hacia la recuperación de la democracia política, representativa y formal.

#### *La escisión de lo intelectual y lo político o la legitimación de sí mismos*

Se ha dicho que, en la “teoría política de la transición”, que fija la escisión entre lo social y lo político, se asume la necesidad de una élite política que conduzca tal proceso, en función del peso que se le otorga a una cierta profesionalización de la política que contrasta con la situación previa al golpe de Estado. Ahora bien, ¿quiénes son los actores que pueden, legítimamente, formar parte de esa élite de poder? ¿Qué características deben poseer? Responder aquello también es parte de esa teoría política. El carril por el que se conforma tal respuesta nuevamente apela a una lectura crítica del pasado y a una normatividad sobre el presente y futuro que atañe a la oposición al régimen. Esta vez, sin embargo, su foco está puesto en la relación entre los intelectuales y la política.

Entre 1976 y 1983, el pensamiento renovado -y la izquierda en general- enfoca su crítica en la figura del “intelectual comprometido” y en la visión del marxismo como teoría, doctrina y teleología (Moyano, 2010). La crítica de fondo, como lo va a señalar Tomás Moulian (1980), es que en el pasado la izquierda tendió a igualar teoría y verdad. Una crítica

compartida por José Joaquín Brunner (1981), para quien, previo al golpe militar, se habría institucionalizado en los partidos políticos una clausura cultural que habría dado lugar a una diferenciación marcada entre ‘políticos’ e ‘intelectuales’, entre cuadros y teóricos, cada cual, con sus cotos demarcados, con sus cuotas de influencia burocrática y sus medios típicos de acción. En ese sentido, refiriéndose a la importante influencia de la sociología en los años sesenta, a su juicio, ello se originaba, en el caso de la cultura socialista, en la manera en que el marxismo se hallaba codificado en Chile, entendido como empresa de difusión de un precario tradicionalismo que entendía la acción cultural de un modo compartimentalizado:

“cuando la mirada sociológica asume el horizonte del socialismo como posibilidad histórica concreta, lo hace más por adscripción que por logro, e involucre sobre un campo teórico - el del marxismo- cuya fragmentación en el mundo entero imponía la necesidad de nuevas adscripciones y ubicaciones, para dar paso a identidades que venían urgidas por las pugnas políticas en el interior de la conducción revolucionaria. Ocurría entonces que la propia identidad de los grupos intelectuales que trabajaban en el campo de las ciencias sociales tendía a producirse en la simultaneidad de una definición teórica que, a la vez, se expresaba como determinación en el campo de la política concreta; todo ello mediado por un único discurso marxista, cuya unidad aparente era preciso mantener, al menos como metalenguaje que hiciera posible la comunicación de lo diverso. Así, sociologismo e ideologismo resultaban una y la misma cosa” (Brunner, 1981: 24-25).

Había, por tanto, no sólo una confusión de planos entre teoría y verdad, sino una entre lo que hoy podría denominarse el campo intelectual y el campo político-ideológico. Por eso los intelectuales, sobre todo de las ciencias sociales, asumían como dados los objetivos de su labor intelectual. Esta conclusión de fondo, compartida mayoritariamente por los intelectuales que abordan este tema, lleva a que el pensamiento renovado tempranamente promueva la separación entre la teoría intelectual y la práctica política.

Las derivaciones de esta conclusión general, sin embargo, fueron múltiples. Apuestas en las que el tenor de la autocrítica adoptaba carices de culpabilidad y autorreferencia - confundiendo la complejidad de la Unidad Popular con la propia biografía-, a menudo partiendo de una interpretación generacional (“sólo ayer éramos dioses”, dice Tironi (1984) en 1979), llevaron a opciones extremas como desembarazarse del marxismo (Moyano, 2010). Otras, desde posiciones normativas, apelan a que el intelectual no establezca cursos

de acción, sino que únicamente provea diagnósticos y análisis del escenario político, sin perder su independencia (Moulian, 1980). Brunner (1981), por su parte, deriva del análisis de los cursos de transformación introducidos por la dictadura, la conclusión de que el intelectual ya no puede concebirse portador, a través de su propia práctica, de una ligazón orgánica con las masas, la clase, el partido o el Estado. En efecto, el disciplinamiento autoritario habría quebrado los sentidos compartidos que permitían ese vínculo, como consecuencia de la atomización de una sociedad que busca cada vez más organizarse en función del mercado y de la ausencia de una política integradora y conectiva.

En los años siguientes, al calor del proceso político, estos análisis se radicalizan. Sin embargo, ya no lo hacen criticando la confusión entre las tareas científicas y las políticas, sino derechamente la función social de los intelectuales. Esta vez el debate lo lideran, desde Flacso, el politólogo Ángel Flisfisch con el propio Brunner, en sendos trabajos que analizan el tema (Flisfisch, 1985; Brunner, 1986). Su crítica gira a una lectura de la política nacional popular en clave del predominio de una “intelectualización” de la política. Es decir, de que habría existido un predominio desmesurado de los intelectuales en la política, influyendo en que esta última se convirtiera en una actividad orientada a implantar una verdad sobre la sociedad. Aquello, a juicio de ambos, habría estado a la base del dogmatismo y sectarismo que provocó la polarización política que derivó en el golpe militar, pero también en las dificultades que los partidos de la oposición encontraban en esos momentos para concertar una alianza política que permitiera salir de la dictadura.

De allí que, haciendo alusión a un rasgo que identifican en la política chilena, señalen lo necesario de extirpar la “inflación ideológica” de ésta. En particular, la función política de vanguardia que dentro de los partidos se le daba a la intelectualidad, totalmente contraria al pragmatismo que se exigía a las élites políticas en las tensas horas de la transición, las cuales debían operar con realismo y olvido de las utopías (Brunner, 1986). Olvido que concebían como necesario y posible, tanto por las responsabilidades que suponía la democracia -dado el peligro de supervivencia del autoritarismo y la fragilidad del Acuerdo Nacional de 1985-, como porque, haciendo eco de la más actual teoría social del momento, el mundo experimentaba la “crisis de los metarrelatos” (Brunner, 1986).

Se criticaba, así, como lo explicita Flisfisch (1985: 4), “cuando en la cultura política predomina una interpretación de la política que le asigna el sentido primordial de ser una actividad orientada a implantar en la sociedad una verdad sobre la sociedad, verdad que es vista a su vez como conocimiento racional y que se obtiene racionalmente”. La política habría sido interpretada como simplemente la obra de la actividad intelectual. La izquierda habría pecado de ello al hacer política partiendo de una concepción plenamente racionalista acerca de lo que ésta es y debe ser (una “competencia de utopías”). No obstante, se trataba de un fenómeno transversal a la política chilena, tal como ocurría con un PDC atrapado en un “pragmatismo con utopía” (cuando, en realidad, esa “utopía” no es sino la identidad de su proyecto) y una derecha atrincherada en la defensa de la ortodoxia monetarista. En Chile, por ello, había un modelo de relación entre intelectuales y política de “consejero del príncipe”, en donde los intelectuales detentan una influencia decisiva tanto en la vida partidista interna, como en las grandes decisiones y definiciones políticas. A cambio, promueve el “modelo de grupo de presión”, cuya eficacia va desde la marginación de los intelectuales a una cercanía importante, pero con asimetría a favor del polo político.

De este modo, hacia el último tercio de los ochenta, de una crítica a la confusión entre verdad y teoría, que habría asumido la relación entre los intelectuales y la política sobre todo en los sesenta, y que, como parte de la autocrítica de estos intelectuales, habría incidido en la caída de la Unidad Popular, el pensamiento renovado pasa, a raíz del avance de la estrategia de “transición pactada”, que gana fuerza en la oposición, a un cuestionamiento general del papel de la intelectualidad en la política chilena del siglo XX.

Un cuestionamiento que, además, conlleva una normatividad sobre cómo debía ser tal relación en adelante, para beneficiar a la oposición articulada, a contrapelo de la “inflación ideológica” del pasado. Al suponer aquello la atención a un pragmatismo y moderación política, olvido de las utopías y un comportamiento subordinado, en última instancia, a las decisiones de la élite política de los partidos (a propósito de la profesionalización de la política), se apela a responsabilidades distintas entre intelectuales y políticos o, al menos, a una transformación de las tareas que los primeros hicieran habitualmente. Es decir, a la

separación entre lo intelectual y lo político o, dicho en términos de estrategia política, a la separación entre lucha política y lucha teórica<sup>48</sup>. De pasada, como ya lo insinúan los análisis de comienzos de la década, de algún modo se declara la muerte -o la necesidad de la muerte-, al menos transitoria, del ideólogo y del “intelectual comprometido”, símbolos de la dinámica política del período previo.

Ahora bien, si bien a primera vista parece al menos paradójal que esta crítica general a la función de los intelectuales en la política chilena la hagan justamente cuadros de la propia élite político-intelectual que en los sesenta habrían saturado de “inflación ideológica” la política local, no lo es si se tiene en cuenta que tales cuadros de la izquierda devienen autoridades en los gobiernos civiles. En efecto, en la recuperación del régimen democrático se juegan su propia posición en el espacio social global, pues significaba la recuperación de la posición de privilegio perdida con el golpe de Estado. Dicha posición, como advierte Alvear (2016), se liga mucho más al régimen político que al modo de producción o al proyecto socioeconómico en curso, pues él representa la provisión de espacios de representación política, de cargos dirigentes en el aparato del Estado, el reintegro a las universidades y la revalorización social de un saber y prácticas que se habían formado y moldeado para su aplicación desde el ámbito estatal.

De algún modo, entonces, la pretendida crítica del pasado, en la que incluyen su propia autocrítica, y que encuentra en el análisis de la relación entre intelectualidad y política una línea de argumentación relevante, es funcional a su propia transfiguración de intelectuales del proceso de transición a responsables y continuadores del mismo. Dicho de otro modo, legitiman su propia hegemonía en los campos intelectual y político. En ese sentido, como ha destacado Morales (2016) para América Latina, este es un ejemplo patente de cómo la

---

<sup>48</sup> De allí que no sea antojadiza la forma en que estos mismos intelectuales recuperan la obra de Max Weber en los años ochenta, enfatizando en la oposición entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, que apoya el relevamiento de lo político-institucional por sobre lo ideológico, la profesionalización de la política y la separación entre campo político e intelectual. Véase, por ejemplo, Brunner (1986) y Flisfisch (1987).

intelectualidad que participa de los centros de estudio de la oposición a las dictaduras en el Cono Sur termina siendo defensora y articuladora de sus propias ideas, sin mediaciones.

Sin embargo, lo interesante de la experiencia chilena es que prácticamente la misma generación que lideró el proceso de activación social y política al que reacciona el autoritarismo es la que luego se valida a sí misma como conductora del proceso de transición y, más tarde, de los gobiernos civiles.

#### 4.2.3. Una élite político-intelectual transversal para la transición chilena

La renovación socialista, como advierte Ruiz (2017), fue más una renovación en las alianzas políticas que en el campo intelectual. En este último se paralizó, dando cuenta de la crisis general del campo socialista que también la alcanza. Es por ello por lo que, tras el ideario socialista, sigue un análisis de la modernidad desde categorías liberales, un abordaje de la realidad social en que predomina el ámbito estrictamente político, con escisión de consideraciones sobre la estructura social y económica. Lo político, así, reduce la consideración a un ciudadano con abstracción de su condición social.

Sin embargo, para que se produjera tal renovación debió acompañarse ese proceso de una redefinición del carácter social de la política. Una ideológicamente sustentada en la doble fractura de lo social y de lo intelectual con lo político. En particular, porque aquella renovación de las alianzas políticas encarna -más allá de la convergencia entre el PS y el PDC- en una élite político-intelectual transversal, que excede las identidades políticas de apoyo al régimen o a la oposición, cuyo horizonte no es sólo encabezar y definir los términos de la transición a la democracia, sino proyectar hacia los gobiernos civiles una concepción específica de la política (y, en particular, de la democracia), cuyo eje es la exclusión de la deliberación política y el cuestionamiento a la acción colectiva para la defensa de intereses sociales.

En la formación de tal élite político-intelectual transversal cumple un papel fundamental el diálogo y la socialización que, entre personeros del oficialismo y de la oposición, se

produce en los centros académicos privados y *think tanks* de uno y otro sector, y a partir de lo cual se pavimenta el lento camino hacia una propuesta consensual que encarrile definitivamente la transición (Huneus, 2000)<sup>49</sup>. En reuniones y seminarios se genera un intercambio que impone como normas de la negociación, por una parte, la necesidad de coordinar el cambio institucional con estabilidad y continuidad política, esto es, con gradualidad y secuencialismo; y, por otra, que el cambio en el pensamiento político de la oposición se oriente pragmáticamente, asumiendo una racionalidad acorde a la estructura de oportunidades existente, sin buscar salirse de esos marcos (Boeninger, 1986).

Este pensamiento se nutre de la escisión entre concertación política y concertación social. En el caso de la primera, partiendo de la certeza de que los momentos de progreso y desarrollo político habrían devenido en Chile como resultado de altos grados de gobernabilidad, control social y capacidad sistémica para excluir la conflictividad social, que perturbaba la institucionalidad. En el caso de la segunda, referida a cierto modo específico de integración vertical y horizontal, capaz de proporcionar control social para el perfeccionamiento de las instituciones, en base a acuerdos estratégicos y sustantivos (Boeninger, 1997). Claves ambas de aquella estrategia que asume que la salida a la dictadura sólo puede ser política, lo que, en los términos instalados, significaba un acuerdo entre élites (Mella, 2008).

Desde 1983 se profundiza la lejanía de la renovación socialista con el pensamiento de la izquierda y sus banderas tradicionales. Ello se produce con la recuperación de nuevas fuentes teóricas, algunas desconocidas o despreciadas por la izquierda, como Gramsci o el liberalismo de Parsons, Weber o incluso Hayek (Moyano, 2010). Ello inicia un gradual desplazamiento hacia la democracia liberal y la “economía de mercado”, al valorarse las

---

<sup>49</sup> Además de Flacso y SUR, se encuentran: la Corporación de Investigaciones Económicas para América Latina (Cieplan), el Centro de Estudios del Desarrollo (CED), el Centro de Indagación y Expresión Cultural y Artística (Ceneca), el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (ICHEH), la Academia de Humanismo Cristiano, el Instituto Latinoamericano de Doctrinas y Estudios Sociales (Ilades), el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET), el Centro Latinoamericano de Economía y Política Internacional (Clepi), el Programa de Economía del Trabajo y el Centro de Estudios Públicos (CEP) (Lladser, 1986; Puryear, 2016).



instituciones “formales” de la sociedad burguesa y al mercado como el más eficiente asignador de recursos (Lechner, 1990).

Se trata de un giro ideológico originado en el trabajo de intelectuales y políticos que se desempeñan en los centros académicos independientes y *think tanks*, dentro y fuera de Chile, que acompañan el proceso de construcción programática en la oposición. Una parte solamente de las funciones que cumplen estas instituciones, que también sirven para el reclute de activistas y dirigentes, la formulación de críticas al régimen y la promoción de diálogos y encuentros que ayudan a la convergencia de los partidos. Es una especificidad chilena el gran número que alcanzan en dictadura, explicado por la tradición de cercanía de los intelectuales con los políticos en Chile y la cooperación, fraguada antes de 1973, entre académicos de universidades y profesionales de organismos internacionales con los principales dirigentes del PDC y el PS (Huneeus et al., 2014)<sup>50</sup>.

La exuberancia que en este ámbito muestran los partidos de la oposición, sin embargo, ha invisibilizado el rol clave que también cumple el Centro de Estudios Públicos en el proceso de transición a la democracia. Este *think tank*, fundado en 1980 por un grupo de ex funcionarios del régimen militar y otras personalidades de la derecha, nace como respuesta a las críticas desplegadas por instituciones como Cieplan y Flacso a las políticas del gobierno y a la ortodoxia de su gabinete económico (Jara, 2017). Interesados en institucionalizar el régimen político prefigurado en la Constitución de 1980, invocan la presunta legitimidad del pensamiento conservador de los países del Primer Mundo en apoyo a sus posiciones. Lo hacen invitando a conferencistas y personalidades académicas y políticas europeas y norteamericanas a sus aulas, y editando la revista *Estudios Públicos*, cuyo objetivo inicial es dar una versión “nacional” de las posiciones neoconservadoras para abogar en favor del proyecto de democracia “autoritaria” (Maira, 1981).

---

<sup>50</sup> Al llegar 1988, se encuentran en pleno funcionamiento 49 de estos centros, en los que se desempeñan 664 profesionales, especialmente de las ciencias sociales, entre los cuales se cuentan importantes personalidades de la oposición a la dictadura (Puryear, 2016).

En sus primeros tres años, el CEP reivindica, a través de las actividades mencionadas, una versión del liberalismo apegada a la tradición anglosajona, a contracorriente de lo que sus líderes consideran la variante “contaminada” predominante en el liberalismo criollo y latinoamericano, más proclive a la tradición francesa, racionalista y constructivista. Defienden el principio de espontaneidad social de la tradición británica, cuya idea de libertad, definida como “ausencia de coacción ajena”, se alza como un valor superior a la democracia entendida como toma de decisiones colectivas. Una idea que encuentra su mayor expresión en el libre intercambio de bienes y servicios, a contrapelo de la tradición francesa que, entendiendo a la libertad como “capacidad de hacer”, considera a la democracia como un ideal político superior a la libertad, y encuentra su mejor expresión en el espacio de la política o decisiones grupales (Jara, 2017)<sup>51</sup>.

En el CEP, entonces, se fragua una idea de libertad que, vinculada sólo a lo mercantil, la reduce a una libertad económica cuyo trasfondo es la desconfianza o rechazo a la deliberación política y, con ello, a la propia tradición del liberalismo político. En esta última sí se propicia lo colectivo, por ejemplo, mediante los derechos o la promoción de los partidos políticos, que suponen la defensa de intereses sociales a través de agrupaciones voluntarias participantes del sistema político<sup>52</sup>. Un tipo de libertad, por tanto, afín a la peculiar interpretación de la democracia que sostienen los ideólogos del régimen, como un asunto restrictivo, autoritario o “protegido”, que hace honor a la tradición latinoamericana de otorgar sentidos autoritarios a la cuestión de la democracia (Rouquié, 2011).

---

<sup>51</sup> Esta distinción entre la libertad de la tradición liberal británica y la de la tradición liberal continental -que Maximiliano Jara atribuye en Chile al trabajo de uno de los fundadores del CEP, Arturo Fontaine Aldunate- es prácticamente igual a la hecha por Friedrich Hayek en una conferencia de 1966, publicada por *Estudios Públicos* (Hayek, 1982). Hayek es uno de los invitados internacionales más comprometidos con el CEP, llegando a ocupar el cargo de presidente honorario. Ahora bien, lo importante es el interés que subyace en la participación de varios académicos extranjeros en esta institución: el carácter experimental de la experiencia neoliberal chilena, toda vez que concentran sus esfuerzos en promover que el CEP evalúe las políticas públicas inspiradas en el monetarismo de Chicago, que lleva adelante la dictadura (Jara, 2017).

<sup>52</sup> Es similar al *libertarismo* o la defensa de las libertades de mercado, que exige la limitación del papel del Estado en cuanto a políticas sociales y que, así, se opone al empleo de planes de redistribución impositiva para llevar adelante la teoría liberal de la igualdad o “igualdad de oportunidades” (Kymlicka, 1995).

### *Los salones de la mezcla ideológica*

A raíz del cambio en la conducción del centro, de las complicaciones financieras que la crisis económica genera al afectar a sus principales donantes empresariales (Fernando Larraín, Javier Vial, José Borda y Jorge Ross) y del interés de la oposición por abocarse al problema de la democracia, dado el escenario de presiones al que se ve sometida la dictadura, el CEP pasa de la difusión del pensamiento neoliberal foráneo a invitar a sus salones a políticos y estudiosos -chilenos y extranjeros- del proceso transicional, en un intento por integrarse y liderar el debate que hegemoniza la segunda mitad de los años ochenta. Se transforma, así, desde 1983, en un espacio de diálogo y de construcción de puentes mediante la academia, a partir del tratamiento de temas como la institucionalidad política y el ámbito económico. Una nueva preocupación por lo nacional, que conlleva que los académicos extranjeros ya no sean convocados sólo para cohesionar a grupos de interés y/o periodistas en torno a la ideología neoliberal, sino para que su conocimiento guíe a los investigadores del centro en la elaboración de posiciones propias sobre el tema de la democracia (Jara, 2017).

Esta discusión, de todos modos, es tratada con cautela por los representantes y benefactores del CEP, pues, más allá del cambio de régimen político, lo que anima su injerencia en el debate transicional es que la redemocratización no ponga en peligro el modelo económico implantado (Jara, 2017). De allí que, pese a la reorientación de su actividad político-intelectual tras la crisis, los primeros años del centro provean parte importante de los principios sobre los cuales se construyen sus visiones propias sobre la democracia, en concordancia con la opción por el liberalismo anglosajón, no constructivista, y apegado al vínculo entre libertad y mercado.

Con todo, esta reorientación institucional es importante porque produce una apertura hacia la intelectualidad y los políticos de los partidos de oposición. El CEP, por ello, al igual que otros centros de académicos privados o *think tanks*, juega un papel clave en el intercambio que define los términos de la transición. Lo hace, además, en la definición de la élite que

conduce este proceso y que excede a la oposición, al requerir de los apoyos que sectores del oficialismo le proveen. Una élite transversal que encuentra sus puntos de encuentro en los motivos ideológicos que pregonan y constituyen, de algún modo, síntesis independientes de los procesos de construcción político-intelectual que ellas viven en dictadura: por una parte, una restrictiva idea de libertad y, por otra, una concepción elitista de la política. Ambos motivos sustentan los contenidos de la estrategia de “transición pactada”.

Ahora bien, esa mezcla es posible no, como señala Arturo Fontaine Talavera (1992) - histórico director del CEP y uno de los impulsores de este encuentro-, por una “penetración horizontal” del liberalismo político y económico a partir de una *mediación cultural* que, en los debates entre opositores y partidarios del régimen, habría producido el “triumfo de las ideas liberales” en el seno del socialismo. Lo es, más bien, por la crisis del marxismo a nivel internacional y, así, por la falta de alternativas ideológicas existentes. Es posible, además, justamente por su carácter elitario, es decir, porque si bien la crisis de alternativas ideológicas es general, la penetración de los motivos del peculiar neoliberalismo chileno no afecta al conjunto de la oposición, sino a la parte que finalmente es capaz de construir la teoría política de la transición.

En definitiva, debido al carácter elitario de este intercambio político-intelectual y al rumbo acelerado que adopta el proceso de transición a la democracia en la segunda mitad de los ochenta, se crean las condiciones para una afinidad electiva entre libertad mercantil y política elitista, permitiéndose, social e ideológicamente, el maridaje de los que antes eran adversarios. Es en los salones del CEP donde se define lo que se ha llamado el “concertacionismo” (Mella, 2008). De paso, también se fragua allí el prestigio de este centro, que luego sigue cumpliendo un papel articulador en el debate público chileno.

#### **4.3. De la legitimación del poder existente a la producción del “neoliberalismo avanzado”**

Así como se dijo que el plebiscito de 1988 no fue forzado (ni por la movilización social ni por las negociaciones políticas), se debe agregar que tampoco impidió la extensión de la

dictadura, pues esta “no fue derrotada en su propio plebiscito”. Lo derrotado, más bien, fue uno de sus bandos, el militar, que trató de mantener el gobierno en la figura de Pinochet. En ese sentido, la dictadura, esto es, la coerción organizada que posibilitó el orden social consagrado en la Constitución de 1980 y su consecuente forma Estado, al alcanzar su madurez política, se retira a su propio ritmo, dejando el espacio que ocupaba hasta entonces al consenso en el centro de la política (Thielemann, 2015). Las continuidades que no se rompen en 1988 -la Constitución, el orden económico, el sistema de relaciones laborales, el autoritarismo político centralista, el rango especial de ciudadano de los militares, la sombra del terrorismo de Estado como amenaza a la desobediencia civil, entre otras-, lo confirman. Y es que, en realidad, lo único que cambia sustantivamente al llegar a los años noventa -y que no es poco, por cierto- es que se obtienen garantías mínimas para la vida, en tanto los órganos represivos ya no pueden actuar de modo tan directo y brutal (Thielemann, 2015).

Este pacto transicional, como también se ha dicho más arriba, hubo de legitimarse a través de una teoría política de la transición a la democracia que justifica la exclusión del movimiento popular, en tanto este último no logra incidir en los términos sobre los cuales tal pacto se construye. El mito fundacional del plebiscito, así, apuntala la legitimidad política de la élite político-intelectual de la transición, que se describe a sí misma liderando la facción opositora democrática y civilizada, en contraposición a aquella maximalista y abocada a una ruptura social que podría haber empantanado el camino de regreso a la democracia. Con esto se omite el carácter normado de tal itinerario, que encuentra su fuente en la propia Constitución de 1980.

La imposición de un consenso elitario para transitar a la democracia tiene como condición de posibilidad la mantención de la desarticulación social y política heredada de la dictadura. Esta es la decisión política que determina el derrotero de las décadas siguientes en Chile, y, especialmente en los años noventa, constituye la base sobre la cual, en ausencia de actores sociales gravitantes, la Concertación de Partidos por la Democracia -la alianza política en el poder- renuncia a un tipo de Estado cuyo carácter social se juegue en la articulación de un pacto social diverso, apostando por un pacto elitario que, para su sobrevivencia,

necesariamente debe concentrar las decisiones políticas sustantivas en una pequeña fracción social, en consonancia con la exclusión política del resto de la sociedad (Ruiz, 2015).

Iniciada con la coacción autoritaria, la desarticulación social y política heredada se asienta hasta condicionar el panorama social chileno. Las clases y grupos sociales que portaran los proyectos históricos del Chile desarrollista, en especial la clase obrera y los sectores medios, son barridos en su versión nacional-popular. El comienzo de aquello se ubica en la desindustrialización que acarrea el desembarco neoliberal, el cual consagra tempranamente la “pérdida del peso estratégico de la clase obrera” (Martínez y Tironi, 1985) y desata en su lugar un crecimiento ininterrumpido de los trabajadores de los servicios, cuya tercerización no siempre responde a simples ocupaciones precarias de refugio. Respecto a los sectores medios, el llamado “emprendimiento forzado”, como una falsa empresarialización inicial, prosigue al dismantelamiento del viejo Estado empresario y, en especial, a sus antiguos servicios sociales, lo que obliga a la migración de las viejas burocracias estatales. En los noventa, ya queda claro que tal empresarialización no es una condición independiente, sino la antesala de una asalarización expansiva de nuevas capas profesionales en los grandes *holdings* privados que crecen aceleradamente, configurándose una burocracia moderna de servicios privados (Ruiz y Boccoardo, 2014).

Tal desarticulación heredada está a la base de la “governabilidad democrática”, cuya defensa torna a la transición chilena en una de las más conservadoras de América Latina (Ruiz, 2015). La “política de los acuerdos”, en que fluyen los consensos entre las nuevas élites civiles, los grupos empresariales y las garantías otorgadas al repliegue militar, caracterizan a una transición marcadamente elitista y eminentemente procedimental, en donde se proyecta hacia adelante una brecha entre lo social y lo político (Lechner, 1990).

Es así como avanza una “autonomización de la política”, efectiva en tanto se mantiene la desarticulación, que permite, a diferencia de otros países de la región, que los cambios económicos y sociales no constituyan fuentes de inestabilidad en la transición chilena (Ruiz, 2013). Se concibe el fortalecimiento del sistema de partidos como autonomización de las fuerzas sociales, sustrayéndose de los partidos la promoción de intereses sociales.

Solamente el empresariado, en tanto grupo de presión que puede proyectar la defensa de sus intereses a través de los partidos o, en su defecto, sobrepasar la mediación de estos, queda expresado en el sistema político. La clientelización de las bases sociales de los partidos, por otro lado, una vez en el gobierno, agudiza la pérdida de sentido de toda militancia, favoreciendo aún más el divorcio entre política y sociedad, responsable de una política ensimismada (Lechner, 1990). Con ello se debilita la capacidad representativa de la política, que se reduce a administrar los consensos impuestos (Baño y Faletto, 1999).

Este deterioro de la política, dado por la proyección de la desarticulación heredada, potencia la capacidad de determinación de “poderes extrainstitucionales” (el empresariado, los medios de comunicación, la Iglesia, las Fuerzas Armadas y la tecnocracia) sobre las políticas económicas, la dirección cultural y en el dominio de los espacios de base de la sociedad (Cortés Terzi, 2000). Esto tiene que ver, en buena medida, con el hecho de que el pacto de la transición deviene, en las décadas siguientes, proceso de renovación de las élites en el poder, pues la élite concertacionista se integra con la empresarial y militar, en un curso que luego coincide en la conveniencia de prescindir de Pinochet (Otano, 2005). Al consolidarse el bicoalicionalismo al avanzar la política de los acuerdos entre gobierno y oposición (Campero, 2003), la tensión es con la cúpula castrense. En un Estado fundado en un consenso elitario, además, éste se abstiene de regular muchos ámbitos de las relaciones sociales, en especial el procesamiento de los conflictos sociales, profundizando la brecha entre la institucionalidad democrática y la política con la sociedad (Ruiz, 2013).

Buena parte de la desarticulación se reproduce ligada a las fuerzas del trabajo. Al permanecer lo esencial del Plan Laboral de 1979, en los noventa apenas se rearticula el sindicalismo histórico, incluyendo la minería estatal, el sector bancario, los puertos y el empleo público. La privatización y tercerización de la economía, la desconcentración productiva y la flexibilización de las condiciones generales del trabajo, propician que la resistencia se diluya ante el embate empresarial sobre los servicios sociales y los recursos naturales. Internamente, un sindicalismo burocratizado al extremo completa para que esto se mantenga, por cuanto renuncia a construir nuevas bases de sustentación entre los nuevos asalariados, ajenos a las formas de sociabilidad tradicionales (Ruiz y Boccoardo, 2014).

En el orden económico general, bajo los cimientos de la refundación capitalista iniciada en dictadura, emerge un “capitalismo de servicio público” en base a profundizar la ola privatizadora de la década anterior (Ruiz, 2015). Así, a la privatización abrupta de las pensiones, que origina masas de capital capaces de dinamizar en poco tiempo gran parte del auge de la especulación financiera, se suma una entrada más gradual pero ininterrumpida de la salud y la educación en la esfera mercantil. En efecto, bajo legitimidad democrática, se traspasa a proveedores privados una enorme cantidad de recursos estatales, apelando a una subvención a la demanda que se nutre de los dogmas monetaristas.

Respecto al orden político y la situación de los militares, una idea de soberanía nacional y no popular justifica la permanencia de “enclaves autoritarios” como los senadores designados, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Seguridad Nacional, el sistema electoral binominal, la autonomía y el papel de garantes de la constitucionalidad de las Fuerzas Armadas (Garretón, 2000). Tal situación, junto a las acciones de amedrentamiento que llevan adelante los militares, restringe la resolución del conflicto que permanece por las violaciones a los derechos humanos, desplazándolo de un gobierno a otro (Otano, 2005).

Con todo, ideológicamente, en la medida que la decisión política de reproducir la desarticulación heredada emerge como consecuencia de un acuerdo elitario, la construcción hegemónica de la alianza en el poder se torna un proceso aún más arduo. Un problema capital de los gobiernos civiles es legitimar política y culturalmente este acuerdo suscrito entre antiguos adversarios. Ahora bien, en tanto la desarticulación se profundiza y no sólo se mantiene, y como contraparte se asienta la afinidad entre las élites que excluyen políticamente a las mayorías de las decisiones políticas sustantivas, se aísla a parte importante de los grupos político-intelectuales ajenos a la esfera del poder político. Sumado a la crisis de las alternativas políticas que se extiende mundialmente, también se impone la opacidad en el campo intelectual chileno. Su orientación es casi exclusivamente cortesana (Faletto, 2002), con contenidos ideológicos que justifican o apologizan los efectos sociales de la iniciativa estatal o que, criticándolos, no alcanzan a poner en entredicho los fundamentos del tipo de Estado y del modelo de desarrollo sobre los cuales se orienta.



Pero, además, los primeros quince años de gobiernos civiles tienen como fenómeno general el paso de la legitimación de lo heredado a la formulación de producciones técnicas e ideológicas. Unas que construyen las condiciones sociales y políticas sobre las que se asienta el “neoliberalismo avanzado” chileno, pero también sus herramientas.

#### 4.3.1. Un nuevo anclaje tecnocrático-empresarial en democracia o la consolidación del giro neoliberal chileno

En los noventa, acusando de otro modo el supuesto peligro de su irrupción, la exclusión popular se justifica en la preservación del crecimiento económico y la estabilidad de la transición (Boeninger, 1997). Esa es la justificación con que se dilata nuevamente la democratización social. Un ideologismo que hace abstracción del carácter y los efectos sociales diferenciados de tal situación, sustrayéndose muchas funciones estatales de la política abierta, al ser presentadas como “técnicas” y “apolíticas” (Moulian, 1997).

El gobierno de Patricio Aylwin traza la línea de acción de los gobiernos de la Concertación: continuidad en los fundamentos de la institucionalidad, el modelo económico y las políticas sociales heredadas, excepto concesiones corporativas a grupos con capacidad de presión, como el gran empresariado (Ruiz, 2013). Una conducción política y económica pragmática, de corte tecnocrático, instala tal continuación, en base a consensos que anteceden a la nueva etapa de gobiernos civiles, pese a justificarse en los vetos de la derecha defensora del régimen autoritario y en la amenaza militar que se cierne sobre la democracia recuperada.

A esa conducción va aparejada una profundización del modelo económico heredado, que da lugar a un “capitalismo de servicio público” inédito en la región, abriendo nuevos nichos de acumulación regulado -en educación, salud y otros servicios sociales- a un empresariado que lentamente se convence de la utilidad de una Concertación que dinamiza su propia incapacidad económica. Es allí donde se consolida el neoliberalismo chileno: en el grado de profundidad que alcanzan los niveles de mercantilización de la vida social y, sobre todo, en la estrechez de la unión que, paulatinamente, se produce entre este empresariado y una

parte de la élite política e intelectual de esta coalición. Un ensamble que origina un nuevo anclaje social tecnocrático-empresarial, que enriquece el constituido en las décadas previas con la incrustación neoliberal, ahora elevando el grado de determinación del empresariado - ya no solamente sobre la economía, sino sobre la vida social en general- a un nivel superior al existente al comenzar la transición democrática.

*Realismo sin renuncia: Cieplan y la legitimación del modelo económico*

Al iniciarse los gobiernos civiles, la conducción de la política económica chilena fue traspasada desde la segunda generación del grupo de Chicago a otro equipo de economistas pertenecientes, en su gran mayoría, a Cieplan, quienes justamente habían elaborado, en la oposición y desde mediados de los años setenta, una serie de estudios sistemáticos en donde se evalúan y critican las políticas económicas implementadas por la dictadura militar.

El correlato de esta iniciativa pareció estar en el programa de gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia de 1989, en donde se plantea una revisión profunda de varios pilares del modelo económico autoritario. Sin embargo, contra la tesis del abandono o renuncia al “programa original”, este grupo de economistas asume una línea de consenso y de no confrontación con el empresariado incluso antes de realizarse el plebiscito, funcionando el programa de gobierno más como medida de cohesión interna de una coalición política heterogénea y como estrategia electoral, que como verdadero guía de acción (Gárate, 2013a). El ascenso de Cieplan al gobierno de Aylwin, entonces, se inscribe en el amplio proceso de renovación intelectual y política producido en dictadura.

Con antecedentes en el Centro de Estudios de la Planificación Nacional (Ceplan), ligado al PDC, y en donde se buscaban alternativas a la teoría de la industrialización interna, por una parte, y al libre mercado desregulado que promovían la mayoría de los economistas formados en Chicago, por otra, Cieplan surge en 1976 (Gárate, 2013a). Lo hace como centro de estudios autónomo, a partir de la renuncia a la PUC -donde operara Ceplan- de un grupo completo de economistas que, exhibiendo un *espíritu de cuerpo* similar a los “Chicago Boys” (Silva, 1991), son desplazados por estos tras el golpe de Estado (Huneus,

2000). Junto a su líder y director, Alejandro Foxley, allí se desempeñan, desde su creación, emblemáticos economistas y políticos de la posterior Concertación como José Pablo Arellano, René Cortázar, Pablo Piñera, Patricio Meller, Manuel Marfán, Nicolás Flaño, Ignacio Walker, Ricardo Ffrench-Davis, y, parcialmente, Genaro Arriagada.

En los años ochenta, la importancia de Cieplan radica en el rol clave que cumple para el acercamiento de las culturas democratacristiana y socialista. Y es que sus economistas se hacen parte de la “intelectualidad orgánica de la democracia”, al tomar contacto con otros investigadores de Flacso (Lechner, Brunner, Moulian, Garretón), Ilades (Rodríguez Grossi y Andrés Sanfuentes), SUR (Javier Martínez, Ernesto Tironi), CED (Ernesto Edwards, Augusto Aninat, Ernesto Tironi), Clepi (Carlos Ominami, Sergio Bitar), ILET (Juan Gabriel Valdés, Juan Somavía), entre otros (Otano, 2005), convergiendo y dando forma a los principios sobre los cuales se proyecta la transición democrática.

Pero, además, durante la dictadura, el equipo liderado por Foxley se hace oír gracias a su competencia técnica, enfrentándose a los “Chicago Boys” en la arena especializada de la economía. De este modo, desarrollan la única crítica tolerada por el régimen, a través de sus análisis publicados en las revistas *Mensaje* y *Hoy*, vinculadas al PDC (Puryear, 2016). Entre fines de los setenta y comienzos de los ochenta, su lucha contra los tecnócratas monetaristas los lleva a destacar el extremismo prodigado en su política económica (que escondería poco rigor científico), usando como base argumental la necesidad de prevalencia de lo técnico, difícil de observar en una doctrina desplegada sin mayores contrapesos. En particular, Cieplan se involucra en el debate que acompaña a la pedagogía monetarista de los “Chicago Boys”, a partir de la cual estos últimos intentarían explicar las implicancias reales de una economía de mercado, de una disminución del tamaño del Estado y del papel central de la empresa privada en una economía abierta (Gárate, 2013b).

En medio de la crisis de 1982-1983, empero, la posición crítica de los economistas de Cieplan sufre un primer giro hacia la moderación. En efecto, en vez de aprovechar la coyuntura para aumentar la crítica abierta al régimen, pasan a la proposición de políticas económicas alternativas en vista de un eventual cambio de régimen negociado, así como

también en respuesta al temor provocado por las protestas sociales y la estrategia de rebelión popular de masas declarada por el Partido Comunista (PC) (Gárate, 2013a). Manteniendo cierta autonomía, pero participando en la oposición al fin y al cabo como demócratacristianos, su giro se alinea con la estrategia de diálogo que permite al PDC mantenerse como actor fundamental en la futura transición, así como aislar al PC. Para ello, Cieplan organiza una serie de diálogos entre trabajadores, élites empresariales y otros grupos, con el fin de buscar acercamientos entre el mundo laboral y patronal (Otano, 2005).

Avanzada la década e instaladas las bases político-intelectuales de la teoría política de la transición, se produce nuevamente un giro entre los economistas de Cieplan hacia 1987, cuando, a un año del plebiscito, comienzan a manifestar opiniones más conciliatorias con las reformas de los tecnócratas del régimen (Puryear, 2016). Esto ocurre al generarse un mejoramiento de las cifras macroeconómicas bajo la gestión del ministro Büchi, dando lugar al reconocimiento de que las reformas económicas de la dictadura podían funcionar en cuanto a modernizar algunos sectores productivos y además generar crecimiento (Gárate, 2013a). Ello abre canales de diálogo con las fuerzas oficialistas al momento de iniciarse la transición. Inclusive, difunde por esos años la idea de que al régimen le habría tocado implementar la parte más dura de las reformas estructurales exigidas por el FMI y el Banco Mundial, por lo que un futuro gobierno de una coalición distinta gozaría de los beneficios de una economía abierta, pero en un contexto democrático y de integración a la comunidad internacional (Lardone, 2008)<sup>53</sup>. El convencimiento que se instala entre los miembros de Cieplan es que los cambios positivos en la economía deben ser tomados en cuenta, por la vía de asumir que las transformaciones mayores realizadas a la estructura productiva del país no serán revertidas en el futuro inmediato, sino que atemperadas con políticas sociales compensatorias (Gárate, 2013a).

---

<sup>53</sup> Una tesis aún vigente entre los economistas de la Concertación, como lo demuestra la opinión del varias veces ministro, Nicolás Eyzaguirre, ex director para el hemisferio occidental del FMI, en marzo de 2016: “yo creo que este encuentro con un modelo de crecimiento dinámico, que nos ha traído tanta prosperidad, comienza con Hernán Büchi, no con la Concertación. Él entendió que había que tener un modelo exportador, una política monetaria responsable que anclara la inflación, una economía privada, un sistema tributario que fomentara el ahorro, y esas cosas se profundizaron durante la Concertación” (Sapag y Soto, 2016).

De este modo, las críticas al modelo económico autoritario van a ser reemplazadas por una crítica de menor calibre a la gestión de los “Chicago Boys” por no establecer políticas sociales que permitieran aminorar los efectos de la liberalización y apertura indiscriminadas de la economía chilena. Esto, desde 1987, permite la elaboración de un discurso más de continuidad que de cambio, justo en momentos en que en el nivel político se impone la idea del consenso con las fuerzas que apoyan al régimen militar. Es decir, el giro conciliatorio de Cieplan se produce, coincidentemente, en los años en que la “intelectualidad orgánica de la democracia” apela a la separación de lo social y lo político. Más aún, si bien no con la profundidad que tuvo en el socialismo renovado, estos cuadros demócratacristianos también construyen una crítica a su actuar pasado -pese a lo reciente que era-, al desechar la crítica como una suerte de derivado ideológico útil en tiempos de lucha, pero ineficaz a la hora de asumir responsabilidades en el poder (Gárate, 2013a):

Quizás habíamos estado muy convencidos de ciertos enfoques y habíamos desarrollado mucho los argumentos para defenderlos. Cuando vimos que de hecho las cosas funcionaban bajo enfoques diferentes comenzamos a ponerles más atención a esos argumentos, para verlos de manera más *desapasionada* y balancear mejor los diferentes tipos de razonamientos y descubrir finalmente que no existía una sola verdad (Óscar Muñoz, en Puryear, 2016: 152, cursivas nuestras).

Atentos a no parecer “irresponsables” a los ojos de los organismos internacionales de crédito y a no poner en peligro los mejorados índices macroeconómicos, quienes se hacen cargo del manejo económico en los primeros gobiernos civiles desechan un cambio en el modelo económico. En realidad, aceptan su continuidad sobre todo en tanto su trabajo no había dado lugar a la elaboración ni de un modelo de desarrollo alternativo ni de una versión actualizada del estructuralismo de la Cepal (Gárate, 2013a). Pero, además, a esta convicción sobre el modelo económico heredado, se suma la necesidad de un actuar que ayude a legitimar a aquél frente a la población, así como al grupo de economistas que asumiría el gabinete económico de Aylwin, en tanto calificados administradores.

En efecto, en 1989 las encuestas de opinión muestran un rechazo masivo de la población al experimento de Chicago y al régimen militar (Fontaine, 1992), mientras, en el seno de su principal defensor, el empresariado, existe desconfianza frente al próximo gobierno y, especialmente, el próximo equipo económico (Otano, 2005). En el caso de esto último, la

legitimación frente al empresariado se produce a poco andar, a partir del rumbo que adopta la reforma tributaria de 1990 (que tranza sus efectos redistributivos y aumenta el IVA, en favor de recursos para programas sociales) y la ortodoxia con que se actúa ante la inflación que provoca la Guerra del Golfo y la elevación del precio del petróleo (Otano, 2005). Por otro lado, se instala entre los economistas de Cieplan el convencimiento de implementar políticas sociales destinadas a legitimar la economía de libre mercado en la mayoría de la población. El “crecimiento con equidad” promovido por un equipo económico compuesto de demócratacristianos y socialistas avanza en ello, al poner de manifiesto tanto la valoración existente de los fundamentos del modelo económico heredado, como la “deuda social” (las violaciones a los derechos humanos y la compensación del 44% de pobres sobre el que habla Cepal en 1987) que termina siendo asumida como principal tarea de la democracia (Otano, 2005), manteniendo la focalización social formulada en dictadura.

En esta decisión política, como señalan Huneus et al. (2014), opera la estrategia de consolidación de la democracia definida en torno al desempeño económico, formulada a partir de las causas del golpe de Estado y de las vicisitudes de los primeros gobiernos democráticos de América Latina (como el de Alfonsín). Se asume que la estabilidad de corto plazo depende de la subordinación de los militares a la autoridad civil y de la actitud de Pinochet, mientras en el mediano y largo plazo depende de la buena gestión económica, entendida básicamente como crecimiento y superación de la pobreza.

Ahora bien, si se tiene en cuenta el hecho de que la aceptación del modelo económico por parte de quienes componen el primer equipo económico de la Concertación es anterior incluso al plebiscito, la estrategia de que el crecimiento económico produzca beneficios políticos es menos la razón por la que se acepta el modelo heredado que una estrategia política para ganar las elecciones siguientes y proyectar a la coalición (Otano, 2005). Es decir, no fue sólo falta de un proyecto económico alternativo de parte de los economistas de Cieplan y luego concertacionistas, sino que una decisión política el no hacer algo distinto, pues se apunta a la buena administración o gestión económica.

Por último, hechos como la forma en que se negocia la reforma tributaria de 1990 marcan la pauta de lo que será el discurso con que se defiende la decisión de profundizar el modelo económico. Particularmente, la declaración de la economía como un tema de Estado, que neutraliza las oposiciones de derecha e izquierda en ese momento (Otano, 2005). En ese tránsito, la legitimación de sí mismos, no sólo se confunde con la del modelo económico, sino que, salvo por el empresariado que presiona, adquiere una dimensión alejada de la sociedad. Y es que los argumentos de la prevalencia de lo técnico y contra el extremismo, antes usados contra los “Chicago Boys”, se ocupan ahora para sustentar el predominio antidemocrático de la tecnocracia económica que busca contrarrestar cualquier mayoría política por medio de poderes autónomos legitimados “técnicamente”. Se instala, por primera vez, como corolario de lo anterior, el enorme poder que detentarán los equipos económicos en los gobiernos civiles, y que, en general, se condice con el ascenso de la figura del economista al rango de asesor por definición y hacedor principal de la política pública (Gárate, 2012). Un control que, a través de la asignación de presupuestos y la definición de indicadores de gestión, les permite tomar parte incluso en la formulación de políticas sectoriales (Huneus et al., 2014).

#### *La colonización empresarial de las élites políticas e intelectuales concertacionistas*

La relevancia del sector financiero no se altera en la transición, al erigirse sobre la falta de resistencia del sector productivo. La continuidad en la acción estatal, en los ámbitos social y económico, se expresa en la continuidad de la privatización de la educación y la salud, el sistema previsional, el enfoque de economía abierta basado en las exportaciones y un gasto social restringido. Bajo una conducción económica pragmática, no ortodoxa desde el punto de vista de la teoría monetarista, pero sí extrema desde el punto de vista de un neoliberalismo *realmente existente*, dado el grado de apertura y de mercantilización de las condiciones de reproducción social, se exagera la especificidad chilena de privatización de los servicios sociales (Ruiz, 2015).

La impermeabilidad de la política económica ante la sociedad se expresa en cada uno de los gobiernos de la década de los noventa y comienzos de los años dos mil. En efecto, con

Aylwin se profundiza la apertura externa y disminuye aún más el control sobre el capital externo, pues se instala -con Foxley a la cabeza- la aspiración de convertir a Chile en plataforma de la inversión extranjera en la región (Fazio y Parada, 2010). Se mantienen los beneficios en cuanto al pago de deuda de los bancos que quiebran en la década previa, mientras continúan las privatizaciones que suman puertos y sanitarias y se profundiza la brecha de la producción y exportación privada de cobre sobre la estatal (Moguillansky, 2001). Pese al reconocimiento de la “deuda social” heredada de la dictadura, la reforma tributaria ratifica un orden tributario favorable a las rentas del capital por sobre las del trabajo (Larraín y Vergara, 2001). Y, pese a ajustes en el Código del Trabajo, no cambian sustantivamente las condiciones de la política laboral de la dictadura, la cual se consagra. Así, pese a que en un inicio crecen los niveles de sindicalización, luego decaen en todas las áreas, al igual que la cobertura de negociación colectiva (Mizala y Romaguera, 2001).

En el gobierno de Frei Ruiz-Tagle se acelera la línea de acuerdos comerciales bilaterales impuesto por los sectores financieros, con la entrada al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la firma de un Acuerdo de Complementación Económica con el Mercosur y una serie de TLC con Centroamérica, Canadá y México, entre otros países. Del fuerte crecimiento inicial entre 1994 y 1997, se cae en 1998 en una “crisis asiática” que desploma los flujos de capitales y el comercio exterior (Fazio y Parada, 2010). Las medidas para su superación abren la puerta a que la inversión extranjera pase a concentrarse en los servicios privatizados (electricidad, telecomunicaciones), en desmedro del anterior interés por la exportación. Se impulsan, además, obras públicas bajo el modelo de concesiones heredado, integrando a privados a la infraestructura hasta entonces estatal (Moguillansky, 2001).

Pese a que se niegan los cambios a la legislación laboral y el apoyo oficial en disputas con las empresas, y los cambios en el orden previsional, no hay mayor conflictividad en el mundo del trabajo. La excepción la encarna un profesorado que entra en conflicto ante el intento de flexibilización de sus condiciones laborales (Mizala y Romaguera, 2003), la ola de protestas producidas en Lota a raíz del cierre del yacimiento estatal de carbón en 1997 y la protesta universitaria detonada por el déficit del Fondo Solidario y escalada contra el proyecto de Ley Marco de Universidades Estatales de 1996 (Thielemann, 2016). Se trata,



empero, de manifestaciones que no superan los marcos corporativos, con poca articulación entre sí y ninguna capacidad de generalizar intereses (Ruiz, 2013).

Con Ricardo Lagos, se alienta una apertura sin par en la región, a partir de nuevos TLC con países latinoamericanos y la negativa de ingreso al Mercosur una vez que Clinton retoma tratativas para un TLC entre Chile y Estados Unidos. Prima, así, la línea de integración a los centros económicos mundiales, bajo la alianza del sector financiero local con sus pares externos, sin resistencia de otros grupos ante la competencia externa y sus posibilidades de mercado (Fazio y Parada, 2010). En su gobierno, por otro lado, se cierra el proceso de privatización de las eléctricas y del agua potable, y ello se acompaña de una iniciativa de concesiones que abarca carreteras, hospitales y cárceles (Fazio y Parada, 2010).

La línea de definiciones económicas seguida por los gobiernos de la Concertación, a partir de su inclinación por mantener y proyectar el modelo económico heredado, acerca a sus élites políticas e intelectuales a los principales agentes y dirigencias del empresariado. Los efectos provocados por la “crisis asiática” a fines de los noventa generan la coyuntura que acelera este proceso. Así, en la disposición por ajustar el rumbo económico vacilante, los liderazgos gremiales jóvenes del empresariado -vinculados a la Sofofa- pugnan por un giro que sepulte la ortodoxia neoliberal defendida hasta allí, en favor de una mayor flexibilidad político-ideológica que permita la defensa de sus intereses en el nuevo escenario abierto por la apertura comercial multilateral, en alianza con la Concertación (Campero, 2003).

Hacia adentro, este acercamiento es apuntalado por un accionar político que exacerba los niveles de determinación del gran empresariado sobre la definición política del rumbo económico y sobre el modo en que se procesa la conflictividad aparejada al tipo de orden social construido bajo la lógica neoliberal. Ello se inicia en el gobierno de Lagos y se desarrolla al alero del refuerzo del vínculo entre empresariado y tecnocracia, que en esta etapa alcanza abiertamente a las políticas sociales impulsadas por el Ejecutivo, proyectando un salto respecto al carácter reactivo que había predominado en el comportamiento político empresarial en los años noventa.

En particular, se inaugura una dinámica de elaboración y fiscalización de los proyectos de reforma, sustentada en el intercambio entre equipos técnicos del gobierno, la Concertación, la oposición y ciertos centros de investigación afines a la ortodoxia neoliberal o al gran empresariado. Bajo dicha dinámica, los equipos técnicos elaboran los proyectos, los jerarquizan y definen su temporalidad (Morales, 2014), profundizando el divorcio entre política y sociedad al legitimar la concreción de soluciones elitarias a problemas políticos generales (Ruiz, 2015). En particular, tres son los encuentros que el mandatario, junto a sus ministros técnicos, mantiene con representantes gremiales y asesores en los salones del CEP durante su mandato, debatiendo temas sectoriales y nacionales. De un gesto para enfrentar la desconfianza que provocaba el arribo del primer Presidente socialista desde Salvador Allende, se pasa a la instalación de una modalidad novedosa de ejercicio del Poder Ejecutivo, que legitima a condicionantes ajenos a la deliberación política ciudadana, reforzando el peso de grupos de poder específicos en las definiciones estatales.

En tal escenario, los equipos económicos -especialmente los ministros de Hacienda- actúan como mediadores entre el interés empresarial y gubernamental, mientras los equipos técnicos de los *think tanks* afines al empresariado -Instituto Libertad y Desarrollo<sup>54</sup> y CEP- lo hacen como productores de unos contenidos validados por su carácter técnico y supuestamente neutro (en base a un manejo macroeconómico “responsable” que aumenta el peso de los grupos económicos<sup>55</sup>), pese a sus consecuencias sociales (Bustamante y Caviedes, 2015).

---

<sup>54</sup> *Think tank* que nace en 1990 para defender y promover las políticas públicas basadas en los principios de la “sociedad libre”, ante el temor de que el cambio de mando en las decisiones económicas deviniera cuestionamiento a las reformas neoliberales implementadas en dictadura (Larroulet, 2008). Encabezan su fundación los ex funcionarios del régimen militar Hernán Büchi, Carlos Cáceres y Cristián Larroulet.

<sup>55</sup> Así, si el ministro de Hacienda de Lagos, Nicolás Eyzaguirre, mantiene contacto permanente y reservado con los investigadores del CEP -y abre nexos similares con otros centros opositores- para “testear” los proyectos de ley, Andrés Velasco, ministro de Hacienda del primer gobierno de Michelle Bachelet, apela a la legitimidad “técnica” de estos espacios para limitar a un dígito el alza del gasto fiscal, profundizando la dinámica subsidiaria del Estado (Arias y Ramírez, 2006).

Con todo, en paralelo a esta dinámica elitaria de definición política-intelectual, del economicismo que se impone a la perspectiva política (Ffrench-Davis, 2002), durante este gobierno comienza el avance de una colonización empresarial de la política, esto es, de una subordinación de la política al poder económico, que horada la soberanía política y la capacidad de los partidos para representar intereses sociales ajenos a los empresariales (Ruiz, 2015). Se trata de un fenómeno ciertamente transversal al espectro político, que se vehiculiza tanto a través del financiamiento a campañas políticas como a partir de una extendida circulación público-privada entre los directorios de empresas relacionadas con los servicios sociales privatizados y el aparato estatal, pero que es mucho más significativo en la Concertación al afectar el sentido histórico de varios de los partidos políticos que la componen y convertir a esta coalición en una mediadora cada vez más relevante del interés empresarial en la disputa por la orientación estatal, afectando incluso el peso antes indiscutido de la derecha política en ese aspecto (Ruiz, 2015).

Abierta con fuerza a partir de la Agenda de Modernización del Estado acordada en 2003 por las dirigencias de la oposición y el oficialismo -para poner atajo al escándalo de corrupción del caso MOP-Gate-, la “puerta giratoria” de la circulación público-privada iniciada en la administración Lagos y profundizada en los gobiernos siguientes, acredita un tránsito que es sobre todo sectorial: concentrado en los gabinetes presidenciales y las superintendencias, predomina en él la emigración hacia cargos privados en el mismo sector donde antes se desempeñó en el ámbito público (Maillet et al., 2016). Del mismo modo que con el financiamiento empresarial a las campañas políticas, la importancia de este fenómeno es contribuir a edificar la base social y los lazos políticos sobre los cuales se asienta un nuevo anclaje tecnocrático-empresarial, que consolida el poder de determinación política y cultural del gran empresariado en la sociedad chilena. Uno que se apoya no sólo en la cooptación de individuos de la élite concertacionista -convertidos en directores o asesores de grandes empresas-, sino también en una colonización abierta de los grandes empresarios sobre la política, quienes posicionan a ministros y figuras clave en el seno del Gobierno y del Estado, provenientes directamente desde sus filas (Caviedes, 2015).

Desde la segunda mitad de los años dos mil, tal consolidación del poder empresarial repercute sobre todo en la política social, al instalarse -a partir nuevamente del gobierno de Lagos- incentivos a un tipo de capitalismo basado en subsidios estatales a la acumulación privada, especialmente en lo que respecta a los servicios sociales ya privatizados. En particular, políticas como el plan AUGE en salud o el Crédito con Aval del Estado en educación expresan una variante inédita de la también heredada focalización del gasto social, al sustentarse en un traspaso estatal de ingentes cantidades de recursos económicos a proveedores privados, con el fin de “pagar” por el acceso a los servicios privatizados de franjas sociales que no pueden cubrir su pago. Un traspaso que, por cierto, sigue los criterios definidos por los propios agentes privados (el precio “de mercado”), no siempre relacionados con calidad ni con un norte en busca del bien común, ni exentos de riesgos de colusión en la fijación de precios (Ruiz, 2015).

En resumen, la aceptación temprana del modelo económico heredado y sobre todo las definiciones políticas y económicas de la Concertación en favor de la alianza entre el capital financiero local y extranjero, impulsan que la meta inicial de esta coalición respecto a establecer un frente con el empresariado para dinamizar la economía (Arriagada, 2004), se exceda con largueza, arribando importantes sectores de su élite política e intelectual a un vínculo prácticamente orgánico con las fracciones más importantes del gran empresariado.

Se trata de un anclaje social que consolida el giro hacia un neoliberalismo nada de ortodoxo, pero sí extremo y “avanzado” en las formas que crea para apuntalar la acumulación capitalista de los sectores dominantes (Ruiz, 2015). Un legado social y económico propio de las élites político-intelectuales de la Concertación, que les permite a éstas pasar del problema político inicial de defender un modelo económico resistido por sus consecuencias sociales y origen autoritario -esto es, superar la tarea de la legitimación-, a una formulación propia, no obstante, asentada, más allá de sus diferencias doctrinales con los “Chicago Boys” y con la ideología neoliberal en sentido estricto, en los mismos fundamentos de privatización y mercantilización de recursos vitales, financierización de la economía y redistribución estatal plutocrática, heredados del período anterior.

#### 4.3.2. La modernización inconsistente o el ideologismo cardinal de la transición

El nuevo mapa social visible en los años noventa es más inteligible en los extremos de la sociedad que en la nueva zona intermedia. En ella crece un heterogéneo conglomerado de franjas medias ligadas a la burocracia privada y a un empresariado mediano de éxito económico, que encuentra su prestigio social antes en el consumo y el esfuerzo propio que en el empleo público o las profesiones liberales, o en cualquier grupo independiente carente de tal suerte (Ruiz, y Boccardo, 2014). Por la volatilidad de su condición social, asociada a una alta rotación laboral y a unas formas de diferenciación no asentadas -dada la disolución de las instituciones asociativas y agrupaciones de intereses que antaño le daban identidad- prima entre estas capas sociales una inquietud por las oportunidades, atrayendo la mirada a la desigualdad más que a la pobreza. Y es que, en efecto, en la etapa democrática, a un tiempo disminuye la pobreza y crece la desigualdad. Pese a incrementarse el gasto social en cada nuevo año fiscal, ello no redundará en una mejor distribución del ingreso. La brecha entre ricos y pobres, por tanto, se amplía, aunque ella no responde al empobrecimiento de los más pobres sino al abrupto enriquecimiento de los más ricos (Ruiz, 2015).

Esto es avivado por la mantención de alzas impositivas sobre productos y servicios de consumo básico, de efectos regresivos, y gravámenes al capital muy por debajo de los estándares internacionales, así como por la consagración del gasto social focalizado que cancela la idea de derechos sociales universales. La concentración del poder empresarial dualiza la economía entre un sector oligopólico y otro inmerso en la competencia y responsable de la gran mayoría del empleo, donde el primero acapara -bajo disposiciones políticas- las posibilidades de acumulación (Ruiz y Boccardo, 2014). En consecuencia, la desigualdad social se alza como el engendro de la concentración económica y ésta, a su vez, como el corolario de una sociedad escindida.

La incubación de estos problemas sociales, sumado a las exclusiones políticas y tensiones socioculturales irresueltas que acompañan a la transición, originan un amplio debate entre los intelectuales chilenos, como contraparte ideológica del exitismo noventero, encontrándose en él argumentos tanto para su defensa como para su crítica. El caso de un

país que ha salido de la dictadura y que ha entrado en un proceso de modernización económica acelerado es el marco para pensar.

En un debate con giros a lo largo de la década y que involucra a intelectuales que plantean sus interpretaciones desde dentro y desde fuera de la Concertación, es posible reconocer la existencia de dos grandes bandos. Por un lado, el de los defensores del proceso de modernización y democratización que vive el país, y de las particularidades de la transición chilena; y, por otro, el de quienes critican la transición por no haber logrado modificar la realidad histórica, cultural y políticamente degradada (Pinedo, 2000).

### *Modernidad, modernización y la negativa a redefinir los fines*

El hecho y las controvertidas ideas-fuerza que articulan la presentación del Pabellón Chileno en la Expo-Sevilla de 1992, con un gigantesco témpano de hielo como símbolo, desatan, en los meses previos a la exposición, el inicio de este tipo de debate. En tal ocasión, se trata la debilitada situación cultural que aqueja al país, a poco de dejar atrás la dictadura, y las expectativas que la modernización económica abre en el nuevo escenario.

La principal motivación de los diseñadores y empresarios implicados en la iniciativa es refundar la imagen de Chile en el exterior sobre la base del concepto publicitario de un “país diferente, ganador y moderno”. Se busca, así, despejar del imaginario internacional la sombra autoritaria que había oscurecido el pasado reciente, a propósito de las violaciones a los derechos humanos. Concretamente, la idea de un “país diferente” apunta a diferenciarse del resto de los países latinoamericanos, varios de los cuales enfrentan por esos años sendas crisis políticas y económicas, de las cuales Chile parece haber zafado a partir del “milagro económico” de fines de los ochenta. Por su parte, la imagen de un “país ganador” se alza como fórmula para atraer a la inversión extranjera, en momentos en que se impulsa una apertura sin par en la región, centrada en la exportación de materias primas. Finalmente, la idea de un “país moderno” apela a la capacidad competitiva de Chile en el mercado internacional, con el objeto de relanzar las exportaciones en un escenario económico altamente interconectado.

La metáfora del iceberg, por lo tanto, es extraordinariamente clara. Como enfatizaba el comisario chileno ante la Expo-Sevilla, Fernando Léniz, el hielo simbolizaba la “frialidad y seriedad locales”, alejadas del “tropicalismo” del resto de América Latina. Chile, como un país ajeno al ajetreo regional, podía alardear de un excelente manejo económico, que lo aislaba de los males inflacionarios y del estancamiento (La Segunda, 1991). El “Adiós, América Latina”, promovido en los estertores de la dictadura (Lavín, 1988), se proyecta en democracia. La eficiencia empresarial local se destaca y la similitud criolla con antes remotos lugares como el Asia-Pacífico. El iceberg, así, constituye una declaración de principios y una visión de futuro de una parte de la población, que homologa la modernidad con una modernización reducida solamente a su faz económica.

Comenzando la década, las críticas a esta interpretación mercantil de la identidad y la modernización chilena estuvieron centradas, fundamentalmente, en cómo ello ignoraba la dimensión cultural que también supone una modernización. En efecto, para Bernardo Subercaseaux (1991) quedaba en evidencia la falta de “espesor cultural” del país, haciéndose invisibles las aspiraciones que podrían asociarse a la modernidad, pues se asumía a la modernización como un fin en sí mismo y no como un medio para mejorar el bienestar general. Esta operación pretendía refundar la identidad nacional en la diferencia, por una parte, del resto de las naciones latinoamericanas y, por otra, del propio pasado del país. Una *performance* que omitía que la modernidad en Chile y América Latina se presenta de modo heterogéneo, y que no opera por sustituciones, sino por adosamiento, ruptura y superposiciones parciales, en tanto modernidad periférica (Pizarro, 1991).

Las respuestas dadas a estas críticas por los creativos del proyecto, anticipando el tenor de lo que vendría, apuntan a la necesidad de abandonar el “pensamiento periférico” de otras épocas. Así, para el artista visual Guillermo Tejeda (1991), ellas se situaban en el pasado que se pretendía superar en democracia, como resabios de la polarización previa al golpe militar, cuando se habría caído en la politización del arte y en una cultura de la ética y el compromiso que lo habrían desnaturalizado. Algo similar a lo planteado por Hernán Garfías (1991), para quien las bases para afirmar que Chile era un país “diferente, ganador

y moderno” existían, pues se contaba con un sistema económico que funcionaba y cuyos índices superaban a varias otras naciones, a la vez que se era políticamente exitoso.

Superado tras 1992 este primer intercambio -cuyo nudo estuvo en el evidente interés mercantil detrás del esfuerzo por transformar la imagen de Chile, involucrando un diálogo entre los asuntos de la modernidad y la identidad-, se abre en los años siguientes un debate más amplio, en el que, para hacer un balance de la transición, se usa como excusa el tratamiento de la tensión entre modernidad y modernización, enfocándose en el carácter y efectos que generara la modernización capitalista iniciada en dictadura. Aquél es un giro que hace que la mirada sociológica pase a ocupar un rol central, pues de lo que se trata es de caracterizar y evaluar el proyecto histórico de la coalición de gobierno.

En términos generales, mientras las posiciones críticas plantean sus reparos a la actitud de la democracia frente a los “poderes fácticos”, al abandono de las utopías de la élite en el poder y a la excesiva economización de la sociedad en desmedro de la política, las de defensa de la transición enfatizan en los niveles de crecimiento económico alcanzados, el descenso de la pobreza, la estabilidad y las reformas políticas llevadas adelante (Pinedo, 2000). Ahora bien, existiendo un abundante corpus de textos, no obstante, es posible abordar los matices de esta controversia a partir de la selección de cuatro voces ilustrativas, cuyas interpretaciones, además, logran influencia política en los años posteriores<sup>56</sup>.

En el caso del bando crítico, cabe considerar la visión de Manuel Antonio Garretón. Para este sociólogo, en Chile operaba una “modernidad inconclusa”, en tanto, resueltos sus problemas económicos, eran materia pendiente las dimensiones institucionales, culturales y políticas de un desarrollo que permitiera transitar hacia una modernidad propia. La asumida, en tanto copia de otros contextos culturales, provocaba una exclusión mayoritaria

---

<sup>56</sup> Para un tratamiento sistemático de esos textos, véase Pinedo (2000). Este autor distingue, como parte del bando “defensor”, a Genaro Arriagada, Edgardo Boeninger, Andrés Zaldívar, Luis Maira, Eugenio Tironi y José Joaquín Brunner. En el bando crítico, por su parte, incluye a Tomás Moulian, Manuel Antonio Garretón, Bernardo Subercaseaux, Alfredo Jocelyn-Holt, Marco Antonio de la Parra y José Bengoa, entre otros.



y la naturalización del devenir histórico, al confundirse la modernidad con la modernización capitalista existente (Garretón, 1994; 2000).

Ensayando una postura más crítica y desencantada desde fuera de la Concertación, en tanto no observa diferencias sustantivas entre dictadura y transición, Moulian considera a la sociedad chilena de fines de la década un producto del experimento de modernización capitalista impulsado por la dictadura, mantenido y profundizado en democracia a partir del travestismo político y gatopardismo de quienes defendieran las transformaciones sociales de los años sesenta (Moulian, 1997). Las bases de tal cambio las encuentra en la “política del consenso” y en el “blanqueo” de la herencia dictatorial, así como en la naturalización de una matriz productivo-consumista potenciada en contexto civil (Moulian, 1997; 1998).

Los argumentos en defensa de la transición encuentran en Brunner y Tironi a sus mejores exponentes. Así, para el primero, habiendo vivido Chile una mutación acelerada, se hace necesario aceptar la modernidad como algo dado, sobre todo en un contexto de triunfo de la democracia liberal y del mercado. En particular, y siguiendo una línea argumental previa sobre América Latina (Brunner, 1987), para aquél el modelo cultural moderno se impone menos por la fuerza de las ideas que por los procesos de racionalización, diferenciación, profesionalización y reproducción cultural que impulsa, perfilándose en Chile una modernización sin proyecto de modernidad propio del cual se tenga control (Brunner, 1994). Un proyecto moderno al cual se ha incorporado el país, contra aquellas visiones que lo negaban en nombre de una determinada identidad local o regional (Brunner, 1998a).

Tironi (1999), por su parte, considera a la transformación ocurrida como el resultado del “ímpetu modernizador” de corte neoliberal propiciado en dictadura, profundizado con la extensión de la economía de mercado en democracia y acelerado en los noventa por el crecimiento económico. Destaca, por ello, la tendencia de las masas a ocupar el territorio y el espacio público, pese al malestar de las élites (sociales, políticas e intelectuales); y que las personas comporten, en general, como consumidores más que como ciudadanos, como individuos más que como comunidades, y como defensores de intereses privados más que como promotores de fines colectivos. La verdadera transición vivida, a su juicio, ha sido la

difícil transición hacia la “normalidad”. La búsqueda de la modernización, sin aviso, ha traído consigo nuevos problemas que requieren soluciones originales.

En lo sustantivo, de estas posiciones, representativas de un espectro más amplio, es posible derivar dos tensiones de relevancia tanto para la conducción ideológica de la Concertación desde la segunda mitad de los noventa, como para entender el papel jugado por las élites político-intelectuales en sus gobiernos durante este período: la idea de modernidad que predomina y el tipo de desafíos que, a partir de tal elección, es asignable a Chile como producto de la modernización capitalista iniciada en dictadura (Ariztía y Bernasconi, 2013).

En efecto, pese a sus diferencias, las voces críticas consignadas consideran a la modernidad como un proyecto de autonomía, es decir, la conciben como un proyecto político histórico por el cual los actores deben constituirse y movilizarse, preferentemente mediante la participación política. Por el contrario, las voces defensoras se inscriben en una noción de modernidad en tanto experiencia consustancial a los procesos de modernización, esto es, como una experiencia vital que emana de los cambios propios del proceso de modernización y no como un *telos* (Ariztía y Bernasconi, 2013). En este último caso, la modernidad es concebida como un proceso avasallador en el que predominan las formas sobre el contenido y los medios antes que los fines, en tanto lo que avanza es una racionalidad formal basada en la imitación e importación de mercancías y mensajes culturales que llevan la experiencia de la modernidad al conjunto societal (Brunner, 1987). Las ideas, así, no generan objetos; más bien, son los objetos los que producen imágenes de la modernización:

“La modernidad ha dejado de ser una opción: es un hecho de la época, viene de la mano con la globalización de los mercados y la expansión de la democracia, con la expansión de la educación e industria culturales, la ampliación de la experiencia del consumo y la mutación de valores” (Brunner, 1994: 17).

Por esta inevitabilidad, el desafío que comporta el proceso de modernización vivido en Chile es el control y gestión de sus efectos, mas no el cuestionamiento ni de la forma ni del sentido de la modernidad que conlleva. En contraposición, quienes ven a la modernidad

como un proyecto, ven la posibilidad de optar entre modernidades racionalmente imaginadas y políticamente realizables.

Estas implicancias políticas, como puntos de llegada del debate sobre la modernidad y la modernización, son definidas mientras paralelamente se erige un cuestionamiento al proyecto concertacionista, cuyo rasgo inédito es provenir desde sus propias filas. En efecto, se produce el debate entre “autoflagelantes” y “autocomplacientes”, denominados así por promover, los primeros, una visión crítica de lo obrado por la Concertación, especialmente por las asimetrías que mantenía el país en lo político, económico y cultural, por la democracia incompleta exhibida y por la costumbre instalada al interior de la coalición de evitar los disensos; los segundos, por valorar lo alcanzado por la Concertación en términos de reducción de la pobreza y desigualdad, progreso que habría traído consigo problemas propios de una sociedad en fuerte proceso de desarrollo y cuyo cambio de rumbo podría abrir la puerta a experimentos populistas (Hidalgo, 2011)<sup>57</sup>.

En general, se puede señalar que varios de los argumentos esgrimidos en este debate provienen del Informe de Desarrollo Humano (IDH) presentado en 1998 por el PNUD, cuyo impacto puso en el tapete la existencia de un malestar social hasta allí no considerado, surgido, pese a los avances modernizadores, como consecuencia de la inseguridad que la población mostraba con los sistemas de seguridad colectiva (salud, previsión, trabajo y educación) (PNUD, 1998). “Las paradojas de la modernización”, como se titula, potencia el punto de vista de los críticos de la transición en el debate público, alcanzando un interés nacional a partir de las nuevas formas de difusión y traducción usadas para comunicar sus resultados (Ramos, 2013). Contribuye también la desfavorable coyuntura económica de fines de los noventa y los fracasos electorales de la Concertación en las municipales de 1996, las parlamentarias de 1997 y el apretado triunfo de Lagos en la presidencial de 1999.

Eso sí, la reacción contra la tesis del “malestar” no se hizo esperar. Entre otros, Brunner (1998b) señalaba que las condiciones de nacimiento de esta polémica evidenciaban que

---

<sup>57</sup> Véanse, como manifiestos de cada grupo, los textos *La gente tiene la razón* y *Renovar la Concertación: la fuerza de nuestras ideas* en Ominami (2009).

aquella no era sino una “invención de los intelectuales”. Y es que el trasfondo de tales críticas es, de nuevo, el hecho de que está en disputa el rol otorgado a los intelectuales frente a la sociedad y su transformación (Ariztía y Bernasconi, 2013). En efecto, los defensores de la transición cuestionan el rol crítico de estos en tanto suponga “planificaciones globales y totales de la sociedad”, pues lo asocian con un pasado de afanes hegemónicos y desconocimiento de la multiplicidad de racionalidades existentes (Brunner, 1994). Por el contrario, quienes ven un proyecto en la modernidad, relevan como central el trabajo intelectual, pues apuntan a la participación crítica de los intelectuales en las sociedades históricas (Garretón, 2000).

Ahora bien, llegado el nuevo siglo, las complicaciones con que asciende un gobierno de Ricardo Lagos acosado por la desaceleración económica y el juicio de los empresarios, deriva en un silenciamiento del debate en nombre de la gobernabilidad (Ominami, 2009). En ausencia de aquél, se evita asumir directamente problemas no superados del pasado (como la reconciliación, el tratamiento de los enclaves autoritarios y los “poderes fácticos”, el tema de la justicia o el término de la impunidad) y proyectar temas de futuro (modelo de crecimiento y de desarrollo, la integración nacional, la superación de exclusiones y desigualdades) (Garretón, 2001). Se impone, así, la conducción ideológica de quienes apuestan sólo por gestionar las complejidades de la modernización: la naturalización de la modernización autoritaria se impone porque su correlato político es negar la redefinición de los fines del proyecto histórico de la Concertación.

De allí la defensa de una intervención parcial y “experta” en detrimento de una propiamente intelectual, pues se apela a una intervención orientada más a develar y analizar lo existente que a definir y promover coordenadas de futuro (Ariztía y Bernasconi, 2013). Se encuentra, así, el argumento ideológico para que se agudice la tecnocratización de las filas concertacionistas, como anticipo de su mayor implicación con el interés empresarial a comienzos de los años dos mil. Y es que la negación del debate sobre un proyecto post-transicional fortalece las posiciones neoliberales y conservadoras en el seno de la coalición, así como las tendencias pragmáticas empeñadas en evitar conflictos para mantener su situación de poder (Garretón, 2001). A la vista están los intelectuales analizados: lo suyo

son visiones desde el poder, unas sobre la administración de éste, que es el modo en que se concibe la política en los años noventa. Por ello no hay paradoja en su triunfo: pese a ser minoritaria, su posición es cualitativamente más relevante en ese escenario político<sup>58</sup>.

### *Confusiones ideológicas para el “neoliberalismo avanzado”*

La conducción ideológica que apuesta a la administración de la modernización heredada y no a su reevaluación desde una idea de modernidad como proyecto, se reafirma en la negativa a redefinir los fines del proyecto concertacionista en la post-transición. La tecnocratización de la política contribuye también al triunfo de tal negativa, toda vez que fortalece las tendencias neoliberales, conservadoras y pragmáticas existentes en la coalición. Siguiendo las premisas de la gestión y no del cambio, es en el gobierno de Lagos que tal tecnocratización se extiende, pues es entonces cuando se inicia el deterioro definitivo de los partidos políticos, a los cuales se les niega su papel central en la toma de decisiones políticas (Ruiz, 2015). Lo más significativo, sin embargo, es que con este ascenso tecnocrático es operativizada la conducción ideológica que se impone, pues se rodea de bases sociales e intelectuales que le dan eficacia.

Estas tecnocracias operacionalizan los marcos teóricos dispuestos por la intelectualidad conservadora y neoliberal de la Concertación, en la forma de políticas públicas estructurales o sectoriales que traspasan el nivel abstracto del discurso político. En ese sentido, al iniciarse el nuevo siglo, esta conducción ideológica deviene en un nuevo papel para los intelectuales del régimen: si en la primera década de la coalición los esfuerzos de su intelectualidad estuvieron puestos en legitimar social y políticamente lo asumido como propio de la herencia dictatorial, ahora se pasa a una producción propia e imaginativa, que no se queda en profundizar los pilares de la modernización autoritaria, sino que, por la entronización que alcanza el interés empresarial en el seno de las élites del conglomerado, deviene en la constitución de formas inéditas de neoliberalismo.

---

<sup>58</sup> Así pues, figuras como Brunner, Tironi o Edgardo Boeninger van a desempeñarse como ministros de Estado, y van a ejercer como consejeros de alto rango en los gobiernos de la Concertación.

Un “capitalismo de servicio público” que encuentra su fundamento en la homologación entre modernización y mercantilización, y su legitimidad social y política en aquella que relaciona mercantilización y democratización, entendiendo esta última básicamente como acceso al consumo<sup>59</sup>. Tales ideologismos -nunca reconocidos como tales- permiten a los intelectuales del régimen, sobre todo desde el “*impasse* del malestar”, mostrar a los críticos de las políticas neoliberales como opuestos a la modernización y como “neoconservadores” (Brunner, 1998b; Tironi, 1999), justificando la exclusión política y la desigualdad que provocan las definiciones de la Concertación como desajustes o asincronías propias de los procesos modernizadores<sup>60</sup>. Ellos han permitido hacer abstracción de la propia naturaleza de la mercantilización -determinada por intereses sociales y adscrita a relaciones de poder-, que es opuesta a la democratización -sea por un sesgo económico de acceso o por uno político relacionado con la imposición de lo legítimo- y, a la vez, dudosamente asimilable a una modernización que siga el camino trazado por la dictadura de reducirse, ante todo, a una redistribución especulativa en favor del empresariado.

La ideología neoliberal recorre estas falsas confusiones, por una parte, valiéndose de la centralidad del *hombre económico* y de la elección del consumidor como factores supuestamente inherentes a la condición humana; y, por otra, asumiendo a la elección del consumidor y no al trabajo como fuente de la riqueza (Polanyi, 1992). El consumo privado

---

<sup>59</sup> Así, por ejemplo, a fines de los noventa, Brunner, en un trabajo sobre la posmodernidad y la globalización cultural, destaca que con el avance de la universalización del lenguaje de mercado y la civilización material capitalista, se diluye la escisión entre cultura popular y alta cultura, a la vez que se mezclan las culturas centrales y periféricas. En ese sentido, la globalización cultural -empujada por el avance del capital a través de las industrias culturales, el comercio y el turismo- tendría un efecto democratizador y pluralizante, puesto que universaliza el acceso a la cultura mundial a nivel de todos los grupos sociales y contribuye a que ella exprese la hibridez aportada por diversas culturas locales. Véase Brunner (1998a).

<sup>60</sup> Con el IDH de 1998 entra en crisis el sustrato fundamental del relato concertacionista de gobierno en los años noventa: el miedo al desorden (Güell, 2009, cit. en Hidalgo, 2011), cuyo mejor defensor es Edgardo Boeninger y su llamado a preservar el crecimiento económico y la estabilidad de la transición, a riesgo de una regresión autoritaria (Boeninger, 1997). El propio informe, sin embargo, demuestra que el miedo existente en esos años ya no era hacia los militares, sino a la incertidumbre que depara el futuro. Por ello, esta defensa del legado de la Concertación que apela a las contradicciones de la modernidad no es sino un hábil recurso retórico para ganar el “centro político” y defender tal legado en un contexto de amplio cuestionamiento.

es la clave, dando una centralidad cada vez mayor al mercado en la sociedad y, con ello, produciendo nuevas formas de diferenciación social que agudizan las disparidades sociales en un caso como el chileno en el que se renuncia a regularlas (Ruiz, 2017).

Quizás los dos esfuerzos más relevantes por materializar tales nociones ideológicas como instrumentos de política están en el ámbito educativo y en la promoción de una nueva cultura del consumo. En el primer caso, se materializa como un extendido proceso de reformas, cuya orientación subsidiaria, que fortalece al mercado contra lo público y a la competencia contra el interés pedagógico, es encubierta bajo el ropaje de un relato de modernización técnico-pedagógica que busca separar aguas con dos conservadurismos distintos: los de la izquierda, asociados a la nostalgia del siglo XX y su “Estado docente”; y los de la derecha, vinculados a la tradición pre-secular (Orellana, 2014).

El grado más alto de elaboración de este argumento referido a la discusión educacional se encuentra en la obra del propio Brunner, principal intelectual de la Concertación en tal área. Éste fustiga contra los conservadores que defienden la vieja educación pública, aquella gobernada por corporaciones y oligarquías académicas refractarias a la racionalización de sus procedimientos. Pero, a la vez, también lo hace contra los conservadores que defienden el mercado autorregulado como verdad revelada, convocándolos a aceptar que el mercado es esencialmente irracional. Desde su perspectiva, es el Estado quien debe “guiar al mercado” a través de instrumentos bien calibrados, llevando a la educación a la prometida modernización, la que no puede llegar ni de la mano del viejo Estado ni tampoco del mercado auto-regulado (Brunner et al., 2005).

En el caso de la educación superior, esta noción, que emerge al alero del marco de gestión tecnocrática que promueve el ex ministro en los años noventa, sienta las bases sobre las cuales el gobierno de Lagos emprende la reforma sobre esta materia, dando origen al sistema de acreditación (que expresa lo avanzado en la agenda de calidad educacional) y al nuevo financiamiento bancario (CAE) (Brunner et al., 2005). Como han señalado Orellana y Guajardo (2014), tal reforma, que permite el ingreso de la banca al negocio de las ayudas estudiantiles, no incrementa significativamente el ritmo de crecimiento de la industria

educacional terciaria, sino que entrega los recursos fiscales para redirigir la apertura de vacantes a los segmentos sociales de menores ingresos. Es decir, no crea nuevas plazas con recursos fiscales, sino sólo asegura la consolidación de su tendencia precedente de crecimiento con arcas fiscales. La “guía al mercado” de parte del Estado, entonces, no altera el patrón de “mancha de aceite” de la expansión anterior, no visualiza al lucro como problema y asume que la calidad sería asegurada a través de la institucionalidad creada por la Ley de Acreditación del 2004 (Orellana y Guajardo, 2014).

Por su parte, la ampliación del acceso al consumo y al crédito es promovido en los años noventa como una utópica forma de integración social, en tanto la modernización económica es asumida como un fenómeno dado. En efecto, el correlato del exitismo noventero es el que asocia consumo y modernización, debido a que la apertura económica abre el acceso a bienes y servicios antes vedados para las clases medias. Eso es lo que intelectuales como Tironi (1999) celebran como triunfo de la democratización social y puerta de entrada a la modernidad. La penetración cultural de este relato crece en medio de la desarticulación social y la exclusión política, afianzando un patrón individualista que reduce la confianza al esfuerzo propio y busca diferenciarse bajo las referencias de grupos medios en ascenso, redundando en amplios sectores -no en el empresariado- en un desinterés en causas colectivas (Ruiz, 2015).

Los frutos consolidados de esta cultura del consumo son observables a fines de los noventa, cuando se torna cotidiano entre los grupos sociales menos acomodados el acceso a grandes supermercados, tiendas por departamento, *homecenters* y centros comerciales. Pero, además, la década siguiente trae una redefinición de las prácticas asociadas a este fenómeno con la introducción del pago diferido o a crédito, pues, permitiendo un consumo no dependiente de los ingresos inmediatos, da pie a formas financieras de ganancia, las que apuntalan el ascenso de grandes grupos económicos en el sector *retail*. La hasta entonces poco glamorosa industria del comercio minorista, escasamente profesionalizada y por ello despreciada por los ejecutivos más exitosos, se convierte en una mina de oro producto del intenso proceso de expansión llevado adelante. Uno ligado no sólo a la proliferación de



tiendas y centros comerciales, sino a la mayor financierización de sus ingresos, basados en el endeudamiento de nuevas franjas sociales (Bustamente y Caviedes, 2016).

El fomento de la ampliación del consumo impone entre la mayoría de la población a las tiendas del *retail* –en todas sus variantes- como los espacios para ejercer el consumo, al tiempo que instituye el consumo masivo como fórmula de acceso a los beneficios de la modernización económica, incluso ante la disolución del exitismo noventero, en la década siguiente. Al llegar el nuevo milenio, ese tránsito permite no sólo que la Concertación obtenga crecimiento económico manteniendo la desarticulación social y política de la dictadura –al convertir a los ciudadanos en consumidores (Moulian, 1998)-, sino que la propia industria del *retail* experimente una expansión espectacular en pocos años, develando los poco explotados nichos de acumulación que el rubro escondía.

Resumiendo, los años noventa están marcados por un debate sobre la transición y su rumbo, encubierto tras la discusión más amplia sobre la modernidad y la modernización. La referencia del mismo son las alternativas posibles que puede seguir el proyecto de la Concertación o el juicio a éste, pero nada fuera de él. Las posiciones que decantan, estructuradas en torno a la posibilidad de redefinir los fines de la coalición de gobierno, dan vida a dos bandos que, sin embargo, no son asimilables ni a grupos político-intelectuales constituidos ni a adscripciones partidarias específicas, teniendo más bien una composición transversal en términos de identidades políticas.

Hacia el final de la década, el desenlace abrupto de tal discusión, que cierra la puerta a una redefinición del proyecto concertacionista en la postdictadura, propicia una conducción ideológica *de facto*, liderada por los sectores más conservadores y neoliberales de la coalición. Paradojalmente, tal conducción, aprovechando la oportunidad política que abre el propio cuestionamiento a lo obrado en los años previos, alienta la consolidación del neoliberalismo chileno a partir de la implementación de inéditas formas de mercantilización de la vida social llevadas adelante al iniciarse el nuevo siglo.

#### 4.3.3. El curso forzado de las tareas intelectuales de la política

Hablar de las *tareas intelectuales de la política* es hablar de una dimensión ineludible de ésta última: la elaboración de idearios y de contenidos programáticos que se impulsen como legítimos y políticamente deseables, sea que éstos tengan una orientación transformadora o conservadora del orden vigente. Hablar, por otro lado, de *imaginación política*, implica reconocer que la política goza de una dimensión proyectual, que excede lo coyuntural, en la cual asoman debates sustantivos acerca del tipo de sociedad que se espera hacia el futuro.

En el Chile de la postdictadura, la mantención y profundización del modelo económico y de la exclusión política, que materializa como algo permanente la escisión entre lo social y lo político (y entre lo político y lo intelectual), sin embargo, hace entrar en crisis tales dimensiones, en tanto el divorcio de la política con la sociedad niega a la intelectualidad un soporte social sobre el cual construir y proyectar su pensamiento. La autonomización de la política que avanza en democracia, que concibe el fortalecimiento del sistema de partidos como autonomización de las fuerzas sociales, sustrae de los partidos la promoción de intereses. La clientelización de las bases sociales de estos, por otro lado, una vez en el gobierno, agudiza la pérdida de sentido de toda militancia, favoreciendo aún más la separación entre política y sociedad, responsable de una política ensimismada (Lechner, 1990). Como resultado, las bases sociales pierden importancia en las orientaciones de la producción ideológica de la élite política de izquierda, tomando su lugar otras referencias como la Iglesia, el centro político representado por el PDC, la comunidad intelectual internacional, las agencias extranjeras de cooperación y el empresariado (Alvear, 2016).

Con todo, esa lejanía, que impide pensar la política como disputa de proyectos de sentido, no implica una desaparición de las tareas intelectuales de ésta. Siendo irrenunciables, ellas se realizan de otro modo. En Chile en particular, a partir del ensimismamiento señalado, se impone el procesamiento tecnocrático de la política, potenciándose con ello el papel de los *think tanks* en el contexto democrático. Ello ocurre porque tales organizaciones promueven un estilo de deliberación y acción política separado del efectuado al interior de los partidos, así como una visión de la política entendida en un sentido limitado, como preparación de

políticas públicas, que no toma en cuenta los apoyos de la población (Huneus et al., 2014). En los años noventa, el interés político por proyectar hacia adelante la desarticulación heredada reduce las tareas intelectuales a una formulación programática eventual -recluida, sobre todo, a los contextos eleccionarios- o como parte de una estrategia de legitimación de la democracia. Ello da predominio a tales instituciones privadas, haciendo que, por sus estrechos dominios, corran los contenidos de la agenda pública, al tiempo que de ellos obtienen los partidos políticos sus bases programáticas y, en no pocos casos, reclutan a sus intelectuales y técnicos (Ruiz, 2017).

Se vuelve, así, a una situación similar a la de los centros académicos privados anteriores a 1973, cuando, sin aspirar a tener una función académica -puesto que se entendía que ella radicaba en las universidades-, llevan adelante estudios sobre aspectos clave de la realidad chilena, convocan a especialistas para discutir sobre un tema u otro y preparan propuestas de reforma social. En la postdictadura, sin embargo, tales labores se cumplen valiéndose de una posición hegemónica que no necesita, como antaño, comprometer sus temas de análisis y de debate con los problemas de la ciudadanía o, mejor aún, con las bases sociales de los partidos a los que se deben y pertenecen, en tanto operan como fundaciones políticas y no como centros académicos (Huneus et al., 2014).

Esa aparente impermeabilidad social de los *think tank* les permite a sus miembros y defensores referir su predominio a las supuestas exigencias de la modernidad y de una indeterminada globalización, y sus opiniones a una “neutralidad técnica” que intenta mostrarse abstraída de los intereses partidarios, económicos o religiosos a los que siempre están vinculadas tales instituciones. Sin ir más lejos, al considerar intereses sociales específicos, no hay contrapesos a la capacidad del gran empresariado para hegemonizar la agenda pública con su visión de mundo e intereses, en concomitancia con unos medios de comunicación altamente concentrados (Ruiz, 2015). Al encontrarse la realización de las tareas intelectuales de la política en el mundo de los tanques de pensamiento, queda el camino libre para el fortalecimiento de las tecnocracias. Se trata de una “tecnocratización” cuyo corolario es el desahucio de los aspectos proyectuales de la política, por el cual se

niega o transforma la dimensión intelectual de ésta, resultando su reducción a un marginal papel administrativo del orden existente.

Tal fenómeno, que tiene como producto político-ideológico la mencionada crisis imaginativa, se erige al alero de cambios sociales y organizacionales fraguados ya en la misma instalación del neoliberalismo chileno. Y es que es allí cuando circunstancias transitorias y propias de la resistencia política e intelectual de los años ochenta, que definieran actores y espacios concretos para mantener y dar curso a las tareas intelectuales de la política, se convierten en la forma permanente de procesar tales labores en la década siguiente, en nombre de una opción específica de transitar a la democracia. Más aún, cómo, en base a los aspectos normativos de tal opción, se niegan los elementos democráticos y esencialmente políticos que subyacen a esas labores, en consonancia con el cambio que experimentan los partidos políticos y el cuestionamiento que se hace a la labor de los ideólogos dentro de éstos.

#### *Avance de la tecnocratización de la política y deterioro de los partidos*

La autonomización de la política respecto a la sociedad va a expresarse no sólo como un paulatino vaciamiento -intelectual y social- de los partidos políticos de la Concertación, sino también en relación con el peso que alcanzan los economistas monetaristas en las definiciones de política. En tal escenario, un rasgo propio del caso chileno es la participación orgánica de los *think tanks* en su etapa de formulación, resultado de la convocatoria del Poder Ejecutivo a participar de un ámbito de debate con áreas del gobierno, mientras, en el monitoreo y evaluación, estas organizaciones actúan de un modo más espontáneo, en función de razones dadas más por necesidades del gobierno o de la oposición, según sea el caso. (Uña et al., 2009).

Sin embargo, a comienzos de los años dos mil, este precario equilibrio entre política y tecnocracia, que venía cerrando cada vez más espacios a las bases sociales de los partidos, se profundiza. A la externalización de las tareas intelectuales de la política en organizaciones privadas como los *think tanks*, se suma una colonización del Estado y los

gobiernos por figuras externas a los partidos, agrandándose la crisis intelectual de estos a una de carácter orgánico, dada su incapacidad para proyectar cuadros a la arena del poder.

En particular, desde el año 2003, y a partir de la misma “agenda corta” con que se resuelve políticamente el escándalo MOP-Gate, se crea el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), bajo el argumento de profesionalizar, dar predominio al mérito y a la evaluación del personal y despolitizar la selección de los altos directivos del Estado. En tal sentido, en los años venideros se produce un crecimiento ininterrumpido del porcentaje de individuos que, provenientes del sector privado, entran al sector público<sup>61</sup>. Esa situación, otra fuente que explica el fenómeno de la circulación público-privada, hace cada vez menos significativa la militancia para la obtención de los cargos políticos de peso, pese a que se mantiene la discrecionalidad política en el nombramiento de estos cargos (González-Bustamante et al., 2016). Así, se agudiza el vacío programático y representativo de los partidos políticos, como resultado, ante todo, de una decisión política explícita por privilegiar lo técnico sobre lo político. Ello, como contraparte, profundiza la debilidad de los partidos ante las presiones de un empresariado que las camufla en metáforas de consenso político y saber tecnocrático.

En definitiva, asociado a la desvinculación entre proceso social y proceso político, provocada en Chile por las definiciones que los “teóricos de la transición” instalan en los ochenta y proyectan luego como élite en el poder, se produce una desestructuración de las tareas intelectuales que hace que las mismas terminen fluyendo por canales que no miran a la sociedad, sino que agotan su discusión en su propio ensimismamiento. Esto fortalece a las tecnocracias, cuyo mundo de referencia es o la reproducción de la estructura de dominación o el desinterés por ella. Y, a la vez, debilita la posición de los intelectuales, por cuanto siendo el suyo el mundo social, una política desarticulada les torna difícil subsistir.

---

<sup>61</sup> Véase el crecimiento del porcentaje de nombrados a través del SADP que proviene del mundo privado en los Balances de Gestión Integral de la Dirección Nacional del Servicio Civil ([serviciocivil.cl](http://serviciocivil.cl)).

#### **4.4. Política sin sociedad y renuncia a la imaginación política**

En Chile, confirmando la hipótesis propuesta, el giro neoliberal se consolida por la hegemonía que alcanza, sobre el conjunto de los intereses sociales que tienen expresión política, la fuerza político-intelectual que lo conduce. En verdad, lo correcto es señalar que es un complejo de dos fuerzas político-intelectuales las que lo impulsan y le dan la estabilidad suficiente para su realización.

Por una parte, la compuesta por dos grupos político-intelectuales que se unen y actúan orgánicamente como uno solo: la élite de la tecnocracia neoliberal que desembarca en Chile (los “Chicago Boys”), impulsores de las transformaciones económicas de los años setenta y ochenta; y el gremialismo encabezado por Guzmán y Kast, que aporta los contenidos de la institucionalización política del legado autoritario y las definiciones ideológicas características del Estado subsidiario, tal como ocurre con la política social focalizada. Por otra, el grupo de poder que articula a lo que se ha denominado la “intelectualidad orgánica de la democracia”, que acuerda y elabora el discurso de legitimación de los restrictivos términos que propicia la transición a la democracia, los cuales, a su vez, los legitima a sí mismos como nueva élite en el poder en los gobiernos civiles. Son fracciones de esta misma fuerza político-intelectual las que bregan por negar cualquier debate trascendente en el seno de la Concertación en los años noventa, cerrando la puerta incluso a una renovación sustantiva de los cuadros políticos e intelectuales de ésta.

Ambas fuerzas -que vistas como un solo gran complejo operan como la *fuerza político-intelectual del neoliberalismo avanzado*-, comparten, más que una ideología en específico, una voluntad de poder y una capacidad de reproducción social y cultural de sí mismas que las fortalece en el tiempo. Por una parte, el complejo Chicago-gremialista lo hace, en un escenario de escasa o nula resistencia social y política, y, tras su inicial colaboración en el seno de la Junta Militar, utilizando los recursos económicos y políticos del Estado. Tal reproducción, a lo largo de las décadas siguientes, permite la emergencia de partidos políticos, instituciones educativas y *think tanks*, entre otros medios de influencia. Tal *reproducción ampliada* es lograda, además, con una rapidez inédita en el contexto

latinoamericano, contradiciendo el habitual desfase entre asimilación intelectual y reordenamiento institucional. Una excepcionalidad, entonces, que confirma la regla.

La “intelectualidad orgánica de la democracia”, por su parte, es una fuerza político-intelectual que, reciclándose a sí misma -vía conversión política, pragmática o ideológica- para convertirse en élite del poder de los gobiernos civiles, reproduce sus cuadros y visión de mundo al alero del Estado, pero también del mundo privado y empresarial, en la medida que este va alcanzando cada vez mayor capacidad de determinación en la sociedad chilena. Tratándose de un grupo heterogéneo social y políticamente -que cruza a la Concertación de modo transversal-, ideológicamente reproduce un discurso que naturaliza las transformaciones heredadas de la dictadura, cerrando el debate sobre el modelo de desarrollo y la concepción de Estado, a partir de los ideologismos de la gobernabilidad democrática (o peligro a la reversión autoritaria) y de la modernización, pero también de la adscripción a dudosos domicilios políticos liberales o socialdemócratas (Ruiz, 2017). Esto lo hace también a través de *think tanks* y centros académicos independientes, instituciones educativas y partidos políticos que reproducen tal discurso.

Respecto a esto último, es propio de la experiencia chilena la centralidad que en la política de las últimas tres décadas adquieren este tipo de agrupaciones ajenas a la deliberación democrática -definidas así por ser expresivas de élites que encuentran sus criterios de legitimidad y autoridad no en mayorías sociales o políticas, sino que en ellas mismas-, fruto del nivel más general de las relaciones sociales de dominación existentes durante este período. En efecto, como señala Williams (1992), instituciones privilegiadas como las universidades, las academias, las instituciones culturales nacionales, los sistemas culturales públicos, son instrumentos indispensables de la producción de las ideas y prácticas de un orden revestido de autoridad. Juegan un papel fundamental en la definición de los sistemas filosóficos, literarios y culturales fundamentales y, de modo más profundo, en la definición, por selección, de la naturaleza y objetivos del trabajo cultural, aun cuando incluyan elementos de disensión o de oposición. De tal suerte, si las agrupaciones mencionadas son fundamentales en la transición y postdictadura, es por la naturaleza del acuerdo previo que sustenta la posibilidad política de este hecho: el pacto de la transición, esto es, el carácter

social excluyente (o elitario) de la política posible en democracia, define la centralidad de estos en el devenir de la política chilena del último tiempo. Y no al revés, como plantean otros trabajos de referencia (Huneeus et al., 2014).

Particularmente importante para la consolidación del giro neoliberal chileno es, además, la reversión que tal transformación comporta para el tipo de relación entre intelectualidad y sociedad predominante en la etapa nacional-popular, radicalizada en el ciclo modernizador de los años sesenta y setenta. Y es que, con antecedentes en los acercamientos de socialistas, comunistas y ácratas con los sectores populares en los años veinte del siglo pasado, lo que hay, particularmente en la década y media que abarca el período 1958-1973, es un estrechamiento del lazo entre intelectualidad y fuerzas sociales organizadas (sobre todo con mediación de los partidos políticos), que es inédito -en el derrotero de una intelectualidad de tradición funcionarial del Estado, reacia a ceder sus privilegios- y que es roto por los términos sociales y políticos excluyentes del pacto de la transición, definidos justamente por la élite político-intelectual que hegemoniza al PS y al PDC.

Esta ruptura está estrechamente ligada a la crisis de la imaginación política en Chile, que es la forma específica en que se produce el giro intelectual en este país. Una que, a partir de una concepción estrecha de la política, definida como “gestión de expertos” y determinada por la supuesta racionalidad del mercado, renuncia al debate racional que confronta proyectos de sociedad alternativos. Esta crisis se ancla en las transformaciones sociales, políticas y culturales antes mencionadas, y su centro es el desahucio de los aspectos proyectuales de la política. Una crisis que, por lo demás, hoy abarca a todo el espectro político, y no solamente a la izquierda, a raíz de la crisis de representatividad que se vive<sup>62</sup>.

En una política sin sociedad, los actores que han asumido las irrenunciables tareas intelectuales de la política han ido alejándose cada vez más, en sus temas y preocupaciones, de la figura del intelectual. Al operar sólo como ejecutores de objetivos definidos de antemano por el poder existente, quienes hoy despliegan simultáneamente las habilidades del político y del intelectual dejan de ser los intelectuales de antes y pasan a engrosar la

---

<sup>62</sup> Véase un texto crítico con el derrotero reciente de la derecha chilena en Mansuy (2016).



lista de nuevos derivados de la tecnocracia que han definido las ciencias sociales (tecnoburócratas, *tecnhopols*, etc.). Antiguos personajes de la tradición política chilena y latinoamericana, como los ideólogos políticos, anclados a fuerzas políticas organizadas, parecen en retirada. Y es que superar la mera reproducción de contenidos predeterminados en favor del desarrollo de la imaginación política sólo es posible al reconstruirse el vínculo entre proceso social y proceso político.

En relación con esto último, el abismo entre política y sociedad ha conllevado, por último, la irrupción de una forma particular de pensar la política, cuyo corolario es la separación entre lucha teórica y lucha política. Una separación que, siendo falsa, ha permeado sobre todo en los sectores subalternos, en virtud del propio debilitamiento que han experimentado las estructuras políticas que históricamente expresaron sus intereses, horadando su capacidad para mirar la realidad social desde una perspectiva propia y no funcional a otros sectores. En particular, este debilitamiento ha dado lugar a una concepción “basista” de la política, que ha tendido a negar o despreciar el papel de la dimensión intelectual de ésta en favor de la “acción directa” y de una retórica moral de condena. Esto es, otra variante de la política ensimismada, tan poderosa como la concepción elitista.

## INTELECTUALIDAD Y REFUNDACIÓN NEOLIBERAL. ELEMENTOS DE INTERPRETACIÓN PARA AMÉRICA LATINA

---

En esta investigación se ha indagado en cómo la intelectualidad organizada interviene en el proceso de instalación y consolidación del giro neoliberal en América Latina, a partir del análisis de dos experiencias nacionales cuyos modos específicos de relación entre la intelectualidad y el poder político en un contexto de hegemonía neoliberal, delinean los siguientes elementos de interpretación para otros análisis histórico-concretos en la región.

Primero, que la capacidad hegemónica de las fuerzas político-intelectuales que lideran los procesos de instalación y consolidación neoliberal (y que son, por ello, las más cercanas al poder) se construye en la sobrevivencia a las experiencias autoritarias. Son los cuadros que se reciclan o reconvierten (de asesores de la dictadura a expertos “apolíticos” de la economía, de civiles del régimen autoritario a eximios liberales, de socialistas renovados a pragmáticos neoliberales), durante o tras las dictaduras, los que lideran uno u otro proceso en democracia. Así, la transformación social y económica, en buena medida, es empujada por unas tecnocracias nacional-populares que, siendo parte de las alianzas de poder en los contextos autoritarios (lo que O’Donnell denominara Estado burocrático-autoritario), giran hacia el neoliberalismo en virtud de los procesos de desnacionalización que experimentan, construyendo las bases sociales e intelectuales, las alianzas políticas (nacionales e internacionales) y los discursos de legitimación que más tarde les permiten proyectarse como élites en el poder, en paralelo al desembarco neoliberal en sus respectivos países.

Segundo, que si el principal cambio social de orden no intelectual que afecta a la intelectualidad latinoamericana es la crisis de las referencias sociales nacional-populares, el principal cambio social de orden intelectual es cómo las élites que definen los términos de las transiciones democráticas operan, a su vez, como los agentes políticos que defienden tales ideas de cambio. Es decir, cómo, saltándose la necesaria vinculación de los intelectuales con la política para dar viabilidad práctica a sus ideas, ellos devienen la élite política de las “nuevas democracias” sobre los marcos de sus propios discursos de

legitimación. Esto es lo nuevo respecto a las tradiciones político-intelectuales de cada país abordado, confirmando la primera parte de la hipótesis propuesta.

La conjunción de ambos fenómenos explica, como proceso interno, y más allá del giro ideológico que se produce a nivel mundial, el oscurecimiento de la labor intelectual en los años noventa, cuya expresión más clara es la desestimación de la racionalidad a fines, toda vez que estos últimos se asumen como dados. Lo que se observa, en ese sentido, es que a mayor nivel de desestructuración de las identidades nacional-populares y mayor elitización de la política como consecuencia de esta monopolización de roles de la intelectualidad de las “nuevas democracias”, es mayor el nivel de estabilidad orgánica de las fuerzas político-intelectuales que impulsan el giro neoliberal. Es así como, por ejemplo, en Chile, que destaca por la profundidad de lo anterior, se potencian las condiciones para mantener o profundizar los niveles de desarticulación social y política heredados de dictadura.

Tercero, que la consolidación neoliberal y, en ese sentido, la estabilidad orgánica demostrada por las fuerzas político-intelectuales que impulsan el giro, depende del grado de articulación y homogeneidad existente en los empresariados criollos. Así, al contrastar el “neoliberalismo avanzado” chileno con la experiencia argentina, se observa que en el primero el giro neoliberal se produce prácticamente sin resistencia de este actor, dada la debilidad del sector industrial local y el papel determinante que juega la incrustación de la tecnocracia neoliberal en su seno, pues ella le da una conducción política e ideológica que, como nunca, releva su papel en la sociedad.

Finalmente, respecto a la producción ideológica, se confirma la segunda parte de la hipótesis, toda vez que están a la base de las controversias ideológicas y los discursos de legitimación ciertas imágenes de “lo moderno”. En particular, la crítica al Estado y a la acción colectiva (sindical o profesional) y los argumentos en favor de la penetración mercantil en distintos ámbitos de la vida social, se defienden con referencia a proyectos de modernización que encuentran su autoridad (y falta de cuestionamiento) en su supuesta inevitabilidad y en interpretaciones interesadas sobre la historia reciente de sus países.

## VI

### BIBLIOGRAFÍA

---

A continuación, se presenta la bibliografía citada en esta investigación, distinguiendo entre fuentes de carácter primario y fuentes de carácter secundario, según sea el caso. Las primeras, además, son separadas en función de los casos nacionales estudiados.

#### 6.1. Fuentes primarias

##### 6.1.1. Argentina

Aricó, J. (Diciembre de 1980). Ni cinismo, ni utopía. *Controversia*, 2(9-10), 15-17.

Aricó, J. (Octubre de 1986). Una oportunidad para ponernos al día. *La Ciudad Futura*(2).

Auyero, J. (Junio de 1999). La Nueva Vanguardia de los Pobres. Notas de campo sobre los programas sociales y los intelectuales orgánicos del Banco Mundial. *Apuntes de Investigación del Cecyp*, 91-100.

Auyero, J. (2001). *La política de los pobres. Las prácticas clientelistas del peronismo*. Buenos Aires: Ediciones Manantial.

Borón, A. (23 de Diciembre de 2001). Requiem para el neoliberalismo. *Página/12*.  
Obtenido de <https://www.pagina12.com.ar/2001/01-12/01-12-23/pag25.htm>

Casullo, N. (2008). El intelectual en la fractura de tiempos políticos. De los subversivos a los weberianos de Parque Norte. En *Peronismo. Militancia y crítica (1973-2008)*. Buenos Aires: Colihue.

Cavallo, D. (2001). *Pasión por crear (diálogo con Juan Carlos de Pablo)*. Buenos Aires: Editorial Planeta.

Consejo de Redacción. (Septiembre de 1989). ¿Y ahora qué? (Editorial). *La Ciudad Futura*(17-18).

FIEL. (1998). *La regulación de la competencia y de los servicios públicos. Teoría y experiencia Argentina reciente*. Buenos Aires: FIEL.

Menem, C. (1988). *Argentina Ahora o Nunca. Ideas para un proyecto Nacional actualizado*. Buenos Aires: Proyección Editora.

Sarlo, B. (23 de Diciembre de 2001). La disolución de la Argentina y sus remedios. *Página/12*. Obtenido de <https://www.pagina12.com.ar/2001/01-12/01-12-23/pag25.htm>

Sarlo, B. (13 de Marzo de 2004). "La sociedad está fracturada". (H. Pavón, Entrevistador) Clarín. Revista Ñ.

#### 6.1.2. Chile

Brunner, J. J. (Agosto de 1981). *Las imágenes de la sociedad y la mirada sociológica*. Programa Flacso-Chile. Santiago: Documento de trabajo N° 121.

Brunner, J. J. (Julio de 1986). *¿Pueden los intelectuales sentir pasión o tener interés por la democracia?* Flacso-Chile. Santiago: Documento de trabajo N° 303.

Brunner, J. J. (Noviembre de 1987). Entonces, ¿existe o no la modernidad en América Latina? *Punto de Vista*(31), 2-5.

Brunner, J. J. (1994). *Bienvenidos a la modernidad*. Santiago: Planeta.

Brunner, J. J. (1998a). *Globalización cultural y posmodernidad*. Buenos Aires: FCE.

Brunner, J. J. (1998b). Malestar en la sociedad chilena: ¿De qué, exactamente, estamos hablando? *Estudios Públicos*(72), 173-198.

Flisfisch, Á. (Enero de 1985). *Algunas hipótesis sobre la relación entre intelectuales y partidos políticos en Chile*. Flacso-Chile. Santiago: Documento de Trabajo N° 234.

Flisfisch, Á. (1987). *La política como compromiso democrático*. Santiago: Flacso.

- Garfias, H. (20 de Octubre de 1991). A propósito de Chile en Sevilla 92. *La Época*.
- Garretón, M. A. (1983). *El proceso político chileno*. Santiago: Flacso.
- Garretón, M. A. (1987). Las complejidades de la transición invisible. Movilizaciones populares y régimen militar en Chile. (E. Tironi, Ed.) *Proposiciones*(14), 113-131.
- Garretón, M. A. (1994). *La faz sumergida del iceberg: estudios sobre la transformación cultural*. Santiago: Cesoc - Lom Ediciones.
- Garretón, M. A. (2003). La revolución como contenido, sin método revolucionario. En R. Baño (ed.), *Unidad Popular 30 años después*. Santiago: Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile.
- La Segunda. (4 de Julio de 1991). Con iceberg de 60 toneladas Chile se promoverá como país serio, frío y confiable en Sevilla 92. *La Segunda*.
- Lavín, J. (7 de Agosto de 1988). Chile: ¡Adiós Latinoamérica! *El Mercurio*.
- Moulian, T. (Diciembre de 1980). *Cuestiones de teoría política marxista. Una crítica de Lenin*. Flacso-Chile. Documentos de trabajo N° 105.
- Moulian, T. (Julio de 1982). Desarrollo político y Estado de Compromiso. Desajustes y crisis estatal en Chile. *Estudios Cieplan*(8), 105-158.
- Moulian, T. (1997). *Chile Actual. Anatomía de un mito*. Santiago: Lom Ediciones.
- Moulian, T. (1998). *El consumo me consume*. Santiago: Lom Ediciones.
- Pizarro, A. (13 de Octubre de 1991). Todos los Chile: Chile. *La Época*.
- PNUD. (1998). *Informe de Desarrollo Humano en Chile 1998*. Santiago: Ediciones Mundi Prensa.
- Subercaseaux, B. (1 de Septiembre de 1991). Chile: ¿un país moderno? *La Época*.
- Tejeda, G. (8 de Septiembre de 1991). Hielos mentales en la cultura chilena. *La Época*.

- Tironi, E. (1983). Anotaciones sobre el cambio social y la política. *Proposiciones*(8).  
Obtenido de file:///C:/Users/Seba/Downloads/SUR-PR-0008-02.pdf
- Tironi, E. (1984). *La torre de Babel. Ensayos de crítica y renovación política*. Santiago: Ediciones SUR.
- Tironi, E. (1987a). Marginalidad, movimientos sociales y democracia. Introducción. (E. Tironi, Ed.) *Proposiciones*(14), 9-20.
- Tironi, E. (1987b). Pobladores e integración social. (E. Tironi, Ed.) *Proposiciones*(14), 64-84.
- Tironi, E. (1999). *La irrupción de las masas y el malestar de las elites: Chile en el cambio de siglo*. Santiago: Grijalbo.

## 6.2.Fuentes secundarias

- Acevedo, M. (2004). América Latina mundializada. Geopolítica, mercados y estructuras sociales. En M. Acevedo, & A. Sotelo (coords.), *Reestructuración económica y desarrollo en América Latina*. México D.F.: UNAM - Siglo XXI Editores .
- Acuña, C., Kessler, G., & Repetto, F. (2002). *Evolución de la política social argentina en la década de los noventa: cambios en su lógica, intencionalidad y en el proceso de hacer la política social*. Claspo - The University of Texas. Buenos Aires: Proyecto Self-Sustaining Community Development in Comparative Perspective. Obtenido de <http://www1.lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/claspo/overviews/argsocpol90s.pdf>
- Adler, M. (1980). *El socialismo y los intelectuales*. México D.F.: Siglo XXI Editores.
- Aguirre, C. (2003). El "largo siglo XX" de la historiografía latinoamericana contemporánea: 1870-¿2025? Puntos de partida para su reconstrucción. *Historia Agenda*, 1(3). Obtenido de <http://www.cch.unam.mx/historiagenda/3/contenido/snh1.htm>

- Alfonsín, R. (2000). Discurso de Parque Norte en 1985. En L. A. Romero, & L. De Privitello (comps.), *Grandes discursos de la historia argentina*. Buenos Aires: Aguilar.
- Altamirano, C. (2010). Élités culturales en el siglo XX latinoamericano. En C. Altamirano (comp.), *Historia de los intelectuales en América Latina* (Vol. 2, págs. 9-30). Buenos Aires: Katz Editores.
- Álvarez, R. (2015). *Gremios empresariales, política y neoliberalismo. Los casos de Chile y Perú (1986-2010)*. Santiago: Lom Ediciones.
- Alvear, F. (2016). Genealogía de una ruptura. El proceso de la renovación socialista en Chile. *Revista de Ciencias Sociales*(36), 7-34.
- Anderson, P. (1987). *Consideraciones sobre el marxismo occidental*. México D.F.: Siglo XXI Editores.
- Anderson, P. (1992). *Campos de batalla*. Barcelona: Anagrama.
- Anderson, P. (2001). La segunda fórmula a prueba. *New Left Review*, 5-23.
- Anderson, P. (2003). Neoliberalismo: un balance provisorio. En E. Sader, & P. Gentili (eds.), *La trama del neoliberalismo: mercado, crisis y exclusión social* (págs. 25-38). Buenos Aires: Eudeba-Clacso.
- Aranibar, C., & Rodríguez, B. (2013). *América Latina, ¿del Neoliberalismo al Neodesarrollismo?* Buenos Aires: PNUD - Siglo XXI Editores.
- Arias, H., & Ramírez, P. (27 de Agosto de 2006). La trenza de poder en el CEP. *La Nación*. Obtenido de <http://www.lanacion.cl/noticias/reportaje/la-trenza-de-poder-en-el-cep/2006-08-26/205439.html>
- Aricó, J. (2005). *La cola del diablo. Itinerarios de Gramsci en América Latina*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Ariztía, T., & Bernasconi, O. (2013). Sociologías públicas y la producción del cambio social en el Chile de los noventa. En T. Ariztía (ed.), *Produciendo lo social. Usos*



- de las ciencias sociales en el Chile reciente* (págs. 133-163). Santiago: Ediciones UDP.
- Arriagada, G. (2004). *Los empresarios y la política*. Santiago: Lom Ediciones.
- Babb, S., & Buira, A. (2004). *Mission Creep, Mission Push and Discretion in Sociological Perspective: The Case of IMF Conditionality*. Génova, Suiza: Ponencia presentada en el XVIII G24 Technical Group Meeting.
- Baño, R. (1985). *Lo social y lo político, un dilema clave del movimiento popular*. Santiago: Flacso.
- Baño, R. (2003). Más allá de las culpas y buenas intenciones. En R. Baño (ed.), *Unidad Popular 30 años después* (págs. 291-318). Santiago: Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile.
- Baño, R., & Faletto, E. (1999). *Transformaciones sociales y económicas en América Latina*. Santiago: Cuadernos del Departamento de Sociología, Universidad de Chile.
- Basualdo, E. (2001). *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina (1976-2001)*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
- Bauman, Z. (1997). *Legisladores e intérpretes*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
- Beck, U. (2002). *La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad*. Barcelona: Paidós.
- Beigel, F. (2010). *Autonomía y dependencia académica*. Buenos Aires: Biblos.
- Bell, D. (1994). *El advenimiento de la sociedad postindustrial*. Madrid: Alianza Editorial.
- Beltrán, G. (2006). Acción empresaria e ideología. La génesis de las reformas estructurales. En A. Pucciarelli (comp.), *Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del poder?* (págs. 199-243). Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Beltrán, G. (2011). Las paradojas de la acción empresaria. Las asociaciones del empresariado argentino y la persistencia de las reformas estructurales. En A.

- Pucciarelli (comp.), *Los años de Menem. La construcción del orden neoliberal* (págs. 221-262). Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Benda, J. (1951). *La traición de los intelectuales*. Santiago: Ercilla.
- Bilanski, G. (2012). *La actitud ante la intelligentsia en la tradición marxista. Las posturas de Adler, Trotsky, Kautsky y Gramsci*. Trabajo final de curso Sociología de los Intelectuales, Buenos Aires. Obtenido de [https://www.academia.edu/4152570/La\\_actitud\\_ante\\_la\\_intelligentsia\\_en\\_la\\_tradici%C3%B3n\\_marxista\\_Adler\\_Trotsky\\_Kautsky\\_y\\_Gramsci](https://www.academia.edu/4152570/La_actitud_ante_la_intelligentsia_en_la_tradici%C3%B3n_marxista_Adler_Trotsky_Kautsky_y_Gramsci)
- Bloch, M. (1965). *Introducción a la historia*. México D. F.: FCE.
- Boccardo, G. (2013). *Clases y grupos sociales en América Latina hoy*. Santiago: Memoria de título de Sociología, Universidad de Chile.
- Boccardo, G. (2014). Tecnocracias en América Latina (1980-2000). En A. Fielbaum, R. Hamel, & A. López, *El poder de la cultura. Espacios y discursos en América Latina* (págs. 77-101). Santiago: Ediciones Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile.
- Boeninger, E. (1986). Bases de un orden económico para la futura democracia en Chile. *Estudios Públicos*(22), 81-113.
- Boeninger, E. (1997). *Democracia en Chile. Lecciones de gobernabilidad*. Santiago: Editorial Andrés Bello.
- Boltanski, L., & Chiapello, E. (2002). *El nuevo espíritu del capitalismo*. Madrid: Akal.
- Bourdieu, P. (1971). *Campo de poder, campo intelectual*. Buenos Aires: Editorial Montessor.
- Bourdieu, P. (1976). El campo científico. En *Intelectuales, política y poder*. Buenos Aires: Eudeba.
- Bourdieu, P. (1992). *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*. Barcelona: Anagrama.

- Bourdieu, P. (1995). La lógica de los campos. En P. Bourdieu, & L. Wacquant, *Respuestas. Por una antropología reflexiva* (págs. 63-78). Buenos Aires: Grijalbo.
- Bourdieu, P. (1997). *Sobre la televisión*. Barcelona: Anagrama.
- Brenta, N. (2002). La Convertibilidad argentina y el Plan Real de Brasil: concepción, implementación y resultados en los años 90. *Revista Ciclos*, 12(23), 39-86.
- Bresser-Pereira, L. (Julio-Agosto de 2007). Estado y mercado en el nuevo desarrollismo. *Nueva Sociedad*(210), 110-125.
- Brunner, J. J. (1985). La participación de los centros privados de pensamiento. *Estudios Públicos*(19), 1-12.
- Brunner, J. J., & Barrios, A. (1987). *Inquisición, mercado y filantropía. Ciencias sociales y autoritarismo en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay*. Santiago: Flacso.
- Brunner, J. J., Elacqua, G., Tillet, A., Bonnefoy, J., González, S., Pacheco, P., & Salazar, F. (2005). *Guiar el mercado. Informe sobre la educación superior en Chile*. Santiago.
- Brunner, J. J., & Flisfisch, Á. (1983). *Los intelectuales y las instituciones de la cultura*. Santiago: Flacso.
- Brunner, J. J., & Flisfisch, Á. (2014). Prólogo. En *Los intelectuales y las instituciones de la cultura* (págs. 19-62). Santiago: Ediciones UDP.
- Burke, P. (2007). *Historia y teoría social*. Madrid: Alianza Editorial.
- Burki, S., & Perry, G. (1998). *Más allá del Consenso de Washington. La hora de la reforma institucional*. Washington: Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento - Banco Mundial.
- Bustamante, A., & Caviedes, S. (Junio de 2015). El papel de la tradición: la influencia empresarial del grupo Matte. *Cuadernos de Coyuntura*(8), 40-54.
- Bustamante, A., & Caviedes, S. (Junio de 2016). Endeudar para acumular: la influencia del grupo Solari. *Cuadernos de Coyuntura*(13), 35-45.

- Camou, A. (1998). Saber técnico y política en los orígenes del menemismo. *Perfiles latinoamericanos*(12), 87-107.
- Camou, A. (2006). El saber detrás del Trono. Intelectuales-expertos, tanques de pensamiento y políticas económicas en la Argentina democrática (1985-2001). En A. Garcé, & G. Uña, *Think tanks y políticas públicas en Latinoamérica: dinámicas globales y realidades regionales* (págs. 139-176). Buenos Aires: IDRC-CRDI - Konrad Adenauer Stiftung - Prometeo.
- Campero, G. (2003). La relación entre el Gobierno y los grupos de presión: el proceso de la acción de bloques a la acción segmentada. *Revista de Ciencia Política*(23), 159-176.
- Candiano, L. (2015). A desalabar. Apostillas sobre la noción de "campo". *A Contracorriente. Journal on Social History and Literature in Latin America*, 13(1), 272-287.
- Canelo, P. (2004). La política contra la economía: los elencos militares frente al plan económico de Martínez de Hoz durante el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1981). En A. Pucciarelli (comp.), *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura militar* (págs. 219-312). Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Canelo, P. (2011). "Son palabras de Perón": Continuidades y rupturas discursivas entre peronismo y menemismo. En A. Pucciarelli (comp.), *Los años de Menem. La construcción del orden neoliberal* (págs. 71-112). Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Cardoso, F., & Faletto, E. (1969). *Dependencia y desarrollo en América Latina*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Cardoso, F., & Faletto, E. (Julio-Septiembre de 1977). Post scriptum a Dependencia y desarrollo en América Latina. *Desarrollo Económico*, 17(66), 273-299.
- Cardús, S. (Abril-Junio de 1993). Notas para una lectura actualizada de "Ideología y utopía". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*(62), 123-131.

- Caviedes, S. (Abril de 2015a). Cuando un crédito por \$6.500 millones poco importa: la verdadera influencia empresarial del grupo Luksic. *Cuadernos de Coyuntura*(7), 36-49.
- Cazares, L., Christen, M., Jaramillo, E., Villaseñor, L., & Zamudio, L. (1999). *Técnicas actuales de investigación documental*. México D.F.: Editorial Trillas-UNAM.
- Centeno, M. Á. (1992). The New Leviatan: The Dynamics and Limits of Technocracy. *Theory and Society*, 22(3), 307-335.
- CEPAL. (1996). *América Latina y el Caribe quince años después. de la década perdida a la transformación económica, 1980-1995*. Santiago: CEPAL-FCE.
- Chávez, F. (Diciembre de 2013). Kirchnerismo, la disputa por el sentido de la democracia (2003-2011). *Izquierdas*(17), 106-133.
- Chomsky, N. (1969). *La responsabilidad de los intelectuales*. Buenos Aires: Editorial Galerna.
- Correa, S. (2004). El pensamiento en Chile en el siglo XX bajo la sombra de Portales. En O. Terán (coord.), *Ideas en el siglo. Intelectuales y cultura en el siglo XX latinoamericano* (págs. 211-308). Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Correa, S. (2011). *Con las riendas del poder. La derecha chilena en el siglo XX*. Santiago: DeBolsillo.
- Cortés Terzi, A. (2000). *El circuito extrainstitucional del poder*. Santiago: ChileAmérica - Cesoc.
- Cortés, A. (2016). Prólogo. La intervención sociológica con pobladores, 30 años después. En F. Dubet, E. Tironi, V. Espinoza, & E. Valenzuela, *Pobladores: luchas sociales y democracia en Chile* (págs. 11-14). Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

- Cortina, L. (16 de Febrero de 1997). El CEMA, academia y política. *La Nación (Argentina)*. Obtenido de <http://www.lanacion.com.ar/63768-el-cema-academia-y-politica>
- Coser, L. (1968). *Hombres de ideas: el punto de vista de un sociólogo*. México D.F.: FCE.
- Coser, L. (1970). Los diferentes roles de los intelectuales en Francia, Inglaterra y Estados Unidos en la actualidad. En J. Marsal, *El intelectual latinoamericano* (págs. 233-251). Buenos Aires: Editorial del Instituto.
- Coutinho, N. (2016). Los intelectuales y la organización de la cultura. *Herramienta*(59). Obtenido de <http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-59/los-intelectuales-y-la-organizacion-de-la-cultura>
- Cristi, R. (2015). La síntesis conservadora de los años 1970. En R. Cristi, & C. Ruiz Schneider, *El pensamiento conservador en Chile. Seis ensayos* (págs. 123-138). Santiago: Editorial Universitaria.
- Dahse, F. (1979). *Mapa de la Extrema Riqueza. Los grupos económicos y el proceso de concentración de capitales*. Santiago: Editorial Aconcagua.
- Dávalos, P. (2010). *La democracia disciplinaria. El proyecto posneoliberal para América Latina*. Quito: CODEU-PUCE.
- De Castro, S. (2016). Prólogo. En F. Rosende (ed.), *La Escuela de Chicago* (2 ed., págs. 13-18). Santiago: Ediciones UC.
- Debray, R. (1979). *Le pouvoir intellectuel en France*. París: Ramsay.
- Delich (coord.), F. (1985). *Los límites de la democracia* (Vol. 1 y 2). Buenos Aires: Clacso.
- Di Tella, T. (Julio-Diciembre de 1966). La formación de una conciencia nacional en América Latina. *Desarrollo Económico*, 6(22/23), 417-442.
- Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC). (s.f.). *Balance de Gestión Integral, 2010-2016*. Santiago. Obtenido de <https://www.serviciocivil.cl/documentos/>

- Drake, P. (2003). El movimiento obrero en Chile: de la Unidad Popular a la Concertación. *Revista de Ciencia Política*, 23(2), 148-158.
- Dubet, F., Tironi, E., Espinoza, V., & Valenzuela, E. (2016). *Pobladores: luchas sociales y democracia en Chile*. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Dumenil, G., & Levy, D. (2011). *The Crisis of Neoliberalism*. Cambridge: Harvard University Press.
- Eagleton, T. (1997). *Ideología: una introducción*. Barcelona: Paidós.
- Eagleton, T. (2004). *Las ilusiones del posmodernismo*. Buenos Aires: Paidós.
- Elizalde, J. (julio-diciembre de 2009). La participación política de los intelectuales durante la transición democrática: el Grupo Esmeralda y el presidente Alfonsín. *Temas de Historia Argentina y Americana*(15), 53-87.
- Estay Reino, J. (2005). América Latina en las negociaciones comerciales multilaterales y hemisféricas. En J. Estay Reino, *La economía mundial y América Latina. Tendencias, problemas y desafíos* (págs. 193-220). Buenos Aires: Clacso.
- Estévez, A. (2006). Una genealogía de la Tecnocracia. En H. Ochoa, & A. Estévez, *El poder de los expertos: para comprender la tecnocracia* (págs. 65-98). Zulia: Universidad de Zulia.
- Estrada, J. (2005). Élités intelectuales y producción de políticas económicas en Colombia. En J. Estrada (comp.), *Intelectuales, tecnócratas y reformas neoliberales en América Latina* (págs. 259-320). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Fair, H. (Julio-Diciembre de 2014). La readaptación ideológica del orden neoliberal en el discurso menemista. *Si somos americanos. Revista de Estudios Transfronterizos*(2), 103-132.
- Faletto, E. (Enero-Febrero de 1979). La dependencia y lo nacional popular. *Nueva Sociedad*(40), 40-49.

- Faletto, E. (1989). La especificidad del Estado en América Latina. *Revista de la Cepal*(38), 161-200.
- Faletto, E. (1991). *Imágenes sociales de la modernización y la transformación tecnológica*. Santiago: Flacso-Programa Chile.
- Faletto, E. (1996a). ¿Crisis de la sociología? *Némesis*(1).
- Faletto, E. (Abril de 1996b). La Cepal y la sociología del desarrollo. *Revista de la Cepal*(58), 191-204.
- Faletto, E. (2002). Enzo Faletto rompe tres décadas de silencio: "Necesitamos una nueva ética del comportamiento" (Entrevista de Faride Zerán). *Rocinante. Arte, Cultura y Sociedad*(41).
- Faletto, E. (2003). Las relaciones entre lo social y lo político. *Revista de Sociología*(17), 23-30.
- Faletto, E. (2009). Síntesis histórica del Partido Socialista chileno. Desde los orígenes hasta 1970 (1986). En R. Baño, C. Ruiz, & M. E. Ruiz-Tagle (eds.), *Enzo Faletto. Obras completas. Tomo I Chile* (págs. 207-224). Santiago: Editorial Universitaria.
- Faletto, E., & Kirkwood, J. (1976). *Política y comportamientos sociales en América Latina*. Santiago: Flacso-Chile.
- Fazio, H., & Parada, M. (2010). *Veinte años de política económica de la Concertación*. Santiago: Lom Ediciones.
- Fernandes, F. (2008). *Sociedade de classes e subdesenvolvimento*. Sao Paulo: Global Editora.
- Ffrench-Davis, R. (2002). Ricardo Ffrench-Davis: "Nos cayó encima la ortodoxia económica". *Rocinante. Arte, Cultura y Sociedad*(43).
- Ffrench-Davis, R. (2004). *Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad: tres décadas de política económica en Chile*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.



- Fiorucci, F. (2004). ¿Aliados o enemigos? Los intelectuales en los gobiernos de Vargas y Perón. *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe*. Obtenido de <http://eial.tau.ac.il/index.php/eial/article/view/896>
- Fontaine Aldunate, A. (1988). *Los economistas y el presidente Pinochet*. Santiago: Editorial Zig Zag.
- Fontaine Talavera, A. (1992). Sobre el pecado original de la transformación capitalista chilena. En B. Levigne (comp.), *El desafío neoliberal. El fin del tercermundismo en América Latina* (págs. 93-139). Bogotá: Grupo Editorial Norma.
- Fontaine Talavera, A. (2001). El miedo y otros escritos: el pensamiento de Jaime Guzmán E. *Estudios Públicos*(42), 251-570.
- Fontaine, E. (2016). La Evaluación social de proyectos en Chile y el convenio USAID-Chicago-Católica. En F. Rosende (ed.), *La Escuela de Chicago* (2 ed., págs. 111-132). Santiago: Ediciones UC.
- Fontana, J. (2001). *La historia de los hombres*. Barcelona: Crítica.
- Foucault, M. (1979). *Microfísica del poder*. Madrid: Ediciones La Piqueta.
- Franco, R. (1973). *Tipología de América Latina. Ensayo de medición de las discontinuidades sociales* (Cuadernos-Serie 2 ed.). Santiago: ILPES.
- Funes, P. (2006). *Salvar la nación: intelectuales, cultura y política en los años veinte latinoamericanos*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Gandásegui, M. (2005). América Latina y el imperialismo en el siglo XXI. En J. Estay Reino, *La economía mundial y América Latina. Tendencias, problemas y desafíos* (págs. 169-192). Buenos Aires: Clacso.
- Gárate, M. (2012). El nuevo estatus del economista y el papel de los 'think tanks' en Chile: el caso de Cieplan. En T. Ariztía (ed.), *Produciendo lo social. Usos de las ciencias sociales en el Chile reciente* (págs. 101-129). Santiago: Ediciones UDP.

- Gárate, M. (2013a). *La revolución capitalista en Chile (1973-2003)*. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Gárate, M. (2013b). La pedagogía monetarista. Difusión y debate de las nuevas ideas económicas en la revista Hoy, 1975-1979. En J. Ossandón, & E. Tironi, *Adaptación. La empresa chilena después de Friedman* (págs. 109-134). Santiago: Ediciones UDP.
- Garategaray, M. (Julio-Diciembre de 2012). En el nombre de Perón. Los usos políticos del pasado en la revista Unidos (1983-1991). *Quinto Sol*, 16(2), 1-15.
- Garategaray, M. (enero-junio de 2013). Entre Perón y Alfonsín: Notas sobre la Renovación peronista. *Temas y Debates*(25), 35-57.
- Garcés, M. (2010). ECO, las ONGs y la lucha contra la dictadura militar en Chile. Entre lo académico y lo militante. *Izquierdas*(7).
- Garretón, M. (2000). *La sociedad en que vivi(re)mos. Introducción sociológica al cambio de siglo*. Santiago: Lom Ediciones.
- Garretón, M. A. (Mayo de 2001). Manuel Antonio Garretón: "Aquí nadie ha traicionado a nadie" (Entrevista de Faride Zerán). *Rocinante. Arte, Cultura y Sociedad*(31).
- Garretón, M. A. (2014). *Las ciencias sociales en la trama de Chile y América Latina*. Santiago: LOM.
- Germani, G. (1962). *Política y sociedad en una época de transición: de la sociedad tradicional a la sociedad de masas*. Buenos Aires: Paidós.
- Giddens, A. (1994). *Más allá de la izquierda y la derecha. El futuro de las políticas radicales*. Madrid: Cátedra.
- Gil, M. (2009). Sociología de los intelectuales y teoría de la ideología. En V.V.A.A, *Pluralismo epistemológico* (págs. 239-259). La Paz: Clacso - La muela del diablo editores.

- Gilman, C. (1999). El intelectual como problema. La eclosión del antiintelectualismo latinoamericano de los sesenta y setenta. *Prismas*(3), 73-93.
- Góngora, M. (2011). *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX*. Santiago: Editorial Universitaria.
- González, O. (Septiembre de 2008). Desde los bordes. Materiales para una sociología de intelectuales. *Illapa. Revista latinoamericana de ciencias sociales*(2), 211-234.
- González Casanova, P. (1969). *La democracia en México*. México D.F.: Ediciones Era.
- González-Bustamante, B., Olivares, A., Abarca, P., & Molina, E. (Enero-Febrero de 2016). Servicio civil en Chile, análisis de los directivos del primer nivel jerárquico (2003-13). *Revista de Administração Pública*, 50(1), 59-79.
- Gouldner, A. (1980). *El futuro de los intelectuales y el ascenso de la Nueva Clase*. Madrid: Alianza Editorial.
- Gramsci, A. (1967). *La formación de los intelectuales*. México D.F.: Grijalbo.
- Gramsci, A. (1999). Apuntes y notas dispersas para un grupo de ensayos sobre la historia de los intelectuales. En *Cuadernos de la Cárcel* (págs. 351-382). México D.F.: Ediciones Era.
- Gramsci, A. (2002). *La cuestión meridional*. Buenos Aires: Quadrata Editor.
- Grondona, A. (2016). *Saber de la pobreza. Discursos expertos y subclases en la Argentina entre 1956 y 2006*. Buenos Aires: Ediciones del Centro Cultura de la Cooperación Floreal Gorini - Clacso.
- Guido, R., & Fernández, O. (Octubre-Diciembre de 1989). El juicio al sujeto: un análisis de los movimientos sociales en América Latina. *Revista Mexicana de Sociología*, 51(4), 45-76.
- Guiñazú, M. (2000). Del Consenso de Washington al Consenso de Santiago. *Política y Gestión*(7), 79-97.

- Habermas, J. (1992). *Teoría de la acción comunicativa. Crítica de la razón funcionalista* (Vol. 2). Madrid: Taurus.
- Hachette, D. (2016). La génesis de la "Escuela de Chicago": Fines de los 50 y los 60. En F. Rosende, *La Escuela de Chicago. Ensayos en honor a Arnold Harberger* (2 ed., págs. 29-58). Santiago: Ediciones UC.
- Halperin Donghi, T. (1987). *El espejo de la historia. Problemas argentinos y perspectivas hispanoamericanas*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
- Halperin Donghi, T. (1988). Estilos nacionales de institucionalización de la cultura e impacto de la represión: Argentina y Chile. En S. Sosnowski (comp.), *Represión y reconstrucción de una cultura: el caso argentino* (págs. 27-48). Buenos Aires: Eudeba.
- Halperin Donghi, T. (2008). La Cepal en su contexto histórico. *Revista de la Cepal*(94), 7-27.
- Harvey, D. (2005). *Breve historia del neoliberalismo*. Madrid: Akal.
- Hayek, F. (1982). Los principios de un orden social liberal. *Estudios Públicos*(6), 179-202.
- Hayek, F. (1995). *Camino de servidumbre*. Madrid: Alianza Editorial.
- Heredia, M. (Enero-Marzo de 2003). Reformas estructurales y renovación de las élites económicas en Argentina: estudio de los portavoces de la tierra y del capital. *Revista Mexicana de Sociología*, 65(1), 77-115.
- Heredia, M. (2004). El proceso como bisagra. Emergencia y consolidación del liberalismo tecnocrático en la Argentina. En A. Pucciarelli (comp.), *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura militar* (págs. 313-382). Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Heredia, M. (2006). La demarcación de la frontera entre economía y política en democracia. Actores y controversias en torno a la política económica de Alfonsín.

- En A. Pucciarelli (comp.), *Del poder de la democracia a la democracia del poder. Los años de Alfonsín* (págs. 153-198). Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Heredia, M. (2008). Entre reflexividad, legitimación y performatividad. El discurso económico en la instauración y la crisis de la convertibilidad. *Crítica en desarrollo*(2), 191-214.
- Heredia, M. (2012). Los centros privados de expertise en economía: génesis, dinámica y continuidad de un nuevo actor político en la Argentina. En S. Morresi, & G. Vommaro (comp.), *Saber lo que se hace. Expertos y política en la Argentina* (págs. 297-338). Buenos Aires: UNGS-Prometeo.
- Heredia, M. (2015). *Cuando los economistas alcanzaron el poder*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Hidalgo, P. (2011). *El ciclo político de la Concertación (1990-2010)*. Santiago: Uqbar.
- Hinkelammert, F. (Mayo-Junio de 1990). La libertad académica bajo control en América Latina. *Nueva Sociedad*(107), 131-137.
- Hirschman, A. (1969). *El comportamiento de los proyectos de desarrollo*. México D.F.: Siglo XXI Editores.
- Hobsbawm, E. (1983). *Marxismo e historia social*. Puebla: Universidad Autónoma de Puebla.
- Hobsbawm, E. (2015). *Revolucionarios*. Barcelona: Crítica.
- Hoevel, C. (2014). Las contradicciones culturales del neoliberalismo. *Economía y política*, 1(2), 39-72.
- Hopenhayn, M. (2001). Los intelectuales latinoamericanos descritos por sus (im) pares. *Estudios Públicos*(82), 203-215.
- Huneus, C. (1997). Tecnócratas y políticos en la política democrática en la Argentina (1983-1995). *Pensamiento Iberoamericano. Revista de economía política*(30), 207-228.

- Huneus, C. (1998). Tecnócratas y políticos en un régimen autoritario. Los "Odeplan Boys" y los "Gremialistas" en el Chile de Pinochet. *Revista de Ciencia Política*, 19, 125-158.
- Huneus, C. (2000). *El régimen de Pinochet*. Santiago: Editorial Sudamericana.
- Huneus, C., Cuevas, R., & Hernández, F. (2014). Los centros de investigación privados (think tank) y la oposición en el régimen autoritario chileno. *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, 23(1), 73-99.
- Jacoby, R. (1987). *The Last Intellectuals. American Culture in the Age of the Academe*. Nueva York: Basic Books.
- Jameson, F. (1999). *El giro cultural*. Buenos Aires: Manantial.
- Jara, I. (2006). *De Franco a Pinochet: el proyecto cultural franquista en Chile, 1936-1980*. Santiago: Programa de Magíster en TEHA, Facultad de Artes, Universidad de Chile
- Jara, M. (Agosto de 2017). Importando (neo)liberalismo en Chile: el caso del Centro de Estudios Públicos (1980-1990). Un proceso de legitimación intelectual. Mar del Plata, Buenos Aires: Actas de las XVI Jornadas Interescuelas/departamentos de Historia. Obtenido de <https://interescuelasmardelplata.files.wordpress.com/2017/09/27-jara.docx>
- Joignant, A. (2010). Tecnócratas, Technopols y dirigentes de partido: tipos de agentes y especies de capital en las élites gubernamentales de la Concertación (1990-2010). En P. Güell, & A. Joignant, *Notables, tecnócratas y mandarines. Elementos de la sociología de las elites en Chile (1990-2010)* (págs. 49-75). Santiago: Ediciones UDP.
- Kautsky, K. (1980). La inteligencia y la socialdemocracia. En M. Adler, *El socialismo y los intelectuales*. México D.F.: Siglo XXI Editores.
- Kohan, N. (2006). Pensamiento crítico y el debate por las ciencias sociales en el seno de la Revolución Cubana. En *Crítica y teoría en el pensamiento social latinoamericano* (págs. 389-437). Buenos Aires: Clacso.

- Kymlicka, W. (1995). *Filosofía política contemporánea. Una introducción*. Barcelona: Ariel.
- Lardone, M. (14 de Enero de 2008). ¿Quién aprende de quién? El Banco Mundial en la reforma del Estado chileno. *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*. Obtenido de <http://journals.openedition.org/nuevomundo/11352?lang=en>
- Larraín, F., & Vergara, R. (2001). *La transformación económica en Chile*. Santiago: Centro de Estudios Públicos.
- Larroulet, C. (2008). The battle of ideas in Chile: the case of Libertad y Desarrollo. En M. Dyble, *Taming Leviathan. Waging the war of ideas around the world* (págs. 64-78). Londres: The Institute of Economic Affairs.
- Lechner, N. (1990). *Los patios interiores de la democracia*. Santiago: FCE.
- Levitsky, S. (Abril-Junio de 2004). Del sindicalismo al clientalismo: la transformación de los vínculos partido-sindicatos en el peronismo, 1983-1999. *Desarrollo Económico*, 44(173), 3-32.
- Lipset, S., & Solari, A. (1967). Prólogo. En S. Lipset, & A. Solari, *Elites y desarrollo en América Latina* (págs. 9-14). Buenos Aires: Paidós.
- Lladser, M. T. (1986). *Centros privados de investigación en Chile*. Santiago: AHC - Flacso.
- Lyotard, J. F. (1987). *La condición postmoderna*. Madrid: Ediciones Cátedra.
- Maillet, A., González-Bustamante, B., & Olivares, A. (Diciembre de 2016). *¿Puerta giratoria? Análisis de la circulación público-privada en Chile (2000-2014)*. Santiago: Serie Documentos de trabajo PNUD - Desigualdad, N° 2016/07.
- Maira, L. (1981). Nota preliminar sobre la influencia (creciente) del pensamiento de la nueva derecha norteamericana en América Latina. *Revista Mexicana de Sociología*(43), 1923-1943.
- Mannheim, K. (1987). *Ideología y utopía*. México D.F.: FCE.

- Mansuy, D. (2016). *Nos fuimos quedando en silencio. La agonía del Chile de la transición*. Santiago: IES.
- Marsal, J. (Julio-Diciembre de 1966). Los intelectuales latinoamericanos y el cambio social. *Desarrollo Económico*, 6(22/23), 295-317.
- Martínez Heredia, F. (Julio-Septiembre de 1995). Izquierda y marxismo en Cuba. *Temas*(3), 16-27.
- Martínez, J., & Tironi, E. (1985). *Las clases sociales en Chile. Cambio y estratificación 1970-1983*. Santiago: SUR Ediciones .
- Medina Echavarría, J. (1963). *Aspectos sociales del desarrollo económico en América Latina*. Bélgica: Unesco.
- Mella, M. (2008). Los intelectuales de los centros académicos independientes y el surgimiento del concertacionismo. *Revista de historia social y de las mentalidades*, 1(13), 83-121.
- Merton, R. K. (1965). *Teoría y estructura sociales*. México D.F.: FCE.
- Mizala, A., & Romaguera, P. (2001). La legislación laboral y el mercado del trabajo: 1975-2000. En R. Ffrench-Davis, & B. Stallings (eds.), *Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973* (págs. 201-230). Santiago: Cepal - Lom Ediciones.
- Mizala, A., & Romaguera, P. (2003). Regulación, incentivos y remuneraciones de los profesores en Chile. En C. Cox (ed.), *Políticas educacionales en el cambio de siglo*. Santiago: Editorial Universitaria.
- Moguillansky, G. (2001). Privatizaciones y su impacto en la inversión. En R. Ffrench-Davis, & B. Stallings (eds.), *Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973* (págs. 171-200). Santiago: Cepal - Lom Ediciones.
- Monckéberg, M. O. (2015). *El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno*. Santiago: DeBolsillo.



- Monsiváis, C. (2007). De los intelectuales en América Latina. *América Latina hoy*(47), 15-38.
- Montaña, M. J. (Octubre-Diciembre de 2013). Consideraciones en torno a la metamorfosis del intelectual latinoamericano en los años noventa. *Questión*, 1(40), 127-141.
- Montecinos, V. (Julio-Diciembre de 1997). Los economistas y las élites políticas en América Latina. *Estudios Internacionales*, 30(119), 351-375.
- Montero, C. (1997). *La revolución empresarial chilena*. Santiago: Cieplan - Dolmen Ediciones.
- Morales, J. J. (2016). Entre la ciencia y la política: la forja de una élite intelectual latinoamericana. *Revista de Ciencia Política*, 54(1), 157-188.
- Morales, M. (2014). Nueva Gestión Pública en Chile: orígenes y efectos. *Revista de Ciencia Política*, 34(2), 417-438.
- Moyano, C. (2010). *El MAPU durante la dictadura: saberes y prácticas políticas para una microhistoria de la Renovación Socialista en Chile (1973-1989)*. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Neiburg, F. (Enero-Marzo de 1995). Ciencias sociales y mitologías nacionales. La constitución de la sociología en la Argentina y la invención del peronismo. *Desarrollo Económico*, 36(136), 533-556.
- Neiburg, F. (Enero-Julio de 2005). Inflación y crisis nacional. Culturas económicas y espacios públicos en la Argentina y Brasil. *Anuario de Estudios Americanos*, 62(1), 113-138.
- Nemiña, P. (2006). *El Banco Mundial y el FMI en la reciente crisis argentina: ¿mejor juntos o separados?* Singapur: Ponencia presentada en el Workshop on the World Bank, Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore.

- Nemiña, P. (2011). Ajuste, crisis y default. El FMI y la Argentina durante la gestión de De la Rúa (1999-2001). *Anuario del Centro de Estudios Histórico "Prof. Carlos S. A. Segreti"*(11), 41-61.
- North, D. (2006). *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico*. México D.F.: FCE.
- O'Donnell, G. (1972). *Modernización y autoritarismo*. Buenos Aires: Paidós.
- O'Donnell, G. (Enero-Marzo de 1977). Reflexiones sobre las tendencias de cambio del Estado burocrático-autoritario. *Revista Mexicana de Sociología*, 39(1), 9-59.
- Ominami, C. (2009). *El debate silenciado: un testimonio, 1995-2009*. Santiago: Lom Ediciones.
- Orellana, V. (Agosto de 2014). Medición para la competencia, calidad para el mercado: el Simce en el mercado de la educación chilena. *Cuadernos de Coyuntura*(4), 25-32.
- Orellana, V., & Guajardo, F. (Junio de 2014). Los intereses privados en la educación chilena: entre el afán lucrativo y el ideológico. *Cuadernos de Coyuntura*(3), 31-41.
- Ortiz, E. (2007). *El socialismo chileno: De Allende a Bachelet (1973-2005)*. Santiago: Alerce Talleres Gráficos .
- Otano, R. (2005). *Nueva crónica de la transición*. Santiago: Lom Ediciones.
- Parsons, T. (1969). The intellectual: a social role category. En P. Rieff (ed.), *On intellectuals, theoretical studies, case studies* (págs. 3-26). Nueva York: Garden City.
- Patiño, R. (1997). Intelectuales en transición. Las revistas culturales argentinas (1981-1987). (U. d. Departamento de Letras Modernas, Ed.) *Cuadernos de reciénvenido*(4).
- Pavón, H. (2012). *Los intelectuales y la política en la Argentina. El combate por las ideas (1983-2012)*. Buenos Aires: Debate.

- Paz, O. (1990). *El ogro filantrópico*. Madrid: Seix Barral.
- Pecourt, J. (2013). Los intelectuales y el final de la revolución: la perspectiva funcionalista. *Methaodos. Revista de ciencias sociales*(1), 21-32.
- Peralta, M. (2007). *La economía política argentina: poder y clases sociales (1930-2006)*. Buenos Aires: FCE.
- Peralta, M. (2007). *La economía política argentina: poder y clases sociales (1930-2006)*. Buenos Aires: FCE.
- Picó, J., & Pecourt, J. (2008). El estudio de los intelectuales: una reflexión. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*(123), 35-58.
- Pinedo, J. (2000). Pensar en (la) transición. Intelectuales chilenos durante el proceso de transición a la democracia, 1990-1999. *Universum*(15), 189-232.
- Pinedo, J. (2002). Conservadores chilenos y su oposición a las reformas neoliberales de Pinochet. *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe*, 13(11).  
Obtenido de <http://eial.tau.ac.il/index.php/eial/article/view/966/1001>
- Pinto, A. (1971). *Tres ensayos sobre Chile y América Latina*. Buenos Aires: Editorial Solar.
- Pinto, A. (1976). *Inflación: raíces estructurales*. México D.F.: FCE.
- Plaza, A. (2015). Elementos conceptuales para el análisis de la Tecnocracia: Hacia una definición teórica. *Némesis*(12), 13-32.
- Plotkin, M., & Neiburg, F. (2005). Élités intelectuales y ciencias sociales en la Argentina de los años 60. El Instituto Torcuato Di Tella y la nueva economía. En J. Estrada (comp.), *Intelectuales, tecnócratas y reformas neoliberales en América Latina* (págs. 197-228). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Polanyi, K. (1992). *La gran transformación*. México D. F.: FCE.

- Portantiero, J. (1988). *La producción de un orden. Ensayos sobre la democracia entre el Estado y la sociedad*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Portantiero, J. C. (1957). La joven generación literaria. *Cuadernos de Cultura*(29), 27-44.
- Portantiero, J. C. (1983). *Los usos de Gramsci*. México D.F.: Folios Ediciones.
- Portantiero, J. C., & De Ípola, E. (1981). Lo nacional popular y los populismos realmente existentes. *Nueva Sociedad*(54), 7-18.
- Pucciarelli, A. (2011). Menemismo. La construcción política del peronismo neoliberal. En A. Pucciarelli (comp.), *Los años de Menem. La construcción del orden neoliberal* (págs. 23-70). Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Pulleiro, A. (Diciembre de 2011). Los intelectuales argentinos en la crisis de 2001. Un breve análisis de los posicionamientos, las estrategias discursivas y los modos de intervención. *Ciencias Sociales. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA*(79), 94-98.
- Puryear, J. (2016). *Pensando la política. Intelectuales y democracia en Chile, 1973-1988*. Santiago: Uqbar Editores.
- Rama, Á. (2004). *La ciudad letrada*. Santiago de Chile: Tajamar Editores.
- Rama, Á. (2008). *Transculturación narrativa en América Latina*. Buenos Aires: Ediciones El Andariego.
- Ramírez, H. (2007). *Las corporaciones del poder. Institutos y acción política en Brasil y Argentina. IPÊS, FIEL y Fundación Mediterránea*. Buenos Aires: Lenguaje Claro Editora.
- Ramírez, H. (julio-diciembre de 2010). Precursores del "consenso": itinerarios de algunas ideas en Brasil y Argentina, 1961-1991. *América Latina en la Historia Económica*(34), 269-296.

- Ramírez, H. (Julio de 2012). La Fundación Mediterránea y de cómo construir el poder. La irrupción del interior en el diseño de la política económica argentina. *História Econômica & História de Empresas*, 4(2), 131-161.
- Ramos, C. (2013). Investigación científica y performatividad social: el caso del PNUD en Chile. En T. Ariztía (ed.), *Produciendo lo social. Usos de las ciencias sociales en el Chile reciente* (págs. 219-252). Santiago: Ediciones UDP.
- Rapoport, M. (2010). *Las políticas económicas de la Argentina. Una breve historia*. Buenos Aires: Brooket.
- Rojo, G. (Enero-Marzo de 2013). El intelectual y sus opciones en la América Latina hoy. *Casa de las Américas*(270), 113-120.
- Rojo, G. (Enero-Marzo de 2016). Sobre la crisis actual del capitalismo globalizado. *Casa de las Américas*(282), 62-68.
- Romero, J. L. (1975). *Las ideas políticas en Argentina*. Buenos Aires: FCE.
- Romero, L. A. (2012). *Historia contemporánea de la Argentina*. Buenos Aires: FCE.
- Rosende, F. (2016). Chicago Economics II: Del triunfo de las ideas a la crisis de los Chicago Boys en Chile. En F. Rosende (ed.), *La Escuela de Chicago* (2 ed., págs. 59-84). Santiago: Ediciones UC.
- Rouquié, A. (2011). *A la sombra de las dictaduras. La democracia en América Latina*. Buenos Aires: FCE.
- Ruiz, C. (1999). La difícil construcción de la nación cubana. *Anuario de Postgrado*(3), 67-85.
- Ruiz, C. (2003). Un desafío del pensamiento latinoamericano ante la transformación reciente. *Revista de Sociología*(17), 48-78.
- Ruiz, C. (2013). *Estado, alianzas sociales y modelos de desarrollo en América Latina Hoy: Brasil, Argentina y Chile*. Santiago: Tesis de Doctorado en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile.

- Ruiz, C. (2015). *De nuevo la sociedad*. Santiago: Lom Ediciones.
- Ruiz, C. (2015a). Progresismo neoliberal, democracia y refundación capitalista en América Latina. *Estudios Latinoamericanos*, (En prensa).
- Ruiz, C. (2017). Socialismo y libertad: notas para repensar la izquierda. En F. Zerán (ed.), *Chile actual: crisis y debate desde las izquierdas* (págs. 133-162). Santiago: Lom Ediciones.
- Ruiz, C., & Boccardo, G. (2014). *Los chilenos bajo el neoliberalismo. Clases y conflicto social*. Santiago: Ediciones El Desconcierto - Fundación Nodo XXI.
- Safford, F. (1991). Política, ideología y sociedad. En L. Bethell, *Historia de América Latina* (Vol. 6, págs. 42-104). Barcelona: Crítica.
- Said, E. (2003). *Representaciones del intelectual*. Barcelona: Debate.
- Salazar, G. (2006). *Violencia política popular en las grandes alamedas*. Santiago: Lom Ediciones.
- Sapag, R., & Soto, M. (3 de Marzo de 2016). Eyzaguirre: "Los que se espantan con las reformas están anclados a un modelo rentista". *Revista Capital*. Obtenido de <http://www.capital.cl/poder/2016/03/03/123182/eyzaguirre-los-que-se-espantan-con-las-reformas-estan-anclados-a-un-modelo-rentista/>
- Sassen, S. (2003). *Los espectros de la globalización*. Buenos Aires: FCE.
- Shils, E. (1972). *Intellectuals and the Powers and other Essays*. Chicago: Chicago University Press.
- Sidicaro, R. (2010). *Los tres peronismos*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Sidicaro, R. (Julio-Agosto de 2011). El partido peronista y los gobiernos kirchneristas. *Nueva Sociedad*(234), 75-94.
- Sigal, S. (2002). *Intelectuales y poder en la Argentina. La década del sesenta*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

- Silva, P. (1991). Technocrats and Politics in Chile: From the Chicago Boys to the Cieplan Monks. *Journal of Latin American Studies*, 23(2), 385-410.
- Silva, P. (2010). *En el nombre de la razón: tecnócratas y política en Chile*. Santiago: Ediciones UDP.
- Skinner, Q. (2000). Significado y comprensión en la historia de las ideas. *Prismas*, 149-191.
- Skocpol, T. (1994). Estrategias recurrentes y nuevas agendas en sociología histórica. En W. Ansaldi, *Historia/Sociología/Sociologías Históricas* (págs. 147-196). Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- Soares, G. (1970). Ideología y legitimidad. En J. Marsal (comp.), *El intelectual latinoamericano* (págs. 31-54). Buenos Aires: Editorial del Instituto.
- Stiglitz, J. (2002). *El malestar en la globalización*. Madrid: Taurus.
- Stolowicz, B. (2012). *A contracorriente de la hegemonía conservadora*. México D.F.: Espacio Crítico-UAM-Xochimilco-Editorial Ítaca.
- Subercaseaux, B. (2010). *Historia de las ideas y de la cultura en Chile* (Vol. 3). Santiago: Editorial Universitaria.
- Szmolka, I., & De Cueto, C. (2011). *Objeto y método de la política comparada*. Granada: Editorial Universidad de Granada.
- Tarcus, H. (2015). Una invitación a la historia intelectual. Palabras de apertura del II° Congreso de Historia Intelectual de América Latina. *Pléyade*(15), 9-26.
- Terán, O. (2004). Ideas e intelectuales en la Argentina, 1880-1980. En O. Terán (coord.), *Ideas en el siglo. Intelectuales y cultura en el siglo XX latinoamericano* (págs. 13-98). Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Therborn, G. (2005). *La ideología del poder y el poder de la ideología*. México D.F.: Siglo XXI Editores.

- Thielemann, L. (6 de Octubre de 2015). Sobre la situación histórica del plebiscito de 1988. *Red Seca*.
- Thielemann, L. (2016). *La anomalía social de la Transición. Movimiento estudiantil e izquierda universitaria en el Chile de los noventa (1987-2000)*. Santiago: Tiempo Robado Editoras.
- Torre, J. C. (1998). *El proceso político de las reformas económicas en América Latina*. Buenos Aires: Paidós.
- Touraine, A. (1973). *La sociedad postindustrial*. Barcelona: Ariel.
- Touraine, A. (1989). *América Latina. Política y sociedad*. Madrid: Espasa-Calpe.
- Trotsky, L. (1969). *Literatura y revolución, y otros escritos sobre la literatura y el arte* (Vol. 1). París: Ruedo Ibérico.
- Tusell, J. (1996). *La dictadura de Franco*. Madrid: Historia 16.
- Undurraga, T. (Julio-Diciembre de 2012). Transformaciones sociales y fuentes de poder del empresariado chileno. *Ensayos de Economía*(41), 201-225.
- Uña, G., Lupica, C., & Strazza, L. (Junio de 2009). Think tanks y pobreza en América Latina: el rol de los pensadores en el mercado de las políticas sociales en Argentina, Chile y México. *Revista del CLAD Reforma y Democracia*(44), 225-266.
- Uricoechea, F. (Octubre-Diciembre de 1967). Los intelectuales latinoamericanos y el desarrollo de sus sociedades. *Revista Mexicana de Sociología*, 29(4), 787-830.
- Valdivia, V. (2003). *El golpe después del golpe. Leigh vs. Pinochet. Chile 1960-1980*. Santiago: Lom Ediciones.
- Valenzuela, A. (1989). *El quiebre de la democracia en Chile*. Santiago: Flacso.
- Villarreal, R. (1986). *La contrarrevolución monetarista. Teoría, política económica e ideología del neoliberalismo*. México D. F.: FCE.



- Vommaro, G. (2006). Cuando el pasado es superado por el presente: las elecciones presidenciales de 1983 y la construcción de un nuevo tiempo político en la Argentina. En A. Pucciarelli (comp.), *Del poder de la democracia a la democracia del poder. Los años de Alfonsín* (págs. 245-290). Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Vommaro, G. (2008a). Diez años de ¿Favores por votos?. El clientelismo como concepto y como etiqueta moral. En E. Rinesi, G. Vommaro, & M. Muraca (comps.), *Si éste no es el pueblo. Hegemonía, populismo y democracia en Argentina* (págs. 141-158). Los Polvorines: UNGS - Instituto de Estudio y Capacitación. Federación Nacional de Docente Universitarios.
- Vommaro, G. (2008b). "*Combatiendo el clientelismo*". *Los expertos en control de políticas sociales de lucha contra la pobreza*. Posadas: Ponencia presentada en el IX Congreso Argentino de Antropología Social - Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Misiones.
- Vommaro, G. (Enero-Junio de 2011). La pobreza en transición. El redescubrimiento de la pobreza y el tratamiento estatal de los sectores populares en Argentina en los años 80. *Apuntes de Investigación del Cecyp*(19), 45-73.
- Weber, M. (2008). *Economía y sociedad*. México D. F.: FCE.
- Weber, M. (2015). *El político y el científico*. Madrid: Alianza Editorial.
- Weffort, F. (1968). *Clases populares y desarrollo social*. Santiago: ILPES.
- Williams, R. (1994). *Sociología de la cultura*. Barcelona: Paidós.
- Williamson, J. (1990). What Washington Means by Policy Reform. En J. Williamson (comp.), *Latin American Adjustment: How Much Has Happened?* Washington: Institute of International Economics.
- Wright Mills, C. (1964). *Poder, política, pueblo*. México D.F.: FCE.
- Wright Mills, C. (1970). *De hombres sociales y movimientos políticos*. México D.F.: Siglo XXI Editores.

Yocelovsky, R. (Abril-Junio de 1985). La Democracia Cristiana chilena. Trayectoria de un proyecto. *Revista Mexicana de Sociología*, 47(2), 287-352.

Zapata, F. (Julio-Septiembre de 1995). ¿Ideólogos, sociólogos y políticos? Acerca del análisis sociológico de los procesos sociales y políticos en América Latina. *Foro Internacional*(35), 309-327.

Zermeño, G. (2003). El concepto intelectual en Hispanoamérica: génesis y evolución. *Historia Contemporánea*(27), 777-798.